

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación:2019175408-017-000

Fecha: 2021-01-29 10:03 Sec.día7278

Anexos: No

Trámite::132-DEMANDAS

Tipo doc::31-31 REMISION DE INFORMACION

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario::ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-017-000

Trámite : 132 DEMANDAS

Actividad : 31 31 REMISION DE INFORMACION

Anexos :

Referencia: ESCRITO DE EXCEPCIONES PREVIAS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Radicado: 11001-33-43-060-2020-00063-00
Demandante: LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR
Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTROS

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.030.627.605 de Bogotá, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No. 274.629 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial de la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**, según poder que obra en el expediente, estando dentro del término legal procedo a presentar **EXCEPCIONES PREVIAS**, conforme a lo estipulado en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020 concordante con los artículos 100 al 102 del C.G.P., en los siguientes términos:

1. EXCEPCIONES PREVIAS.

1.1. Caducidad.

El artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, define el medio de control de reparación directa así:



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los Agentes del Estado (...).”

De otro lado el artículo 169 *ejusdem* dispone lo siguiente:

“ARTICULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. *Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:*

1. Cuando hubiere operado la caducidad (...). (Negrilla fuera del original)

Adicionalmente el artículo 164 (ibídem) prevé los términos para intentar los diferentes medios de control. Así, el literal i), del numeral 2 del citado artículo, en lo que a la Reparación Directa se refiere, dispone que la demanda deberá ser presentada *“(...) dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”*

En virtud de lo anterior y una vez analizados los hechos, se puede extraer que la SFC dentro del marco de su competencia realizó dos visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.). De aceptarse en gracia de discusión que la SFC omitió el cumplimiento de sus funciones, el momento en que cesó la presunta omisión corresponde a la fecha en que culminó la actuación administrativa adelantada por esta Entidad respecto de la mencionada sociedad y se remitió a la Superintendencia de la Economía Solidaria y Superintendencia de Sociedades las circunstancias evidenciadas en las visitas., traslados que se surtieron el 27 de febrero de 2014, mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010, respectivamente,

Al respecto, tenemos que es desde esa fecha que debe iniciarse el conteo de los dos años establecidos por el legislador para que opere el fenómeno de la caducidad del medio de control, los cuales fenecieron el pasado 28 de febrero de 2016, momento para el cual, de acuerdo con la documentación remitida a la SFC, la solicitud de conciliación prejudicial, que tiene la facultad de interrumpir dicho término, no había sido presentada, pues la misma tan solo se presentó el 19 de diciembre de 2019, ante la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos de la ciudad de Bogotá, configurándose así la causal objetiva de CADUCIDAD del medio de control que se quiere ejercer respecto de la SFC.

Consideramos oportuno indicar que **para el caso particular se debe establecer la ocurrencia del fenómeno de la caducidad respecto de cada una de las entidades demandadas, de forma separada, pues las actuaciones adelantadas por la SFC y la SS son independientes y se desarrollaron con fundamento en facultades legales distintas.** Sobre el particular, y como se explicó con suficiencia en la contestación de la demanda, las visitas realizadas por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se adelantaron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora.

1.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la SFC

En el presente asunto el demandante aduce que la SFC fue omisiva en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto del funcionamiento de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., así como de las operaciones que realizaba dicha sociedad.

En ese sentido, como quiera que la redacción de los fundamentos de hecho y derecho del libelo demandatorio no son claros respecto de si la presunta omisión que se imputa a esta Entidad corresponde al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Decreto 2555 de 2010, Decreto 4334 de 2008 o en la Ley 1527 de 2012, abordaremos este punto desde cada uno de los supuestos normativos precitados.

1.2.1. En relación con el Decreto 2555 de 2010.

Debe llamarse preliminarmente la atención en el hecho que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no está, ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia, ya que las entidades y actividades respecto de las que se ejercen dichas funciones corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, en el numeral 1° del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Adicionalmente, debe indicarse que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia, para lo cual tienen que constituirse como lo establece el artículo 53 y siguientes del EOSF, en la forma y términos instruidos en la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica, en los cuales, entre otras cosas, se establece que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia.

1.2.2. En relación con los artículos 108, 325 y 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008.

Cabe señalar que, con el objetivo de evitar que personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y en cumplimiento de las atribuciones establecidas en los artículos 108, el literal a), numeral 4, del artículo 325 y el artículo 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008 así como en los numerales 1, 2, 6 y 22 del entonces artículo 11.2.1.4.35 hoy modificado por el artículo 21 del Decreto 2399 de 2019 y en el artículo 11.2.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010, la SFC entre el 9 y 17 de julio y el 2 y 6 de diciembre de 2013, adelantó visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., las cuales se originaron con ocasión de dos correos electrónicos recibido el 6 de mayo de 2013, a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “pagarés-libranza” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide.

Por lo anterior y una vez analizada la información recabada en la visita se llegó a la conclusión que en las actividades desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., relativas a la compra y venta al descuento de “pagarés-libranzas” no se configuraban los hechos objetivos o notorios, ni los supuestos de captación masiva de recursos del público.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1.2.3. En relación con la Ley 1527 de 2012.

Es oportuno precisar que si bien la Ley 1527 de 2012 le otorgó a la SFC las funciones de inspección, vigilancia y control sobre algunas de las entidades operadoras de libranzas, vale la pena precisar que las únicas cooperativas vigiladas por esta Entidad son las cooperativas financieras, las cuales son autorizadas para captar recursos del público.

Ahora bien, debe señalarse que las cooperativas originadoras de los “pagarés-libranzas” en este caso fueron: COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, las cuales están bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

De igual manera la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en su modelo de negocio manifestó que para la compraventa de los “pagarés-libranza” tenía contratos suscritos con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.

De lo expuesto podemos concluir que la SFC no está legitimada en la causa por pasiva para ser demandada por omisión en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puesto que:

- No tenía la obligación de ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conforme a lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes.
- Habiendo ejercido las funciones que le competían para evitar que personas no autorizadas ejercieran actividades exclusivas de las entidades vigiladas (literal d) del numeral 1 del artículo 325 del EOSF), no encontró que se configuraran los hechos objetivos o notorios ni los supuestos de captación masiva de recursos del público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.
- Las cooperativas con las que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., adquiría las libranzas no se encontraban ni se encuentran sometidas al control y vigilancia de la SFC, debido a que no tienen la naturaleza de cooperativas financieras.

Así las cosas, queda clara la ausencia de conductas omisivas de la SFC en relación con los posibles perjuicios ocasionados a los aquí demandante, pues esta Entidad ejerció en su momento las actuaciones que le correspondían, sin encontrar en ellas los supuestos de captación en que luego incurrió la sociedad involucrada en el asunto.

En cuanto a las excepciones aquí propuestas, estimamos oportuno informar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A – Magistrado Ponente: Juan Carlos Garzón Martínez, en auto del 03 de diciembre de 2020 emitido en el proceso con radicado No. 2018-0616, de Convento Santo Domingo contra la SFC y SS, relacionado con la comercializadora de libranzas Estraval, declaró expresamente probadas las excepciones previas de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la SFC.

En cuanto a la caducidad indicó que el término debe ser contado desde el momento en que la Superfinanciera efectuó el traslado por competencia a la Superintendencia de Sociedades de los informes de visita. Frente a la falta de legitimación, consideró que este ente de control no participó en los hechos que dieron lugar a la demanda y que no le correspondía la obligación de vigilancia de Estraval, como en el presente caso tampoco le correspondía la vigilancia de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., por lo que las omisiones que se imputaban en la demanda, no eran atribuibles a la SFC.

Similar determinación adoptó el magistrado Garzón Martínez en auto del 3 de diciembre de 2020, proferido en el proceso 2019-00078 de Federico Aristizábal Correa y Otros contra la SFC y SS, pues al resolver la excepción de caducidad propuesta por esta Entidad, indicó:

“(…) la actuación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia culminó el 27 de marzo de 2014, fecha en la que envió la información a la Superintendencia de Sociedades, relacionada con la sociedad Estraval S.A, la cual no estaba bajo su vigilancia.

Por lo tanto, computando el término de caducidad únicamente frente a la Superintendencia Financiera, desde su última actuación esto es, 27 de marzo de 2014, la parte actora contaba en principio hasta el 28 de marzo de 2016, como fecha límite, para presentar acción contenciosa en ejercicio del medio de control de reparación directa.”

2. PRUEBAS.

Con el propósito de acreditar las afirmaciones que se han expuesto a lo largo del presente escrito de excepciones previas, acudimos a las siguientes pruebas, las cuales fueron aportadas junto con el escrito de contestación de demanda y por cuestiones prácticas no remitiremos nuevamente con el presente escrito:

1. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
2. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
3. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
4. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
5. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
6. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
7. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
8. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
9. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
10. Informe de Inspección No. 2013081463-009 de de la visita practicada a COOINVERCOR.
11. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
12. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2018-00616.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

13. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2019-00078.

Reiteramos al Despacho el traslado de la reserva sobre dichos documentos, por cuanto al tratarse de una actuación administrativa, contiene información clasificada y/o reservada.

3. PETICIÓN.

En atención a lo manifestado, respetuosamente solicito al Despacho:

3.1. Que se DECLAREN PROBADAS las excepciones previas de CADUCIDAD Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

3.2. Como consecuencia de lo anterior, se NIEGUEN todas y cada una de las pretensiones de la demanda y se declare la terminación del proceso.

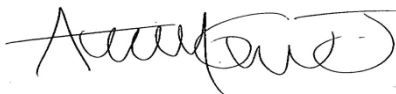
3.3. Se CONDENE en costas y agencias en derecho a la parte demandante

4. NOTIFICACIONES.

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez.

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

Revisó y aprobó:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2019175408-016-000

Fecha: 2021-01-29 09:38 Sec.día 7215

Anexos: Sí

Trámite: 132-DEMANDAS

Tipo doc: 324-324 CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario: ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-016-000
Trámite : 132 DEMANDAS
Actividad : 324 324 CONTESTACIÓN DE DEMANDA
Anexos : E1

Referencia: **CONTESTACIÓN DEMANDA**
Medio de control: **REPARACIÓN DIRECTA**
Radicado: **11001-33-43-060-2020-00063-00**
Demandante: **LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR**
Demandado: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTROS**

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.030.627.605 de Bogotá, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No. 274.629 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial de la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (en adelante SFC)**, según poder que obra en el expediente, estando dentro del término legal procedo a dar **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA** de la referencia en los siguientes términos:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

En los términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comparece, como parte demandada la Superintendencia Financiera de Colombia, Entidad que forma parte del sector central de la administración pública del orden nacional, con domicilio en Bogotá, representada legalmente por el señor Superintendente Financiero Jorge Castaño Gutiérrez.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En su nombre y representación interviene la suscrita apoderada, en virtud del poder que me fuere conferido por el Coordinador del Grupo Contencioso Dos de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, a quien le fue delegada la función de otorgar poderes a los funcionarios para que ejerzan la representación judicial o extrajudicial de la SFC, al tenor del numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 0229 del 14 de febrero de 2017.

2. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Conforme a lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, *“el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación”*.

Ahora bien, mediante auto del 23 de julio de 2020 ese Despacho resolvió admitir la demanda, providencia que fue notificada a esta Superintendencia mediante mensaje de datos remitido por el apoderado de la parte demandante el día 4 de septiembre del mismo año. La SFC presentó de manera oportuna recurso reposición, el cual fue resuelto por auto del 3 de diciembre de 2020, notificado por estado del día 4 de la misma calenda, en el sentido de no reponer.

El término concedido en el auto admisorio, esto es, los treinta (30) días para contestar la demanda (artículo 172 del C.P.A.C.A.), comenzaron a correr una vez vencieron los veinticinco (25) a los que se refiere el inciso quinto del artículo 199 del C.P.A.C.A., es decir a partir del 3 de febrero 2021, de manera que el plazo para contestar la demanda fenece el día 17 de marzo del mismo año, esto teniendo en cuenta el periodo de vacancia judicial

De lo expuesto se advierte entonces, que la Superintendencia Financiera está dentro del término previsto en la ley para contestar la demanda interpuesta por el señor Luis Alfonso Diago Escobar.

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Con fundamento en las razones que se acreditarán a lo largo de este escrito y en general en el devenir de este proceso judicial, **ME OPONGO A TODAS LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA** por las siguientes razones a saber:

- Carecer de fundamento respecto de mi prohijada, toda vez que lo expuesto por la parte demandante corresponde única y exclusivamente a la narración de un **incumplimiento contractual**, relación jurídica de la cual la SFC no fue parte;
- Por tratarse de una demanda cuyos fundamentos fácticos imposibilitan, por completo, hacerle una imputación de responsabilidad a la SFC;
- Por no existir nexo de causalidad entre los fundamentos fácticos expuestos, los perjuicios cuya reparación deprecia la parte demandante y las funciones de esta Entidad;
- Por tratarse de un perjuicio que, de encontrar algún asidero, en todo caso evidenciaría que la responsabilidad no podría predicarse respecto de la **SFC. Como se demostrará, en el presente caso se configura el hecho de un tercero y la culpa de quien se reputa víctima;**
- Por tratarse de un asunto en el que se encuentran debidamente configuradas diversas causales que eximen de responsabilidad respecto de la **Superintendencia Financiera de Colombia.**



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En consecuencia, no habrá lugar a que la autoridad judicial acoja las pretensiones declarativas y de condena formuladas por el demandante.

4. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

- A esta Superintendencia **NO LE CONTAN** los **HECHOS 1) al 3)** en los que se indica que el demandante fue contactado por la fuerza comercial de la empresa **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.)**, que le explicaron en qué consistía el sistema de inversión de libranzas y le ofrecieron por participar en el negocio una rentabilidad equivalente al interés bancario corriente.

Al respecto vale la pena señalar que las anteriores afirmaciones se refieren a las condiciones ofrecidas por la referida sociedad para la ejecución del negocio jurídico celebrado con el demandante, relación en la que esta Superintendencia no tuvo ningún tipo de participación o injerencia.

- En los **HECHOS 4) y 5)** se afirma que el accionante indagó ante esta Superintendencia y la Superintendencia de Sociedades (en adelante SS) sobre la legalidad de las operaciones desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., lo que le permitió establecer que las demandadas conocían de las operaciones, que habían realizado visitas, que dicha sociedad no era objeto de ninguna medida y que se trataba de una actividad no proscrita por la ley.

En lo que respecta a la SFC, debemos señalar que al revisar en el Sistema de Gestión Documental – SOLIP, que contiene la totalidad de trámites adelantados por esta Entidad, **no se encontró que el aquí accionante hubiera presentado ante esta Superintendencia petición alguna mediante la que indagara sobre el negocio ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., razón por la que NO ES CIERTO lo afirmado por el actor en el dicho.**

Llama la atención que con el libelo introductorio no se haya aportado prueba alguna que acredite la presentación de la petición o las supuestas respuestas dadas por esta Superintendencia.

Ahora bien, **ES CIERTO**, que esta Entidad adelantó visita de inspección a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S y que una vez analizada la información recabada en la misma se llegó a la conclusión que las actividades desarrolladas por la referida sociedad, relativas a la compra y venta de “pagarés-libranzas” para la fecha, no configuraban los supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y en el Decreto 4334 de 2008. Respecto de las actuaciones relacionadas con la visita, nos referiremos con detalle en el punto 7.1.1. del presente escrito.

En cuanto a las demás manifestaciones, es decir las relacionadas con la SS, debemos indicar que no son de nuestro resorte, por lo tanto, **NO NOS CONSTAN** y deberán ser probadas por el demandante a lo largo del proceso.

- En los **HECHOS 6) al 9) y 11)** se indica que el demandante con ocasión de las presuntas indagaciones elevadas ante la SFC y SS suscribió con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. un contrato de compraventa para la adquisición de libranzas, que con ocasión del negocio realizó unos pagos a la referida sociedad y recibió una suma de dinero por concepto de amortización y que ante la cesación de dicho pago le quedaron adeudando dinero. Al respecto, debemos señalar que dichas circunstancias **NO NOS CONSTAN** pues la SFC no fue parte de la relación negocial celebrada entre la citada sociedad y el demandante.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Frente a los **HECHOS 10) y 12)**, en los que se señala que a mediados del año 2016 OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. cesó el pago de las amortizaciones, justificando dicha circunstancia en razones de orden operativo de cartera, además de asuntos relacionados con las pagadurías y menesteres internos de las cooperativas originadoras de los pagarés-libranza las cuales adujeron siniestros de cartera, debemos indicar que el contenido de los dichos corresponde a apreciaciones o señalamientos del demandante que deberán ser probados en el proceso.

En este orden de ideas **NO NOS CONSTA** lo manifestado en los mismos, ya que como se indicó anteriormente mi prohijada no hizo parte del negocio jurídico al que se ha hecho referencia. De otro, es pertinente que se **tenga por sentado y a manera de confesión del accionante, que desde esa fecha se produjo el presunto incumplimiento contractual que le originó una afectación, esto para el conteo del término de caducidad respectivo.**

- Respecto al **HECHO 13) ES CIERTO** que la SS mediante Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 adoptó una medida de intervención administrativa respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y ordenó a dicha sociedad la suspensión inmediata de las operaciones de captación masiva. Ahora bien, teniendo en cuenta que el referido acto administrativo no fue expedido por la Entidad que representó y que es un documento público, nos atenemos al tenor literal del mismo.
- En cuanto al **HECHO 14)** es de indicar que no corresponde a un antecedente fáctico sino a una consideración subjetiva del accionante, quien estima que con la Resolución de la SS se modificó el concepto que había dado relacionado con que la actividad desarrollada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. era ajustada a derecho. Por lo tanto, al estar relacionada la afirmación con el actuar de una entidad distinta a la SFC, debemos señalar que la misma **NO NOS CONSTA**, además son apreciaciones subjetivas del demandante, que deberán ser probadas por él.
- Frente a lo señalado en los **HECHOS 15) y 16)**, relativos a que el señor Diago Escobar se hizo parte en el proceso de liquidación de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., que se entiende corresponde a la medida de intervención mediante toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio y que en el proyecto de graduación y calificación del crédito fue reconocida su acreencia, es de indica que tales afirmaciones **NO NOS CONSTAN** pues la SFC no hizo parte de dicho proceso, por lo tanto, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del presente medio de control.

Sin embargo, lo manifestado en los dichos es susceptible de ser tenido en cuenta como confesión de parte, en ese orden de ideas deberá ser valorado de tal manera por el Despacho en el momento procesal oportuno.

- Respecto a lo señalado en los **HECHOS 17) y 18)**, en los que indican que la SFC y la SS conocieron a plenitud el modelo de negocio desarrollado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y no obstante ello, no desplegaron acciones para evitar que continuaran en operación, debemos indicar que son meras apreciaciones subjetivas que deben ser probadas dentro del proceso, pues dan a entender una realidad totalmente distorsionada y amañada del asunto que **NO ES CIERTA**.

De otro lado, como se dijo anteriormente la SFC realizó una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. Culminada la visita se concluyó que no se configuraban los supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008. Es de precisar que la citada actuación será explicada más adelante.

Frente a las manifestaciones relacionadas con la SS, debemos señalar que se refieren a una autoridad distinta a la Superfinanciera, razón por la que **NO NOS CONSTAN** y deberán ser probadas por el demandante.

- En cuanto al **HECHO 19) NO NOS CONSTA** que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. haya defraudado a aproximadamente trescientas trece (313) personas bajo su modalidad de negocio, por lo tanto, dicha afirmación deberá ser probada dentro de la presente acción, en consecuencia, nos atenemos a lo que se pruebe.
- Respecto al **HECHO 20)**, en el que se hace una transcripción de las actividades inscritas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, es de señalar que las mismas corresponden a la autonomía de la voluntad de los socios, quienes determinaron que actividades iban a registrar. **Se observa que ninguna corresponde a una actividad exclusiva de las entidades vigiladas por esta Superintendencia, razón por la cual es dable afirmar, sin lugar a duda que dicha sociedad no se encontraba sometida a la vigilancia e inspección de esta Entidad.**
- En relación con los **HECHOS 21) y 22)**, en los que se indica que el demandante se involucró en el proceso comercial ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. debido a la información brindada por la SFC y la SS, **NO ES CIERTO RESPECTO DE LA SFC Y NO NOS CONSTA FRENTE A LA SS.** Como se puso de presente al contestar el hecho 4), **NO ES CIERTO** que el accionante haya realizado algún tipo de indagación ante esta Superintendencia.
- En lo atinente al **HECHO 23)** en el que se hace mención a las actividades de captación, manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público y así de los supuestos de captación contenidos en el decreto 3227 de 1982, es necesario señalar previamente que dicha norma fue modificada por el decreto 1981 de 1988 y hoy están contenidas en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015. Precisado lo anterior, debe indicarse que no se trata de un hecho, sino de la cita textual de una norma, por ende, nos atenemos al tenor literal de la misma.
- Señala el **HECHO 24)**, que para el momento en que se practicó la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., dicha empresa había celebrado contratos para la venta de libranzas con más de 313 personas.

Sobre el particular, dicho hecho **NO NOS CONSTA**, pero es necesario reiterar que la SFC realizó **una visita de inspección a dicha sociedad** que se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, y una vez culminada no se evidenciaron hechos que permitieran inferir la captación masiva y habitual de recursos del público. En ese orden de ideas nos atenemos al tenor literal del citado informe.

- En relación con los **HECHOS 25) al 27)** que se refieren al promedio de operaciones realizadas por cada persona con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., indican que las ofertas para la celebración de contratos de venta de libranzas se hacían de manera abierta y finalmente que para la fecha de celebración del contrato suscrito por el demandante con dicha sociedad, la misma había celebrado más de 20 contratos durante 3 meses, es menester señalar lo siguiente:



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ya que lo pretendido por el demandante es referirse a los supuestos de captación, debemos mencionar que tal y cómo se ha señalado a lo largo de este escrito, para las fechas en que la SFC realizó una visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., de acuerdo a la documentación estudiada y la normatividad para la fecha vigente, no se encontró evidencia de operaciones de captación ilegal de dinero, **no obstante, la SFC mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014 remitió el informe de visita a la Superintendencia de la Economía Solidaria (en adelante SES) y Superintendencia de Sociedades**. No obstante, tales la afirmación son apreciaciones subjetivas del actor, la cuales deberán ser probadas.

Por otro lado, respecto a las demás consideraciones realizadas por el accionante, relacionadas con la operación de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., me atengo a lo establecido en el informe de la visita adelantada a dicha sociedad, pues en aquel se consagran las evidencias recaudadas por esta autoridad y para el efecto tal documento se aporta como prueba.

- En relación con el **HECHO 28)** en el que se transcriben apartes del numeral 10.1 del acápite de antecedentes de la Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 proferida por la SS, debe indicarse que a esta Superintendencia se atiene al contenido literal del acto administrativo, proferido por una entidad distinta a la SFC.
- Frente a los **HECHOS 29) y 30)**, en los que se hace referencia al contenido del artículo 2 del Decreto 4334 de 2008, resulta necesario distinguir que tal disposición corresponde a las atribuciones de intervención otorgadas a la SS respecto de las personas naturales o jurídicas que desarrollan las actividades descritas en los literales a) y b) de dicho artículo. Dicha norma difiere de las competencias y facultades conferidas a la SFC en los artículos 108 y 326 numeral 4) literal a) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), las cuales se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política. En virtud de aquellas esta Superintendencia puede adoptar medidas cautelares frente a las personas naturales o jurídicas de derecho privado que, sin contar con autorización, desarrollen actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la SFC, así como de cualquier otra que pueda estar incurriendo en captación, manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público.

La facultad mencionada, no es otra que la materialización de lo que se puede denominar como función administrativa de supervisión y control en desarrollo de la cual a esta Superintendencia le corresponde inspeccionar, vigilar y controlar a las entidades que cuentan con autorización para constituirse, funcionar y que a la vez son habilitadas legalmente para manejar recursos captados al público. Lo anterior de conformidad con las normas legales pertinentes, como son, entre otros, los artículos 325 y ss. del EOSF que definen la naturaleza, los objetivos, las funciones y las facultades de este Organismo, así como también la obligación de prevenir y controlar que las personas no vigiladas realicen actividades como la captación ilegal de dinero, para lo cual aplica lo establecido en el artículo 108, literal d) numeral 1, del artículo 325, literal a) numeral 4 y literal b) numeral 5 del artículo 326 del EOSF y observa los supuestos y hechos objetivos y notorios definidos en los Decreto 1068 de 2015 y Decreto 4334 de 2008.

No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008 es competencia privativa de la SS adelantar la intervención y toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las entidades que no están sometidas a la vigilancia de la SFC y por ende no cuentan con la autorización para captar recursos del público.

- En cuanto a lo argüido en los **HECHOS 31) al 33)**, en los que se afirma que la SS y la SFC a pesar de advertir el tipo de negocios que ejecutaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no ejercieron ninguna medida que buscara detener la comercialización de libranzas, a pesar de las visitas celebradas



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

durante los años 2014, 2015 y 2016, y que solamente hasta el 15 de noviembre de 2017 fueron adoptadas.

Debemos anotar que tal aseveración es una apreciación subjetiva del demandante y debe ser probada al interior del proceso, pues da a entender una realidad distorsionada y amañada del asunto, que por lo menos en lo que atañe a la SFC, **NO ES CIERTA**.

Con el fin de desvirtuar las afirmaciones relacionadas con esta Superintendencia, se procede a hacer un breve resumen de las actuaciones desplegadas por mi representada:

Mediante Oficio No. 2013058932-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-005 del 29 de noviembre de 2013.

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente. Por lo anterior, la SFC consideró pertinente realizar visita de inspección tanto a la sociedad, como a algunas de las Cooperativas.

Teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

De otro lado, al evidenciar que las Cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, se estimó que dicho tema era del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la cual se le trasladó una copia del informe de inspección para lo de su competencia.

- En lo atinente al **HECHO 34)** que se refiere a las supuestas investigaciones realizadas por el demandante mediante peticiones administrativas dirigidas a la SFC y a la SS, es de mencionar que **NO ES CIERTO en lo que atañe a la SFC**, pues tal y como ya se indicó, una vez verificado el Sistema de Gestión Documental - SOLIP que contiene los trámites adelantados por esta autoridad, **no se encontró petición alguna formulada por el señor Lubinos Badillo**. Además, se reitera que con la demanda no se allegó prueba alguna que acredite lo que afirma el accionante.
- Frente a los **HECHOS 35) al 37)**, atinentes a que la SFC y SS con ocasión de las respuestas de las supuestas peticiones administrativas interpuestas por el demandante, avalaron y tuvieron pleno conocimiento de las actividades delictivas que desarrollaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., al igual



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

que del conocimiento de la suscripción de más de 20 contratos para la venta de libranzas en un período de tres meses, debemos mencionar que respecto de la SFC **NO ES CIERTO** lo acotado, pues como se ha expuesto, no se recibieron solicitudes del aquí demandante relacionadas el negocio celebrado con la referida sociedad. De igual manera, se hace hincapié en que de la visita realizada por la SFC se concluyó para la fecha, que las actividades realizadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., NO configuraban actividades de captación o recaudo no autorizado según el Decreto 4334 de 2008 y el Decreto 1981 de 1988, tal y como consta en el informe de inspección que se aporta.

Con fundamento en lo anterior, se desprende con total claridad que lo afirmado por el demandante en estos hechos, como se dijo atrás, no son más que simples juicios de valor por completo ajenos a la realidad de las actuaciones adelantadas por la SFC, lo que puede ser constatado con las pruebas documentales que se aportan con el presente escrito.

De otro lado, **NO NOS CONSTAN** las afirmaciones relacionadas con la SS, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

5. FUNDAMENTOS JURÍDICO DE LA DEFENSA

5.1. Estructura de la responsabilidad extracontractual de la administración pública.

En la Constitución Política, específicamente en el artículo 90, se estableció que:

“Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir con éste”.

En virtud de dicha norma, la estructura de la responsabilidad sufrió un proceso de “constitucionalización”, erigiéndose en garantía de los derechos e intereses de los administrados, así como de su patrimonio, en el entendido de que el Estado será obligado a reparar los **daños antijurídicos** que le sean **imputables**, ya sea por la acción o la omisión de sus agentes.

En tal sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha entendido que a la luz de lo prescrito por el referido artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual de la Administración¹, tiene como fundamento² la determinación de una serie de elementos que deben concurrir para la declaración de la responsabilidad estatal, siendo estos: la determinación de un **daño antijurídico** causado a un administrado, así como la **imputación** del mismo a la administración pública, tanto por la acción, como por la omisión de un deber y, por último, el **fundamento del deber de reparar**, que debe dar cuenta de las razones de derecho por la que los perjuicios deben ser indemnizados.

En cuanto a la imputación debe destacarse que se trata de juicio que demanda un doble esquema de análisis en el cual debe efectuarse un juicio de **imputación fáctica**, por un lado, y uno de **imputación**

¹ La responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son el resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado 52001-23-31-000-2001-00960-01 (33976). Actor: Cleofas Tumbajoy Alarcón; Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y otros. Medio de Control: Reparación Directa. Sentencia del 16 de febrero de 2017.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

jurídica, por el otro, siendo la imputación desde un punto de vista fáctico, un ejercicio de atribución material o eminentemente causal del origen del daño o los elementos naturales que han intervenido en su producción. Entretanto, la imputación jurídica hace referencia a un escenario en el que el juez debe determinar si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica o de tipo normativo de reparar el daño.

Ahora, desde una perspectiva clásica la responsabilidad también ha sido entendida bajo los siguientes derroteros, los cuales entraremos a desarrollar:

5.1.1. El daño antijurídico

La Corte Constitucional, con ocasión a una demanda presentada contra una parte del artículo 50 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-333 de 1996, tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la cláusula general de responsabilidad estatal, y en lo que al daño antijurídico se refiere precisó que no existe una definición expresa del mismo, debiéndose entonces recurrir a los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en los que se constata que la noción fue adoptada del texto constitucional español.

Señaló la Corte en dicha oportunidad, que la doctrina española ha entendido el daño antijurídico como *“el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”*, concepto precisado igualmente por el Consejo de Estado en sentencia de 13 de julio de 1993³, como *“la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en obligación de soportar”*.

Así las cosas, es claro que el concepto de daño antijurídico obedece a un mecanismo de protección por parte del Estado que se origina como respuesta a los perjuicios que pueden ser ocasionados por las diversas actividades ejercidas por el poder público, lo cual se encuentra armonizado con los principios constitucionales de solidaridad e igualdad, pues el fin último de este instituto jurídico es lograr reparar e indemnizar a una persona que ha sufrido una merma que no está en la obligación de soportar conforme al ordenamiento jurídico.

5.1.2. Imputación (por acción u omisión de las autoridades públicas)

Para poder endilgar responsabilidad en cabeza del Estado es necesario determinar cuál fue la fuente que originó el daño, es decir, es necesario establecer la ocurrencia de hechos, operaciones administrativas, actos, omisiones, lo que a su vez permite establecer quién es el responsable y bajo qué régimen y título se harán las eventuales declaraciones y/o condenas.

Ahora bien, dadas las especificidades de este caso, teniendo en cuenta el título con fundamento en el cual la parte actora pretende imputar responsabilidad a mí representada (“omisión”), es menester precisar que la *omisión administrativa*, de acuerdo con el tratadista Libardo Rodríguez está definida como: *“las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos respecto de ella. Es decir, consisten en que la administración se abstiene de actuar cuando debería hacerlo.”*⁴, lo que nos permite inferir que en el presente asunto estamos ante un régimen de responsabilidad subjetiva bajo el título de falla en el servicio, lo cual como se demostrará a lo largo de este escrito, no se configura en este caso, dado que la SFC actuó y lo hizo de manera diligente y oportuna, de acuerdo con sus funciones y atribuciones legales.

³ Corte Constitucional. Sentencia C- 333 del 1° de agosto de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

⁴ RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo. Editorial Temis. Bogotá 2000. Págs. 195 a 198.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por esa razón, **hechos como los que aquí se debaten, se insiste, deberán ser analizados a la luz de los requisitos establecidos para el régimen de responsabilidad subjetiva que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración, es decir, que el título de imputación corresponde al de la falla en el servicio y conforme la jurisprudencia lo ha previsto el examen de dicha responsabilidad ha de realizarse con base en la disposición legal o reglamentaria que consagra el deber que se alega como omitido, o incumplido,** con el objeto de establecer si en efecto, la Administración incurrió en omisión o dilación en el cumplimiento del deber, y si éste fue determinante en la producción del daño.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la actividad de la Superintendencia Financiera tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero y del mercado de valores por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, como quiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado⁵. Frente a este tópico ha señalado:

“De toda esa actividad se deduce, sin mayores elucubraciones, que la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-, no omitió, descuidó o retardó sus deberes de inspección, control y vigilancia, respecto de La Fortaleza S.A., menos aún durante su intervención hasta la toma de posesión de bienes, haberes y negocios con fines de liquidación, pues son claras las gestiones encaminadas a que la entidad vigilada pudiera continuar con el desarrollo de su objeto social, pese a los inconvenientes y problemas de solvencia y cumplimiento de todo tipo de normas de orden financiero.

Ahora, en torno a que con su gestión pudo haberse evitado la toma de posesión y consecuente liquidación, cabe precisar que la función de supervisión de la Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los accionistas y/o depositantes o ahorradores contra cualquier pérdida, por el contrario, tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, comoquiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado.”

Así lo ha resaltado esta Subsección al señalar:

*“Sobre este punto, vale la pena resaltar que **la obligación a cargo de la Superintendencia no es de resultado**, pues según la carga obligacional contenida en el EOSF, la cual se expuso en precedencia, **sólo está obligada a revisar la actividad de los establecimientos financieros y a vigilar y controlar dicha actividad, pero no a cogestionar o evitar los riesgos propios del sistema financiero.**”⁶* (Negritillas fuera de texto).

5.1.3. Nexo de causalidad

La relación de causalidad, en términos generales, se puede entender como el vínculo entre un antecedente y una consecuencia, y se contrae al estudio de los diferentes títulos de imputación que permiten establecer si la responsabilidad es o no atribuible a la Administración.

Este nexo de causalidad se puede romper cuando opera una causa extraña, esto sucede cuando el daño no es imputable a la autoridad administrativa. Como causas extrañas se conocen el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. 13 de abril de 2016. Radicado 1999-00015 (35354). Velásquez Rico, Marta Nubia.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 25000 23 26 000 2000 02312 01 (29944); M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa ha precisado:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta proviene del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla en el servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandando porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien fue por su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)” (Se resalta)

A tenor de lo anteriormente señalado, es claro que la culpa exclusiva de la víctima es eximente de responsabilidad estatal cuando además de demostrada la causalidad material, se demuestra que la víctima participo y fue la causa eficiente en la producción del daño, actuar que puede catalogarse de culposo al desatender las reglas u obligaciones de prudencia, diligencia y estudio de los negocios que decide ejecutar.

Por otro lado, en lo que al hecho del tercero respecta, se tiene que el mismo exonera de responsabilidad al Estado cuando se demuestra que ese tercero es “*completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal*”⁸.

6. ANALISIS PROBATORIO DEL CASO CONCRETO

Conforme lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Este principio procesal es conocido como ‘*onus probandi, incumbit actori*’. A partir del estudio de dicho principio, es dable afirmar que tanto demandante como demandada tienen el deber de probar los hechos en que sustentan las pretensiones y excepciones propuestas, y en caso tal que dicha situación no se verifique por parte del Juez, la consecuencia jurídica es la negación de las pretensiones elevadas, como quiera que ante la falta de la prueba no puede tenerse por cierto el hecho. Sin embargo, no está de más advertir que una vez son arrimadas las pruebas a una controversia judicial, las mismas hacen parte del expediente y no de las partes, y en ese sentido habrán de ser analizadas en su totalidad siempre y cuando las mismas reúnan los requisitos formales que la ley exige para poder tenerlas como tal.

Bajo ese escenario, cabe indicar en relación con el asunto que se discute, que la SFC realizó las visitas de inspección a la que se ha hecho referencia a lo largo de esta contestación, atendiendo las facultades contenidas en el literal d) numeral 1 del artículo 325 y literal a) del numeral 4 del artículo 326 del EOSF, los numerales 1, 2 y 22 del artículo 11.2.1.4.35 del Decreto 2555 de 2010 y el artículo

⁷ Consejo de Estado. 25 de Julio de 2002. Radicado 13744. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. 28 de enero de 2015. Radicado 32912. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

108 del Decreto 663 de 1993 o EOSF, modificado por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003, en función de los cuales este ente de control revisó el modelo de negocios de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para establecer si recibía dinero del público, cuál era la forma en que lo hacía y determinar si en desarrollo de tal actividad se evidenciaba la existencia de hechos objetivos o notorios de captación en los términos previstos en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con los supuestos de captación de recursos del público consagrados en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.

A tenor de lo anterior, se determinó que la sociedad visitada realizaba compra y posterior venta al descuento de pagarés libranzas en virtud de la suscripción de contratos de compraventa de estos títulos valores, pero del análisis y estudio de la información recabada en la visita desarrollada, se concluyó que no se configuraban los hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva de recursos del público, por lo que las afirmaciones contenidas en la presente demanda, que aducen una supuesta conducta omisiva por parte de mi representada, no se corresponden con los antecedentes y conclusiones consignadas en el Informe de Inspección, por lo que los dichos del demandante terminan siendo solo conjeturas. En efecto, el material probatorio que anexa la SFC a esta intervención, acredita que contrario a lo señalado por el accionante, esta Entidad actuó de manera diligente y dentro del marco de sus competencias frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, estos elementos junto con el escaso material probatorio aportado por la parte actora, nos permitirá probar que no existió omisión alguna por parte de la SFC en el ejercicio de sus funciones y por tanto el presunto daño sufrido no tiene la connotación de antijurídico. No obstante, si el Despacho llegara a considerar que el daño existió, el mismo material probatorio nos permitirá acreditar que aquél, no puede ser imputable jurídicamente a la actuación de la Administración y por ende ser resarcible, ya que el mismo solo es imputable a la parte demandante y/o a terceros por completo ajenos a la administración pública.

Atendiendo las previsiones señaladas, consideramos del caso hacer las siguientes reflexiones:

6.1. Ausencia de daño antijurídico.

Como quiera que la presente acción tiene por objeto la reparación del daño ocasionado como resultado de las supuestas “omisiones” en ejercicio de las funciones de la SFC, es carga de la parte reclamante acreditar la existencia del daño antijurídico cuyo resarcimiento pretende y la antijuridicidad del mismo, según las previsiones del artículo 90 de la Carta Política.

En ese sentido, el demandante pretende que el presunto perjuicio que alega y que identifica como la pérdida de los dineros que aduce haber entregado a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. sea resarcido por el Estado, sin embargo, no sustenta sus afirmaciones con material probatorio idóneo que permita identificar en qué consistió la presunta omisión en que habría incurrido esta Superintendencia.

Es claro entonces que como quiera que en la demanda se reclama una indemnización derivada de la pérdida de los dineros que según se afirma fueron invertidos en OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ante la deficiencia de los medios de prueba aportados, no es posible predicar la existencia cierta y actual de la pérdida a que se hace referencia. Debe recordarse que, conforme a lo afirmado por el accionante, el reclamo que se pretende ya fue objeto de estudio en el proceso de intervención que adelanta la SS respecto de la referida sociedad. Por lo tanto, no es procedente tener por probadas las pretensiones de la demanda ante el carácter hipotético del presunto daño, ya que el demandante pretende la reparación de los perjuicios presuntamente irrogados en el escenario de la intervención. Así las cosas, consideramos se impone la necesidad de proferir un fallo que desestime la existencia misma del daño,



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

así como el carácter antijurídico del mismo y que en consecuencia niegue las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, en el evento en el que el Despacho considerara que efectivamente existe un daño, ese menoscabo no tendría las características de un daño antijurídico, pues se habría originado en la decisión libre, deliberada y autónoma de las partes involucradas de realizar un negocio jurídico, en cuya materialización no tuvo injerencia alguna la SFC, pues esta Entidad no tuvo relación de ninguna naturaleza con el acto de inversión y entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Para ilustrar esta noción resulta oportuno traer a colación los criterios que ha señalado el Consejo de Estado en cuanto a la antijuridicidad del daño como fuente del deber de reparar:

*“A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”. lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como **“la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho” o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación.***

Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:

La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (artículos 228 y 20 de la Constitución) sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado Social de Derecho (artículos 10 y 13 de la Carta).

Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que “superan la normal tolerancia” o que impiden el goce normal y adecuado del derecho. Específicamente en cuanto a la razonabilidad de la limitación del derecho a la propiedad y al límite de la obligación del titular a soportar dicha restricción en el ejercicio de su derecho, para efectos de establecer el deber de los particulares de reparar los daños, la doctrina Argentina ha dicho lo siguiente: (...)

*La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resulta antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las **personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos.** No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica. en tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución). **En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la***



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

actuación u omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares.⁹ (Negrilla fuera del texto)

En ese sentido, como bien lo anota la jurisprudencia citada, no todo daño entendido como menoscabo a un interés o un derecho, es **antijurídico**, es decir, no todo perjuicio irrogado a un particular conlleva de suyo los ingredientes normativos que estructuran el deber de reparar. Así, para que exista un daño y este sea antijurídico, es necesario que la víctima demuestre que no estaba en el deber conforme al ordenamiento jurídico, de soportarlo. De allí que acertadamente se tenga que, si se llegaran a probar los supuestos daños que se reclaman por el demandante, los mismos no son antijurídicos, pues se debe considerar que aquel experimento una merma patrimonial **como la que puede tener lugar en cualquier otro negocio de riesgo monetario, la cual se magnificó, desde luego, ante la existencia de los altos rendimientos que el accionante señala le fueron prometidos.**

Así, si se llegare a demostrar que el actor efectivamente hizo entrega de una suma de dinero a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. la misma fue una decisión libre y voluntaria de él, debiendo considerarse que quizá lo hizo obnubilado por la rentabilidad ofrecida en la operación de compra de pagarés libranzas. Se debe recalcar que para el actor los deudores de las libranzas eran personas desconocidas, aspecto que conlleva a que la operación que realizó fuera riesgosa. De otro lado, en el expediente no reposan pruebas que acrediten que el demandante por precaución hubiera revisado físicamente los pagarés que aduce haber adquirido o bien en las oficinas de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la empresa que indica tenía la custodia de dichos título; es decir, no se cercioró si quiera de la existencia real de los mismos, como tampoco se evidencia su diligencia en al menos verificar el comportamiento de la deuda, del pago de dicha cartera, circunstancias que también demuestran la culpa exclusiva a cargo del accionante que entregó su dinero sin verificar las condiciones reales del negocio.

En el presente caso no se puede desconocer que el demandante esperaba obtener unas utilidades del negocio aleatorio que celebró, de las cuales él sería el único beneficiario. Por lo tanto, no tendría sentido que las pérdidas del negocio o los riesgos de la operación emprendida tenga que asumirlas el Estado, asumiendo como si la Administración hubiese participado en el acto autónomo y libre que hoy viene a ser la causa de los perjuicios. En ese escenario, consideramos que una correcta aproximación al asunto que nos concita, debe tener en cuenta que como no todo daño es antijurídico, el daño que no tiene esta característica debe ser soportado por el particular cuando este ha concurrido a su causación, pues los riesgos de su decisión no pueden socializarse para que el Estado y la sociedad en su conjunto respondan por decisiones de que haber prosperado solo habrían supuesto un beneficio individual para los hoy demandantes.

Así las cosas, ante el escaso material probatorio que acredite la existencia de los daños que se pretenden sean indemnizados, así como su antijuridicidad, la falta de acreditación de alguna conducta omisiva a cargo del Estado, o que de dicha conducta haya generado el perjuicio, elementos sobre los que se estructura la responsabilidad extracontractual del Estado, lo jurídicamente procedente es negar la totalidad de las pretensiones, pues aunado a tal circunstancia, tal y como se verá más adelante, tampoco se configuran los dos elementos restantes que permitirían imputar una eventual responsabilidad a mi prohijada por los hechos alegados en la demanda.

6.2. Inexistencia de una omisión imputable a la SFC.

Superado el aspecto relacionado con la existencia del daño cuya reparación se pretende por la presente vía judicial y como quiera que en los hechos de la demanda se evidencia que la

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Exp: 29.590. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

responsabilidad de mi representada se afinca o atribuye a una supuesta falla del servicio por “omisión”, procede poner de presente la **inexistencia de omisión imputable** a esta Entidad, por lo que a continuación se señalarán los principales aspectos de la actuación administrativa que con diligencia, previsividad y asertividad este ente de control efectuó respecto OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

6.2.1. La sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no está ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia.

Debe llamarse preliminarmente la atención frente a una realidad incuestionable y es que la referida sociedad con la que los hoy demandantes establecieron en su momento el vínculo contractual causante del daño, no estuvo ni ha estado sometida a la vigilancia de la SFC. Es oportuno precisar que las entidades y actividades respecto de las que esta autoridad ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, numeral 1 del párrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Bajo este entendimiento, es claro que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia. En virtud de ello, es necesario que se constituyan en la forma y términos que establecen el artículo 53 y siguientes del EOSF y la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica de la SFC. Tales disposiciones señalan que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia, circunstancia que en el presente asunto jamás ocurrió.

6.2.2. Actuación diligente de la SFC respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S a pesar de no ser una entidad vigilada, con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público. Inexistencia de omisión imputable por parte de este Organismo de Inspección y Vigilancia.

Aunque la citada sociedad, insistimos, nunca estuvo sometida a la inspección y vigilancia de la SFC, esta autoridad realizó dos visitas de inspección a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., que se adelantaron entre el 9 y 17 de julio de 2013, sin embargo, entre el 2 y 6 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. La finalidad de la misma era establecer si dicha persona jurídica se encontraba realizando operaciones de captación o recaudo no autorizado de recursos del público, a tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 326 numeral 4) literal e) del EOSF, en armonía con el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, concordante con las disposiciones previstas en el Decreto 4334 de 2008.

6.2.2.1. Resumen y conclusiones de la visita realizada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo.

Ahora bien, de lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “pagarés-libranza” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

6.3. Ninguna autoridad del estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

Como se ha señalado a lo largo del presente escrito, el demandante acude al presente medio de control de Reparación Directa, para reclamar solidariamente de las entidades demandadas, un resarcimiento de índole económico, fundado en una presunta responsabilidad extracontractual de la administración pública por supuestamente “avaluar” el desarrollo de las actuaciones de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Indica que dicha sociedad desplegó conductas de captación masiva e ilegal de recursos del público, que en virtud de ello las demandadas habrían incumplido sus deberes de inspección, vigilancia y control en relación con el funcionamiento de la sociedad encartada en el asunto, a la que afirma haber entregado sumas de dinero con el fin de comprar títulos valores. Por ello, en su sentir ese hecho lo habilita para reclamar perjuicios materiales por la presunta omisión en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008.

Pues bien, frente al cumplimiento de los contenidos obligacionales a los que está sometida esta Entidad, conviene precisar que desde los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, se establece que las autoridades públicas, como es el caso de mi prohijada, no pueden ejercer funciones distintas de las que expresamente les atribuye la Constitución y la ley. Por ende, la responsabilidad que se quiere endilgar en el presente caso, basada en el supuesto incumplimiento de las funciones a cargo de las demandadas, debe analizarse, considerando los límites impuestos por el mandato constitucional en ciernes, en tanto las autoridades no pueden responder por hechos o cadenas causales diferentes a aquellas que expresamente están bajo su tutela.

Bajo esa óptica, debe decirse que la SFC no tuvo participación, directa o indirecta, en los actos y hechos con base en los cuales ahora se pretende derivar su responsabilidad. Y es que no basta con efectuar acusaciones temerarias e irreflexivas para que se configuren las condiciones en las que ha de incurrirse para que el Estado deba responder por su acción u omisión. En relación con las exigencias de orden jurídico que deben acreditarse para que el Estado pueda ser responsable, ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado:

*“Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente la Sala, que la responsabilidad de la Administración **no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades, para cuya protección están***



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a un Estado ideal, sino con referencia concreta a la Administración a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede estar obligado a lo imposible”.*¹⁰ (Negrilla fuera del texto)

De modo que, ante la inexistencia de prueba que sustente no solo el presunto perjuicio o daño patrimonial alegado por el accionante, sino la omisión en que habría incurrido el Estado y cómo ésta sería la causa eficiente del daño, se impone negar las pretensiones de la demanda, con mayor razón cuando el eventual daño no es ni puede ser consecuencia directa de un acción u omisión que pueda atribuirse a la SFC, aspecto al que con facilidad podrá arribar el Despacho al realizar un simple cotejo del marco jurídico que regula las funciones y competencias de esta Superintendencia.

Siguiendo la argumentación ofrecida hasta este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos necesarios para que prospere la responsabilidad del Estado por la omisión de sus funciones:

*“En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico y; d) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a éste último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(...)”*¹¹

Como puede observarse, en el caso de las Superintendencia no basta con argumentar dentro del proceso que éstas tienen una competencia legal de supervisión sobre la actividad de los particulares, **adicionalmente se debe demostrar que una vez se tuvo conocimiento de la irregularidad cometida no se adelantaron, se adelantaron tardíamente o se usaron los medios inadecuados para interrumpir el proceso causal que genera el daño en el patrimonio económico de los usuarios del servicio o actividad objeto de control, inspección y vigilancia.**

Al referirse sobre la inspección y vigilancia del ejercicio de la actividad financiera, el Consejo de Estado ha sostenido:

*“La actividad financiera que desarrollan los particulares está sometida a la inspección y vigilancia del Estado, en razón del interés general que esa actividad reviste, por su incidencia en la economía. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado por los daños que se derivaran de actuaciones irregulares de quienes ejercen dicha actividad **se produce siempre que la entidad estatal incurra en omisión en el cumplimiento de las funciones que le corresponden como autoridad de policía administrativa, pero cuando se demuestre que de haber dado cumplimiento a tales obligaciones se hubiera podido impedir que se causaran los daños derivados de esa irregular gestión de los particulares**”*¹²

¹⁰ Consejo de Estado. Sentencia de 6 de octubre de 1995, expediente 9535. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.

¹¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-27-000-2001-00009-01 (AG).

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De lo anterior, surge con claridad que la responsabilidad por omisión en la función de policía no se genera sólo porque se haya demostrado que se incumplieron las competencias que se han asignado jurídicamente, sino que adicionalmente debe probarse que de haberse cumplido las obligaciones se habría podido impedir la generación del daño. Así las cosas, no hay deber de reparar cuando aún en cumplimiento de labores de inspección, control y vigilancia, el análisis probatorio conduce a la conclusión inexorable de que tal consecuencia negativa se habría dado con independencia de la intervención estatal.

En este punto resulta pertinente manifestar que la SFC como entidad estatal de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo consagrado en el artículo 121 de la Constitución Política, **sólo tiene competencia en relación con las materias a su cargo** y con sujeción a las funciones atribuidas por la Constitución y la ley, las cuales para el caso de esta Autoridad, se encuentran descritas, en el Decreto 2739 de 1991, Decreto – Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF), la Ley 964 de 2005, Decreto 2555 de 2010 (modificado, entre otros, por el Decreto 1848 de 2016 y el Decreto 2399 de 2019), y las demás normas que las modifiquen o adicionen.

De tal manera, esta Superintendencia es el Organismo técnico encargado de ejercer funciones de control, inspección y vigilancia **sobre las entidades que conforman los sectores financiero, asegurador, bursátil y previsional del país**, teniendo como objetivo supervisar el sistema financiero y el mercado de valores colombiano, de acuerdo con la facultad consagrada y delegada en los artículos 189 numeral 24 y 211 de la Constitución Política.

De ahí que a la SFC, desde la óptica de sus funciones administrativas, **no le compete intervenir en las relaciones contractuales entabladas entre las entidades vigiladas (y no vigiladas) y los particulares**. Es así como, esta Entidad no puede impartir órdenes referidas a la ejecución y terminación de contratos celebrados entre los particulares y sus entidades vigiladas ni mucho menos las no vigiladas, dado que su función de supervisión no trasciende a la intrusión en la esfera de la autonomía de las partes que se caracteriza por la libertad negocial, pues estaría desbordando el ámbito de su competencia administrativa. **Una interpretación contraria llevaría a pensar que esta autoridad tiene facultades para coadministrar o para dirimir diferencias que puedan surgir en las relaciones contractuales, e incluso para asumir responsabilidades por completo ajenas a su naturaleza, objetivos y funciones.**

Dicho de otro modo, la SFC, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las que ha sido expresamente facultada por la ley. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa no podría haber decretado medidas administrativas dirigidas a ordenar la toma de posesión de los bienes y haberes de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. , primero, porque en la visita realizada a la sociedad en cuestión **no se encontraron a la fecha de su realización hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva e ilegal de recursos del público, que conllevaran a la adopción de una medida cautelar para la fecha en que la misma se llevó a cabo y, segundo, porque ésta medida de intervención en el marco del Decreto 4334 de 2008 solo podía ser adoptada por la SS.**

Con todo, no se avizora en el presente caso el despliegue de conducta alguna que haya quebrantado los deberes a cargo de la SFC y de la que pueda derivarse que los presuntos daños sufridos por el accionante deban ser reparados por el Estado, al haber tenido ocurrencia por causa de una conducta que no puede endilgarse a la administración pública.

6.4. Ninguna autoridad pública en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control está obligada a lo imposible.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para finalizar, no puede soslayarse el hecho de que la omisión que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado en el caso de la omisión de las Superintendencias se concreta, en primer término, por la ausencia de adopción de medidas administrativas cuando se tiene conocimiento de irregularidades en la actividad de las industrias vigiladas, y al cual puede llegarse por quejas de la ciudadanía, o como resultado del propio cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, o de hechos que sean materia de denuncia por los particulares.

Ello, en la medida en que sin este conocimiento previo no es posible pretender responsabilidad, pues aun cuando el Estado tiene una obligación de garantía de bienes jurídicos no está obligado a lo imposible y, por lo tanto su deber de policía administrativa no puede, bajo ninguna circunstancia, implicar el que tenga un funcionario público al interior de cada establecimiento sujeto a su control, por lo que quien demanda debe demostrar supuestos fácticos y jurídicos que permitan deducir la presencia de elementos suficientes, como para considerar que la Autoridad incurrió en un obrar irregular.

En esa línea argumentativa, sobre la naturaleza de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de las Superintendencias, el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente:

*“El propósito de las funciones de inspección, vigilancia y control que el ordenamiento asigna a la Superintendencia de Sociedades no es otro que el de velar porque las compañías vigiladas ajusten su actividad a las normas jurídicas que la gobiernan – constitucionales, legales y reglamentarias –, así como a los estatutos del propio ente social; por consiguiente, en modo alguno podría admitirse que la finalidad de las intervenciones del organismo de control frente a eventos como el sub judice pudiere consistir en hacerle asumir sus obligaciones de resultado de cara a la evitación de que se produzcan daño a los socios o a terceras personas como consecuencia del desarrollo de sus actividades por parte de la empresa sujeta a vigilancia. **La responsabilidad patrimonial del Estado, por tanto, en este tipo de casos, solamente puede quedar comprometida si se demuestra en el proceso i) que el servicio a cargo de la Superintendencia no fue prestado o lo fue de manera tardía, negligente o equivocada y ii) que esa falta en la prestación del servicio fue la que condujo a la materialización del(los) daño(s) cuya reparación se depreca**”¹³.*

Como puede apreciarse, las entidades públicas deben ser absueltas si demuestran que frente a una situación irregular adoptaron las medidas y decisiones que de ella se esperaban, **por lo que no tiene por qué asegurar que su intervención ofrezca una recuperación de una actividad económica o la recuperación de pérdidas dinerarias debidas al comportamiento de los particulares.**

Se trata, entonces, de un régimen **subjetivo** de responsabilidad atado directamente al contenido obligatorio impuesto al Órgano de inspección, vigilancia y control, y limitado a su vez por éste, en función del cual:

*“La responsabilidad patrimonial del Estado bajo un esquema de responsabilidad subjetiva, es decir sustentada en la falla en el servicio, **pues la función de supervisión no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida, sino en asegurar el cumplimiento de las normas del sector**, no puede perderse de vista que el contenido obligatorio a cargo de la Administración en este tipo de supuestos consiste en procurar la salvaguarda -so pena de la adopción de las medidas o de la imposición de las sanciones a las cuales legalmente hubiere lugar (...) cuando las víctimas que acuden a la Jurisdicción en busca de la reparación de los daños que les fueron irrogados son usuarios o terceros damnificados por el actuar de la sociedad vigilada, lo primero que se observa es el hecho de que quien produce directamente el daño no es el Estado – el cual sólo desarrolla en tales eventos labores de supervisión-, sino un tercero, que es justamente la compañía intervenida; es ella la que ocasiona, de manera directa, los daños a sus*

¹³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2012. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

clientes, de suerte que, por regla general. Frente al Estado debe examinarse si se estructura un hecho de tercero como eximente de responsabilidad. De este modo, el título de imputación del daño al Estado únicamente podría ser -se itera- la falla del servicio constituida por la omisión de la entidad oficial supervisora en el cumplimiento de sus deberes legales”¹⁴.

En el caso concreto habría que agregar un hecho al que ya hemos hecho referencia a lo largo de este escrito, pero el que, insistimos, no puede ser inobservado, y es que la sociedad que concita el presente debate judicial, a diferencia de lo sostenido por la jurisprudencia en relación con los eventos en que puede ser declarada la responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, **nunca estuvo bajo la inspección y vigilancia de la SFC.**

Por lo tanto, las actuaciones desplegadas por este Organismo frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en ningún caso se llevaron a cabo por ser ésta una industria supervisada por la SFC. Por el contrario, las mismas se hicieron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora, que sí tiene bajo su égida la Superintendencia Financiera de Colombia.

7. EXCEPCIONES.

Sea lo primero informar al Despacho que las excepciones previas, conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, concordante con los artículos 100 al 102 del Código General del Proceso, se presentarán en escrito separado. En ese orden, nos referiremos a continuación a las que consideramos son presupuestos necesarios para proferir una sentencia que niegue las pretensiones de la demanda, y en ese sentido sea favorable a los intereses de mi representada. Así:

7.1. EXCEPCIONES DE FONDO

7.1.1. Actuación diligente y conforme al marco de sus competencias por parte de la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público.

7.1.1.1. Visita realizada a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

El día 6 de mayo de 2013 se recibieron en esta Entidad dos correos electrónicos a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “*pagarés-libranza*” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide. Esta Superintendencia atendiendo las funciones de prevención y control del ejercicio ilegal de la actividad financiera consideró pertinente evaluar si en el desarrollo del objeto social de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se presentaban operaciones en las cuales se pudieran estar configurando hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público.

En virtud de lo anterior, mediante Oficio No. 2013058932-001-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-006-000 del 29 de noviembre de 2013.

¹⁴ Ibid.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo, como se describen a continuación:

Nombre Cooperativa a sociedad	Radicado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización.
Estrategia Patrimonial S.A.S	2013064058	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Libranzas Group S.A.S	2013081468	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
Cooperativa Multiactiva COOPDOMUS LTDA.	2013064063	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Cooperativa Multiactiva de Palmira - COOMUPAL	2013064064	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
COOPERATIVA DE CRÉDITOS MEDINA - COOCREDIMED	2013081431	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
COOINVERCOR	2013081463	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013

En cuanto a la sociedad ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. se determinó:

- Que suscribió un contrato con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. denominado “*Contrato marco de compraventa de cartera*”, vigente hasta el 13 de noviembre de 2013. En dicho documento se aclaró que los “pagarés – libranza” vendidos a OPTIMAL provenían de las Cooperativas COOPDOMUS Y COOMUPAL.
- Celebró un contrato de cesión con OPTIMAL y COOPUMAL, por lo tanto, a partir del 23 de septiembre de 2013 OPTIMAL LIBRANZAS empezó a comprar los “pagarés-libranza” libranza directamente a la cooperativa y a recibir de manera directa el pago de los flujos.

Respecto de la sociedad LIBRANZAS GROUP S.A.S., se encontró:

- Que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. suscribió con aquella un contrato denominado “*Contrato de compra de cartera con responsabilidad*”, a través del que le compró los derechos de crédito incorporados en los “pagarés-libranza” que eran adquiridos de las cooperativas COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL.
- Se probó que el 26 de septiembre de 2013, LIBRANZAS GROUP S.A.S., OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y COOCREDIMED celebraron un contrato de cesión, con el objeto de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comprar los “pagarés-libranza” directamente a la Cooperativa sin la intervención de LIBRANZAS GROUP S.A.S.

De otro lado, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. celebró contratos de compraventa de cartera que equivalen al 3.66% de la cartera adquirida con las Cooperativas COOINVERCOR, COOMUNDOCRÉDITO, COOCREDIANGULO y COOPROCO KAPITAL SOCIAL; sin embargo, la comisión de visita centró su revisión y verificación en las ventas de pagarés-libranza realizadas por ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., pues eran ellas quienes habían vendido el 96.34% del total de la cartera reportada por la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

En cuanto a las operaciones de compraventa de “pagarés-libranza” entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y los inversionistas, se evidenció que suscribían un “Contrato de compraventa de cartera modalidad pagaré-libranzas-persona natural”, en el que se establecían las condiciones de la negociación. Vale la pena mencionar que el modelo de negocio consistía en la venta de los derechos de crédito incorporados en títulos denominados “pagarés-libranza”, que se originaban en los préstamos que otorgaban las cooperativas ya mencionadas a sus asociados y que eran cancelados mediante descuento de nómina, aplicada por las pagadurías de las entidades para las que laboraban los deudores. A su vez se observó que, las cooperativas consignaban o giraban el valor recaudado a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., para que fueran consignados a favor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. quien adquiriría los títulos a descuento y se encargaba de pagar el flujo mensual a los inversionistas que los compraban, hasta su cancelación.

Con fundamento en lo expuesto, la comisión de visita concluyó en su informe:

- Los contratos suscritos entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., no gobernaban en su totalidad la relación comercial y las prácticas operativas que tenían vigentes, pues no se incluyeron aspectos relativos al procedimiento para hacer efectiva la cláusula de responsabilidad cambiaria en el evento de presentarse “pagarés-libranzas” siniestrados, incumplimiento en pagos, prepagos o títulos viciados.
- En el numeral 4.3 de la cláusula 4 y 7 de los denominados “Contratos de Compraventa de Cartera Persona Natural y Persona Jurídica”, utilizados para oficializar la venta de “pagarés-libranza”, se hacía referencia a una Fiduciaria y a la firma ERNEST & YOUNG, sin embargo, para el momento de la visita no habían sido formalizados, lo que inducía a que los inversionistas de manera errónea creyeran que esas entidades hacían parte del proceso y de los controles establecidos en la venta.
- Efectuada la revisión del contrato marco firmado con la sociedad Estrategia Patrimonial S.A., se encontró que en la consideración primera y cláusula sexta se hace referencia a operaciones de “factoring” contrario a lo señalado en el texto y forma del documento, pues en este se hace referencia a la compra de “pagarés-libranza”.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no conocía ni tenía el control de los “pagarés-libranza” que presentaban mora o impagos en los flujos mensuales. En el contrato suscrito con Estrategia Patrimonial S.A. no se contempló que dicha situación debía ser informada.
- Las sociedades Estrategia Patrimonial S.A.S. y Libranzas Group S.A.S. no reportaron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. los pagarés siniestrados, toda vez que esa información no se solicitaba a las Cooperativas, lo que llevó a que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. asignara “pagarés-



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

libranza” con recaudo en cero o con recaudos que presentaban cuotas menores al valor esperado.

- Las Cooperativas COOMUPAL y COOCREDIMED giraban a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. el valor de los flujos que se vencían durante el mes, sin embargo, no se encontró evidencia de la verificación por parte de las Cooperativas del reporte de descuentos generado por las pagadurías para constatar si existían pagarés que no hubieran sido objeto de descuento.
- ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. giraron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. el valor total de los flujos que se vencían en el mes para cancelar la mensualidad a los inversionistas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- Se revisó el caso particular del señor Farid Stefenn Uribe quien realizó una compra por \$500.000.000. OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. le asignó 116 “*pagarés –libranza*” por valor de \$668.498.202 a un plazo de 36 meses, con pagos mensuales de \$19.100.000. Se identificó que 11 de los títulos no recaudaron su flujo mensual, no obstante, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. recibió los dineros girados por las cooperativas a Estrategia Patrimonial para pagar los flujos convenidos con el inversionista.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. solicitó a las cooperativas COOPNALCRES, LEGALCOOP, MUNDOCREDITO, HABITAT, COOCREDIMED, COOMUPAL y COOPDOMUS certificaciones de la cartera siniestrada. Sin embargo, las dos ultima no remitieron la información solicitadas. Esta Superintendencia realizó visita de inspección¹⁵ a dichas cooperativas, en la cual se evidenció que vendieron “*pagarés-libranza*” con flujos cero o sin recaudar el 100% de la cuota o flujo mensual. COOCREDIMED remitió fotocopia simple de una certificación donde señaló que los pagos de los flujos de la cartera negociada se pagaban con oportunidad y suficiencia, pero no se hizo referencia a la existencia o no de cartera siniestrada, situación contraria a lo que evidenció la SFC en la visita realizada a esa cooperativa, pues se encontraron “*pagarés-libranza*” con flujos cero y con recaudo menor al esperado.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. a partir de noviembre de 2013 modificó su modelo de negocio, toda vez que en la venta de “*pagarés-libranza*” procedió a endosar los títulos en propiedad, pero sin responsabilidad a favor del comprador.
- Se hizo una revisión del “Archivo Visita Super 5 Dic 13” entregado el 10 de diciembre por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con el fin de verificar que el periodo de maduración de los “*pagarés-libranza*” vendidos coincidieran con los meses pactados y vendidos a los compradores de esos títulos, no se encontró irregularidad alguna.
- De acuerdo con la valoración de los hechos descritos en el informe y el análisis de la información suministrada por la entidad visitada, como aquella que se recaudó por la comisión de visita en la inspección, se concluyó que para la fecha de la visita, en el desarrollo de la operación de venta de “*pagarés-libranza*” llevada a cabo por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con sus clientes compradores, no se configuraban los supuestos o los hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y en el Decreto 4334 de 2008.

¹⁵ Se realizaron visitas de carácter administrativo a las Cooperativas: COOPDOMUS LTDA, COOMUPAL, COOCREDIMED, COOINVERCOR y a las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A. entre los meses de julio y septiembre de 2013.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- De lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “pagarés-libranza” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

Sea oportuno mencionar que las cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, tema que resultaba ser del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la que esta Superintendencia le trasladó copia del informe de inspección a dicho Organismo.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

Ahora bien, el hecho de que con posterioridad la Superintendencia de Sociedades (en diciembre del año 2016) hubiese verificado la existencia de hechos objetivos que dieron cuenta de la realización de operaciones de captación de dineros del público por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., **en modo alguno significa que la SFC haya sido omisiva en el cumplimiento de sus funciones**, porque, la información que esta Entidad evaluó corresponde a la recabada y entregada respecto de un periodo de 17 meses de operación de la misma, esto teniendo en cuenta que el modelo de negocio empezó en mayo de 2012.

7.1.2. Causales de exoneración de responsabilidad – Inexistencia de nexo causal entre la actuación de la SFC y el daño irrogado.

En el evento en que el Despacho llegare a considerar acreditada la existencia de un daño en el presente caso, las pretensiones deberían ser igualmente negadas ya que el mismo no es imputable ni atribuible a la SFC, pues concurren en el caso causales que deben exonerar de responsabilidad al Estado pues rompen el juicio de imputación fáctica y jurídica.

7.1.2.1. Hecho de un tercero

En el evento en que el demandante lograra probar a lo largo del presente proceso la existencia de un eventual perjuicio en virtud de la entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o llegare a demostrar que las pérdidas que aduce haber sufrido devienen de la existencia y funcionamiento de esa sociedad, ese hecho **NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SFC**, pues claramente la causa del daño estaría afincada en la acción propiamente dicha de esa sociedad, con la que el aquí demandante entabló un negocio jurídico, siendo así responsabilidad de los representantes legales y/o administradores de esa persona jurídica las actuaciones que confluyeron en la pérdida de los recursos depositados, acciones que son completamente ajenas a mi representada.

En ese sentido, cuando en los hechos de la demanda se afirma que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. dejó de pagar las amortizaciones que mes a mes venía realizando al demandante, justificando dicha



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

circunstancia en razones de orden operativo de la cartera, además de asuntos y menesteres internos de las cooperativas originadoras de las obligaciones adquiridas por el actor, debe indicarse que, respecto de estos hechos, ningún vínculo o relación causal tiene la SFC. Las mismas afirmaciones del accionante denotan que fue el hecho del tercero con quien se había establecido el vínculo contractual, el que provocó la cesación de pagos que afectó el patrimonio del reclamante.

Bajo ese entendimiento, de comprobarse que pudo haberse producido un daño, el mismo tendrá que ser objeto de litigio directamente entre las partes contratantes en desarrollo del negocio particular e individual que fue celebrado, ello, mediante el ejercicio de las acciones judiciales estatuidas por el legislador para tales fines, entre ellas, las de competencia de la jurisdicción ordinaria, e incluso a través del proceso penal respectivo, en el que cabe la reparación de los perjuicios irrogados con ocasión del injusto que llegará a acreditarse más allá de toda duda razonable.

No puede perderse de vista que aun cuando se quiera imputar responsabilidad a la Administración y se pretenda de ella el pago de los recursos que de forma libre y autónoma se invirtieron en la sociedad hoy intervenida, el punto central de la discusión que aquí se plantea, es que el presente asunto versa sobre la celebración de un contrato entre particulares, del cual la SFC no fue parte, ni dio su consentimiento o aval, razón por la que mal podría pretenderse que el cumplimiento de las prestaciones a las que se comprometió cada uno de los obligados recaiga en esta autoridad de supervisión, y no en el tercero que se obligó jurídicamente con el demandante, esto es, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, resulta evidente que en el caso puesto a consideración del Despacho la atribución material del hecho dañoso, constituida como un fenómeno estrictamente naturalístico, se relaciona directamente con la acción del particular y no con la del Estado, siendo así que la responsabilidad solo puede endilgarse a la referida sociedad.

Para esta Superintendencia es claro que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., instrumentó un ardid con base en una operación legítima, el descuento que se presenta en la negociación de un título valor, para engañar a particulares con falsas promesas de rendimientos elevados cuando se conocía que los flujos recibidos resultaban insuficientes para garantizar el pago de lo prometido.

7.1.2.2. Culpa exclusiva de la víctima.

Sea lo primero señalar que el demandante tiene los conocimientos que dan las máximas de la experiencia y que con base en ellos tomó de forma libre, autónoma y consciente una decisión de inversión que por sus características tenía un riesgo inherente, del cual no puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por su resultado, **pues la función de supervisión a cargo de esta Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida**, ello, tratándose una de entidades no vigiladas.

Cabe señalar, con base en las conclusiones contenidas en el Informe de Inspección analizado a lo largo de este escrito, que al parecer lo que ocurrió con el aquí accionante no fue otra cosa que la celebración de un contrato aleatorio, en los términos descritos en el artículo 1498 del Código Civil, esto es, aquel en el cual existe una contingencia incierta de ganancia o pérdida, y el cual se materializó en la compra de una cartera, que se generó en el alea de una posible rentabilidad atada al recaudo de unos recursos que se lograría en un periodo de tiempo determinado. Por ende, no se puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por el resultado de un negocio determinado por la autonomía de la voluntad de las partes, menos aun cuando el resultado del mismo dependía o estaba íntimamente ligado a los riesgos propios de los negocios realizados, y que el demandante consintió asumir libre y voluntariamente.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En ese sentido, debe auscultarse con especial énfasis el hecho que el accionante, según se infiere del libelo, obró en todo momento de manera libre, consciente y voluntaria al momento de entregar sus dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ello bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, en función del cual se les reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios. Razón por la cual no es dable asumir que el Estado deba tener responsabilidad por los perjuicios que los particulares sufran como resultado de su propia iniciativa.

Y es que proceder en un sentido contrario a éste, supone un riesgo evidente, que no es otro que el de llevar a concluir que cada que un inversionista, en un negocio de riesgo, pierda, el Estado habrá de responder por su dinero. Lo cual conllevaría a unas consecuencias contraproducentes, pues se daría cabida a la idea que las personas realicen toda clase de inversiones riesgosas, pues en el evento de fracasar el Estado responderá por ellas. Un argumento en esa dirección es que al Estado no pueden socializársele solo las pérdidas, cuando las ganancias son privatizadas en los sujetos contratantes. Por lo que mal podrían instrumentalizarse las funciones de inspección, vigilancia y control, para sostener un modelo en el que las utilidades son individualizadas en unos pocos, mientras las pérdidas son compartidas entre todo el conglomerado social.

De otro lado, es importante considerar que la presunta relación contractual entre el demandante y OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., se trata de un negocio privado sin intervención alguna de la SFC, en el cual el interesado asevera haber realizado una “inversión” de dinero, tipo de negocio que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias, para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. Así, toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la [multiplicación](#) del dinero colocado.

Respecto de lo anterior, se debe señalar que:

*“En la inversión privada suelen considerarse tres variables distintas; la primera corresponde al rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que se considera que tendrá en términos positivos o negativos, la segunda obedece al **riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento, la posibilidad de que la inversión no se recupere,** y por último el horizonte temporal, o bien el período a corto, mediano o largo plazo durante el que la inversión se sostendrá.”¹⁶*

En otras palabras, está el demandante obligado a actuar con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como a proceder con la diligencia debida y el cuidado que se espera frente a esta clase de operaciones comerciales. Esa diligencia lo hubiese llevado, al menos, a interrogarse e indagar sobre algunas cuestiones esenciales de la cartera que estaba adquiriendo, tales como el origen de los pagarés libranza, lo que le habría llevado a verificar si dichos títulos existían en las cooperativas originadoras que celebraban negocios con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la sociedad contratada para la custodia de los mismos.

¹⁶ Definición ABC: <http://www.definicionabc.com/economia/inversiones>.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nótese que aun cuando el actor reprocha al Estado por un presunto actuar negligente, el dicho no ofrece prueba de ninguna clase, pasa por alto señalar que nunca acreditó haber verificado o realizado alguna investigación sobre el efectivo pago de los deudores de las obligaciones contenidas en los títulos valores que estaba adquiriendo. Tampoco hizo nada por establecer de qué tipo de cartera se trataba, si la misma estaba siniestrada, o los títulos valores presentaban inconsistencias, duplicidades, si la información que le brindaba vía correo electrónico sobre montos y plazos de los pagarés era verídica o fidedigna.

Por el contrario, simplemente existen una serie de manifestaciones que dejan ver que el demandante se limitó a recibir información, sin comprobarla, y acto seguido a suscribir documentos sin un soporte válido, amparándose únicamente en la “*confianza*” que le brindaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Debe plantearse, entonces, la existencia manifiesta de una desidia del demandante en los términos a los que hemos hecho referencia, como causa determinante del posible perjuicio irrogado, por lo que la apreciación del daño, en caso de existir éste, deberá estar sujeta a la valoración de la conducta de quien se expuso a él imprudentemente.

En definitiva, en el presente caso consideramos están dados los elementos de tipo normativo que hacen improcedente la imputación desde un punto de vista fáctico y jurídico, pues nos encontramos ante una actuación del accionante que evidencia imprudencia y la aceptación de riesgos o aleas propias del negocio jurídico que celebraron, lo cual tendría que excluir la responsabilidad de la Administración por el hecho o la culpa exclusiva de la víctima.

7.2. Intervención como escenario idóneo para las reclamaciones de índole económica como la que se pretende.

El trámite de la demanda judicial por medio de la interposición del medio de control de reparación directa, no es el mecanismo adecuado para pretender la restitución de los dineros que se dice fueron entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., pues con ello se desconocen las instancias legales dispuestas especialmente para tales fines, esto es, el trámite administrativo que con fundamento en el artículo 5° del Decreto 4334 de 2008, el cual fue ordenado por la SS mediante Auto 400-005087 del 13 de abril de 2018, a través del que se decretó la toma de posesión como medida de intervención de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., escenario en el que existe la posibilidad de devolver de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que al pretender el demandante que a través del medio de control de reparación directa le sean restituidos como pretensión el valor de los dineros entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conllevaría al cobro de lo no debido e incluso de un enriquecimiento sin causa, por cuanto al restituirse al actor dentro del proceso de intervención de manera parcial o total el valor de la inversión, se entendería que su daño se habría resarcido y nadie está habilitado por la ley para obtener el pago de una obligación dos veces.

8. PETICIÓN

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que han sido expuestas en el presente escrito de contestación, respetuosamente solicito a su señoría:

En forma principal:

1. Que de **DECLAREN PROBADAS** las excepciones previas de **CADUCIDAD y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.

En forma subsidiaria:

1. Se **DECLAREN PROBADAS** las excepciones de mérito o de fondo denominadas: **ACTUACIÓN DILIGENTE Y CONFORME AL MARCO DE SUS COMPETENCIAS POR PARTE DE LA SFC RESPECTO DE OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.; CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD – INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTUACIÓN DE LA SFC Y EL DAÑO IRROGADO (HECHO DE UN TERCERO – CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA); INTERVENCIÓN COMO ESCENARIO IDÓNEO PARA LAS RECLAMACIONES DE ÍNDOLE ECONOMICO COMO LA QUE SE PRETENDE.**
2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.

En cualquier caso:

- i) Se **CONDENE EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO** a la parte demandante.

9. FRENTE AL ACÁPITE DE COMPETENCIA Y CUANTÍA DE LA DEMANDA.

Entendemos que la estimación razonada de la cuantía realizada por la parte actora en el mencionado acápite del escrito de demanda, tiene por objeto cumplir con el requisito de la demanda previsto en el numeral 6 del artículo 162 del CPACA.

No obstante lo anterior, si eventualmente el Despacho considera dicha estimación como un Juramento Estimatorio, en los términos del artículo 206 del Código General del Proceso del Proceso, se objeta la estimación de perjuicios que ha presentado bajo juramento la parte demandante, para cuyo efecto se solicita tener incorporadas como fundamento del presente acápite de objeción, todas las razones y manifestaciones en torno a la INEXISTENCIA DEL DAÑO Y SU ANTIJURIDICIDAD.

Esta objeción encuentra sustento en la ilegitimidad y la improcedencia de la demanda, lo cual encuentra suficiente y sólido respaldo en las argumentaciones y excepciones que se dejan expuestas en defensa de los derechos e intereses de la SFC, de manera que no podrán prosperar o estimarse las pretensiones de la demanda, máxime si se tiene presente que en este caso, como ya se ha señalado, no nos consta y tampoco está probado que la parte demandante haya sufrido daños y perjuicios causados por esta Entidad.

En consecuencia, esta objeción afecta la totalidad del monto estimado bajo juramento por la parte demandante. En cuanto se desestimen las pretensiones – tal como lo solicito – deberán decretarse y liquidarse, a favor de mi mandante y a cargo del demandante, las sumas correspondientes a costas, incluidas las Agencias en Derecho.

10. RESPECTO A LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR EL DEMANDANTE.

Verificado el escrito de demanda, esta Superintendencia considera necesario oponerse a la solicitud de determinadas pruebas realizada en el escrito de demanda por la parte actora, tales como:

10.1. Remisión de expedientes:

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En el acápite titulado “*REMISIÓN DE EXPEDIENTE*” del escrito de demanda, el demandante solicita que se “*(...) ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE COLOMBIA Y FINANCIERA, que allegue el expediente que se produjo con ocasión de las investigaciones que realizaron a la Empresa OPTIMAL LIBRANZAS S.A (...), con anterioridad a junio del año 2016 y los resultados de las visitas de los años 2014-2015-, 2016 y 2017, incluyendo:*

Los registros de todas las visitas realizadas por parte de la Superintendencia de Sociedades a la OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, con NIT N° 900.496.573-1, entre los años 2014-2015, 2016 y 2017.

1.2. Qué tipo de actuaciones se realizaron en dichas visitas.

1.3. Las denuncias administrativas en contra de la Empresa OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, con NIT N° 900.496.573-1, que hayan sido instauradas para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

1.4. Los resultados de las investigaciones que se hayan adoptado con ocasión de tales denuncias.

1.5. Los actos proferidos con ocasión de toda visita realizada por parte de las SUPERINTENDENCIAS respecto de la Empresa OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, con NIT N° 900.496.573-1.

1.6. Actas, decisiones o conceptos relacionados con las visitas que hubiere realizado las SUPERINTENDENCIAS en comento a la Empresa OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, con NIT N° 900.496.573-1”

En relación con dicha solicitud, es de mencionar que con la presente contestación se adjunta el Informe de Inspección de la visita realizada por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A. que contiene los antecedentes y conclusiones de la misma, así como copia de las quejas y/o solicitudes de investigación recibidas en esta Superintendencia respecto de la referida sociedad, con su respectiva respuesta, que corresponde a la decisión final adoptada frente a cada queja, dentro de las que se refiere el traslado a la Superintendencia de Sociedades, como entidad encargada de la vigilancia por lo que la prueba solicitada resulta, por sustracción de materia, innecesaria.

10.2. Informe juramentado.

En el numeral 1 del acápite “*INFORME JURAMENTADO*”, el demandante solicita “*(...) ordenar al representante legal de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, o quien haga sus veces, que rinda un informe juramentado en relación con las actuaciones administrativas que se surgieron con antelación a julio de 2016*”.

Al respecto, es importante reiterar que conforme lo establece el artículo 168 del Código General de Proceso “*El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles*”.

En el caso que nos ocupa, el informe sobre las actuaciones adelantadas por la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., fueron relatadas a lo largo del presente escrito, además con la contestación de aporta copia del informe de la visita de inspección. Por ende, el informe juramentado que se solicita no solo resulta inútil para el proceso, en la medida en la que se limitaría a reiterar el contenido del mencionado informe, además de generar una carga y un desgaste adicional para la administración pública.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por ello, ME OPONGO al decreto de dicho informe y pido al (a) señor (a) juez (a) rechazarlo, pues al ya existir unos documentos que contienen la misma información que se obtendría con su decreto y contar con un resumen detallado de la actuación y conclusiones, la prueba carecería de utilidad y se torna innecesaria para el proceso, pues en caso de decretarse, sería del todo superflua, reiterativa y redundante.

11. PRUEBAS.

Con el propósito de acreditar y respaldar los hechos y afirmaciones que se han expuesto a lo largo de la presente contestación, solicito que se decreten y valoren como pruebas, además de aquellas que oficiosamente disponga decretar y practicar el Despacho, las siguientes:

11.1. Documentales que se aportan.

Conforme al numeral 4 del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con la contestación de la demanda debe acompañarse todas las pruebas que la demandada pretenda hacer valer en el proceso, por lo que para el caso que nos incumbe se allegan:

1. Trámite No. 2013041076 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Alvaro Iván Rojas y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
2. Trámite No. 2013041086 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Mauricio Santiago Jiménez y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
3. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
4. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
5. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
6. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
7. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
8. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
9. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
10. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
11. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
12. Informe de Inspección No. 2013081463-009de de la visita practicada a COOINVERCOR.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

13. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
14. Trámite No. 2016112058 mediante el que se atendió la petición presentada por el Dr. Diego Vega en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Carlos Humberto Garzón y Diana Patricia Maldonado Rincon, en la que solicitó se promoviera la intervención y toma de posesión por captación de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
15. Copia del requerimiento y orden de inspección de la Fiscalía General de la Nación junto con las respectivas respuestas.
16. Trámite No. 2018019222 mediante el que se atendió la petición presentada por la señora Luisa Fernanda Daza Manrique.

Para que obren como pruebas en el proceso adjuntamos copia de la documentación en comento, **trasladándole la reserva sobre dichos documentos al Despacho Judicial, por cuanto al tratarse de una actuación administrativa, contiene información clasificada y/o reservada.**

11.2. Pruebas que se solicitan.

11.2.1. Interrogatorio de parte.

En los términos del artículo 184 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas concordantes, comedidamente solicito se fije hora y fecha, para **INTERROGAR** bajo la gravedad de juramento al demandante en este proceso **Luis Alfonso Diago Escobar**, lo cual haré de forma oral o escrita, en relación con los hechos materia del medio de control de Reparación Directa, persona que será citada a través de su apoderado judicial en los términos autorizados por el artículo 78 del CGP.

12. NOTIFICACIONES.

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez,

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

Revisó y aprobó:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación:2019175408-017-000

Fecha: 2021-01-29 10:03 Sec.día7278

Anexos: No

Trámite::132-DEMANDAS

Tipo doc::31-31 REMISION DE INFORMACION

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario::ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-017-000

Trámite : 132 DEMANDAS

Actividad : 31 31 REMISION DE INFORMACION

Anexos :

Referencia: ESCRITO DE EXCEPCIONES PREVIAS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Radicado: 11001-33-43-060-2020-00063-00
Demandante: LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR
Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTROS

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.030.627.605 de Bogotá, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No. 274.629 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial de la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**, según poder que obra en el expediente, estando dentro del término legal procedo a presentar **EXCEPCIONES PREVIAS**, conforme a lo estipulado en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020 concordante con los artículos 100 al 102 del C.G.P., en los siguientes términos:

1. EXCEPCIONES PREVIAS.

1.1. Caducidad.

El artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, define el medio de control de reparación directa así:



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los Agentes del Estado (...).”

De otro lado el artículo 169 *ejusdem* dispone lo siguiente:

“ARTICULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. *Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:*

1. Cuando hubiere operado la caducidad (...). (Negrilla fuera del original)

Adicionalmente el artículo 164 (ibídem) prevé los términos para intentar los diferentes medios de control. Así, el literal i), del numeral 2 del citado artículo, en lo que a la Reparación Directa se refiere, dispone que la demanda deberá ser presentada *“(...) dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”*

En virtud de lo anterior y una vez analizados los hechos, se puede extraer que la SFC dentro del marco de su competencia realizó dos visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.). De aceptarse en gracia de discusión que la SFC omitió el cumplimiento de sus funciones, el momento en que cesó la presunta omisión corresponde a la fecha en que culminó la actuación administrativa adelantada por esta Entidad respecto de la mencionada sociedad y se remitió a la Superintendencia de la Economía Solidaria y Superintendencia de Sociedades las circunstancias evidenciadas en las visitas., traslados que se surtieron el 27 de febrero de 2014, mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010, respectivamente,

Al respecto, tenemos que es desde esa fecha que debe iniciarse el conteo de los dos años establecidos por el legislador para que opere el fenómeno de la caducidad del medio de control, los cuales fenecieron el pasado 28 de febrero de 2016, momento para el cual, de acuerdo con la documentación remitida a la SFC, la solicitud de conciliación prejudicial, que tiene la facultad de interrumpir dicho término, no había sido presentada, pues la misma tan solo se presentó el 19 de diciembre de 2019, ante la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos de la ciudad de Bogotá, configurándose así la causal objetiva de CADUCIDAD del medio de control que se quiere ejercer respecto de la SFC.

Consideramos oportuno indicar que **para el caso particular se debe establecer la ocurrencia del fenómeno de la caducidad respecto de cada una de las entidades demandadas, de forma separada, pues las actuaciones adelantadas por la SFC y la SS son independientes y se desarrollaron con fundamento en facultades legales distintas.** Sobre el particular, y como se explicó con suficiencia en la contestación de la demanda, las visitas realizadas por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se adelantaron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora.

1.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la SFC

En el presente asunto el demandante aduce que la SFC fue omisiva en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto del funcionamiento de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., así como de las operaciones que realizaba dicha sociedad.

En ese sentido, como quiera que la redacción de los fundamentos de hecho y derecho del libelo demandatorio no son claros respecto de si la presunta omisión que se imputa a esta Entidad corresponde al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Decreto 2555 de 2010, Decreto 4334 de 2008 o en la Ley 1527 de 2012, abordaremos este punto desde cada uno de los supuestos normativos precitados.

1.2.1. En relación con el Decreto 2555 de 2010.

Debe llamarse preliminarmente la atención en el hecho que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no está, ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia, ya que las entidades y actividades respecto de las que se ejercen dichas funciones corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, en el numeral 1° del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Adicionalmente, debe indicarse que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia, para lo cual tienen que constituirse como lo establece el artículo 53 y siguientes del EOSF, en la forma y términos instruidos en la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica, en los cuales, entre otras cosas, se establece que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia.

1.2.2. En relación con los artículos 108, 325 y 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008.

Cabe señalar que, con el objetivo de evitar que personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y en cumplimiento de las atribuciones establecidas en los artículos 108, el literal a), numeral 4, del artículo 325 y el artículo 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008 así como en los numerales 1, 2, 6 y 22 del entonces artículo 11.2.1.4.35 hoy modificado por el artículo 21 del Decreto 2399 de 2019 y en el artículo 11.2.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010, la SFC entre el 9 y 17 de julio y el 2 y 6 de diciembre de 2013, adelantó visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., las cuales se originaron con ocasión de dos correos electrónicos recibido el 6 de mayo de 2013, a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “pagarés-libranza” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide.

Por lo anterior y una vez analizada la información recabada en la visita se llegó a la conclusión que en las actividades desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., relativas a la compra y venta al descuento de “pagarés-libranzas” no se configuraban los hechos objetivos o notorios, ni los supuestos de captación masiva de recursos del público.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1.2.3. En relación con la Ley 1527 de 2012.

Es oportuno precisar que si bien la Ley 1527 de 2012 le otorgó a la SFC las funciones de inspección, vigilancia y control sobre algunas de las entidades operadoras de libranzas, vale la pena precisar que las únicas cooperativas vigiladas por esta Entidad son las cooperativas financieras, las cuales son autorizadas para captar recursos del público.

Ahora bien, debe señalarse que las cooperativas originadoras de los “pagarés-libranzas” en este caso fueron: COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, las cuales están bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

De igual manera la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en su modelo de negocio manifestó que para la compraventa de los “pagarés-libranza” tenía contratos suscritos con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.

De lo expuesto podemos concluir que la SFC no está legitimada en la causa por pasiva para ser demandada por omisión en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puesto que:

- No tenía la obligación de ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conforme a lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes.
- Habiendo ejercido las funciones que le competían para evitar que personas no autorizadas ejercieran actividades exclusivas de las entidades vigiladas (literal d) del numeral 1 del artículo 325 del EOSF), no encontró que se configuraran los hechos objetivos o notorios ni los supuestos de captación masiva de recursos del público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.
- Las cooperativas con las que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., adquiría las libranzas no se encontraban ni se encuentran sometidas al control y vigilancia de la SFC, debido a que no tienen la naturaleza de cooperativas financieras.

Así las cosas, queda clara la ausencia de conductas omisivas de la SFC en relación con los posibles perjuicios ocasionados a los aquí demandante, pues esta Entidad ejerció en su momento las actuaciones que le correspondían, sin encontrar en ellas los supuestos de captación en que luego incurrió la sociedad involucrada en el asunto.

En cuanto a las excepciones aquí propuestas, estimamos oportuno informar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A – Magistrado Ponente: Juan Carlos Garzón Martínez, en auto del 03 de diciembre de 2020 emitido en el proceso con radicado No. 2018-0616, de Convento Santo Domingo contra la SFC y SS, relacionado con la comercializadora de libranzas Estraval, declaró expresamente probadas las excepciones previas de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la SFC.

En cuanto a la caducidad indicó que el término debe ser contado desde el momento en que la Superfinanciera efectuó el traslado por competencia a la Superintendencia de Sociedades de los informes de visita. Frente a la falta de legitimación, consideró que este ente de control no participó en los hechos que dieron lugar a la demanda y que no le correspondía la obligación de vigilancia de Estraval, como en el presente caso tampoco le correspondía la vigilancia de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., por lo que las omisiones que se imputaban en la demanda, no eran atribuibles a la SFC.

Similar determinación adoptó el magistrado Garzón Martínez en auto del 3 de diciembre de 2020, proferido en el proceso 2019-00078 de Federico Aristizábal Correa y Otros contra la SFC y SS, pues al resolver la excepción de caducidad propuesta por esta Entidad, indicó:

“(…) la actuación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia culminó el 27 de marzo de 2014, fecha en la que envió la información a la Superintendencia de Sociedades, relacionada con la sociedad Estraval S.A, la cual no estaba bajo su vigilancia.

Por lo tanto, computando el término de caducidad únicamente frente a la Superintendencia Financiera, desde su última actuación esto es, 27 de marzo de 2014, la parte actora contaba en principio hasta el 28 de marzo de 2016, como fecha límite, para presentar acción contenciosa en ejercicio del medio de control de reparación directa.”

2. PRUEBAS.

Con el propósito de acreditar las afirmaciones que se han expuesto a lo largo del presente escrito de excepciones previas, acudimos a las siguientes pruebas, las cuales fueron aportadas junto con el escrito de contestación de demanda y por cuestiones prácticas no remitiremos nuevamente con el presente escrito:

1. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
2. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
3. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
4. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
5. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
6. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
7. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
8. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
9. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
10. Informe de Inspección No. 2013081463-009 de de la visita practicada a COOINVERCOR.
11. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
12. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2018-00616.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

13. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2019-00078.

Reiteramos al Despacho el traslado de la reserva sobre dichos documentos, por cuanto al tratarse de una actuación administrativa, contiene información clasificada y/o reservada.

3. PETICIÓN.

En atención a lo manifestado, respetuosamente solicito al Despacho:

3.1. Que se DECLAREN PROBADAS las excepciones previas de CADUCIDAD Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

3.2. Como consecuencia de lo anterior, se NIEGUEN todas y cada una de las pretensiones de la demanda y se declare la terminación del proceso.

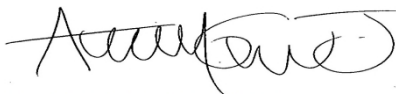
3.3. Se CONDENE en costas y agencias en derecho a la parte demandante

4. NOTIFICACIONES.

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez.

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

Revisó y aprobó:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2019175408-016-000

Fecha: 2021-01-29 09:38 Sec.día 7215

Anexos: Sí

Trámite: 132-DEMANDAS

Tipo doc: 324-324 CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario: ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-016-000
Trámite : 132 DEMANDAS
Actividad : 324 324 CONTESTACIÓN DE DEMANDA
Anexos : E1

Referencia: **CONTESTACIÓN DEMANDA**
Medio de control: **REPARACIÓN DIRECTA**
Radicado: **11001-33-43-060-2020-00063-00**
Demandante: **LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR**
Demandado: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTROS**

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.030.627.605 de Bogotá, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No. 274.629 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial de la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (en adelante SFC)**, según poder que obra en el expediente, estando dentro del término legal procedo a dar **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA** de la referencia en los siguientes términos:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

En los términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comparece, como parte demandada la Superintendencia Financiera de Colombia, Entidad que forma parte del sector central de la administración pública del orden nacional, con domicilio en Bogotá, representada legalmente por el señor Superintendente Financiero Jorge Castaño Gutiérrez.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En su nombre y representación interviene la suscrita apoderada, en virtud del poder que me fuere conferido por el Coordinador del Grupo Contencioso Dos de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, a quien le fue delegada la función de otorgar poderes a los funcionarios para que ejerzan la representación judicial o extrajudicial de la SFC, al tenor del numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 0229 del 14 de febrero de 2017.

2. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Conforme a lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, “*el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación*”.

Ahora bien, mediante auto del 23 de julio de 2020 ese Despacho resolvió admitir la demanda, providencia que fue notificada a esta Superintendencia mediante mensaje de datos remitido por el apoderado de la parte demandante el día 4 de septiembre del mismo año. La SFC presentó de manera oportuna recurso reposición, el cual fue resuelto por auto del 3 de diciembre de 2020, notificado por estado del día 4 de la misma calenda, en el sentido de no reponer.

El término concedido en el auto admisorio, esto es, los treinta (30) días para contestar la demanda (artículo 172 del C.P.A.C.A.), comenzaron a correr una vez vencieron los veinticinco (25) a los que se refiere el inciso quinto del artículo 199 del C.P.A.C.A., es decir a partir del 3 de febrero 2021, de manera que el plazo para contestar la demanda fenece el día 17 de marzo del mismo año, esto teniendo en cuenta el periodo de vacancia judicial

De lo expuesto se advierte entonces, que la Superintendencia Financiera está dentro del término previsto en la ley para contestar la demanda interpuesta por el señor Luis Alfonso Diago Escobar.

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Con fundamento en las razones que se acreditarán a lo largo de este escrito y en general en el devenir de este proceso judicial, **ME OPONGO A TODAS LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA** por las siguientes razones a saber:

- Carecer de fundamento respecto de mi prohijada, toda vez que lo expuesto por la parte demandante corresponde única y exclusivamente a la narración de un **incumplimiento contractual**, relación jurídica de la cual la SFC no fue parte;
- Por tratarse de una demanda cuyos fundamentos fácticos imposibilitan, por completo, hacerle una imputación de responsabilidad a la SFC;
- Por no existir nexo de causalidad entre los fundamentos fácticos expuestos, los perjuicios cuya reparación deprecia la parte demandante y las funciones de esta Entidad;
- Por tratarse de un perjuicio que, de encontrar algún asidero, en todo caso evidenciaría que la responsabilidad no podría predicarse respecto de la **SFC. Como se demostrará, en el presente caso se configura el hecho de un tercero y la culpa de quien se reputa víctima;**
- Por tratarse de un asunto en el que se encuentran debidamente configuradas diversas causales que eximen de responsabilidad respecto de la **Superintendencia Financiera de Colombia.**



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En consecuencia, no habrá lugar a que la autoridad judicial acoja las pretensiones declarativas y de condena formuladas por el demandante.

4. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

- A esta Superintendencia **NO LE CONTAN** los **HECHOS 1) al 3)** en los que se indica que el demandante fue contactado por la fuerza comercial de la empresa **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.)**, que le explicaron en qué consistía el sistema de inversión de libranzas y le ofrecieron por participar en el negocio una rentabilidad equivalente al interés bancario corriente.

Al respecto vale la pena señalar que las anteriores afirmaciones se refieren a las condiciones ofrecidas por la referida sociedad para la ejecución del negocio jurídico celebrado con el demandante, relación en la que esta Superintendencia no tuvo ningún tipo de participación o injerencia.

- En los **HECHOS 4) y 5)** se afirma que el accionante indagó ante esta Superintendencia y la Superintendencia de Sociedades (en adelante SS) sobre la legalidad de las operaciones desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., lo que le permitió establecer que las demandadas conocían de las operaciones, que habían realizado visitas, que dicha sociedad no era objeto de ninguna medida y que se trataba de una actividad no proscrita por la ley.

En lo que respecta a la SFC, debemos señalar que al revisar en el Sistema de Gestión Documental – SOLIP, que contiene la totalidad de trámites adelantados por esta Entidad, **no se encontró que el aquí accionante hubiera presentado ante esta Superintendencia petición alguna mediante la que indagara sobre el negocio ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., razón por la que NO ES CIERTO lo afirmado por el actor en el dicho.**

Llama la atención que con el libelo introductorio no se haya aportado prueba alguna que acredite la presentación de la petición o las supuestas respuestas dadas por esta Superintendencia.

Ahora bien, **ES CIERTO**, que esta Entidad adelantó visita de inspección a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S y que una vez analizada la información recabada en la misma se llegó a la conclusión que las actividades desarrolladas por la referida sociedad, relativas a la compra y venta de “pagarés-libranzas” para la fecha, no configuraban los supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y en el Decreto 4334 de 2008. Respecto de las actuaciones relacionadas con la visita, nos referiremos con detalle en el punto 7.1.1. del presente escrito.

En cuanto a las demás manifestaciones, es decir las relacionadas con la SS, debemos indicar que no son de nuestro resorte, por lo tanto, **NO NOS CONSTAN** y deberán ser probadas por el demandante a lo largo del proceso.

- En los **HECHOS 6) al 9) y 11)** se indica que el demandante con ocasión de las presuntas indagaciones elevadas ante la SFC y SS suscribió con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. un contrato de compraventa para la adquisición de libranzas, que con ocasión del negocio realizó unos pagos a la referida sociedad y recibió una suma de dinero por concepto de amortización y que ante la cesación de dicho pago le quedaron adeudando dinero. Al respecto, debemos señalar que dichas circunstancias **NO NOS CONSTAN** pues la SFC no fue parte de la relación negocial celebrada entre la citada sociedad y el demandante.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Frente a los **HECHOS 10) y 12)**, en los que se señala que a mediados del año 2016 OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. cesó el pago de las amortizaciones, justificando dicha circunstancia en razones de orden operativo de cartera, además de asuntos relacionados con las pagadurías y menesteres internos de las cooperativas originadoras de los pagarés-libranza las cuales adujeron siniestros de cartera, debemos indicar que el contenido de los dichos corresponde a apreciaciones o señalamientos del demandante que deberán ser probados en el proceso.

En este orden de ideas **NO NOS CONSTA** lo manifestado en los mismos, ya que como se indicó anteriormente mi prohijada no hizo parte del negocio jurídico al que se ha hecho referencia. De otro, es pertinente que se **tenga por sentado y a manera de confesión del accionante, que desde esa fecha se produjo el presunto incumplimiento contractual que le originó una afectación, esto para el conteo del término de caducidad respectivo.**

- Respecto al **HECHO 13) ES CIERTO** que la SS mediante Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 adoptó una medida de intervención administrativa respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y ordenó a dicha sociedad la suspensión inmediata de las operaciones de captación masiva. Ahora bien, teniendo en cuenta que el referido acto administrativo no fue expedido por la Entidad que representó y que es un documento público, nos atenemos al tenor literal del mismo.
- En cuanto al **HECHO 14)** es de indicar que no corresponde a un antecedente fáctico sino a una consideración subjetiva del accionante, quien estima que con la Resolución de la SS se modificó el concepto que había dado relacionado con que la actividad desarrollada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. era ajustada a derecho. Por lo tanto, al estar relacionada la afirmación con el actuar de una entidad distinta a la SFC, debemos señalar que la misma **NO NOS CONSTA**, además son apreciaciones subjetivas del demandante, que deberán ser probadas por él.
- Frente a lo señalado en los **HECHOS 15) y 16)**, relativos a que el señor Diago Escobar se hizo parte en el proceso de liquidación de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., que se entiende corresponde a la medida de intervención mediante toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio y que en el proyecto de graduación y calificación del crédito fue reconocida su acreencia, es de indica que tales afirmaciones **NO NOS CONSTAN** pues la SFC no hizo parte de dicho proceso, por lo tanto, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del presente medio de control.

Sin embargo, lo manifestado en los dichos es susceptible de ser tenido en cuenta como confesión de parte, en ese orden de ideas deberá ser valorado de tal manera por el Despacho en el momento procesal oportuno.

- Respecto a lo señalado en los **HECHOS 17) y 18)**, en los que indican que la SFC y la SS conocieron a plenitud el modelo de negocio desarrollado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y no obstante ello, no desplegaron acciones para evitar que continuaran en operación, debemos indicar que son meras apreciaciones subjetivas que deben ser probadas dentro del proceso, pues dan a entender una realidad totalmente distorsionada y amañada del asunto que **NO ES CIERTA**.

De otro lado, como se dijo anteriormente la SFC realizó una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. Culminada la visita se concluyó que no se configuraban los supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008. Es de precisar que la citada actuación será explicada más adelante.

Frente a las manifestaciones relacionadas con la SS, debemos señalar que se refieren a una autoridad distinta a la Superfinanciera, razón por la que **NO NOS CONSTAN** y deberán ser probadas por el demandante.

- En cuanto al **HECHO 19) NO NOS CONSTA** que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. haya defraudado a aproximadamente trescientas trece (313) personas bajo su modalidad de negocio, por lo tanto, dicha afirmación deberá ser probada dentro de la presente acción, en consecuencia, nos atenemos a lo que se pruebe.
- Respecto al **HECHO 20)**, en el que se hace una transcripción de las actividades inscritas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, es de señalar que las mismas corresponden a la autonomía de la voluntad de los socios, quienes determinaron que actividades iban a registrar. **Se observa que ninguna corresponde a una actividad exclusiva de las entidades vigiladas por esta Superintendencia, razón por la cual es dable afirmar, sin lugar a duda que dicha sociedad no se encontraba sometida a la vigilancia e inspección de esta Entidad.**
- En relación con los **HECHOS 21) y 22)**, en los que se indica que el demandante se involucró en el proceso comercial ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. debido a la información brindada por la SFC y la SS, **NO ES CIERTO RESPECTO DE LA SFC Y NO NOS CONSTA FRENTE A LA SS.** Como se puso de presente al contestar el hecho 4), **NO ES CIERTO** que el accionante haya realizado algún tipo de indagación ante esta Superintendencia.
- En lo atinente al **HECHO 23)** en el que se hace mención a las actividades de captación, manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público y así de los supuestos de captación contenidos en el decreto 3227 de 1982, es necesario señalar previamente que dicha norma fue modificada por el decreto 1981 de 1988 y hoy están contenidas en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015. Precisado lo anterior, debe indicarse que no se trata de un hecho, sino de la cita textual de una norma, por ende, nos atenemos al tenor literal de la misma.
- Señala el **HECHO 24)**, que para el momento en que se practicó la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., dicha empresa había celebrado contratos para la venta de libranzas con más de 313 personas.

Sobre el particular, dicho hecho **NO NOS CONSTA**, pero es necesario reiterar que la SFC realizó **una visita de inspección a dicha sociedad** que se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, y una vez culminada no se evidenciaron hechos que permitieran inferir la captación masiva y habitual de recursos del público. En ese orden de ideas nos atenemos al tenor literal del citado informe.

- En relación con los **HECHOS 25) al 27)** que se refieren al promedio de operaciones realizadas por cada persona con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., indican que las ofertas para la celebración de contratos de venta de libranzas se hacían de manera abierta y finalmente que para la fecha de celebración del contrato suscrito por el demandante con dicha sociedad, la misma había celebrado más de 20 contratos durante 3 meses, es menester señalar lo siguiente:



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ya que lo pretendido por el demandante es referirse a los supuestos de captación, debemos mencionar que tal y cómo se ha señalado a lo largo de este escrito, para las fechas en que la SFC realizó una visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., de acuerdo a la documentación estudiada y la normatividad para la fecha vigente, no se encontró evidencia de operaciones de captación ilegal de dinero, **no obstante, la SFC mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014 remitió el informe de visita a la Superintendencia de la Economía Solidaria (en adelante SES) y Superintendencia de Sociedades**. No obstante, tales la afirmación son apreciaciones subjetivas del actor, la cuales deberán ser probadas.

Por otro lado, respecto a las demás consideraciones realizadas por el accionante, relacionadas con la operación de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., me atengo a lo establecido en el informe de la visita adelantada a dicha sociedad, pues en aquel se consagran las evidencias recaudadas por esta autoridad y para el efecto tal documento se aporta como prueba.

- En relación con el **HECHO 28)** en el que se transcriben apartes del numeral 10.1 del acápite de antecedentes de la Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 proferida por la SS, debe indicarse que a esta Superintendencia se atiene al contenido literal del acto administrativo, proferido por una entidad distinta a la SFC.
- Frente a los **HECHOS 29) y 30)**, en los que se hace referencia al contenido del artículo 2 del Decreto 4334 de 2008, resulta necesario distinguir que tal disposición corresponde a las atribuciones de intervención otorgadas a la SS respecto de las personas naturales o jurídicas que desarrollan las actividades descritas en los literales a) y b) de dicho artículo. Dicha norma difiere de las competencias y facultades conferidas a la SFC en los artículos 108 y 326 numeral 4) literal a) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), las cuales se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política. En virtud de aquellas esta Superintendencia puede adoptar medidas cautelares frente a las personas naturales o jurídicas de derecho privado que, sin contar con autorización, desarrollen actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la SFC, así como de cualquier otra que pueda estar incurriendo en captación, manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público.

La facultad mencionada, no es otra que la materialización de lo que se puede denominar como función administrativa de supervisión y control en desarrollo de la cual a esta Superintendencia le corresponde inspeccionar, vigilar y controlar a las entidades que cuentan con autorización para constituirse, funcionar y que a la vez son habilitadas legalmente para manejar recursos captados al público. Lo anterior de conformidad con las normas legales pertinentes, como son, entre otros, los artículos 325 y ss. del EOSF que definen la naturaleza, los objetivos, las funciones y las facultades de este Organismo, así como también la obligación de prevenir y controlar que las personas no vigiladas realicen actividades como la captación ilegal de dinero, para lo cual aplica lo establecido en el artículo 108, literal d) numeral 1, del artículo 325, literal a) numeral 4 y literal b) numeral 5 del artículo 326 del EOSF y observa los supuestos y hechos objetivos y notorios definidos en los Decreto 1068 de 2015 y Decreto 4334 de 2008.

No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008 es competencia privativa de la SS adelantar la intervención y toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las entidades que no están sometidas a la vigilancia de la SFC y por ende no cuentan con la autorización para captar recursos del público.

- En cuanto a lo argüido en los **HECHOS 31) al 33)**, en los que se afirma que la SS y la SFC a pesar de advertir el tipo de negocios que ejecutaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no ejercieron ninguna medida que buscara detener la comercialización de libranzas, a pesar de las visitas celebradas



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

durante los años 2014, 2015 y 2016, y que solamente hasta el 15 de noviembre de 2017 fueron adoptadas.

Debemos anotar que tal aseveración es una apreciación subjetiva del demandante y debe ser probada al interior del proceso, pues da a entender una realidad distorsionada y amañada del asunto, que por lo menos en lo que atañe a la SFC, **NO ES CIERTA**.

Con el fin de desvirtuar las afirmaciones relacionadas con esta Superintendencia, se procede a hacer un breve resumen de las actuaciones desplegadas por mi representada:

Mediante Oficio No. 2013058932-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-005 del 29 de noviembre de 2013.

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente. Por lo anterior, la SFC consideró pertinente realizar visita de inspección tanto a la sociedad, como a algunas de las Cooperativas.

Teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

De otro lado, al evidenciar que las Cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, se estimó que dicho tema era del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la cual se le trasladó una copia del informe de inspección para lo de su competencia.

- En lo atinente al **HECHO 34)** que se refiere a las supuestas investigaciones realizadas por el demandante mediante peticiones administrativas dirigidas a la SFC y a la SS, es de mencionar que **NO ES CIERTO en lo que atañe a la SFC**, pues tal y como ya se indicó, una vez verificado el Sistema de Gestión Documental - SOLIP que contiene los trámites adelantados por esta autoridad, **no se encontró petición alguna formulada por el señor Lubinos Badillo**. Además, se reitera que con la demanda no se allegó prueba alguna que acredite lo que afirma el accionante.
- Frente a los **HECHOS 35) al 37)**, atinentes a que la SFC y SS con ocasión de las respuestas de las supuestas peticiones administrativas interpuestas por el demandante, avalaron y tuvieron pleno conocimiento de las actividades delictivas que desarrollaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., al igual



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

que del conocimiento de la suscripción de más de 20 contratos para la venta de libranzas en un período de tres meses, debemos mencionar que respecto de la SFC **NO ES CIERTO** lo acotado, pues como se ha expuesto, no se recibieron solicitudes del aquí demandante relacionadas el negocio celebrado con la referida sociedad. De igual manera, se hace hincapié en que de la visita realizada por la SFC se concluyó para la fecha, que las actividades realizadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., NO configuraban actividades de captación o recaudo no autorizado según el Decreto 4334 de 2008 y el Decreto 1981 de 1988, tal y como consta en el informe de inspección que se aporta.

Con fundamento en lo anterior, se desprende con total claridad que lo afirmado por el demandante en estos hechos, como se dijo atrás, no son más que simples juicios de valor por completo ajenos a la realidad de las actuaciones adelantadas por la SFC, lo que puede ser constatado con las pruebas documentales que se aportan con el presente escrito.

De otro lado, **NO NOS CONSTAN** las afirmaciones relacionadas con la SS, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

5. FUNDAMENTOS JURÍDICO DE LA DEFENSA

5.1. Estructura de la responsabilidad extracontractual de la administración pública.

En la Constitución Política, específicamente en el artículo 90, se estableció que:

“Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir con éste”.

En virtud de dicha norma, la estructura de la responsabilidad sufrió un proceso de “constitucionalización”, erigiéndose en garantía de los derechos e intereses de los administrados, así como de su patrimonio, en el entendido de que el Estado será obligado a reparar los **daños antijurídicos** que le sean **imputables**, ya sea por la acción o la omisión de sus agentes.

En tal sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha entendido que a la luz de lo prescrito por el referido artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual de la Administración¹, tiene como fundamento² la determinación de una serie de elementos que deben concurrir para la declaración de la responsabilidad estatal, siendo estos: la determinación de un **daño antijurídico** causado a un administrado, así como la **imputación** del mismo a la administración pública, tanto por la acción, como por la omisión de un deber y, por último, el **fundamento del deber de reparar**, que debe dar cuenta de las razones de derecho por la que los perjuicios deben ser indemnizados.

En cuanto a la imputación debe destacarse que se trata de juicio que demanda un doble esquema de análisis en el cual debe efectuarse un juicio de **imputación fáctica**, por un lado, y uno de **imputación**

¹ La responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son el resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado 52001-23-31-000-2001-00960-01 (33976). Actor: Cleofas Tumbajoy Alarcón; Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y otros. Medio de Control: Reparación Directa. Sentencia del 16 de febrero de 2017.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

jurídica, por el otro, siendo la imputación desde un punto de vista fáctico, un ejercicio de atribución material o eminentemente causal del origen del daño o los elementos naturales que han intervenido en su producción. Entretanto, la imputación jurídica hace referencia a un escenario en el que el juez debe determinar si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica o de tipo normativo de reparar el daño.

Ahora, desde una perspectiva clásica la responsabilidad también ha sido entendida bajo los siguientes derroteros, los cuales entraremos a desarrollar:

5.1.1. El daño antijurídico

La Corte Constitucional, con ocasión a una demanda presentada contra una parte del artículo 50 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-333 de 1996, tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la cláusula general de responsabilidad estatal, y en lo que al daño antijurídico se refiere precisó que no existe una definición expresa del mismo, debiéndose entonces recurrir a los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en los que se constata que la noción fue adoptada del texto constitucional español.

Señaló la Corte en dicha oportunidad, que la doctrina española ha entendido el daño antijurídico como *“el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”*, concepto precisado igualmente por el Consejo de Estado en sentencia de 13 de julio de 1993³, como *“la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en obligación de soportar”*.

Así las cosas, es claro que el concepto de daño antijurídico obedece a un mecanismo de protección por parte del Estado que se origina como respuesta a los perjuicios que pueden ser ocasionados por las diversas actividades ejercidas por el poder público, lo cual se encuentra armonizado con los principios constitucionales de solidaridad e igualdad, pues el fin último de este instituto jurídico es lograr reparar e indemnizar a una persona que ha sufrido una merma que no está en la obligación de soportar conforme al ordenamiento jurídico.

5.1.2. Imputación (por acción u omisión de las autoridades públicas)

Para poder endilgar responsabilidad en cabeza del Estado es necesario determinar cuál fue la fuente que originó el daño, es decir, es necesario establecer la ocurrencia de hechos, operaciones administrativas, actos, omisiones, lo que a su vez permite establecer quién es el responsable y bajo qué régimen y título se harán las eventuales declaraciones y/o condenas.

Ahora bien, dadas las especificidades de este caso, teniendo en cuenta el título con fundamento en el cual la parte actora pretende imputar responsabilidad a mí representada (“omisión”), es menester precisar que la *omisión administrativa*, de acuerdo con el tratadista Libardo Rodríguez está definida como: *“las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos respecto de ella. Es decir, consisten en que la administración se abstiene de actuar cuando debería hacerlo.”*⁴, lo que nos permite inferir que en el presente asunto estamos ante un régimen de responsabilidad subjetiva bajo el título de falla en el servicio, lo cual como se demostrará a lo largo de este escrito, no se configura en este caso, dado que la SFC actuó y lo hizo de manera diligente y oportuna, de acuerdo con sus funciones y atribuciones legales.

³ Corte Constitucional. Sentencia C- 333 del 1° de agosto de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

⁴ RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo. Editorial Temis. Bogotá 2000. Págs. 195 a 198.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por esa razón, **hechos como los que aquí se debaten, se insiste, deberán ser analizados a la luz de los requisitos establecidos para el régimen de responsabilidad subjetiva que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración, es decir, que el título de imputación corresponde al de la falla en el servicio y conforme la jurisprudencia lo ha previsto el examen de dicha responsabilidad ha de realizarse con base en la disposición legal o reglamentaria que consagra el deber que se alega como omitido, o incumplido,** con el objeto de establecer si en efecto, la Administración incurrió en omisión o dilación en el cumplimiento del deber, y si éste fue determinante en la producción del daño.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la actividad de la Superintendencia Financiera tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero y del mercado de valores por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, como quiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado⁵. Frente a este tópico ha señalado:

“De toda esa actividad se deduce, sin mayores elucubraciones, que la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-, no omitió, descuidó o retardó sus deberes de inspección, control y vigilancia, respecto de La Fortaleza S.A., menos aún durante su intervención hasta la toma de posesión de bienes, haberes y negocios con fines de liquidación, pues son claras las gestiones encaminadas a que la entidad vigilada pudiera continuar con el desarrollo de su objeto social, pese a los inconvenientes y problemas de solvencia y cumplimiento de todo tipo de normas de orden financiero.

Ahora, en torno a que con su gestión pudo haberse evitado la toma de posesión y consecuente liquidación, cabe precisar que la función de supervisión de la Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los accionistas y/o depositantes o ahorradores contra cualquier pérdida, por el contrario, tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, comoquiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado.”

Así lo ha resaltado esta Subsección al señalar:

*“Sobre este punto, vale la pena resaltar que **la obligación a cargo de la Superintendencia no es de resultado**, pues según la carga obligacional contenida en el EOSF, la cual se expuso en precedencia, **sólo está obligada a revisar la actividad de los establecimientos financieros y a vigilar y controlar dicha actividad, pero no a cogestionar o evitar los riesgos propios del sistema financiero.**”⁶* (Negritillas fuera de texto).

5.1.3. Nexo de causalidad

La relación de causalidad, en términos generales, se puede entender como el vínculo entre un antecedente y una consecuencia, y se contrae al estudio de los diferentes títulos de imputación que permiten establecer si la responsabilidad es o no atribuible a la Administración.

Este nexo de causalidad se puede romper cuando opera una causa extraña, esto sucede cuando el daño no es imputable a la autoridad administrativa. Como causas extrañas se conocen el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. 13 de abril de 2016. Radicado 1999-00015 (35354). Velásquez Rico, Marta Nubia.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 25000 23 26 000 2000 02312 01 (29944); M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa ha precisado:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta proviene del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla en el servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandando porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien fue por su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)” (Se resalta)

A tenor de lo anteriormente señalado, es claro que la culpa exclusiva de la víctima es eximente de responsabilidad estatal cuando además de demostrada la causalidad material, se demuestra que la víctima participo y fue la causa eficiente en la producción del daño, actuar que puede catalogarse de culposo al desatender las reglas u obligaciones de prudencia, diligencia y estudio de los negocios que decide ejecutar.

Por otro lado, en lo que al hecho del tercero respecta, se tiene que el mismo exonera de responsabilidad al Estado cuando se demuestra que ese tercero es “*completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal*”⁸.

6. ANALISIS PROBATORIO DEL CASO CONCRETO

Conforme lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Este principio procesal es conocido como ‘*onus probandi, incumbit actori*’. A partir del estudio de dicho principio, es dable afirmar que tanto demandante como demandada tienen el deber de probar los hechos en que sustentan las pretensiones y excepciones propuestas, y en caso tal que dicha situación no se verifique por parte del Juez, la consecuencia jurídica es la negación de las pretensiones elevadas, como quiera que ante la falta de la prueba no puede tenerse por cierto el hecho. Sin embargo, no está de más advertir que una vez son arrimadas las pruebas a una controversia judicial, las mismas hacen parte del expediente y no de las partes, y en ese sentido habrán de ser analizadas en su totalidad siempre y cuando las mismas reúnan los requisitos formales que la ley exige para poder tenerlas como tal.

Bajo ese escenario, cabe indicar en relación con el asunto que se discute, que la SFC realizó las visitas de inspección a la que se ha hecho referencia a lo largo de esta contestación, atendiendo las facultades contenidas en el literal d) numeral 1 del artículo 325 y literal a) del numeral 4 del artículo 326 del EOSF, los numerales 1, 2 y 22 del artículo 11.2.1.4.35 del Decreto 2555 de 2010 y el artículo

⁷ Consejo de Estado. 25 de Julio de 2002. Radicado 13744. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. 28 de enero de 2015. Radicado 32912. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

108 del Decreto 663 de 1993 o EOSF, modificado por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003, en función de los cuales este ente de control revisó el modelo de negocios de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para establecer si recibía dinero del público, cuál era la forma en que lo hacía y determinar si en desarrollo de tal actividad se evidenciaba la existencia de hechos objetivos o notorios de captación en los términos previstos en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con los supuestos de captación de recursos del público consagrados en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.

A tenor de lo anterior, se determinó que la sociedad visitada realizaba compra y posterior venta al descuento de pagarés libranzas en virtud de la suscripción de contratos de compraventa de estos títulos valores, pero del análisis y estudio de la información recabada en la visita desarrollada, se concluyó que no se configuraban los hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva de recursos del público, por lo que las afirmaciones contenidas en la presente demanda, que aducen una supuesta conducta omisiva por parte de mi representada, no se corresponden con los antecedentes y conclusiones consignadas en el Informe de Inspección, por lo que los dichos del demandante terminan siendo solo conjeturas. En efecto, el material probatorio que anexa la SFC a esta intervención, acredita que contrario a lo señalado por el accionante, esta Entidad actuó de manera diligente y dentro del marco de sus competencias frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, estos elementos junto con el escaso material probatorio aportado por la parte actora, nos permitirá probar que no existió omisión alguna por parte de la SFC en el ejercicio de sus funciones y por tanto el presunto daño sufrido no tiene la connotación de antijurídico. No obstante, si el Despacho llegara a considerar que el daño existió, el mismo material probatorio nos permitirá acreditar que aquél, no puede ser imputable jurídicamente a la actuación de la Administración y por ende ser resarcible, ya que el mismo solo es imputable a la parte demandante y/o a terceros por completo ajenos a la administración pública.

Atendiendo las previsiones señaladas, consideramos del caso hacer las siguientes reflexiones:

6.1. Ausencia de daño antijurídico.

Como quiera que la presente acción tiene por objeto la reparación del daño ocasionado como resultado de las supuestas “omisiones” en ejercicio de las funciones de la SFC, es carga de la parte reclamante acreditar la existencia del daño antijurídico cuyo resarcimiento pretende y la antijuridicidad del mismo, según las previsiones del artículo 90 de la Carta Política.

En ese sentido, el demandante pretende que el presunto perjuicio que alega y que identifica como la pérdida de los dineros que aduce haber entregado a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. sea resarcido por el Estado, sin embargo, no sustenta sus afirmaciones con material probatorio idóneo que permita identificar en qué consistió la presunta omisión en que habría incurrido esta Superintendencia.

Es claro entonces que como quiera que en la demanda se reclama una indemnización derivada de la pérdida de los dineros que según se afirma fueron invertidos en OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ante la deficiencia de los medios de prueba aportados, no es posible predicar la existencia cierta y actual de la pérdida a que se hace referencia. Debe recordarse que, conforme a lo afirmado por el accionante, el reclamo que se pretende ya fue objeto de estudio en el proceso de intervención que adelanta la SS respecto de la referida sociedad. Por lo tanto, no es procedente tener por probadas las pretensiones de la demanda ante el carácter hipotético del presunto daño, ya que el demandante pretende la reparación de los perjuicios presuntamente irrogados en el escenario de la intervención. Así las cosas, consideramos se impone la necesidad de proferir un fallo que desestime la existencia misma del daño,



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

así como el carácter antijurídico del mismo y que en consecuencia niegue las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, en el evento en el que el Despacho considerara que efectivamente existe un daño, ese menoscabo no tendría las características de un daño antijurídico, pues se habría originado en la decisión libre, deliberada y autónoma de las partes involucradas de realizar un negocio jurídico, en cuya materialización no tuvo injerencia alguna la SFC, pues esta Entidad no tuvo relación de ninguna naturaleza con el acto de inversión y entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Para ilustrar esta noción resulta oportuno traer a colación los criterios que ha señalado el Consejo de Estado en cuanto a la antijuridicidad del daño como fuente del deber de reparar:

*“A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”. lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como **“la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho” o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación.***

Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:

La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (artículos 228 y 20 de la Constitución) sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado Social de Derecho (artículos 10 y 13 de la Carta).

Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que “superan la normal tolerancia” o que impiden el goce normal y adecuado del derecho. Específicamente en cuanto a la razonabilidad de la limitación del derecho a la propiedad y al límite de la obligación del titular a soportar dicha restricción en el ejercicio de su derecho, para efectos de establecer el deber de los particulares de reparar los daños, la doctrina Argentina ha dicho lo siguiente: (...)

*La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resulta antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las **personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos.** No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica. en tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución). **En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la***



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

actuación u omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares.⁹ (Negrilla fuera del texto)

En ese sentido, como bien lo anota la jurisprudencia citada, no todo daño entendido como menoscabo a un interés o un derecho, es **antijurídico**, es decir, no todo perjuicio irrogado a un particular conlleva de suyo los ingredientes normativos que estructuran el deber de reparar. Así, para que exista un daño y este sea antijurídico, es necesario que la víctima demuestre que no estaba en el deber conforme al ordenamiento jurídico, de soportarlo. De allí que acertadamente se tenga que, si se llegaran a probar los supuestos daños que se reclaman por el demandante, los mismos no son antijurídicos, pues se debe considerar que aquel experimento una merma patrimonial **como la que puede tener lugar en cualquier otro negocio de riesgo monetario, la cual se magnificó, desde luego, ante la existencia de los altos rendimientos que el accionante señala le fueron prometidos.**

Así, si se llegare a demostrar que el actor efectivamente hizo entrega de una suma de dinero a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. la misma fue una decisión libre y voluntaria de él, debiendo considerarse que quizá lo hizo obnubilado por la rentabilidad ofrecida en la operación de compra de pagarés libranzas. Se debe recalcar que para el actor los deudores de las libranzas eran personas desconocidas, aspecto que conlleva a que la operación que realizó fuera riesgosa. De otro lado, en el expediente no reposan pruebas que acrediten que el demandante por precaución hubiera revisado físicamente los pagarés que aduce haber adquirido o bien en las oficinas de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la empresa que indica tenía la custodia de dichos título; es decir, no se cercioró si quiera de la existencia real de los mismos, como tampoco se evidencia su diligencia en al menos verificar el comportamiento de la deuda, del pago de dicha cartera, circunstancias que también demuestran la culpa exclusiva a cargo del accionante que entregó su dinero sin verificar las condiciones reales del negocio.

En el presente caso no se puede desconocer que el demandante esperaba obtener unas utilidades del negocio aleatorio que celebró, de las cuales él sería el único beneficiario. Por lo tanto, no tendría sentido que las pérdidas del negocio o los riesgos de la operación emprendida tenga que asumirlas el Estado, asumiendo como si la Administración hubiese participado en el acto autónomo y libre que hoy viene a ser la causa de los perjuicios. En ese escenario, consideramos que una correcta aproximación al asunto que nos concita, debe tener en cuenta que como no todo daño es antijurídico, el daño que no tiene esta característica debe ser soportado por el particular cuando este ha concurrido a su causación, pues los riesgos de su decisión no pueden socializarse para que el Estado y la sociedad en su conjunto respondan por decisiones de que haber prosperado solo habrían supuesto un beneficio individual para los hoy demandantes.

Así las cosas, ante el escaso material probatorio que acredite la existencia de los daños que se pretenden sean indemnizados, así como su antijuridicidad, la falta de acreditación de alguna conducta omisiva a cargo del Estado, o que de dicha conducta haya generado el perjuicio, elementos sobre los que se estructura la responsabilidad extracontractual del Estado, lo jurídicamente procedente es negar la totalidad de las pretensiones, pues aunado a tal circunstancia, tal y como se verá más adelante, tampoco se configuran los dos elementos restantes que permitirían imputar una eventual responsabilidad a mi prohijada por los hechos alegados en la demanda.

6.2. Inexistencia de una omisión imputable a la SFC.

Superado el aspecto relacionado con la existencia del daño cuya reparación se pretende por la presente vía judicial y como quiera que en los hechos de la demanda se evidencia que la

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Exp: 29.590. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

responsabilidad de mi representada se afinca o atribuye a una supuesta falla del servicio por “omisión”, procede poner de presente la **inexistencia de omisión imputable** a esta Entidad, por lo que a continuación se señalarán los principales aspectos de la actuación administrativa que con diligencia, previsividad y asertividad este ente de control efectuó respecto OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

6.2.1. La sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no está ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia.

Debe llamarse preliminarmente la atención frente a una realidad incuestionable y es que la referida sociedad con la que los hoy demandantes establecieron en su momento el vínculo contractual causante del daño, no estuvo ni ha estado sometida a la vigilancia de la SFC. Es oportuno precisar que las entidades y actividades respecto de las que esta autoridad ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Bajo este entendimiento, es claro que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia. En virtud de ello, es necesario que se constituyan en la forma y términos que establecen el artículo 53 y siguientes del EOSF y la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica de la SFC. Tales disposiciones señalan que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia, **circunstancia que en el presente asunto jamás ocurrió.**

6.2.2. Actuación diligente de la SFC respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S a pesar de no ser una entidad vigilada, con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público. Inexistencia de omisión imputable por parte de este Organismo de Inspección y Vigilancia.

Aunque la citada sociedad, insistimos, nunca estuvo sometida a la inspección y vigilancia de la SFC, esta autoridad realizó dos visitas de inspección a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., que se adelantaron entre el 9 y 17 de julio de 2013, sin embargo, entre el 2 y 6 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. La finalidad de la misma era establecer si dicha persona jurídica se encontraba realizando operaciones de captación o recaudo no autorizado de recursos del público, a tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 326 numeral 4) literal e) del EOSF, en armonía con el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, concordante con las disposiciones previstas en el Decreto 4334 de 2008.

6.2.2.1. Resumen y conclusiones de la visita realizada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo.

Ahora bien, de lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “pagarés-libranza” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

6.3. Ninguna autoridad del estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

Como se ha señalado a lo largo del presente escrito, el demandante acude al presente medio de control de Reparación Directa, para reclamar solidariamente de las entidades demandadas, un resarcimiento de índole económico, fundado en una presunta responsabilidad extracontractual de la administración pública por supuestamente “avaluar” el desarrollo de las actuaciones de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Indica que dicha sociedad desplegó conductas de captación masiva e ilegal de recursos del público, que en virtud de ello las demandadas habrían incumplido sus deberes de inspección, vigilancia y control en relación con el funcionamiento de la sociedad encartada en el asunto, a la que afirma haber entregado sumas de dinero con el fin de comprar títulos valores. Por ello, en su sentir ese hecho lo habilita para reclamar perjuicios materiales por la presunta omisión en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008.

Pues bien, frente al cumplimiento de los contenidos obligacionales a los que está sometida esta Entidad, conviene precisar que desde los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, se establece que las autoridades públicas, como es el caso de mi prohijada, no pueden ejercer funciones distintas de las que expresamente les atribuye la Constitución y la ley. Por ende, la responsabilidad que se quiere endilgar en el presente caso, basada en el supuesto incumplimiento de las funciones a cargo de las demandadas, debe analizarse, considerando los límites impuestos por el mandato constitucional en ciernes, en tanto las autoridades no pueden responder por hechos o cadenas causales diferentes a aquellas que expresamente están bajo su tutela.

Bajo esa óptica, debe decirse que la SFC no tuvo participación, directa o indirecta, en los actos y hechos con base en los cuales ahora se pretende derivar su responsabilidad. Y es que no basta con efectuar acusaciones temerarias e irreflexivas para que se configuren las condiciones en las que ha de incurrirse para que el Estado deba responder por su acción u omisión. En relación con las exigencias de orden jurídico que deben acreditarse para que el Estado pueda ser responsable, ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado:

*“Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente la Sala, que la responsabilidad de la Administración **no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades, para cuya protección están***



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a un Estado ideal, sino con referencia concreta a la Administración a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede estar obligado a lo imposible”.*¹⁰ (Negrilla fuera del texto)

De modo que, ante la inexistencia de prueba que sustente no solo el presunto perjuicio o daño patrimonial alegado por el accionante, sino la omisión en que habría incurrido el Estado y cómo ésta sería la causa eficiente del daño, se impone negar las pretensiones de la demanda, con mayor razón cuando el eventual daño no es ni puede ser consecuencia directa de un acción u omisión que pueda atribuirse a la SFC, aspecto al que con facilidad podrá arribar el Despacho al realizar un simple cotejo del marco jurídico que regula las funciones y competencias de esta Superintendencia.

Siguiendo la argumentación ofrecida hasta este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos necesarios para que prospere la responsabilidad del Estado por la omisión de sus funciones:

*“En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico y; d) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a éste último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(...)”*¹¹

Como puede observarse, en el caso de las Superintendencia no basta con argumentar dentro del proceso que éstas tienen una competencia legal de supervisión sobre la actividad de los particulares, **adicionalmente se debe demostrar que una vez se tuvo conocimiento de la irregularidad cometida no se adelantaron, se adelantaron tardíamente o se usaron los medios inadecuados para interrumpir el proceso causal que genera el daño en el patrimonio económico de los usuarios del servicio o actividad objeto de control, inspección y vigilancia.**

Al referirse sobre la inspección y vigilancia del ejercicio de la actividad financiera, el Consejo de Estado ha sostenido:

*“La actividad financiera que desarrollan los particulares está sometida a la inspección y vigilancia del Estado, en razón del interés general que esa actividad reviste, por su incidencia en la economía. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado por los daños que se derivaran de actuaciones irregulares de quienes ejercen dicha actividad **se produce siempre que la entidad estatal incurra en omisión en el cumplimiento de las funciones que le corresponden como autoridad de policía administrativa, pero cuando se demuestre que de haber dado cumplimiento a tales obligaciones se hubiera podido impedir que se causaran los daños derivados de esa irregular gestión de los particulares**”*¹²

¹⁰ Consejo de Estado. Sentencia de 6 de octubre de 1995, expediente 9535. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.

¹¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-27-000-2001-00009-01 (AG).

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De lo anterior, surge con claridad que la responsabilidad por omisión en la función de policía no se genera sólo porque se haya demostrado que se incumplieron las competencias que se han asignado jurídicamente, sino que adicionalmente debe probarse que de haberse cumplido las obligaciones se habría podido impedir la generación del daño. Así las cosas, no hay deber de reparar cuando aún en cumplimiento de labores de inspección, control y vigilancia, el análisis probatorio conduce a la conclusión inexorable de que tal consecuencia negativa se habría dado con independencia de la intervención estatal.

En este punto resulta pertinente manifestar que la SFC como entidad estatal de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo consagrado en el artículo 121 de la Constitución Política, **sólo tiene competencia en relación con las materias a su cargo** y con sujeción a las funciones atribuidas por la Constitución y la ley, las cuales para el caso de esta Autoridad, se encuentran descritas, en el Decreto 2739 de 1991, Decreto – Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF), la Ley 964 de 2005, Decreto 2555 de 2010 (modificado, entre otros, por el Decreto 1848 de 2016 y el Decreto 2399 de 2019), y las demás normas que las modifiquen o adicionen.

De tal manera, esta Superintendencia es el Organismo técnico encargado de ejercer funciones de control, inspección y vigilancia **sobre las entidades que conforman los sectores financiero, asegurador, bursátil y previsional del país**, teniendo como objetivo supervisar el sistema financiero y el mercado de valores colombiano, de acuerdo con la facultad consagrada y delegada en los artículos 189 numeral 24 y 211 de la Constitución Política.

De ahí que a la SFC, desde la óptica de sus funciones administrativas, **no le compete intervenir en las relaciones contractuales entabladas entre las entidades vigiladas (y no vigiladas) y los particulares**. Es así como, esta Entidad no puede impartir órdenes referidas a la ejecución y terminación de contratos celebrados entre los particulares y sus entidades vigiladas ni mucho menos las no vigiladas, dado que su función de supervisión no trasciende a la intrusión en la esfera de la autonomía de las partes que se caracteriza por la libertad negocial, pues estaría desbordando el ámbito de su competencia administrativa. **Una interpretación contraria llevaría a pensar que esta autoridad tiene facultades para coadministrar o para dirimir diferencias que puedan surgir en las relaciones contractuales, e incluso para asumir responsabilidades por completo ajenas a su naturaleza, objetivos y funciones.**

Dicho de otro modo, la SFC, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las que ha sido expresamente facultada por la ley. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa no podría haber decretado medidas administrativas dirigidas a ordenar la toma de posesión de los bienes y haberes de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. , primero, porque en la visita realizada a la sociedad en cuestión **no se encontraron a la fecha de su realización hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva e ilegal de recursos del público, que conllevaran a la adopción de una medida cautelar para la fecha en que la misma se llevó a cabo y, segundo, porque ésta medida de intervención en el marco del Decreto 4334 de 2008 solo podía ser adoptada por la SS.**

Con todo, no se avizora en el presente caso el despliegue de conducta alguna que haya quebrantado los deberes a cargo de la SFC y de la que pueda derivarse que los presuntos daños sufridos por el accionante deban ser reparados por el Estado, al haber tenido ocurrencia por causa de una conducta que no puede endilgarse a la administración pública.

6.4. Ninguna autoridad pública en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control está obligada a lo imposible.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para finalizar, no puede soslayarse el hecho de que la omisión que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado en el caso de la omisión de las Superintendencias se concreta, en primer término, por la ausencia de adopción de medidas administrativas cuando se tiene conocimiento de irregularidades en la actividad de las industrias vigiladas, y al cual puede llegarse por quejas de la ciudadanía, o como resultado del propio cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, o de hechos que sean materia de denuncia por los particulares.

Ello, en la medida en que sin este conocimiento previo no es posible pretender responsabilidad, pues aun cuando el Estado tiene una obligación de garantía de bienes jurídicos no está obligado a lo imposible y, por lo tanto su deber de policía administrativa no puede, bajo ninguna circunstancia, implicar el que tenga un funcionario público al interior de cada establecimiento sujeto a su control, por lo que quien demanda debe demostrar supuestos fácticos y jurídicos que permitan deducir la presencia de elementos suficientes, como para considerar que la Autoridad incurrió en un obrar irregular.

En esa línea argumentativa, sobre la naturaleza de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de las Superintendencias, el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente:

*“El propósito de las funciones de inspección, vigilancia y control que el ordenamiento asigna a la Superintendencia de Sociedades no es otro que el de velar porque las compañías vigiladas ajusten su actividad a las normas jurídicas que la gobiernan – constitucionales, legales y reglamentarias –, así como a los estatutos del propio ente social; por consiguiente, en modo alguno podría admitirse que la finalidad de las intervenciones del organismo de control frente a eventos como el sub judice pudiere consistir en hacerle asumir sus obligaciones de resultado de cara a la evitación de que se produzcan daño a los socios o a terceras personas como consecuencia del desarrollo de sus actividades por parte de la empresa sujeta a vigilancia. **La responsabilidad patrimonial del Estado, por tanto, en este tipo de casos, solamente puede quedar comprometida si se demuestra en el proceso i) que el servicio a cargo de la Superintendencia no fue prestado o lo fue de manera tardía, negligente o equivocada y ii) que esa falta en la prestación del servicio fue la que condujo a la materialización del(los) daño(s) cuya reparación se depreca**”¹³.*

Como puede apreciarse, las entidades públicas deben ser absueltas si demuestran que frente a una situación irregular adoptaron las medidas y decisiones que de ella se esperaban, **por lo que no tiene por qué asegurar que su intervención ofrezca una recuperación de una actividad económica o la recuperación de pérdidas dinerarias debidas al comportamiento de los particulares.**

Se trata, entonces, de un régimen **subjetivo** de responsabilidad atado directamente al contenido obligatorio impuesto al Órgano de inspección, vigilancia y control, y limitado a su vez por éste, en función del cual:

*“La responsabilidad patrimonial del Estado bajo un esquema de responsabilidad subjetiva, es decir sustentada en la falla en el servicio, **pues la función de supervisión no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida, sino en asegurar el cumplimiento de las normas del sector**, no puede perderse de vista que el contenido obligatorio a cargo de la Administración en este tipo de supuestos consiste en procurar la salvaguarda -so pena de la adopción de las medidas o de la imposición de las sanciones a las cuales legalmente hubiere lugar (...) cuando las víctimas que acuden a la Jurisdicción en busca de la reparación de los daños que les fueron irrogados son usuarios o terceros damnificados por el actuar de la sociedad vigilada, lo primero que se observa es el hecho de que quien produce directamente el daño no es el Estado – el cual sólo desarrolla en tales eventos labores de supervisión-, sino un tercero, que es justamente la compañía intervenida; es ella la que ocasiona, de manera directa, los daños a sus*

¹³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2012. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

clientes, de suerte que, por regla general. Frente al Estado debe examinarse si se estructura un hecho de tercero como eximente de responsabilidad. De este modo, el título de imputación del daño al Estado únicamente podría ser -se itera- la falla del servicio constituida por la omisión de la entidad oficial supervisora en el cumplimiento de sus deberes legales”¹⁴.

En el caso concreto habría que agregar un hecho al que ya hemos hecho referencia a lo largo de este escrito, pero el que, insistimos, no puede ser inobservado, y es que la sociedad que concita el presente debate judicial, a diferencia de lo sostenido por la jurisprudencia en relación con los eventos en que puede ser declarada la responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, **nunca estuvo bajo la inspección y vigilancia de la SFC.**

Por lo tanto, las actuaciones desplegadas por este Organismo frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en ningún caso se llevaron a cabo por ser ésta una industria supervisada por la SFC. Por el contrario, las mismas se hicieron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora, que sí tiene bajo su égida la Superintendencia Financiera de Colombia.

7. EXCEPCIONES.

Sea lo primero informar al Despacho que las excepciones previas, conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, concordante con los artículos 100 al 102 del Código General del Proceso, se presentarán en escrito separado. En ese orden, nos referiremos a continuación a las que consideramos son presupuestos necesarios para proferir una sentencia que niegue las pretensiones de la demanda, y en ese sentido sea favorable a los intereses de mi representada. Así:

7.1. EXCEPCIONES DE FONDO

7.1.1. Actuación diligente y conforme al marco de sus competencias por parte de la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público.

7.1.1.1. Visita realizada a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

El día 6 de mayo de 2013 se recibieron en esta Entidad dos correos electrónicos a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “pagarés-libranza” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide. Esta Superintendencia atendiendo las funciones de prevención y control del ejercicio ilegal de la actividad financiera consideró pertinente evaluar si en el desarrollo del objeto social de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se presentaban operaciones en las cuales se pudieran estar configurando hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público.

En virtud de lo anterior, mediante Oficio No. 2013058932-001-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-006-000 del 29 de noviembre de 2013.

¹⁴ Ibid.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo, como se describen a continuación:

Nombre Cooperativa a sociedad	Radicado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización.
Estrategia Patrimonial S.A.S	2013064058	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Libranzas Group S.A.S	2013081468	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
Cooperativa Multiactiva COOPDOMUS LTDA.	2013064063	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Cooperativa Multiactiva de Palmira - COOMUPAL	2013064064	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
COOPERATIVA DE CRÉDITOS MEDINA - COOCREDIMED	2013081431	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
COOINVERCOR	2013081463	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013

En cuanto a la sociedad ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. se determinó:

- Que suscribió un contrato con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. denominado “*Contrato marco de compraventa de cartera*”, vigente hasta el 13 de noviembre de 2013. En dicho documento se aclaró que los “pagarés – libranza” vendidos a OPTIMAL provenían de las Cooperativas COOPDOMUS Y COOMUPAL.
- Celebró un contrato de cesión con OPTIMAL y COOPUMAL, por lo tanto, a partir del 23 de septiembre de 2013 OPTIMAL LIBRANZAS empezó a comprar los “pagarés-libranza” libranza directamente a la cooperativa y a recibir de manera directa el pago de los flujos.

Respecto de la sociedad LIBRANZAS GROUP S.A.S., se encontró:

- Que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. suscribió con aquella un contrato denominado “*Contrato de compra de cartera con responsabilidad*”, a través del que le compró los derechos de crédito incorporados en los “pagarés-libranza” que eran adquiridos de las cooperativas COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL.
- Se probó que el 26 de septiembre de 2013, LIBRANZAS GROUP S.A.S., OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y COOCREDIMED celebraron un contrato de cesión, con el objeto de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comprar los “pagarés-libranza” directamente a la Cooperativa sin la intervención de LIBRANZAS GROUP S.A.S.

De otro lado, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. celebró contratos de compraventa de cartera que equivalen al 3.66% de la cartera adquirida con las Cooperativas COOINVERCOR, COOMUNDOCRÉDITO, COOCREDIANGULO y COOPROCO KAPITAL SOCIAL; sin embargo, la comisión de visita centró su revisión y verificación en las ventas de pagarés-libranza realizadas por ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., pues eran ellas quienes habían vendido el 96.34% del total de la cartera reportada por la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

En cuanto a las operaciones de compraventa de “pagarés-libranza” entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y los inversionistas, se evidenció que suscribían un “Contrato de compraventa de cartera modalidad pagaré-libranzas-persona natural”, en el que se establecían las condiciones de la negociación. Vale la pena mencionar que el modelo de negocio consistía en la venta de los derechos de crédito incorporados en títulos denominados “pagarés-libranza”, que se originaban en los préstamos que otorgaban las cooperativas ya mencionadas a sus asociados y que eran cancelados mediante descuento de nómina, aplicada por las pagadurías de las entidades para las que laboraban los deudores. A su vez se observó que, las cooperativas consignaban o giraban el valor recaudado a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., para que fueran consignados a favor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. quien adquiriría los títulos a descuento y se encargaba de pagar el flujo mensual a los inversionistas que los compraban, hasta su cancelación.

Con fundamento en lo expuesto, la comisión de visita concluyó en su informe:

- Los contratos suscritos entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., no gobernaban en su totalidad la relación comercial y las prácticas operativas que tenían vigentes, pues no se incluyeron aspectos relativos al procedimiento para hacer efectiva la cláusula de responsabilidad cambiaria en el evento de presentarse “pagarés-libranzas” siniestrados, incumplimiento en pagos, prepagos o títulos viciados.
- En el numeral 4.3 de la cláusula 4 y 7 de los denominados “Contratos de Compraventa de Cartera Persona Natural y Persona Jurídica”, utilizados para oficializar la venta de “pagarés-libranza”, se hacía referencia a una Fiduciaria y a la firma ERNEST & YOUNG, sin embargo, para el momento de la visita no habían sido formalizados, lo que inducía a que los inversionistas de manera errónea creyeran que esas entidades hacían parte del proceso y de los controles establecidos en la venta.
- Efectuada la revisión del contrato marco firmado con la sociedad Estrategia Patrimonial S.A., se encontró que en la consideración primera y cláusula sexta se hace referencia a operaciones de “factoring” contrario a lo señalado en el texto y forma del documento, pues en este se hace referencia a la compra de “pagarés-libranza”.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no conocía ni tenía el control de los “pagarés-libranza” que presentaban mora o impagos en los flujos mensuales. En el contrato suscrito con Estrategia Patrimonial S.A. no se contempló que dicha situación debía ser informada.
- Las sociedades Estrategia Patrimonial S.A.S. y Libranzas Group S.A.S. no reportaron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. los pagarés siniestrados, toda vez que esa información no se solicitaba a las Cooperativas, lo que llevó a que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. asignara “pagarés-



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

libranza” con recaudo en cero o con recaudos que presentaban cuotas menores al valor esperado.

- Las Cooperativas COOMUPAL y COOCREDIMED giraban a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. el valor de los flujos que se vencían durante el mes, sin embargo, no se encontró evidencia de la verificación por parte de las Cooperativas del reporte de descuentos generado por las pagadurías para constatar si existían pagarés que no hubieran sido objeto de descuento.
- ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. giraron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. el valor total de los flujos que se vencían en el mes para cancelar la mensualidad a los inversionistas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- Se revisó el caso particular del señor Farid Stefenn Uribe quien realizó una compra por \$500.000.000. OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. le asignó 116 “*pagarés –libranza*” por valor de \$668.498.202 a un plazo de 36 meses, con pagos mensuales de \$19.100.000. Se identificó que 11 de los títulos no recaudaron su flujo mensual, no obstante, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. recibió los dineros girados por las cooperativas a Estrategia Patrimonial para pagar los flujos convenidos con el inversionista.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. solicitó a las cooperativas COOPNALCRES, LEGALCOOP, MUNDOCREDITO, HABITAT, COOCREDIMED, COOMUPAL y COOPDOMUS certificaciones de la cartera siniestrada. Sin embargo, las dos ultima no remitieron la información solicitadas. Esta Superintendencia realizó visita de inspección¹⁵ a dichas cooperativas, en la cual se evidenció que vendieron “*pagarés-libranza*” con flujos cero o sin recaudar el 100% de la cuota o flujo mensual. COOCREDIMED remitió fotocopia simple de una certificación donde señaló que los pagos de los flujos de la cartera negociada se pagaban con oportunidad y suficiencia, pero no se hizo referencia a la existencia o no de cartera siniestrada, situación contraria a lo que evidenció la SFC en la visita realizada a esa cooperativa, pues se encontraron “*pagarés-libranza*” con flujos cero y con recaudo menor al esperado.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. a partir de noviembre de 2013 modificó su modelo de negocio, toda vez que en la venta de “*pagarés-libranza*” procedió a endosar los títulos en propiedad, pero sin responsabilidad a favor del comprador.
- Se hizo una revisión del “Archivo Visita Super 5 Dic 13” entregado el 10 de diciembre por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con el fin de verificar que el periodo de maduración de los “*pagarés-libranza*” vendidos coincidieran con los meses pactados y vendidos a los compradores de esos títulos, no se encontró irregularidad alguna.
- De acuerdo con la valoración de los hechos descritos en el informe y el análisis de la información suministrada por la entidad visitada, como aquella que se recaudó por la comisión de visita en la inspección, se concluyó que para la fecha de la visita, en el desarrollo de la operación de venta de “*pagarés-libranza*” llevada a cabo por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con sus clientes compradores, no se configuraban los supuestos o los hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y en el Decreto 4334 de 2008.

¹⁵ Se realizaron visitas de carácter administrativo a las Cooperativas: COOPDOMUS LTDA, COOMUPAL, COOCREDIMED, COOINVERCOR y a las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A. entre los meses de julio y septiembre de 2013.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- De lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “pagarés-libranza” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

Sea oportuno mencionar que las cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, tema que resultaba ser del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la que esta Superintendencia le trasladó copia del informe de inspección a dicho Organismo.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

Ahora bien, el hecho de que con posterioridad la Superintendencia de Sociedades (en diciembre del año 2016) hubiese verificado la existencia de hechos objetivos que dieron cuenta de la realización de operaciones de captación de dineros del público por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., **en modo alguno significa que la SFC haya sido omisiva en el cumplimiento de sus funciones**, porque, la información que esta Entidad evaluó corresponde a la recabada y entregada respecto de un periodo de 17 meses de operación de la misma, esto teniendo en cuenta que el modelo de negocio empezó en mayo de 2012.

7.1.2. Causales de exoneración de responsabilidad – Inexistencia de nexo causal entre la actuación de la SFC y el daño irrogado.

En el evento en que el Despacho llegare a considerar acreditada la existencia de un daño en el presente caso, las pretensiones deberían ser igualmente negadas ya que el mismo no es imputable ni atribuible a la SFC, pues concurren en el caso causales que deben exonerar de responsabilidad al Estado pues rompen el juicio de imputación fáctica y jurídica.

7.1.2.1. Hecho de un tercero

En el evento en que el demandante lograra probar a lo largo del presente proceso la existencia de un eventual perjuicio en virtud de la entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o llegare a demostrar que las pérdidas que aduce haber sufrido devienen de la existencia y funcionamiento de esa sociedad, ese hecho **NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SFC**, pues claramente la causa del daño estaría afincada en la acción propiamente dicha de esa sociedad, con la que el aquí demandante entabló un negocio jurídico, siendo así responsabilidad de los representantes legales y/o administradores de esa persona jurídica las actuaciones que confluyeron en la pérdida de los recursos depositados, acciones que son completamente ajenas a mi representada.

En ese sentido, cuando en los hechos de la demanda se afirma que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. dejó de pagar las amortizaciones que mes a mes venía realizando al demandante, justificando dicha



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

circunstancia en razones de orden operativo de la cartera, además de asuntos y menesteres internos de las cooperativas originadoras de las obligaciones adquiridas por el actor, debe indicarse que, respecto de estos hechos, ningún vínculo o relación causal tiene la SFC. Las mismas afirmaciones del accionante denotan que fue el hecho del tercero con quien se había establecido el vínculo contractual, el que provocó la cesación de pagos que afectó el patrimonio del reclamante.

Bajo ese entendimiento, de comprobarse que pudo haberse producido un daño, el mismo tendrá que ser objeto de litigio directamente entre las partes contratantes en desarrollo del negocio particular e individual que fue celebrado, ello, mediante el ejercicio de las acciones judiciales estatuidas por el legislador para tales fines, entre ellas, las de competencia de la jurisdicción ordinaria, e incluso a través del proceso penal respectivo, en el que cabe la reparación de los perjuicios irrogados con ocasión del injusto que llegará a acreditarse más allá de toda duda razonable.

No puede perderse de vista que aun cuando se quiera imputar responsabilidad a la Administración y se pretenda de ella el pago de los recursos que de forma libre y autónoma se invirtieron en la sociedad hoy intervenida, el punto central de la discusión que aquí se plantea, es que el presente asunto versa sobre la celebración de un contrato entre particulares, del cual la SFC no fue parte, ni dio su consentimiento o aval, razón por la que mal podría pretenderse que el cumplimiento de las prestaciones a las que se comprometió cada uno de los obligados recaiga en esta autoridad de supervisión, y no en el tercero que se obligó jurídicamente con el demandante, esto es, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, resulta evidente que en el caso puesto a consideración del Despacho la atribución material del hecho dañoso, constituida como un fenómeno estrictamente naturalístico, se relaciona directamente con la acción del particular y no con la del Estado, siendo así que la responsabilidad solo puede endilgarse a la referida sociedad.

Para esta Superintendencia es claro que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., instrumentó un ardid con base en una operación legítima, el descuento que se presenta en la negociación de un título valor, para engañar a particulares con falsas promesas de rendimientos elevados cuando se conocía que los flujos recibidos resultaban insuficientes para garantizar el pago de lo prometido.

7.1.2.2. Culpa exclusiva de la víctima.

Sea lo primero señalar que el demandante tiene los conocimientos que dan las máximas de la experiencia y que con base en ellos tomó de forma libre, autónoma y consciente una decisión de inversión que por sus características tenía un riesgo inherente, del cual no puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por su resultado, **pues la función de supervisión a cargo de esta Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida**, ello, tratándose una de entidades no vigiladas.

Cabe señalar, con base en las conclusiones contenidas en el Informe de Inspección analizado a lo largo de este escrito, que al parecer lo que ocurrió con el aquí accionante no fue otra cosa que la celebración de un contrato aleatorio, en los términos descritos en el artículo 1498 del Código Civil, esto es, aquel en el cual existe una contingencia incierta de ganancia o pérdida, y el cual se materializó en la compra de una cartera, que se generó en el alea de una posible rentabilidad atada al recaudo de unos recursos que se lograría en un periodo de tiempo determinado. Por ende, no se puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por el resultado de un negocio determinado por la autonomía de la voluntad de las partes, menos aun cuando el resultado del mismo dependía o estaba íntimamente ligado a los riesgos propios de los negocios realizados, y que el demandante consintió asumir libre y voluntariamente.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En ese sentido, debe auscultarse con especial énfasis el hecho que el accionante, según se infiere del libelo, obró en todo momento de manera libre, consciente y voluntaria al momento de entregar sus dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ello bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, en función del cual se les reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios. Razón por la cual no es dable asumir que el Estado deba tener responsabilidad por los perjuicios que los particulares sufran como resultado de su propia iniciativa.

Y es que proceder en un sentido contrario a éste, supone un riesgo evidente, que no es otro que el de llevar a concluir que cada que un inversionista, en un negocio de riesgo, pierda, el Estado habrá de responder por su dinero. Lo cual conllevaría a unas consecuencias contraproducentes, pues se daría cabida a la idea que las personas realicen toda clase de inversiones riesgosas, pues en el evento de fracasar el Estado responderá por ellas. Un argumento en esa dirección es que al Estado no pueden socializársele solo las pérdidas, cuando las ganancias son privatizadas en los sujetos contratantes. Por lo que mal podrían instrumentalizarse las funciones de inspección, vigilancia y control, para sostener un modelo en el que las utilidades son individualizadas en unos pocos, mientras las pérdidas son compartidas entre todo el conglomerado social.

De otro lado, es importante considerar que la presunta relación contractual entre el demandante y OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., se trata de un negocio privado sin intervención alguna de la SFC, en el cual el interesado asevera haber realizado una “inversión” de dinero, tipo de negocio que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias, para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. Así, toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la [multiplicación](#) del dinero colocado.

Respecto de lo anterior, se debe señalar que:

*“En la inversión privada suelen considerarse tres variables distintas; la primera corresponde al rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que se considera que tendrá en términos positivos o negativos, la segunda obedece al **riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento, la posibilidad de que la inversión no se recupere,** y por último el horizonte temporal, o bien el período a corto, mediano o largo plazo durante el que la inversión se sostendrá.”¹⁶*

En otras palabras, está el demandante obligado a actuar con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como a proceder con la diligencia debida y el cuidado que se espera frente a esta clase de operaciones comerciales. Esa diligencia lo hubiese llevado, al menos, a interrogarse e indagar sobre algunas cuestiones esenciales de la cartera que estaba adquiriendo, tales como el origen de los pagarés libranza, lo que le habría llevado a verificar si dichos títulos existían en las cooperativas originadoras que celebraban negocios con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la sociedad contratada para la custodia de los mismos.

¹⁶ Definición ABC: <http://www.definicionabc.com/economia/inversiones>.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nótese que aun cuando el actor reprocha al Estado por un presunto actuar negligente, el dicho no ofrece prueba de ninguna clase, pasa por alto señalar que nunca acreditó haber verificado o realizado alguna investigación sobre el efectivo pago de los deudores de las obligaciones contenidas en los títulos valores que estaba adquiriendo. Tampoco hizo nada por establecer de qué tipo de cartera se trataba, si la misma estaba siniestrada, o los títulos valores presentaban inconsistencias, duplicidades, si la información que le brindaba vía correo electrónico sobre montos y plazos de los pagarés era verídica o fidedigna.

Por el contrario, simplemente existen una serie de manifestaciones que dejan ver que el demandante se limitó a recibir información, sin comprobarla, y acto seguido a suscribir documentos sin un soporte válido, amparándose únicamente en la “*confianza*” que le brindaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Debe plantearse, entonces, la existencia manifiesta de una desidia del demandante en los términos a los que hemos hecho referencia, como causa determinante del posible perjuicio irrogado, por lo que la apreciación del daño, en caso de existir éste, deberá estar sujeta a la valoración de la conducta de quien se expuso a él imprudentemente.

En definitiva, en el presente caso consideramos están dados los elementos de tipo normativo que hacen improcedente la imputación desde un punto de vista fáctico y jurídico, pues nos encontramos ante una actuación del accionante que evidencia imprudencia y la aceptación de riesgos o aleas propias del negocio jurídico que celebraron, lo cual tendría que excluir la responsabilidad de la Administración por el hecho o la culpa exclusiva de la víctima.

7.2. Intervención como escenario idóneo para las reclamaciones de índole económica como la que se pretende.

El trámite de la demanda judicial por medio de la interposición del medio de control de reparación directa, no es el mecanismo adecuado para pretender la restitución de los dineros que se dice fueron entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., pues con ello se desconocen las instancias legales dispuestas especialmente para tales fines, esto es, el trámite administrativo que con fundamento en el artículo 5° del Decreto 4334 de 2008, el cual fue ordenado por la SS mediante Auto 400-005087 del 13 de abril de 2018, a través del que se decretó la toma de posesión como medida de intervención de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., escenario en el que existe la posibilidad de devolver de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que al pretender el demandante que a través del medio de control de reparación directa le sean restituidos como pretensión el valor de los dineros entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conllevaría al cobro de lo no debido e incluso de un enriquecimiento sin causa, por cuanto al restituirse al actor dentro del proceso de intervención de manera parcial o total el valor de la inversión, se entendería que su daño se habría resarcido y nadie está habilitado por la ley para obtener el pago de una obligación dos veces.

8. PETICIÓN

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que han sido expuestas en el presente escrito de contestación, respetuosamente solicito a su señoría:

En forma principal:

1. Que de **DECLAREN PROBADAS** las excepciones previas de **CADUCIDAD y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.

En forma subsidiaria:

1. Se **DECLAREN PROBADAS** las excepciones de mérito o de fondo denominadas: **ACTUACIÓN DILIGENTE Y CONFORME AL MARCO DE SUS COMPETENCIAS POR PARTE DE LA SFC RESPECTO DE OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.; CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD – INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTUACIÓN DE LA SFC Y EL DAÑO IRROGADO (HECHO DE UN TERCERO – CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA); INTERVENCIÓN COMO ESCENARIO IDÓNEO PARA LAS RECLAMACIONES DE ÍNDOLE ECONOMICO COMO LA QUE SE PRETENDE.**
2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.

En cualquier caso:

- i) Se **CONDENE EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO** a la parte demandante.

9. FRENTE AL ACÁPITE DE COMPETENCIA Y CUANTÍA DE LA DEMANDA.

Entendemos que la estimación razonada de la cuantía realizada por la parte actora en el mencionado acápite del escrito de demanda, tiene por objeto cumplir con el requisito de la demanda previsto en el numeral 6 del artículo 162 del CPACA.

No obstante lo anterior, si eventualmente el Despacho considera dicha estimación como un Juramento Estimatorio, en los términos del artículo 206 del Código General del Proceso del Proceso, se objeta la estimación de perjuicios que ha presentado bajo juramento la parte demandante, para cuyo efecto se solicita tener incorporadas como fundamento del presente acápite de objeción, todas las razones y manifestaciones en torno a la INEXISTENCIA DEL DAÑO Y SU ANTIJURIDICIDAD.

Esta objeción encuentra sustento en la ilegitimidad y la improcedencia de la demanda, lo cual encuentra suficiente y sólido respaldo en las argumentaciones y excepciones que se dejan expuestas en defensa de los derechos e intereses de la SFC, de manera que no podrán prosperar o estimarse las pretensiones de la demanda, máxime si se tiene presente que en este caso, como ya se ha señalado, no nos consta y tampoco está probado que la parte demandante haya sufrido daños y perjuicios causados por esta Entidad.

En consecuencia, esta objeción afecta la totalidad del monto estimado bajo juramento por la parte demandante. En cuanto se desestimen las pretensiones – tal como lo solicito – deberán decretarse y liquidarse, a favor de mi mandante y a cargo del demandante, las sumas correspondientes a costas, incluidas las Agencias en Derecho.

10. RESPECTO A LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR EL DEMANDANTE.

Verificado el escrito de demanda, esta Superintendencia considera necesario oponerse a la solicitud de determinadas pruebas realizada en el escrito de demanda por la parte actora, tales como:

10.1. Remisión de expedientes:

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En el acápite titulado “*REMISIÓN DE EXPEDIENTE*” del escrito de demanda, el demandante solicita que se “*(...) ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE COLOMBIA Y FINANCIERA, que allegue el expediente que se produjo con ocasión de las investigaciones que realizaron a la Empresa OPTIMAL LIBRANZAS S.A (...), con anterioridad a junio del año 2016 y los resultados de las visitas de los años 2014-2015-, 2016 y 2017, incluyendo:*

Los registros de todas las visitas realizadas por parte de la Superintendencia de Sociedades a la OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, con NIT N° 900.496.573-1, entre los años 2014-2015, 2016 y 2017.

1.2. Qué tipo de actuaciones se realizaron en dichas visitas.

1.3. Las denuncias administrativas en contra de la Empresa OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, con NIT N° 900.496.573-1, que hayan sido instauradas para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

1.4. Los resultados de las investigaciones que se hayan adoptado con ocasión de tales denuncias.

1.5. Los actos proferidos con ocasión de toda visita realizada por parte de las SUPERINTENDENCIAS respecto de la Empresa OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, con NIT N° 900.496.573-1.

1.6. Actas, decisiones o conceptos relacionados con las visitas que hubiere realizado las SUPERINTENDENCIAS en comento a la Empresa OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, con NIT N° 900.496.573-1”

En relación con dicha solicitud, es de mencionar que con la presente contestación se adjunta el Informe de Inspección de la visita realizada por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A. que contiene los antecedentes y conclusiones de la misma, así como copia de las quejas y/o solicitudes de investigación recibidas en esta Superintendencia respecto de la referida sociedad, con su respectiva respuesta, que corresponde a la decisión final adoptada frente a cada queja, dentro de las que se refiere el traslado a la Superintendencia de Sociedades, como entidad encargada de la vigilancia por lo que la prueba solicitada resulta, por sustracción de materia, innecesaria.

10.2. Informe juramentado.

En el numeral 1 del acápite “*INFORME JURAMENTADO*”, el demandante solicita “*(...) ordenar al representante legal de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, o quien haga sus veces, que rinda un informe juramentado en relación con las actuaciones administrativas que se surgieron con antelación a julio de 2016*”.

Al respecto, es importante reiterar que conforme lo establece el artículo 168 del Código General de Proceso “*El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles*”.

En el caso que nos ocupa, el informe sobre las actuaciones adelantadas por la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., fueron relatadas a lo largo del presente escrito, además con la contestación de aporta copia del informe de la visita de inspección. Por ende, el informe juramentado que se solicita no solo resulta inútil para el proceso, en la medida en la que se limitaría a reiterar el contenido del mencionado informe, además de generar una carga y un desgaste adicional para la administración pública.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por ello, ME OPONGO al decreto de dicho informe y pido al (a) señor (a) juez (a) rechazarlo, pues al ya existir unos documentos que contienen la misma información que se obtendría con su decreto y contar con un resumen detallado de la actuación y conclusiones, la prueba carecería de utilidad y se torna innecesaria para el proceso, pues en caso de decretarse, sería del todo superflua, reiterativa y redundante.

11. PRUEBAS.

Con el propósito de acreditar y respaldar los hechos y afirmaciones que se han expuesto a lo largo de la presente contestación, solicito que se decreten y valoren como pruebas, además de aquellas que oficiosamente disponga decretar y practicar el Despacho, las siguientes:

11.1. Documentales que se aportan.

Conforme al numeral 4 del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con la contestación de la demanda debe acompañarse todas las pruebas que la demandada pretenda hacer valer en el proceso, por lo que para el caso que nos incumbe se allegan:

1. Trámite No. 2013041076 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Alvaro Iván Rojas y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
2. Trámite No. 2013041086 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Mauricio Santiago Jiménez y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
3. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
4. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
5. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
6. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
7. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
8. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
9. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
10. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
11. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
12. Informe de Inspección No. 2013081463-009de de la visita practicada a COOINVERCOR.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

13. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
14. Trámite No. 2016112058 mediante el que se atendió la petición presentada por el Dr. Diego Vega en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Carlos Humberto Garzón y Diana Patricia Maldonado Rincon, en la que solicitó se promoviera la intervención y toma de posesión por captación de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
15. Copia del requerimiento y orden de inspección de la Fiscalía General de la Nación junto con las respectivas respuestas.
16. Trámite No. 2018019222 mediante el que se atendió la petición presentada por la señora Luisa Fernanda Daza Manrique.

Para que obren como pruebas en el proceso adjuntamos copia de la documentación en comento, **trasladándole la reserva sobre dichos documentos al Despacho Judicial, por cuanto al tratarse de una actuación administrativa, contiene información clasificada y/o reservada.**

11.2. Pruebas que se solicitan.

11.2.1. Interrogatorio de parte.

En los términos del artículo 184 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas concordantes, comedidamente solicito se fije hora y fecha, para **INTERROGAR** bajo la gravedad de juramento al demandante en este proceso **Luis Alfonso Diago Escobar**, lo cual haré de forma oral o escrita, en relación con los hechos materia del medio de control de Reparación Directa, persona que será citada a través de su apoderado judicial en los términos autorizados por el artículo 78 del CGP.

12. NOTIFICACIONES.

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez,

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

Revisó y aprobó:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2019175408-027-000

Fecha: 2021-06-09 15:56 Sec. día 2025

Anexos: Sí

Trámite: 132-DEMANDAS

Tipo doc: 325-325 CONTESTACION ADICIÓN, SUSTITUCIÓN, O REFORMA DE DEMANDA

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario: ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-027-000
Trámite : 132 DEMANDAS
Actividad : 325 325 CONTESTACION ADICIÓN, SUSTITUCIÓN, O REFORMA DE DEMANDA
Anexos : E1

Referencia: **CONTESTACIÓN REFORMA DEMANDA**
Medio de Control: **REPARACIÓN DIRECTA**
Radicado: **11001-33-43-060-2020-00063-00**
Demandante: **LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR**
Demandado: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTRA**

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. identificada como aparece al pie de m firma, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No. 274.629 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial de la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (en adelante SFC)**, según poder que obra en el expediente, estando dentro del término legal procedo a **CONTESTAR LA REFORMA DE LA DEMANDA** en los siguientes términos:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

En los términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Administrativo, comparece, como parte demandada la Superintendencia Financiera de Colombia, Entidad que forma parte del sector central de la administración pública del orden nacional, con domicilio en Bogotá, representada legalmente por el señor Superintendente Financiero Jorge Castaño Gutiérrez.

En su nombre y representación interviene la suscrita apoderada, en virtud del poder que me fuere conferido por el Coordinador del Grupo Contencioso Dos de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, a quien le fue delegada la función de otorgar poderes a los funcionarios para que ejerzan la representación judicial o extrajudicial de la SFC, al tenor del numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 0229 del 14 de febrero de 2017.

2. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El numeral primero del artículo 173 de la Ley 1437 de 2011, dispone entre otras cosas lo siguiente: *“De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial.”*

Ahora bien, mediante auto del 20 de mayo de 2021 notificado por estado del día 21 del mismo mes y año, se admitió la reforma a la demanda y se corrió traslado de la misma por la mitad del término, es decir por 15 días hábiles, los cuales empezaron a correr a partir del día 24 del mismo mes y fenecen el próximo 15 de junio de 2021. Por lo tanto, es evidente que esta Superintendencia se encuentra dentro del término para pronunciarse frente a la reforma a la demanda.

Con el fin de evitar confusiones y con el ánimo de hacer más clara y organizada la intervención de mi prohijada, se hará un pronunciamiento general de los escritos de demanda y de reforma de la demanda, razón por la que en el presente documento se integra la contestación de ambas.

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Con fundamento en las razones que se acreditarán a lo largo de este escrito y en general en el devenir de este proceso judicial, **ME OPONGO A TODAS LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA** por las siguientes razones a saber:

- Carecer de fundamento respecto de mi prohijada, toda vez que lo expuesto por la parte demandante corresponde única y exclusivamente a la narración de un **incumplimiento contractual**, relación jurídica de la cual la SFC no fue parte;
- Por tratarse de una demanda cuyos fundamentos fácticos imposibilitan, por completo, hacerle una imputación de responsabilidad a la SFC;
- Por no existir nexo de causalidad entre los fundamentos fácticos expuestos, los perjuicios cuya reparación deprecia la parte demandante y las funciones de esta Entidad;
- Por tratarse de un perjuicio que, de encontrar algún asidero, en todo caso evidenciaría que la responsabilidad no podría predicarse respecto de la **SFC. Como se demostrará, en el presente caso se configura el hecho de un tercero y la culpa de quien se reputa víctima;**
- Por tratarse de un asunto en el que se encuentran debidamente configuradas diversas causales que eximen de responsabilidad respecto de la **Superintendencia Financiera de Colombia.**

En consecuencia, no habrá lugar a que la autoridad judicial acoja las pretensiones declarativas y de condena formuladas por el demandante.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

- A esta Superintendencia **NO LE CONTAN** los **HECHOS 1) al 3)** en los que se indica que el demandante fue contactado por la fuerza comercial de la empresa **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.)**, que le explicaron en qué consistía el sistema de inversión de libranzas y le ofrecieron por participar en el negocio una rentabilidad equivalente al interés bancario corriente.

Al respecto vale la pena señalar que las anteriores afirmaciones se refieren a las condiciones ofrecidas por la referida sociedad para la ejecución del negocio jurídico celebrado con el demandante, relación en la que esta Superintendencia no tuvo ningún tipo de participación o injerencia.

- Frente al **HECHO 4) NO NOS CONSTA y NOS ATENEMOS** a lo que para la época haya certificado la Entidad que represento. La tasa de interés certificada puede ser consultada en nuestra página web www.superfinanciera.gov.co, sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del C.G.P. los indicadores económicos se consideran un hecho notorio.
- En el **HECHO 5)** se afirma que el actor indagó ante esta Superintendencia y la Superintendencia de Sociedades (en adelante SS) sobre la legalidad de las operaciones desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., lo que le permitió establecer que las demandadas conocían de las operaciones, que habían realizado visitas, que dicha sociedad no era objeto de ninguna medida y que se trataba de una actividad no proscrita por la ley.

En lo que respecta a la SFC, debemos señalar que al revisar en el Sistema de Gestión Documental – SOLIP, que contiene la totalidad de trámites adelantados por esta Entidad, **no se encontró que el aquí demandante haya presentado ante esta Superintendencia petición alguna mediante la que indagara sobre el negocio ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., razón por la que NO ES CIERTO lo afirmado por el actor en el dicho. Valga la pena manifestar que en las pruebas allegadas con la reforma no reposa documento alguno que acredite tal antecedente.**

Finalmente, lo relacionadas con la SS **NO NOS CONSTAN** pues se refiere al actuar de una entidad distinta a la SFC.

- Frente a los **HECHOS 6) y 7) NO NOS CONTAN** los términos de la información suministrado al aquí demandante por los asesores de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. pues son personas ajenas a esta Superintendencia. En cuanto a las verificaciones realizadas por medios informáticos, es deber del actor acreditar que las mismas fueron realizadas.
- En cuanto al **HECHO 8)** en el que se manifiesta, sin hacer especificación respecto de una determinada persona, que varios inversionistas solicitaron a esta Superintendencia información sobre la legalidad de las operaciones adelantadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., debemos señalar que al revisar el Sistema de Gestión Documental – SOLIP, que contiene la totalidad de trámites atendidos por esta Entidad, se encontraron las siguientes peticiones relacionada con la referida sociedad:

No.	RADICADO	PETICIONARIO
1	2013041076-000 del 6 de mayo de 2013.	Alvaro Iván Rojas
2	2013041086-000 del 6 de mayo de 2013.	Mauricio Santiago Jiménez



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3	2016112058-000 del 5 de octubre de 2016.	Dr. Diego Felipe Vega Jiménez en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Diana Patricia Maldonado Rincon y Carlos Humberto Garzón.
4	2018019222-000 del 14 de febrero de 2018.	Luisa Fernanda Daza Manrique.

Frente a dichas comunicaciones estimamos oportuno hacer un breve resumen del objeto de las mismas, así como del actuar y respuesta dadas por esta Superintendencia. Veamos:

○ **2013041076-000 y 2013041086-000.**

Los señores Alvaro Iván Rojas y Mauricio Santiago Jiménez reenviaron a esta Superintendencia vía correo electrónico copia de un folleto que les fue enviado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en el que se promocionaba el negocio de venta de pagarés-libranza, comunicaciones en la que cuestionaban si dicho ofrecimiento era “(...) otro DMG” y se solicitó “(...) para su revisión no hay (sic) sea otra pirámide.”

Con fundamentos en lo anterior se procedió a consultar la página web de dicha sociedad y se identificó que ofrecía sus servicios mediante tres sociedades, siendo una de ellas **OPTIMAL FACTORING** la cual se dedicaba a desarrollar actividades de factoring y dado que tales compañías no se encontraban, ni se encuentran sometida a la vigilancia de la SFC, con fundamento en establecido en el Capítulo II y artículo 11 de la Ley 35 de 1993 se realizó mediante los Oficios No. 2013041076-001 y 2013041086-001 del 27 de febrero de 2014 el respectivo traslado a la entidad competente, que para el caso es la Superintendencia de Sociedades.

De otro lado, mediante los Oficios de respuesta No. 2013041076-002 y 2013041086-002 del 30 de mayo de 2014, se informó a los accionantes entre otras cosas que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “(...) **NO se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia, razón por la que no está autorizada para adelantar actividades exclusivas de las entidades vigiladas por este Organismo y dentro de ellas, captar masivamente recursos del público.**”, así como el traslado realizado a la SS.

○ **2016112058-000.**

Mediante petición del 5 de octubre el 2016 el Dr. Diego Felipe Vega Jiménez en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Diana Patricia Maldonado Rincon y Carlos Humberto Garzón solicitó a este Organismo “(...) **INTERVENCIÓN Y TOMA DE POSESIÓN POR CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL SIN AUTORIZACIÓN ESTATAL** debido a que **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. (...) ha realizado Captación masiva y habitual de dineros del público (...)**”

Considerando que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no se encuentra bajo vigilancia de esta Superintendencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se remitió la mencionada comunicación a la SS para los efectos propios de su competencia, teniendo en cuenta que la mencionada firma se encuentra en la lista de las sociedades vigiladas por esa Entidad. Actuación que se surtió mediante Oficio No. 2016112058-001 del 12 de octubre de 2016.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Igualmente, al Dr. Vega Jiménez a través del Oficio No. 2016112058-002 del 18 de octubre de 2016 se le informó que conforme a lo dispuesto en el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero este Organismo ejerce las funciones de sanción, supervisión, certificación y publicidad, entre otras, respecto de entidades sometidas a su vigilancia. Se precisó que la referida sociedad **NO** se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia y que su comunicación había sido remitida por competencia a la SS. Pues se evidenció que OPTIMAL se encontraba dentro de la lista de entidades sometidas a la vigilancia de esta autoridad, además por ser la competente para vigilar las sociedades que desarrollan operaciones de factoring y la facultada conforme al Decreto 4334 de 2008 para verificar si la citada sociedad desarrollaba operaciones que configuraran una captación ilegal de recursos del público, así como para adoptar las medidas administrativa pertinente y proceder con su intervención.

○ 2018019222-000.

La señora Luisa Fernanda Daza Manrique mediante petición radicada el 14 de febrero de 2018 solicitó información y copia de los documentos relacionados con la visita de inspección realizada por esta Superintendencia a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. A través del Oficio No. 2018019222-001 del 28 de febrero de 2018 se atendió dicha solicitud, señalando que la citada sociedad no está sometida a la inspección, vigilancia o control de la SFC, se precisó que “(...) la información relacionada con las labores de supervisión que desarrolle esta Entidad en cumplimiento de sus funciones tiene la connotación de “Información Pública Reservada” protegida por lo establecido en el literal e), numeral 3 del artículo 326 del EOSF, además los informes de las visitas de inspección que se lleven a cabo en razón de una actuación administrativa, son reservados, en virtud de lo establecido en el numeral 3° del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.”.

En virtud de lo anterior se le solicitó a la señora Luisa Fernanda remitir “(...) la correspondiente autorización del Juez de Garantías, o en su defecto cumplir con lo señalado en el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.”, pero lo que se le otorgó un (1) mes de plazo. Teniendo en cuenta que dentro del referido término no se recibió respuesta alguna de la ciudadana, esta Entidad mediante Oficio No. 2018019222-003 del 5 de abril de 2018 le indicó: “(...) este Organismo encuentra procedente decretar el desistimiento tácito de la petición y en consecuencia se ordena el ARCHIVO de la presente actuación administrativa, frente a la cual únicamente procede el recurso de reposición. Lo anterior sin perjuicio, que pueda presentar una nueva petición con el lleno de los requisitos legales (...)”

- En cuanto al **HECHO 9)**, **NO NOS CONSTA** que el demandante haya adelantado algún tipo de indagación ante la Cámara de Comercio con el fin de averiguar el objeto social registrado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., por lo que nos atenemos a las pruebas que sobre este dicho reposen en el expediente.
- Los **HECHOS 10) y 11) SON PARCIALMENTE CIERTOS**, debe precisarse que el día 6 de mayo de 2013 **se recibieron en esta Entidad dos correos electrónicos a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “pagarés-libranza” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide.** Esta Superintendencia atendiendo las funciones de prevención y control del ejercicio ilegal de la actividad financiera consideró pertinente evaluar si en el desarrollo del objeto social de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se presentaban operaciones en las cuales se pudieran estar configurando hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por lo anterior la SFC, practicó una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, del 02 al 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación.

Así las cosas, nos atenemos al tenor literal de los antecedentes y en general al total del contenido de informe producto de la visita practicada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., documento que reposa en el plenario y que se allega nuevamente con el presente escrito.

- El **HECHO 12) ES PARCIALMENTE CIERTO**. En el punto “6 CONCLUSIONES” del informe de inspección No. 11300809201300263 se indicó que: *“(…) de acuerdo con la valoración de los hechos descritos en el presente informe y del análisis efectuado tanto a la información suministrada por la entidad visitada, como aquella que la Comisión de Visita recaudó en el transcurso de la inspección, se concluye que en la operación de venta de ‘pagarés-libranza’ llevada a cabo por la sociedad Optimal Libranzas S.A.S., con sus clientes compradores, a la fecha de la presente visita, no se encuentran configurados lo supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008.*

(...)

Finalmente, es pertinente precisar que el modelo de negocio de la sociedad Optimal Libranzas S.A.S. empezó en mayo de 2012, período corto para determinar y establecer el impacto que puede presentar la siniestralidad de pagarés libranzas en los estados financieros de la sociedad, toda vez que el período evaluado corresponde a sólo 17 meses de operación.”

- Los **HECHOS 13) y 14) SON PARCIALMENTE CIERTOS**, se debe precisar que mediante Oficio No. 2013058932-010 esta Superintendencia remitió a la SS copia del informe de la visita practicada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., esto debido a que cuando se estaba adelantando la misma se presentaron en la dicha sociedad tres funcionarios de esa entidad que habían sido comisionados para llevar a cabo una toma de información, diligencia que se abstuvieron de practicar hasta tanto la SFC culminara la visita y remitiera el informe.

Ahora bien, con Oficio No. 2013058932-009 se remitió el informe de visita a la Superintendencia de la Economía Solidaria (en adelante SES), ya que en el curso de la misma se evidenciaron algunos hechos que podían ser del resorte de dicha entidad debido a la operación de compra y venta de pagarés-libranza originados de créditos otorgados por cooperativas.

- Se indica en el **HECHO 15)** que la SFC es competente para imponer medidas cautelares con el fin de evitar que cualquier persona natural y/o jurídicas ejerzan sin autorización, actividades exclusivas de las entidades vigiladas.

Al respecto es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Decreto Ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero la SFC puede imponer a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las vigiladas sin contar con autorización, una o varias de las medidas descritas en tal disposición.

Igualmente, en los artículos 325 y 326 *ibidem* se otorgan a esta Entidad facultades de supervisión, prevención y sanción respecto de personas que desarrollas actividades propias de las instituciones vigiladas.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De lo anterior, se puede inferir que para que la SFC adopte alguna medida contra una no vigilada se debe evidenciar que esté desarrollando sin autorización una actividad propia de una entidad vigilada y para el caso en particular la sociedad Optimal Libranzas S.A.S. realizaba compra y venta al descuento de cartera de créditos instrumentada en títulos valores de contenido crediticio denominados “pagarés-libranza” y como se ha señalado en párrafos anteriores y como se explicará con detalle más adelante, en la visita practicada a la referida sociedad se concluyó que la fecha en que se practicó *no se encontraron configurados lo supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008.*

- En los **HECHOS 16) al 19) y 21)** se indica que el demandante con ocasión de las presuntas indagaciones elevadas ante la SFC y SS suscribió con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. un contrato de compraventa para la adquisición de libranzas, que con ocasión del negocio realizó unos pagos a la referida sociedad y que recibió una suma de dinero por concepto de amortización y que ante la cesación de pagos le quedaron adeudando dinero. Al respecto, debemos señalar que dichas circunstancias **NO NOS CONSTAN** pues la SFC no fue parte de la relación comercial celebrada entre la citada sociedad y el demandante.

Es de señalar que con la demanda se aportaron como prueba la copia del contrato y de una consignación a favor de la mencionada sociedad. Al respecto debemos indicar que, en relación con su validez, nos atenemos a lo que se pruebe a lo largo del proceso, así como a lo que resulte del juicio que deba realizarse en torno a su legalidad y veracidad y, en general, lo que pueda concluirse a partir de ellos. Vale la pena llamar la atención del Despacho, pues ni en los antecedentes fácticos y tampoco en las documentales se menciona a la SFC. Esto permite concluir que los negocios presuntamente celebrados corresponden claramente a acuerdos de voluntades de carácter netamente privado, suscritos única y exclusivamente por el aquí demandante y OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, sin la participación, el concurso o la anuencia de mi representada.

- Respecto a los **HECHOS 22) al 26) y 29) al 31)** en los que se indica que el demandante recibió en el plan de pagos por parte del interventor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. unas determinadas sumas de dinero y le quedaron adeudando otro monto, que se hizo parte del proceso de liquidación de dicha sociedad, se entiende que se refieren al proceso de intervención, y se hace mención a las funciones de los interventores o agentes liquidadores nombrados por la Supersociedades, debemos manifestar que **NO NOS CONTAN** tales afirmaciones ya que se refieren a actuaciones surtidas al interior del proceso jurisdiccional que adelanta una entidad distinta a la SFC, en este caso la SS.

No obstante, lo relatado en estos numerales es susceptible de ser tenido en cuenta como confesión de parte, a efectos de establecer que el demandante ya se encuentra reclamando las sumas pretendidas a través del presente medio de control, en la instancia por antes referida.

Finalmente, los dichos relativos a las funciones del agente interventor o liquidador no constituyen un hecho sino una manifestación subjetiva del actor la cual debe acreditarse.

- Frente a los **HECHOS 20) y 27)**, en los que se señala que a mediados del año 2016 OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. cesó el pago de las amortizaciones, justificando dicha circunstancia en razones de orden operativo de cartera, además de asuntos relacionados con las pagadurías y menesteres internos de las cooperativas originadoras de los pagarés-libranza las cuales adujeron siniestros de cartera, debemos indicar que el contenido de los dichos corresponde a apreciaciones o señalamientos del demandante que deberán ser probados en el proceso.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En este orden de ideas **NO NOS CONSTA** lo manifestado en los mismos, ya que como se indicó anteriormente mi prohijada no hizo parte del negocio jurídico al que se ha hecho referencia. De otro lado, es pertinente que se **tenga por sentado y a manera de confesión del accionante, que desde esa fecha se produjo el presunto incumplimiento contractual que le originó una afectación, esto para el conteo del término de caducidad.**

- Respecto al **HECHO 28) ES CIERTO** que la SS mediante Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 adoptó una medida de intervención administrativa respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y ordenó a dicha sociedad la suspensión inmediata de las operaciones de captación masiva. Ahora bien, teniendo en cuenta que el referido acto administrativo no fue expedido por la Entidad que representó y que es un documento público, nos atenemos al tenor literal del mismo.
- Respecto a lo señalado en el **HECHO 32)** en el que se indican que la SFC y la SS conocieron a plenitud el modelo de negocio desarrollado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y no obstante ello, no desplegaron acciones para evitar que continuaran en operación, debemos indicar que son meras apreciaciones subjetivas que deben ser probadas dentro del proceso, pues dan a entender una realidad totalmente distorsionada y amañada del asunto que **NO ES CIERTA.**

De otro lado, como se dijo anteriormente la SFC realizó una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. Culminada la visita se concluyó que no se configuraban los supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008. Es de precisar que la citada actuación será explicada más adelante.

Frente a las manifestaciones relacionadas con la SS, debemos señalar que se refieren a una autoridad distinta a la Superfinanciera, razón por la que **NO NOS CONSTAN** y deberán ser probadas por el demandante.

- Señala el **HECHO 33)** que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. haya defraudado a aproximadamente trescientas trece (313) personas bajo su modalidad de negocio, por lo tanto, dicha afirmación deberá ser probada dentro de la presente acción, en consecuencia, nos atenemos a lo que se pruebe.
- Respecto al **HECHO 34)**, en el que se hace una transcripción de las actividades inscritas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, es de señalar que las mismas corresponden a la autonomía de la voluntad de los socios, quienes determinaron que actividades iban a registrar. **Se observa que ninguna corresponde a una actividad exclusiva de las entidades vigiladas por esta Superintendencia, razón por la cual es dable afirmar, sin lugar a duda que dicha sociedad no se encontraba sometida a la vigilancia e inspección de esta Entidad.**
- En relación con los **HECHOS 35) y 36)**, en los que se indica que el demandante se involucró en el proceso comercial ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. debido a la información brindada por la SFC y la SS, **NO ES CIERTO RESPECTO DE LA SFC Y NO NOS CONSTA FRENTE A LA SS.** Como se puso de presente al contestar el hecho 5), **NO ES CIERTO** que el accionante haya realizado algún tipo de indagación ante esta Superintendencia.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- En lo atinente al **HECHO 37)** en el que se hace mención a las actividades de captación, manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público y así de los supuestos de captación contenidos en el decreto 3227 de 1982, es necesario señalar previamente que dicha norma fue modificada por el decreto 1981 de 1988 y hoy están contenidas en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015. Precisado lo anterior, debe indicarse que no se trata de un hecho, sino de la cita textual de una norma, por ende, nos atenemos al tenor literal de la misma.
- En cuanto a los **HECHOS 38), 45), 46) y 53) al 55)**, en los que se citan artículos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y Decreto 4334 de 2008, debe indicarse que no se trata de hechos sino de la cita de normas, en consecuencia, nos atenemos al tenor literal de las mismas.

No obstante, resulta necesario distinguir que el artículo 2 del Decreto 4334 de 2008 corresponde a las atribuciones de intervención otorgadas a la SS respecto de las personas naturales o jurídicas que desarrollan las actividades descritas en los literales a) y b) de dicha disposición. Así, dicha norma difiere de las competencias y facultades conferidas a la SFC en los artículos 108 y 326 numeral 4) literal a) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), las que con un contenido normativo autónomo se fundamentan a su vez en lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política. Y es que en virtud de éstas últimas disposiciones la SFC puede adoptar medidas cautelares frente a cualquier persona natural o jurídica de derecho privado que, sin contar con la autorización respectiva, desarrolle actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la SFC, así como de cualquier otra que pueda estar incurriendo en captación, manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público.

La facultad mencionada en cabeza de la SFC, no es otra que la materialización de lo que se puede denominar como función administrativa de supervisión y control en desarrollo de la cual a esta Superintendencia le corresponde inspeccionar, vigilar y controlar a las entidades que cuentan con autorización para constituirse, funcionar y que a la vez son habilitadas por la ley para manejar recursos captados del público. Lo anterior de conformidad con las normas legales pertinentes, como son, entre otros, los artículos 325 y ss. del EOSF que definen la naturaleza, los objetivos, las funciones y las facultades de este Organismo, así como también la obligación de prevenir y controlar que las personas no vigiladas realicen actividades como la captación ilegal de dinero, para lo cual aplica lo establecido en el artículo 108, literal d) numeral 1, del artículo 325, literal a) numeral 4 y literal b) numeral 5 del artículo 326 del EOSF, Decreto 1068 de 2015 y Decreto 4334 de 2008.

No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008 es competencia privativa de la SS adelantar la intervención y toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las entidades que no están sometidas a la vigilancia de la SFC y por ende no cuentan con la autorización para ejercer la captación de recursos del público.

Finalmente, es importante resaltar que la SFC no adoptó medidas respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, toda vez que de la visita efectuada, de las operaciones y de los documentos analizados no se evidenció la configuración de supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizados de recursos del público dentro de la actividad desarrollada por la misma para ese momento, tal y como se explicará más adelante.

- Señala el **HECHO 39)** que para el momento en que se practicó la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., dicha empresa había celebrado contratos para la venta de libranzas con más de 313 personas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sobre el particular, dicho hecho **NO NOS CONSTA**, pero es necesario reiterar que la SFC realizó **una visita de inspección a dicha sociedad** que se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, y una vez culminada no se evidenciaron hechos que permitieran inferir la captación masiva y habitual de recursos del público. En ese orden de ideas nos atenemos al tenor literal del citado informe.

- En relación con los **HECHOS 40) al 42)** que se refieren al promedio de operaciones realizadas por cada persona con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., indican que las ofertas para la celebración de contratos de venta de libranzas se hacían de manera abierta y finalmente que para la fecha de celebración del contrato suscrito por el demandante con dicha sociedad, la misma había celebrado más de 20 contratos durante 3 meses, es menester señalar lo siguiente:

Ya que lo pretendido por el demandante es referirse a los supuestos de captación, debemos mencionar que tal y cómo se ha señalado a lo largo de este escrito, para las fechas en que la SFC realizó una visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., de acuerdo a la documentación estudiada y la normatividad para la fecha vigente, no se encontró evidencia de operaciones de captación ilegal de dinero, **no obstante, la SFC mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014 remitió el informe de visita a la Superintendencia de la Economía Solidaria (en adelante SES) y Superintendencia de Sociedades**. No obstante, tales la afirmación son apreciaciones subjetivas del actor, la cuales deberán ser probadas.

Por otro lado, respecto a las demás consideraciones realizadas por el accionante, relacionadas con la operación de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., me atengo a lo establecido en el informe de la visita adelantada a dicha sociedad, pues en aquel se consagran las evidencias recaudadas por esta autoridad y para el efecto tal documento se aporta como prueba.

- En relación con los **HECHOS 43) y 44)** en los que se transcriben apartes del numeral 10.1 del acápite de antecedentes de la Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 proferida por la SS y se indica que conforme a lo dispuesto en dicho acto administrativo se fijó en la página web de la entidad un aviso de prensa del agente interventor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., debemos señalar que esta Superintendencia se atiene al contenido literal de la Resolución y a lo que se pruebe en relación con el cumplimiento a lo ordenado en la misma, pues son actuaciones que no fueron ejecutadas por mi representada.
- En cuanto a lo argüido en los **HECHOS 47) y 48)** en los que se afirma que la SS y la SFC a pesar de advertir el tipo de negocios que ejecutaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no ejercieron ninguna medida que buscara detener la comercialización de libranzas, a pesar de las visitas celebradas durante los años 2014, 2015 y 2016, y que solamente hasta el 15 de noviembre de 2017 fueron adoptadas.

Debemos anotar que tal aseveración es una apreciación subjetiva del demandante y debe ser probada al interior del proceso, pues da a entender una realidad distorsionada y amañada del asunto, que por lo menos en lo que atañe a la SFC, **NO ES CIERTA**.

Con el fin de desvirtuar las afirmaciones relacionadas con esta Superintendencia, se procede a hacer un breve resumen de las actuaciones desplegadas por mi representada:

Mediante Oficio No. 2013058932-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-005 del 29 de noviembre de 2013.

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente. Por lo anterior, la SFC consideró pertinente realizar visita de inspección tanto a la sociedad, como a algunas de las Cooperativas.

Teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

De otro lado, al evidenciar que las Cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, se estimó que dicho tema era del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la cual se le trasladó una copia del informe de inspección para lo de su competencia.

- En lo atinente al **HECHO 49)** que se refiere a las supuestas investigaciones realizadas por el demandante mediante peticiones administrativas dirigidas a la SFC y a la SS, es de mencionar que **NO ES CIERTO en lo que atañe a la SFC**, pues tal y como ya se indicó, una vez verificado el Sistema de Gestión Documental - SOLIP que contiene los trámites adelantados por esta autoridad, **no se encontró petición alguna formulada por el señor Diago Escobar.** Además, se reitera que con la demanda no se allegó prueba alguna que acredite lo que afirma el accionante.

Respecto de la SS, **NO NOS CONSTAN** las afirmaciones ya que se refieren al actuar de una entidad distinta a mi prohijada.

- Frente a los **HECHOS 50) al 52)** atinentes a que la SFC y SS con ocasión de las respuestas de las supuestas peticiones administrativas interpuestas por el demandante, avalaron y tuvieron pleno conocimiento de las actividades delictivas que desarrollaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., al igual que del conocimiento de la suscripción de más de 20 contratos para la venta de libranzas en un periodo de tres meses, debemos mencionar que respecto de la SFC **NO ES CIERTO** lo acotado, pues como se ha expuesto, no se recibieron solicitudes del aquí demandante relacionadas el negocio celebrado con la referida sociedad. De igual manera, se hace hincapié en que de la visita realizada por la SFC se concluyó para la fecha, que las actividades realizadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., NO configuraban actividades de captación o recaudo no autorizado según el Decreto 4334 de 2008 y el Decreto 1981 de 1988, tal y como consta en el informe de inspección que se aporta.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con fundamento en lo anterior, se desprende con total claridad que lo afirmado por el demandante en estos hechos, como se dijo atrás, no son más que simples juicios de valor por completo ajenos a la realidad de las actuaciones adelantadas por la SFC, lo que puede ser constatado con las pruebas documentales que se aportan con el presente escrito.

De otro lado, **NO NOS CONSTAN** las afirmaciones relacionadas con la SS, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

- En el **HECHO 56)** se indica que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. dado el número de operaciones, desarrollaba actuaciones privativas o reservas de manera exclusiva al sistema financiero aprobado por la SFC como bancos, entidades de ahorro y vivienda, debe señalarse que se trata de apreciaciones de la parte demandante que **NO SON CIERTAS** y deberán ser probadas por el aquí demandante.

Así las cosas, me opongo de plano a cualquier imputación de responsabilidad que se predique respecto de la SFC en los términos que a continuación se presentaran.

5. FUNDAMENTOS JURÍDICO DE LA DEFENSA

5.1. Estructura de la responsabilidad extracontractual de la administración pública.

En la Constitución Política, específicamente en el artículo 90, se estableció que:

“Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir con éste”.

En virtud de dicha norma, la estructura de la responsabilidad sufrió un proceso de “constitucionalización”, erigiéndose en garantía de los derechos e intereses de los administrados, así como de su patrimonio, en el entendido de que el Estado será obligado a reparar los **daños antijurídicos** que le sean **imputables**, ya sea por la acción o la omisión de sus agentes.

En tal sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha entendido que a la luz de lo prescrito por el referido artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual de la Administración¹, tiene como fundamento² la determinación de una serie de elementos que deben concurrir para la declaración de la responsabilidad estatal, siendo estos: la determinación de un **daño antijurídico** causado a un administrado, así como la **imputación** del mismo a la administración pública, tanto por la acción, como por la omisión de un deber y, por último, el **fundamento del deber de reparar**, que debe dar cuenta de las razones de derecho por la que los perjuicios deben ser indemnizados.

En cuanto a la imputación debe destacarse que se trata de juicio que demanda un doble esquema de análisis en el cual debe efectuarse un juicio de **imputación fáctica**, por un lado, y uno de

¹ La responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son el resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado 52001-23-31-000-2001-00960-01 (33976). Actor: Cleofas Tumbajoy Alarcón; Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y otros. Medio de Control: Reparación Directa. Sentencia del 16 de febrero de 2017.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

imputación jurídica, por el otro, siendo la imputación desde un punto de vista fáctico, un ejercicio de atribución material o eminentemente causal del origen del daño o los elementos naturales que han intervenido en su producción. Entretanto, la imputación jurídica hace referencia a un escenario en el que el juez debe determinar si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica o de tipo normativo de reparar el daño.

Ahora, desde una perspectiva clásica la responsabilidad también ha sido entendida bajo los siguientes derroteros, los cuales entraremos a desarrollar:

5.1.1. El daño antijurídico

La Corte Constitucional, con ocasión a una demanda presentada contra una parte del artículo 50 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-333 de 1996, tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la cláusula general de responsabilidad estatal, y en lo que al daño antijurídico se refiere precisó que no existe una definición expresa del mismo, debiéndose entonces recurrir a los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en los que se constata que la noción fue adoptada del texto constitucional español.

Señaló la Corte en dicha oportunidad, que la doctrina española ha entendido el daño antijurídico como *“el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”*, concepto precisado igualmente por el Consejo de Estado en sentencia de 13 de julio de 1993³, como *“la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en obligación de soportar”*.

Así las cosas, es claro que el concepto de daño antijurídico obedece a un mecanismo de protección por parte del Estado que se origina como respuesta a los perjuicios que pueden ser ocasionados por las diversas actividades ejercidas por el poder público, lo cual se encuentra armonizado con los principios constitucionales de solidaridad e igualdad, pues el fin último de este instituto jurídico es lograr reparar e indemnizar a una persona que ha sufrido una merma que no está en la obligación de soportar conforme al ordenamiento jurídico.

5.1.2. Imputación (por acción u omisión de las autoridades públicas)

Para poder endilgar responsabilidad en cabeza del Estado es necesario determinar cuál fue la fuente que originó el daño, es decir, es necesario establecer la ocurrencia de hechos, operaciones administrativas, actos, omisiones, lo que a su vez permite establecer quién es el responsable y bajo qué régimen y título se harán las eventuales declaraciones y/o condenas.

Ahora bien, dadas las especificidades de este caso, teniendo en cuenta el título con fundamento en el cual la parte actora pretende imputar responsabilidad a mí representada (“omisión”), es menester precisar que la *omisión administrativa*, de acuerdo con el tratadista Libardo Rodríguez está definida como: *“las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos respecto de ella. Es decir, consisten en que la administración se abstiene de actuar cuando debería hacerlo.”*⁴, lo que nos permite inferir que en el presente asunto estamos ante un régimen de responsabilidad subjetiva bajo el título de falla en el servicio, lo cual como se demostrará a lo largo de este escrito, no se configura

³ Corte Constitucional. Sentencia C- 333 del 1° de agosto de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

⁴ RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo. Editorial Temis. Bogotá 2000. Págs. 195 a 198.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

en este caso, dado que la SFC actuó y lo hizo de manera diligente y oportuna, de acuerdo con sus funciones y atribuciones legales.

Por esa razón, **hechos como los que aquí se debaten, se insiste, deberán ser analizados a la luz de los requisitos establecidos para el régimen de responsabilidad subjetiva que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración, es decir, que el título de imputación corresponde al de la falla en el servicio y conforme la jurisprudencia lo ha previsto el examen de dicha responsabilidad ha de realizarse con base en la disposición legal o reglamentaria que consagra el deber que se alega como omitido, o incumplido,** con el objeto de establecer si en efecto, la Administración incurrió en omisión o dilación en el cumplimiento del deber, y si éste fue determinante en la producción del daño.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la actividad de la Superintendencia Financiera tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero y del mercado de valores por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, como quiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado⁵. Frente a este tópico ha señalado:

“De toda esa actividad se deduce, sin mayores elucubraciones, que la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-, no omitió, descuidó o retardó sus deberes de inspección, control y vigilancia, respecto de La Fortaleza S.A., menos aún durante su intervención hasta la toma de posesión de bienes, haberes y negocios con fines de liquidación, pues son claras las gestiones encaminadas a que la entidad vigilada pudiera continuar con el desarrollo de su objeto social, pese a los inconvenientes y problemas de solvencia y cumplimiento de todo tipo de normas de orden financiero.

Ahora, en torno a que con su gestión pudo haberse evitado la toma de posesión y consecuente liquidación, cabe precisar que la función de supervisión de la Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los accionistas y/o depositantes o ahorradores contra cualquier pérdida, por el contrario, tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, comoquiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado.

Así lo ha resaltado esta Subsección al señalar:

*“Sobre este punto, vale la pena resaltar que **la obligación a cargo de la Superintendencia no es de resultado**, pues según la carga obligacional contenida en el EOSF, la cual se expuso en precedencia, **sólo está obligada a revisar la actividad de los establecimientos financieros y a vigilar y controlar dicha actividad, pero no a coestionar o evitar los riesgos propios del sistema financiero.**”⁶*
(Negritas fuera de texto).

5.1.3. Nexo de causalidad

La relación de causalidad, en términos generales, se puede entender como el vínculo entre un antecedente y una consecuencia, y se contrae al estudio de los diferentes títulos de imputación que permiten establecer si la responsabilidad es o no atribuible a la Administración.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. 13 de abril de 2016. Radicado 1999-00015 (35354). Velásquez Rico, Marta Nubia.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 25000 23 26 000 2000 02312 01 (29944); M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este nexo de causalidad se puede romper cuando opera una causa extraña, esto sucede cuando el daño no es imputable a la autoridad administrativa. Como causas extrañas se conocen el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero.

En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa ha precisado:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta proviene del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla en el servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandando porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien fue por su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)” (Se resalta)

A tenor de lo anteriormente señalado, es claro que la culpa exclusiva de la víctima es eximente de responsabilidad estatal cuando además de demostrada la causalidad material, se demuestra que la víctima participo y fue la causa eficiente en la producción del daño, actuar que puede catalogarse de culposo al desatender las reglas u obligaciones de prudencia, diligencia y estudio de los negocios que decide ejecutar.

Por otro lado, en lo que al hecho del tercero respecta, se tiene que el mismo exonera de responsabilidad al Estado cuando se demuestra que ese tercero es “*completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal*”.

6. ANALISIS PROBATORIO DEL CASO CONCRETO

Conforme lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Este principio procesal es conocido como ‘*onus probandi, incumbit actori*’. A partir del estudio de dicho principio, es dable afirmar que tanto demandante como demandada tienen el deber de probar los hechos en que sustentan las pretensiones y excepciones propuestas, y en caso tal que dicha situación no se verifique por parte del Juez, la consecuencia jurídica es la negación de las pretensiones elevadas, como quiera que ante la falta de la prueba no puede tenerse por cierto el hecho. Sin embargo, no está de más advertir que una vez son arrimadas las pruebas a una controversia judicial, las mismas hacen parte del expediente y no de las partes, y en ese sentido habrán de ser analizadas en su totalidad siempre y cuando las mismas reúnan los requisitos formales que la ley exige para poder tenerlas como tal.

⁷ Consejo de Estado. 25 de Julio de 2002. Radicado 13744. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. 28 de enero de 2015. Radicado 32912. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bajo ese escenario, cabe indicar en relación con el asunto que se discute, que la SFC realizó las visitas de inspección a la que se ha hecho referencia a lo largo de esta contestación, atendiendo las facultades contenidas en el literal d) numeral 1 del artículo 325 y literal a) del numeral 4 del artículo 326 del EOSF, los numerales 1, 2 y 22 del artículo 11.2.1.4.35 del Decreto 2555 de 2010 y el artículo 108 del Decreto 663 de 1993 o EOSF, modificado por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003, en función de los cuales este ente de control revisó el modelo de negocios de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para establecer si recibía dinero del público, cuál era la forma en que lo hacía y determinar si en desarrollo de tal actividad se evidenciaba la existencia de hechos objetivos o notorios de captación en los términos previstos en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con los supuestos de captación de recursos del público consagrados en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.

A tenor de lo anterior, se determinó que la sociedad visitada realizaba compra y posterior venta al descuento de pagarés libranzas en virtud de la suscripción de contratos de compraventa de estos títulos valores, pero del análisis y estudio de la información recabada en la visita desarrollada, se concluyó que no se configuraban los hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva de recursos del público, por lo que las afirmaciones contenidas en la presente demanda, que aducen una supuesta conducta omisiva por parte de mi representada, no se corresponden con los antecedentes y conclusiones consignadas en el Informe de Inspección, por lo que los dichos del demandante terminan siendo solo conjeturas. En efecto, el material probatorio que anexa la SFC a esta intervención, acredita que contrario a lo señalado por el accionante, esta Entidad actuó de manera diligente y dentro del marco de sus competencias frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, estos elementos junto con el escaso material probatorio aportado por la parte actora, nos permitirá probar que no existió omisión alguna por parte de la SFC en el ejercicio de sus funciones y por tanto el presunto daño sufrido no tiene la connotación de antijurídico. No obstante, si el Despacho llegara a considerar que el daño existió, el mismo material probatorio nos permitirá acreditar que aquél, no puede ser imputable jurídicamente a la actuación de la Administración y por ende ser resarcible, ya que el mismo solo es imputable a la parte demandante y/o a terceros por completo ajenos a la administración pública.

Atendiendo las previsiones señaladas, consideramos del caso hacer las siguientes reflexiones:

6.1. Ausencia de daño antijurídico.

Como quiera que la presente acción tiene por objeto la reparación del daño ocasionado como resultado de las supuestas “omisiones” en ejercicio de las funciones de la SFC, es carga de la parte reclamante acreditar la existencia del daño antijurídico cuyo resarcimiento pretende y la antijuridicidad del mismo, según las previsiones del artículo 90 de la Carta Política.

En ese sentido, el demandante pretende que el presunto perjuicio que alega y que identifica como la pérdida de los dineros que aduce haber entregado a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. sea resarcido por el Estado, sin embargo, no sustenta sus afirmaciones con material probatorio idóneo que permita identificar en qué consistió la presunta omisión en que habría incurrido esta Superintendencia.

Es claro entonces que como quiera que en la demanda se reclama una indemnización derivada de la pérdida de los dineros que según se afirma fueron invertidos en OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ante la deficiencia de los medios de prueba aportados, no es posible predicar la existencia cierta y actual de la pérdida a que se hace referencia. Debe recordarse que, conforme a lo afirmado por el accionante, el reclamo que se pretende ya fue objeto de estudio en el proceso de intervención que adelanta la SS respecto de la referida sociedad. Por lo tanto, no es procedente tener por probadas las pretensiones



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

de la demanda ante el carácter hipotético del presunto daño, ya que el demandante pretende la reparación de los perjuicios presuntamente irrogados en el escenario de la intervención. Así las cosas, consideramos se impone la necesidad de proferir un fallo que desestime la existencia misma del daño, así como el carácter antijurídico del mismo y que en consecuencia niegue las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, en el evento en el que el Despacho considerara que efectivamente existe un daño, ese menoscabo no tendría las características de un daño antijurídico, pues se habría originado en la decisión libre, deliberada y autónoma de las partes involucradas de realizar un negocio jurídico, en cuya materialización no tuvo injerencia alguna la SFC, pues esta Entidad no tuvo relación de ninguna naturaleza con el acto de inversión y entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Para ilustrar esta noción resulta oportuno traer a colación los criterios que ha señalado el Consejo de Estado en cuanto a la antijuridicidad del daño como fuente del deber de reparar:

*"A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables". lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como **"la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho" o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que "el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación.***

Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:

La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (artículos 228 y 20 de la Constitución) sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado Social de Derecho (artículos 10 y 13 de la Carta).

Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que "superan la normal tolerancia" o que impiden el goce normal y adecuado del derecho. Específicamente en cuanto a la razonabilidad de la limitación del derecho a la propiedad y al límite de la obligación del titular a soportar dicha restricción en el ejercicio de su derecho, para efectos de establecer el deber de los particulares de reparar los daños, la doctrina Argentina ha dicho lo siguiente: (...)

*La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resulta antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las **personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos.** No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica. en tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución). **En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el***



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares.⁹ (Negrilla fuera del texto)

En ese sentido, como bien lo anota la jurisprudencia citada, no todo daño entendido como menoscabo a un interés o un derecho, es **antijurídico**, es decir, no todo perjuicio irrogado a un particular conlleva de suyo los ingredientes normativos que estructuran el deber de reparar. Así, para que exista un daño y este sea antijurídico, es necesario que la víctima demuestre que no estaba en el deber conforme al ordenamiento jurídico, de soportarlo. De allí que acertadamente se tenga que, si se llegaran a probar los supuestos daños que se reclaman por el demandante, los mismos no son antijurídicos, pues se debe considerar que aquel experimento una merma patrimonial **como la que puede tener lugar en cualquier otro negocio de riesgo monetario, la cual se magnificó, desde luego, ante la existencia de los altos rendimientos que el accionante señala le fueron prometidos.**

Así, si se llegará a demostrar que el actor efectivamente hizo entrega de una suma de dinero a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. la misma fue una decisión libre y voluntaria de él, debiendo considerarse que quizá lo hizo obnubilado por la rentabilidad ofrecida en la operación de compra de pagarés libranzas. Se debe recalcar que para el actor los deudores de las libranzas eran personas desconocidas, aspecto que conlleva a que la operación que realizó fuera riesgosa. De otro lado, en el expediente no reposan pruebas que acrediten que el demandante por precaución hubiera revisado físicamente los pagarés que aduce haber adquirido o bien en las oficinas de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la empresa que indica tenía la custodia de dichos título; es decir, no se cercioró si quiera de la existencia real de los mismos, como tampoco se evidencia su diligencia en al menos verificar el comportamiento de la deuda, del pago de dicha cartera, circunstancias que también demuestran la culpa exclusiva a cargo del accionante que entregó su dinero sin verificar las condiciones reales del negocio.

En el presente caso no se puede desconocer que el demandante esperaba obtener unas utilidades del negocio aleatorio que celebró, de las cuales él sería el único beneficiario. Por lo tanto, no tendría sentido que las pérdidas del negocio o los riesgos de la operación emprendida tenga que asumírselos el Estado, asumiendo como si la Administración hubiese participado en el acto autónomo y libre que hoy viene a ser la causa de los perjuicios. En ese escenario, consideramos que una correcta aproximación al asunto que nos concita, debe tener en cuenta que como no todo daño es antijurídico, el daño que no tiene esta característica debe ser soportado por el particular cuando este ha concurrido a su causación, pues los riesgos de su decisión no pueden socializarse para que el Estado y la sociedad en su conjunto respondan por decisiones de que haber prosperado solo habrían supuesto un beneficio individual para el hoy demandante.

Así las cosas, ante el escaso material probatorio que acredite la existencia de los daños que se pretenden sean indemnizados, así como su antijuridicidad, la falta de acreditación de alguna conducta omisiva a cargo del Estado, o que de dicha conducta haya generado el perjuicio, elementos sobre los que se estructura la responsabilidad extracontractual del Estado, lo jurídicamente procedente es negar la totalidad de las pretensiones, pues aunado a tal circunstancia, tal y como se verá más adelante, tampoco se configuran los dos elementos restantes que permitirían imputar una eventual responsabilidad a mi prohijada por los hechos alegados en la demanda.

6.2. Inexistencia de una omisión imputable a la SFC.

Superado el aspecto relacionado con la existencia del daño cuya reparación se pretende por la

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Exp: 29.590. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

presente vía judicial y como quiera que en los hechos de la demanda se evidencia que la responsabilidad de mi representada se afinca o atribuye a una supuesta falla del servicio por “omisión”, procede poner de presente la **inexistencia de omisión imputable** a esta Entidad, por lo que a continuación se señalarán los principales aspectos de la actuación administrativa que con diligencia, previsividad y asertividad este ente de control efectuó respecto OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

6.2.1. La sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no está ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia.

Debe llamarse preliminarmente la atención frente a una realidad incuestionable y es que la referida sociedad con la que los hoy demandantes establecieron en su momento el vínculo contractual causante del daño, no estuvo ni ha estado sometida a la vigilancia de la SFC. Es oportuno precisar que las entidades y actividades respecto de las que esta autoridad ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Bajo este entendimiento, es claro que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia. En virtud de ello, es necesario que se constituyan en la forma y términos que establecen el artículo 53 y siguientes del EOSF y la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica de la SFC. Tales disposiciones señalan que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia, **circunstancia que en el presente asunto jamás ocurrió.**

6.2.2. Actuación diligente de la SFC respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S a pesar de no ser una entidad vigilada, con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público. Inexistencia de omisión imputable por parte de este Organismo de Inspección y Vigilancia.

Aunque la citada sociedad, insistimos, nunca estuvo sometida a la inspección y vigilancia de la SFC, esta autoridad realizó dos visitas de inspección a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., que se adelantaron entre el 9 y 17 de julio de 2013, sin embargo, entre el 2 y 6 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. La finalidad de la misma era establecer si dicha persona jurídica se encontraba realizando operaciones de captación o recaudo no autorizado de recursos del público, a tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 326 numeral 4) literal e) del EOSF, en armonía con el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, concordante con las disposiciones previstas en el Decreto 4334 de 2008.

6.2.2.1. Resumen y conclusiones de la visita realizada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo.

Ahora bien, de lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “pagarés-libranza” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

6.3. Ninguna autoridad del estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

Como se ha señalado a lo largo del presente escrito, el demandante acude al presente medio de control de Reparación Directa, para reclamar solidariamente de las entidades demandadas, un resarcimiento de índole económico, fundado en una presunta responsabilidad extracontractual de la administración pública por supuestamente “avalara” el desarrollo de las actuaciones de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Indica que dicha sociedad desplegó conductas de captación masiva e ilegal de recursos del público, que en virtud de ello las demandadas habrían incumplido sus deberes de inspección, vigilancia y control en relación con el funcionamiento de la sociedad encartada en el asunto, a la que afirma haber entregado sumas de dinero con el fin de comprar títulos valores. Por ello, en su sentir ese hecho lo habilita para reclamar perjuicios materiales por la presunta omisión en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008.

Pues bien, frente al cumplimiento de los contenidos obligacionales a los que está sometida esta Entidad, conviene precisar que desde los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, se establece que las autoridades públicas, como es el caso de mi prohijada, no pueden ejercer funciones distintas de las que expresamente les atribuye la Constitución y la ley. Por ende, la responsabilidad que se quiere endilgar en el presente caso, basada en el supuesto incumplimiento de las funciones a cargo de las demandadas, debe analizarse, considerando los límites impuestos por el mandato constitucional en ciernes, en tanto las autoridades no pueden responder por hechos o cadenas causales diferentes a aquellas que expresamente están bajo su tutela.

Bajo esa óptica, debe decirse que la SFC no tuvo participación, directa o indirecta, en los actos y hechos con base en los cuales ahora se pretende derivar su responsabilidad. Y es que no basta con efectuar acusaciones temerarias e irreflexivas para que se configuren las condiciones en las que ha de incurrirse para que el Estado deba responder por su acción u omisión. En relación con las exigencias de orden jurídico que deben acreditarse para que el Estado pueda ser responsable, ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado:

“Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente la Sala, que la responsabilidad de la Administración no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades, para cuya protección están establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a un Estado ideal, sino con referencia concreta a la Administración a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede estar obligado a lo imposible”.*¹⁰ (Negrilla fuera del texto)

De modo que, ante la inexistencia de prueba que sustente no solo el presunto perjuicio o daño patrimonial alegado por el accionante, sino la omisión en que habría incurrido el Estado y cómo ésta sería la causa eficiente del daño, se impone negar las pretensiones de la demanda, con mayor razón cuando el eventual daño no es ni puede ser consecuencia directa de un acción u omisión que pueda atribuirse a la SFC, aspecto al que con facilidad podrá arribar el Despacho al realizar un simple cotejo del marco jurídico que regula las funciones y competencias de esta Superintendencia.

Siguiendo la argumentación ofrecida hasta este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos necesarios para que prospere la responsabilidad del Estado por la omisión de sus funciones:

*“En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico y; d) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a éste último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(...)”*¹¹

Como puede observarse, en el caso de las Superintendencia no basta con argumentar dentro del proceso que éstas tienen una competencia legal de supervisión sobre la actividad de los particulares, **adicionalmente se debe demostrar que una vez se tuvo conocimiento de la irregularidad cometida no se adelantaron, se adelantaron tardíamente o se usaron los medios inadecuados para interrumpir el proceso causal que genera el daño en el patrimonio económico de los usuarios del servicio o actividad objeto de control, inspección y vigilancia.**

Al referirse sobre la inspección y vigilancia del ejercicio de la actividad financiera, el Consejo de Estado ha sostenido:

*“La actividad financiera que desarrollan los particulares está sometida a la inspección y vigilancia del Estado, en razón del interés general que esa actividad reviste, por su incidencia en la economía. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado por los daños que se derivaran de actuaciones irregulares de quienes ejercen dicha actividad **se produce siempre que la entidad estatal incurra en omisión en el cumplimiento de las funciones que le corresponden como autoridad de policía administrativa, pero cuando se demuestre que de haber dado cumplimiento a tales obligaciones se hubiera podido impedir que se causaran los daños derivados de esa irregular gestión de los particulares**”*¹²

¹⁰ Consejo de Estado. Sentencia de 6 de octubre de 1995, expediente 9535. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.

¹¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-27-000-2001-00009-01 (AG).

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De lo anterior, surge con claridad que la responsabilidad por omisión en la función de policía no se genera sólo porque se haya demostrado que se incumplieron las competencias que se han asignado jurídicamente, sino que adicionalmente debe probarse que de haberse cumplido las obligaciones se habría podido impedir la generación del daño. Así las cosas, no hay deber de reparar cuando aún en cumplimiento de labores de inspección, control y vigilancia, el análisis probatorio conduce a la conclusión inexorable de que tal consecuencia negativa se habría dado con independencia de la intervención estatal.

En este punto resulta pertinente manifestar que la SFC como entidad estatal de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo consagrado en el artículo 121 de la Constitución Política, **sólo tiene competencia en relación con las materias a su cargo** y con sujeción a las funciones atribuidas por la Constitución y la ley, las cuales para el caso de esta Autoridad, se encuentran descritas, en el Decreto 2739 de 1991, Decreto – Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF), la Ley 964 de 2005, Decreto 2555 de 2010 (modificado, entre otros, por el Decreto 1848 de 2016 y el Decreto 2399 de 2019), y las demás normas que las modifiquen o adicionen.

De tal manera, esta Superintendencia es el Organismo técnico encargado de ejercer funciones de control, inspección y vigilancia **sobre las entidades que conforman los sectores financiero, asegurador, bursátil y previsional del país**, teniendo como objetivo supervisar el sistema financiero y el mercado de valores colombiano, de acuerdo con la facultad consagrada y delegada en los artículos 189 numeral 24 y 211 de la Constitución Política.

De ahí que a la SFC, desde la óptica de sus funciones administrativas, **no le compete intervenir en las relaciones contractuales entabladas entre las entidades vigiladas (y no vigiladas) y los particulares**. Es así como, esta Entidad no puede impartir órdenes referidas a la ejecución y terminación de contratos celebrados entre los particulares y sus entidades vigiladas ni mucho menos las no vigiladas, dado que su función de supervisión no trasciende a la intrusión en la esfera de la autonomía de las partes que se caracteriza por la libertad negocial, pues estaría desbordando el ámbito de su competencia administrativa. **Una interpretación contraria llevaría a pensar que esta autoridad tiene facultades para coadministrar o para dirimir diferencias que puedan surgir en las relaciones contractuales, e incluso para asumir responsabilidades por completo ajenas a su naturaleza, objetivos y funciones.**

Dicho de otro modo, la SFC, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las que ha sido expresamente facultada por la ley. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa no podría haber decretado medidas administrativas dirigidas a ordenar la toma de posesión de los bienes y haberes de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. , primero, porque en la visita realizada a la sociedad en cuestión **no se encontraron a la fecha de su realización hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva e ilegal de recursos del público, que conllevaran a la adopción de una medida cautelar para la fecha en que la misma se llevó a cabo y, segundo, porque ésta medida de intervención en el marco del Decreto 4334 de 2008 solo podía ser adoptada por la SS.**

Con todo, no se avizora en el presente caso el despliegue de conducta alguna que haya quebrantado los deberes a cargo de la SFC y de la que pueda derivarse que los presuntos daños sufridos por el accionante deban ser reparados por el Estado, al haber tenido ocurrencia por causa de una conducta que no puede endilgarse a la administración pública.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6.4. Ninguna autoridad pública en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control está obligada a lo imposible.

Para finalizar, no puede soslayarse el hecho de que la omisión que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado en el caso de la omisión de las Superintendencias se concreta, en primer término, por la ausencia de adopción de medidas administrativas cuando se tiene conocimiento de irregularidades en la actividad de las industrias vigiladas, y al cual puede llegarse por quejas de la ciudadanía, o como resultado del propio cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, o de hechos que sean materia de denuncia por los particulares.

Ello, en la medida en que sin este conocimiento previo no es posible pretender responsabilidad, pues aun cuando el Estado tiene una obligación de garantía de bienes jurídicos no está obligado a lo imposible y, por lo tanto su deber de policía administrativa no puede, bajo ninguna circunstancia, implicar el que tenga un funcionario público al interior de cada establecimiento sujeto a su control, por lo que quien demanda debe demostrar supuestos fácticos y jurídicos que permitan deducir la presencia de elementos suficientes, como para considerar que la Autoridad incurrió en un obrar irregular.

En esa línea argumentativa, sobre la naturaleza de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de las Superintendencias, el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente:

*“El propósito de las funciones de inspección, vigilancia y control que el ordenamiento asigna a la Superintendencia de Sociedades no es otro que el de velar porque las compañías vigiladas ajusten su actividad a las normas jurídicas que la gobiernan – constitucionales, legales y reglamentarias –, así como a los estatutos del propio ente social; por consiguiente, en modo alguno podría admitirse que la finalidad de las intervenciones del organismo de control frente a eventos como el sub judice pudiere consistir en hacerle asumir sus obligaciones de resultado de cara a la evitación de que se produzcan daño a los socios o a terceras personas como consecuencia del desarrollo de sus actividades por parte de la empresa sujeta a vigilancia. **La responsabilidad patrimonial del Estado, por tanto, en este tipo de casos, solamente puede quedar comprometida si se demuestra en el proceso i) que el servicio a cargo de la Superintendencia no fue prestado o lo fue de manera tardía, negligente o equivocada y ii) que esa falta en la prestación del servicio fue la que condujo a la materialización del(los) daño(s) cuya reparación se depreca**”¹³.*

Como puede apreciarse, las entidades públicas deben ser absueltas si demuestran que frente a una situación irregular adoptaron las medidas y decisiones que de ella se esperaban, **por lo que no tiene por qué asegurar que su intervención ofrezca una recuperación de una actividad económica o la recuperación de pérdidas dinerarias debidas al comportamiento de los particulares.**

Se trata, entonces, de un régimen **subjetivo** de responsabilidad atado directamente al contenido obligatorio impuesto al Órgano de inspección, vigilancia y control, y limitado a su vez por éste, en función del cual:

*“La responsabilidad patrimonial del Estado bajo un esquema de responsabilidad subjetiva, es decir sustentada en la falla en el servicio, **pues la función de supervisión no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida, sino en asegurar el cumplimiento de las normas del sector**, no puede perderse de vista que el contenido obligatorio a cargo de la Administración en este tipo de supuestos consiste en procurar la salvaguarda -so pena de la adopción de las medidas o de la imposición de las sanciones a las cuales legalmente hubiere lugar (...) cuando las víctimas que acuden a la Jurisdicción en busca de la reparación de los daños que les fueron irrogados son usuarios o terceros damnificados por el actuar de la sociedad*

¹³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2012. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

vigilada, lo primero que se observa es el hecho de que quien produce directamente el daño no es el Estado – el cual sólo desarrolla en tales eventos labores de supervisión-, sino un tercero, que es justamente la compañía intervenida; es ella la que ocasiona, de manera directa, los daños a sus clientes, de suerte que, por regla general. Frente al Estado debe examinarse si se estructura un hecho de tercero como eximente de responsabilidad. De este modo, el título de imputación del daño al Estado únicamente podría ser -se itera- la falla del servicio constituida por la omisión de la entidad oficial supervisora en el cumplimiento de sus deberes legales”¹⁴.

En el caso concreto habría que agregar un hecho al que ya hemos hecho referencia a lo largo de este escrito, pero el que, insistimos, no puede ser inobservado, y es que la sociedad que concita el presente debate judicial, a diferencia de lo sostenido por la jurisprudencia en relación con los eventos en que puede ser declarada la responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, **nunca estuvo bajo la inspección y vigilancia de la SFC.**

Por lo tanto, las actuaciones desplegadas por este Organismo frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en ningún caso se llevaron a cabo por ser ésta una industria supervisada por la SFC. Por el contrario, las mismas se hicieron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora, que sí tiene bajo su égida la Superintendencia Financiera de Colombia.

7. EXCEPCIONES.

Sea lo primero informar al Despacho que las excepciones previas, conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, concordante con los artículos 100 al 102 del Código General del Proceso, se presentarán en escrito separado. En ese orden, nos referiremos a continuación a las que consideramos son presupuestos necesarios para proferir una sentencia que niegue las pretensiones de la demanda, y en ese sentido sea favorable a los intereses de mi representada. Así:

7.1. EXCEPCIONES DE FONDO

7.1.1. Actuación diligente y conforme al marco de sus competencias por parte de la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público.

7.1.1.1. Visita realizada a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

El día 6 de mayo de 2013 se recibieron en esta Entidad dos correos electrónicos a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “*pagarés-libranza*” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide. Esta Superintendencia atendiendo las funciones de prevención y control del ejercicio ilegal de la actividad financiera consideró pertinente evaluar si en el desarrollo del objeto social de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se presentaban operaciones en las cuales se pudieran estar configurando hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público.

En virtud de lo anterior, mediante Oficio No. 2013058932-001-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos

¹⁴ Ibid.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-006-000 del 29 de noviembre de 2013.

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo, como se describen a continuación:

Nombre Cooperativa a sociedad	Radicado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización.
Estrategia Patrimonial S.A.S	2013064058	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Libranzas Group S.A.S	2013081468	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
Cooperativa Multiactiva COOPDOMUS LTDA.	2013064063	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Cooperativa Multiactiva de Palmira - COOMUPAL	2013064064	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
COOPERATIVA DE CRÉDITOS MEDINA - COOCREDIMED	2013081431	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
COOINVERCOR	2013081463	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013

En cuanto a la sociedad ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. se determinó:

- Que suscribió un contrato con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. denominado “*Contrato marco de compraventa de cartera*”, vigente hasta el 13 de noviembre de 2013. En dicho documento se aclaró que los “pagarés – libranza” vendidos a OPTIMAL provenían de las Cooperativas COOPDOMUS Y COOMUPAL.
- Celebró un contrato de cesión con OPTIMAL y COOPUMAL, por lo tanto, a partir del 23 de septiembre de 2013 OPTIMAL LIBRANZAS empezó a comprar los “pagarés-libranza” libranza directamente a la cooperativa y a recibir de manera directa el pago de los flujos.

Respecto de la sociedad LIBRANZAS GROUP S.A.S., se encontró:

- Que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. suscribió con aquella un contrato denominado “*Contrato de compra de cartera con responsabilidad*”, a través del que le compró los derechos de crédito incorporados en los “pagarés-libranza” que eran adquiridos de las cooperativas COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Se probó que el 26 de septiembre de 2013, LIBRANZAS GROUP S.A.S., OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y COOCREDIMED celebraron un contrato de cesión, con el objeto de comprar los “pagarés-libranza” directamente a la Cooperativa sin la intervención de LIBRANZAS GROUP S.A.S.

De otro lado, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. celebró contratos de compraventa de cartera que equivalen al 3.66% de la cartera adquirida con las Cooperativas COOINVERCOR, COOMUNDOCRÉDITO, COOCREDIANGULO y COOPROCO KAPITAL SOCIAL; sin embargo, la comisión de visita centró su revisión y verificación en las ventas de pagarés-libranza realizadas por ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., pues eran ellas quienes habían vendido el 96.34% del total de la cartera reportada por la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

En cuanto a las operaciones de compraventa de “pagarés-libranza” entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y los inversionistas, se evidenció que suscribían un “Contrato de compraventa de cartera modalidad pagaré-libranzas-persona natural”, en el que se establecían las condiciones de la negociación. Vale la pena mencionar que el modelo de negocio consistía en la venta de los derechos de crédito incorporados en títulos denominados “pagarés-libranza”, que se originaban en los préstamos que otorgaban las cooperativas ya mencionadas a sus asociados y que eran cancelados mediante descuento de nómina, aplicada por las pagadurías de las entidades para las que laboraban los deudores. A su vez se observó que, las cooperativas consignaban o giraban el valor recaudado a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., para que fueran consignados a favor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. quien adquiriría los títulos a descuento y se encargaba de pagar el flujo mensual a los inversionistas que los compraban, hasta su cancelación.

Con fundamento en lo expuesto, la comisión de visita concluyó en su informe:

- Los contratos suscritos entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., no gobernaban en su totalidad la relación comercial y las prácticas operativas que tenían vigentes, pues no se incluyeron aspectos relativos al procedimiento para hacer efectiva la cláusula de responsabilidad cambiaria en el evento de presentarse “pagarés-libranzas” siniestrados, incumplimiento en pagos, prepagos o títulos viciados.
- En el numeral 4.3 de la cláusula 4 y 7 de los denominados “Contratos de Compraventa de Cartera Persona Natural y Persona Jurídica”, utilizados para oficializar la venta de “pagarés-libranza”, se hacía referencia a una Fiduciaria y a la firma ERNEST & YOUNG, sin embargo, para el momento de la visita no habían sido formalizados, lo que inducía a que los inversionistas de manera errónea creyeran que esas entidades hacían parte del proceso y de los controles establecidos en la venta.
- Efectuada la revisión del contrato marco firmado con la sociedad Estrategia Patrimonial S.A., se encontró que en la consideración primera y cláusula sexta se hace referencia a operaciones de “factoring” contrario a lo señalado en el texto y forma del documento, pues en este se hace referencia a la compra de “pagarés-libranza”.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no conocía ni tenía el control de los “pagarés-libranza” que presentaban mora o impagos en los flujos mensuales. En el contrato suscrito con Estrategia Patrimonial S.A. no se contempló que dicha situación debía ser informada.
- Las sociedades Estrategia Patrimonial S.A.S. y Libranzas Group S.A.S. no reportaron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. los pagarés siniestrados, toda vez que esa información no se solicitaba a las Cooperativas, lo que llevó a que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. asignara “pagarés-libranza” con recaudo en cero o con recaudos que presentaban cuotas menores al valor esperado.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Las Cooperativas COOMUPAL y COOCREDIMED giraban a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. el valor de los flujos que se vencían durante el mes, sin embargo, no se encontró evidencia de la verificación por parte de las Cooperativas del reporte de descuentos generado por las pagadurías para constatar si existían pagarés que no hubieran sido objeto de descuento.
- ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. giraron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. el valor total de los flujos que se vencían en el mes para cancelar la mensualidad a los inversionistas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- Se revisó el caso particular del señor Farid Stefenn Uribe quien realizó una compra por \$500.000.000. OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. le asignó 116 “*pagarés –libranza*” por valor de \$668.498.202 a un plazo de 36 meses, con pagos mensuales de \$19.100.000. Se identificó que 11 de los títulos no recaudaron su flujo mensual, no obstante, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. recibió los dineros girados por las cooperativas a Estrategia Patrimonial para pagar los flujos convenidos con el inversionista.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. solicitó a las cooperativas COOPNALCRES, LEGALCOOP, MUNDOCREDITO, HABITAT, COOCREDIMED, COOMUPAL y COOPDOMUS certificaciones de la cartera siniestrada. Sin embargo, las dos ultima no remitieron la información solicitadas. Esta Superintendencia realizó visita de inspección¹⁵ a dichas cooperativas, en la cual se evidenció que vendieron “*pagarés-libranza*” con flujos cero o sin recaudar el 100% de la cuota o flujo mensual. COOCREDIMED remitió fotocopia simple de una certificación donde señaló que los pagos de los flujos de la cartera negociada se pagaban con oportunidad y suficiencia, pero no se hizo referencia a la existencia o no de cartera siniestrada, situación contraria a lo que evidenció la SFC en la visita realizada a esa cooperativa, pues se encontraron “*pagarés-libranza*” con flujos cero y con recaudo menor al esperado.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. a partir de noviembre de 2013 modificó su modelo de negocio, toda vez que en la venta de “*pagarés-libranza*” procedió a endosar los títulos en propiedad, pero sin responsabilidad a favor del comprador.
- Se hizo una revisión del “Archivo Visita Super 5 Dic 13” entregado el 10 de diciembre por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con el fin de verificar que el periodo de maduración de los “*pagarés-libranza*” vendidos coincidieran con los meses pactados y vendidos a los compradores de esos títulos, no se encontró irregularidad alguna.
- De acuerdo con la valoración de los hechos descritos en el informe y el análisis de la información suministrada por la entidad visitada, como aquella que se recaudó por la comisión de visita en la inspección, se concluyó que para la fecha de la visita, en el desarrollo de la operación de venta de “*pagarés-libranza*” llevada a cabo por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con sus clientes compradores, no se configuraban los supuestos o los hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y en el Decreto 4334 de 2008.
- De lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “*pagarés-libranza*” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos

¹⁵ Se realizaron visitas de carácter administrativo a las Cooperativas: COOPDOMUS LTDA, COOMUPAL, COOCREDIMED, COOINVERCOR y a las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A. entre los meses de julio y septiembre de 2013.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

Sea oportuno mencionar que las cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, tema que resultaba ser del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la que esta Superintendencia le trasladó copia del informe de inspección a dicho Organismo.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

Ahora bien, el hecho de que con posterioridad la Superintendencia de Sociedades (en diciembre del año 2016) hubiese verificado la existencia de hechos objetivos que dieron cuenta de la realización de operaciones de captación de dineros del público por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., **en modo alguno significa que la SFC haya sido omisiva en el cumplimiento de sus funciones**, porque, la información que esta Entidad evaluó corresponde a la recabada y entregada respecto de un periodo de 17 meses de operación de la misma, esto teniendo en cuenta que el modelo de negocio empezó en mayo de 2012.

7.1.2. Causales de exoneración de responsabilidad – Inexistencia de nexo causal entre la actuación de la SFC y el daño irrogado.

En el evento en que el Despacho llegare a considerar acreditada la existencia de un daño en el presente caso, las pretensiones deberían ser igualmente negadas ya que el mismo no es imputable ni atribuible a la SFC, pues concurren en el caso causales que deben exonerar de responsabilidad al Estado pues rompen el juicio de imputación fáctica y jurídica.

7.1.2.1. Hecho de un tercero

En el evento en que el demandante lograra probar a lo largo del presente proceso la existencia de un eventual perjuicio en virtud de la entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o llegare a demostrar que las pérdidas que aduce haber sufrido devienen de la existencia y funcionamiento de esa sociedad, ese hecho **NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SFC**, pues claramente la causa del daño estaría afincada en la acción propiamente dicha de esa sociedad, con la que el aquí demandante entabló un negocio jurídico, siendo así responsabilidad de los representantes legales y/o administradores de esa persona jurídica las actuaciones que confluyeron en la pérdida de los recursos depositados, acciones que son completamente ajenas a mi representada.

En ese sentido, cuando en los hechos de la demanda se afirma que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. dejó de pagar las amortizaciones que mes a mes venía realizando al demandante, justificando dicha circunstancia en razones de orden operativo de la cartera, además de asuntos y menesteres internos de las cooperativas originadoras de las obligaciones adquiridas por el actor, debe indicarse que, respecto de estos hechos, ningún vínculo o relación causal tiene la SFC. Las mismas afirmaciones del



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

accionante denotan que fue el hecho del tercero con quien se había establecido el vínculo contractual, el que provocó la cesación de pagos que afectó el patrimonio del reclamante.

Bajo ese entendimiento, de comprobarse que pudo haberse producido un daño, el mismo tendrá que ser objeto de litigio directamente entre las partes contratantes en desarrollo del negocio particular e individual que fue celebrado, ello, mediante el ejercicio de las acciones judiciales estatuidas por el legislador para tales fines, entre ellas, las de competencia de la jurisdicción ordinaria, e incluso a través del proceso penal respectivo, en el que cabe la reparación de los perjuicios irrogados con ocasión del injusto que llegará a acreditarse más allá de toda duda razonable.

No puede perderse de vista que aun cuando se quiera imputar responsabilidad a la Administración y se pretenda de ella el pago de los recursos que de forma libre y autónoma se invirtieron en la sociedad hoy intervenida, el punto central de la discusión que aquí se plantea, es que el presente asunto versa sobre la celebración de un contrato entre particulares, del cual la SFC no fue parte, ni dio su consentimiento o aval, razón por la que mal podría pretenderse que el cumplimiento de las prestaciones a las que se comprometió cada uno de los obligados recaiga en esta autoridad de supervisión, y no en el tercero que se obligó jurídicamente con el demandante, esto es, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, resulta evidente que en el caso puesto a consideración del Despacho la atribución material del hecho dañoso, constituida como un fenómeno estrictamente naturalístico, se relaciona directamente con la acción del particular y no con la del Estado, siendo así que la responsabilidad solo puede endilgarse a la referida sociedad.

Por lo tanto, con fundamento en los hechos y pruebas vertidas dentro del proceso, para esta Superintendencia es claro que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. estructuró un modelo de negocio partiendo de una operación legal, como lo es la compra venta de “pagarés-libranzas”, atrayendo a particulares inversores al mismo con falsas promesas de rendimientos elevados, aun cuando podían establecer que los flujos recibidos resultaban insuficientes para garantizar el pago de lo prometido y que los títulos valores ofrecidos presentaban inconsistencias.

7.1.2.2. Culpa exclusiva de la víctima.

Sea lo primero señalar que el demandante tiene los conocimientos que dan las máximas de la experiencia y que con base en ellos tomó de forma libre, autónoma y consciente una decisión de inversión que por sus características tenía un riesgo inherente, del cual no puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por su resultado, **pues la función de supervisión a cargo de esta Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida**, ello, tratándose una de entidades no vigiladas.

Cabe señalar, con base en las conclusiones contenidas en el Informe de Inspección analizado a lo largo de este escrito, que al parecer lo que ocurrió con el aquí accionante no fue otra cosa que la celebración de un contrato aleatorio, en los términos descritos en el artículo 1498 del Código Civil, esto es, aquel en el cual existe una contingencia incierta de ganancia o pérdida, y el cual se materializó en la compra de una cartera, que se generó en el alea de una posible rentabilidad atada al recaudo de unos recursos que se lograría en un periodo de tiempo determinado. Por ende, no se puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por el resultado de un negocio determinado por la autonomía de la voluntad de las partes, menos aun cuando el resultado del mismo dependía o estaba íntimamente ligado a los riesgos propios de los negocios realizados, y que el demandante consintió asumir libre y voluntariamente.

En ese sentido, debe auscultarse con especial énfasis el hecho que el accionante, según se infiere del



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

libelo, obró en todo momento de manera libre, consciente y voluntaria al momento de entregar sus dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ello bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, en función del cual se les reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios. Razón por la cual no es dable asumir que el Estado deba tener responsabilidad por los perjuicios que los particulares sufran como resultado de su propia iniciativa.

Y es que proceder en un sentido contrario a éste, supone un riesgo evidente, que no es otro que el de llevar a concluir que cada que un inversionista, en un negocio de riesgo, pierda, el Estado habrá de responder por su dinero. Lo cual conllevaría a unas consecuencias contraproducentes, pues se daría cabida a la idea que las personas realicen toda clase de inversiones riesgosas, pues en el evento de fracasar el Estado responderá por ellas. Un argumento en esa dirección es que al Estado no pueden socializársele solo las pérdidas, cuando las ganancias son privatizadas en los sujetos contratantes. Por lo que mal podrían instrumentalizarse las funciones de inspección, vigilancia y control, para sostener un modelo en el que las utilidades son individualizadas en unos pocos, mientras las pérdidas son compartidas entre todo el conglomerado social.

De otro lado, es importante considerar que la presunta relación contractual entre el demandante y OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., se trata de un negocio privado sin intervención alguna de la SFC, en el cual el interesado asevera haber realizado una “inversión” de dinero, tipo de negocio que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias, para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. Así, toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la [multiplicación](#) del dinero colocado.

Respecto de lo anterior, se debe señalar que:

*“En la inversión privada suelen considerarse tres variables distintas; la primera corresponde al rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que se considera que tendrá en términos positivos o negativos, la segunda obedece al **riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento, la posibilidad de que la inversión no se recupere,** y por último el horizonte temporal, o bien el período a corto, mediano o largo plazo durante el que la inversión se sostendrá.”¹⁶*

En otras palabras, está el demandante obligado a actuar con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como a proceder con la diligencia debida y el cuidado que se espera frente a esta clase de operaciones comerciales. Esa diligencia lo hubiese llevado, al menos, a interrogarse e indagar sobre algunas cuestiones esenciales de la cartera que estaba adquiriendo, tales como el origen de los pagarés libranza, lo que le habría llevado a verificar si dichos títulos existían en las cooperativas originadoras que celebraban negocios con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la sociedad contratada para la custodia de los mismos.

Nótese que aun cuando el actor reprocha al Estado por un presunto actuar negligente, el dicho no ofrece prueba de ninguna clase, pasa por alto señalar que nunca acreditó haber verificado o realizado

¹⁶ Definición ABC: <http://www.definicionabc.com/economia/inversiones>.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

alguna investigación sobre el efectivo pago de los deudores de las obligaciones contenidas en los títulos valores que estaba adquiriendo. Tampoco hizo nada por establecer de qué tipo de cartera se trataba, si la misma estaba siniestrada, o los títulos valores presentaban inconsistencias, duplicidades, si la información que le brindaba vía correo electrónico sobre montos y plazos de los pagarés era verídica o fidedigna.

Por el contrario, simplemente existen una serie de manifestaciones que dejan ver que el demandante se limitó a recibir información, sin comprobarla, y acto seguido a suscribir documentos sin un soporte válido, amparándose únicamente en la “*confianza*” que le brindaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Debe plantearse, entonces, la existencia manifiesta de una desidia del demandante en los términos a los que hemos hecho referencia, como causa determinante del posible perjuicio irrogado, por lo que la apreciación del daño, en caso de existir éste, deberá estar sujeta a la valoración de la conducta de quien se expuso a él imprudentemente.

En definitiva, en el presente caso consideramos están dados los elementos de tipo normativo que hacen improcedente la imputación desde un punto de vista fáctico y jurídico, pues nos encontramos ante una actuación del accionante que evidencia imprudencia y la aceptación de riesgos o aleas propias del negocio jurídico que celebraron, lo cual tendría que excluir la responsabilidad de la Administración por el hecho o la culpa exclusiva de la víctima.

7.2. Intervención como escenario idóneo para las reclamaciones de índole económica como la que se pretende.

El trámite de la demanda judicial por medio de la interposición del medio de control de reparación directa, no es el mecanismo adecuado para pretender la restitución de los dineros que se dice fueron entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., pues con ello se desconocen las instancias legales dispuestas especialmente para tales fines, esto es, el trámite administrativo que con fundamento en el artículo 5° del Decreto 4334 de 2008, el cual fue ordenado por la SS mediante Auto 400-005087 del 13 de abril de 2018, a través del que se decretó la toma de posesión como medida de intervención de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., escenario en el que existe la posibilidad de devolver de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que al pretender el demandante que a través del medio de control de reparación directa le sean restituidos como pretensión el valor de los dineros entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conllevaría al cobro de lo no debido e incluso de un enriquecimiento sin causa, por cuanto al restituirse al actor dentro del proceso de intervención de manera parcial o total el valor de la inversión, se entendería que su daño se habría resarcido y nadie está habilitado por la ley para obtener el pago de una obligación dos veces.

8. PETICIÓN

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que han sido expuestas en el presente escrito de contestación, respetuosamente solicito a su señoría:

En forma principal:

1. Que de **DECLAREN PROBADAS** las excepciones previas de **CADUCIDAD y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**
2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En forma subsidiaria:

1. Se **DECLAREN PROBADAS** las excepciones de mérito o de fondo denominadas: **ACTUACIÓN DILIGENTE Y CONFORME AL MARCO DE SUS COMPETENCIAS POR PARTE DE LA SFC RESPECTO DE OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.; CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD – INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTUACIÓN DE LA SFC Y EL DAÑO IRROGADO (HECHO DE UN TERCERO – CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA); INTERVENCIÓN COMO ESCENARIO IDÓNEO PARA LAS RECLAMACIONES DE ÍNDOLE ECONOMICO COMO LA QUE SE PRETENDE.**
2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.

En cualquier caso:

- i) Se **CONDENE EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO** a la parte demandante.

9. FRENTE AL ACÁPITE DE COMPETENCIA Y CUANTÍA DE LA DEMANDA.

Entendemos que la estimación razonada de la cuantía realizada por la parte actora en el mencionado acápite del escrito de demanda, tiene por objeto cumplir con el requisito de la demanda previsto en el numeral 6 del artículo 162 del CPACA.

No obstante lo anterior, si eventualmente el Despacho considera dicha estimación como un Juramento Estimatorio, en los términos del artículo 206 del Código General del Proceso del Proceso, se objeta la estimación de perjuicios que ha presentado bajo juramento la parte demandante, para cuyo efecto se solicita tener incorporadas como fundamento del presente acápite de objeción, todas las razones y manifestaciones en torno a la **INEXISTENCIA DEL DAÑO Y SU ANTIJURIDICIDAD.**

Esta objeción encuentra sustento en la ilegitimidad y la improcedencia de la demanda, lo cual encuentra suficiente y sólido respaldo en las argumentaciones y excepciones que se dejan expuestas en defensa de los derechos e intereses de la SFC, de manera que no podrán prosperar o estimarse las pretensiones de la demanda, máxime si se tiene presente que en este caso, como ya se ha señalado, no nos consta y tampoco está probado que la parte demandante haya sufrido daños y perjuicios causados por esta Entidad.

En consecuencia, esta objeción afecta la totalidad del monto estimado bajo juramento por la parte demandante. En cuanto se desestimen las pretensiones – tal como lo solicito – deberán decretarse y liquidarse, a favor de mi mandante y a cargo de los demandantes, las sumas correspondientes a costas, incluidas las Agencias en Derecho.

10. RESPECTO A LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES.

Verificado el escrito de demanda, esta Superintendencia considera necesario oponerse a la solicitud de determinadas pruebas realizada en el escrito de demanda por la parte actora, tales como:

10.1. Remisión de expedientes:

En los acápites del escrito de reforma a la demanda titulados “*EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA*” y “*REMISIÓN DE EXPEDIENTE*”, los demandantes solicitan



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

las misas documentales, que corresponde entre otras a: i) copia del informe de la visita practicada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ii) copia de los oficios mediante los que se remitió a la SS y SES el informe de inspección y iii) Otros documentos relacionados con la actuación administrativa.

En relación con dicha solicitud, es de mencionar que con la presente contestación se adjunta el Informe de Inspección de la visita realizada por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A. que contiene los antecedentes y conclusiones de la misma, copia de las quejas y/o solicitudes de investigación recibidas en esta Superintendencia respecto de la referida sociedad, con su respectiva respuesta, que corresponde a la decisión final adoptada frente a cada queja, copia de los oficios mediante los que se remitió a la SS y SES el informe de visita.

Así las cosas, las referidas solicitudes probatorias por sustracción de materia son innecesarias, además, es oportuno indicar que la parte actora ya cuenta con varios de los documentos solicitados, pues lo aporta como prueba en común.

10.2. Informe juramentado.

Los aquí demandantes solicitan “(...) ordenar al representante legal de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, o quien haga sus veces, que rinda un informe juramentado en relación con las actuaciones administrativas que se surgieron con antelación a julio de 2016”.

Al respecto, es importante reiterar que conforme lo establece el artículo 168 del Código General de Proceso “El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.

En el caso que nos ocupa, el informe sobre las actuaciones adelantadas por la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., fueron relatadas a lo largo del presente escrito, además con la contestación se aporta copia del informe de la visita de inspección. Por ende, el informe juramentado solicitado no solo resulta inútil para el proceso, en la medida en la que se limitaría a reiterar el contenido del mencionado informe, además de generar una carga y un desgaste adicional para la administración pública.

Por ello, ME OPONGO al decreto de dicho informe y pido al (a) señor (a) juez (a) rechazarlo, pues al ya existir unos documentos que contienen la misma información que se obtendría con su decreto y contar con un resumen detallado de la actuación y conclusiones, la prueba carecería de utilidad y se torna innecesaria para el proceso, pues en caso de decretarse, sería del todo superflua, reiterativa y redundante.

11. PRUEBAS

Con el propósito de acreditar y respaldar los hechos y afirmaciones que se han expuesto a lo largo de la presente contestación, solicito que se decreten y valoren como pruebas, además de aquellas que oficiosamente disponga decretar y practicar el Despacho, las siguientes:

11.1. Documentales que se aportan

Conforme al numeral 4 del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con la contestación de la demanda debe acompañarse todas las pruebas que la demandada pretenda hacer valer en el proceso, por lo que para el caso que nos incumbe se allegan:

1. Trámite No. 2013041076 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Alvaro Iván Rojas y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.

2. Trámite No. 2013041086 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Mauricio Santiago Jiménez y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
3. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
4. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
5. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
6. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
7. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
8. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
9. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
10. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
11. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
12. Informe de Inspección No. 2013081463-009de de la visita practicada a COOINVERCOR.
13. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
14. Trámite No. 2016112058 mediante el que se atendió la petición presentada por el Dr. Diego Vega en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Carlos Humberto Garzón y Diana Patricia Maldonado Rincon, en la que solicitó se promoviera la intervención y toma de posesión por captación de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
15. Copia del requerimiento y orden de inspección de la Fiscalía General de la Nación junto con las respectivas respuestas.
16. Trámite No. 2018019222 mediante el que se atendió la petición presentada por la señora Luisa Fernanda Daza Manrique.
17. Copia de la respuesta remitida por el agente interventor en la que certifica la suma reconocida, montos cancelados y saldo pendiente por pagar al demandante dentro del proceso de intervención que adelanta la Superintendencia de Sociedades contra OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., junto con los respectivos soportes, decisiones y autos.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para que obren como pruebas en el proceso adjuntamos copia de la documentación en comento, siendo oportuno señalar que se autorizó a las cuentas: jadmin60bta@notificacionesrj.gov.co y jadmin60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, para que la consulten en el siguiente link: https://superfinanciera-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amgarzon_superfinanciera_gov_co/EiVdsmHrJ6FJv5n9ZXIlg59MBLiCnNUVV9cffWkOx0qnMaQ?e=dVOAB8

Al respecto, es de indicar que los documentos remitidos como pruebas tienen el cariz de reservados razón por lo cual solicitamos adoptar las medidas tendientes a garantizar la conservación de la misma en los términos del artículo 27 del CPACA.

11.2. Pruebas que se solicitan

11.2.1. Interrogatorio de parte

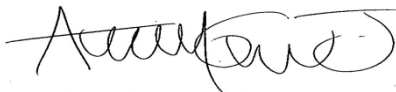
En los términos del artículo 184 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas concordantes, comedidamente solicito se fije hoy y fecha, para **INTERROGAR** bajo la gravedad de juramento a los demandantes en este proceso, FRANCISCO AUGUSTO LUBINOS BADILLO y FRANCISCO SAID ZARUR LATORRE, lo cual haré de forma oral o escrita, en relación con los hechos materia del medio de control de Reparación Directa, persona que será citada a través de su apoderado judicial en los términos autorizados por el artículo 78 del CGP.

12. NOTIFICACIONES.

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez.

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANA MARIA GARZON JIMENEZ
Revisó y aprobó:
ANA MARIA GARZON JIMENEZ

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2019175408-028-000

Fecha: 2021-06-09 16:08 Sec.día2069

Anexos: No

Trámite::132-DEMANDAS

Tipo doc::317-317 MEMORANDO GENÉRICO

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario::ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez-

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-028-000
Trámite : 132 DEMANDAS
Actividad : 317 317 MEMORANDO GENÉRICO
Anexos :

Referencia: ESCRITO DE EXCEPCIONES PREVIAS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Radicado: 11001-33-43-060-2020-00063-00
Demandante: LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR
Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTROS

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, abogada, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderada judicial de la Entidad demandada **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (en adelante SFC)**, estando dentro del término legal procedo a presentar **EXCEPCIONES PREVIAS**, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 175 del C.P.C.A. modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, en los siguientes términos:

1. EXCEPCIONES PREVIAS.

1.1. Caducidad.

El artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, define el medio de control de reparación directa así:

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los Agentes del Estado (...).”



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De otro lado el artículo 169 *ejusdem* dispone lo siguiente:

“ARTICULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. *Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:*

1. Cuando hubiere operado la caducidad (...). (Negrilla fuera del original)

Adicionalmente el artículo 164 (ibídem) prevé los términos para intentar los diferentes medios de control. Así, el literal i), del numeral 2 del citado artículo, en lo que a la Reparación Directa se refiere, dispone que la demanda deberá ser presentada “(...) dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

En virtud de lo anterior y una vez analizados los hechos, se puede extraer que la SFC dentro del marco de su competencia realizó dos visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.). De aceptarse en gracia de discusión que la SFC omitió el cumplimiento de sus funciones, el momento en que cesó la presunta omisión corresponde a la fecha en que culminó la actuación administrativa adelantada por esta Entidad respecto de la mencionada sociedad y se remitió a la Superintendencia de la Economía Solidaria y Superintendencia de Sociedades las circunstancias evidenciadas en las visitas., traslados que se surtieron el 27 de febrero de 2014, mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010, respectivamente.

Al respecto, tenemos que es desde esa fecha que debe iniciarse el conteo de los dos años establecidos por el legislador para que opere el fenómeno de la caducidad del medio de control, los cuales fenecieron el pasado 28 de febrero de 2016, momento para el cual, de acuerdo con la documentación remitida a la SFC, la solicitud de conciliación prejudicial, que tiene la facultad de interrumpir dicho término, no había sido presentada, pues la misma tan solo se presentó el 19 de diciembre de 2019, ante la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos de la ciudad de Bogotá, configurándose así la causal objetiva de CADUCIDAD del medio de control que se quiere ejercer respecto de la SFC.

Consideramos oportuno indicar que **para el caso particular se debe establecer la ocurrencia del fenómeno de la caducidad respecto de cada una de las entidades demandadas, de forma separada, pues las actuaciones adelantadas por la SFC y la SS son independientes y se desarrollaron con fundamento en facultades legales distintas.** Sobre el particular, y como se explicó con suficiencia en la contestación de la demanda, las visitas realizadas por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se adelantaron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora.

1.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la SFC

En el presente asunto el demandante aduce que la SFC fue omisiva en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto del funcionamiento de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., así como de las operaciones que realizaba dicha sociedad.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En ese sentido, como quiera que la redacción de los fundamentos de hecho y derecho del libelo demandatorio no son claros respecto de si la presunta omisión que se imputa a esta Entidad corresponde al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Decreto 2555 de 2010, Decreto 4334 de 2008 o en la Ley 1527 de 2012, abordaremos este punto desde cada uno de los supuestos normativos precitados.

1.2.1. En relación con el Decreto 2555 de 2010.

Debe llamarse preliminarmente la atención en el hecho que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no está, ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia, ya que las entidades y actividades respecto de las que se ejercen dichas funciones corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, en el numeral 1° del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Adicionalmente, debe indicarse que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia, para lo cual tienen que constituirse como lo establece el artículo 53 y siguientes del EOSF, en la forma y términos instruidos en la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica, en los cuales, entre otras cosas, se establece que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia.

1.2.2. En relación con los artículos 108, 325 y 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008.

Cabe señalar que, con el objetivo de evitar que personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y en cumplimiento de las atribuciones establecidas en los artículos 108, el literal a), numeral 4, del artículo 325 y el artículo 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008 así como en los numerales 1, 2, 6 y 22 del entonces artículo 11.2.1.4.35 hoy modificado por el artículo 21 del Decreto 2399 de 2019 y en el artículo 11.2.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010, la SFC entre el 9 y 17 de julio y el 2 y 6 de diciembre de 2013, adelantó visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., las cuales se originaron con ocasión de dos correos electrónicos recibido el 6 de mayo de 2013, a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “pagarés-libranza” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide.

Por lo anterior y una vez analizada la información recabada en la visita se llegó a la conclusión que en las actividades desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., relativas a la compra y venta al descuento de “pagarés-libranzas” no se configuraban los hechos objetivos o notorios, ni los supuestos de captación masiva de recursos del público.

1.2.3. En relación con la Ley 1527 de 2012.

Es oportuno precisar que si bien la Ley 1527 de 2012 le otorgó a la SFC las funciones de inspección, vigilancia y control sobre algunas de las entidades operadoras de libranzas, vale la pena precisar que las únicas cooperativas vigiladas por esta Entidad son las cooperativas financieras, las cuales son autorizadas para captar recursos del público.

Ahora bien, debe señalarse que las cooperativas originadoras de los “pagarés-libranzas” en este caso fueron: COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES,



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, las cuales están bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

De igual manera la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en su modelo de negocio manifestó que para la compraventa de los “pagarés-libranza” tenía contratos suscritos con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.

De lo expuesto podemos concluir que la SFC no está legitimada en la causa por pasiva para ser demandada por omisión en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puesto que:

- No tenía la obligación de ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conforme a lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes.
- Habiendo ejercido las funciones que le competían para evitar que personas no autorizadas ejercieran actividades exclusivas de las entidades vigiladas (literal d) del numeral 1 del artículo 325 del EOSF), no encontró que se configuraran los hechos objetivos o notorios ni los supuestos de captación masiva de recursos del público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.
- Las cooperativas con las que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., adquiría las libranzas no se encontraban ni se encuentran sometidas al control y vigilancia de la SFC, debido a que no tienen la naturaleza de cooperativas financieras.

Así las cosas, queda clara la ausencia de conductas omisivas de la SFC en relación con los posibles perjuicios ocasionados a los aquí demandante, pues esta Entidad ejerció en su momento las actuaciones que le correspondían, sin encontrar en ellas los supuestos de captación en que luego incurrió la sociedad involucrada en el asunto.

En cuanto a las excepciones aquí propuestas, estimamos oportuno informar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A – Magistrado Ponente: Juan Carlos Garzón Martínez, en auto del 03 de diciembre de 2020 emitido en el proceso con radicado No. 2018-0616, de Convento Santo Domingo contra la SFC y SS, relacionado con la comercializadora de libranzas Estraval, declaró expresamente probadas las excepciones previas de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la SFC.

En cuanto a la caducidad indicó que el término debe ser contado desde el momento en que la Superfinanciera efectuó el traslado por competencia a la Superintendencia de Sociedades de los informes de visita. Frente a la falta de legitimación, consideró que este ente de control no participó en los hechos que dieron lugar a la demanda y que no le correspondía la obligación de vigilancia de Estraval, como en el presente caso tampoco le correspondía la vigilancia de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., por lo que las omisiones que se imputaban en la demanda, no eran atribuibles a la SFC.

Similar determinación adoptó el magistrado Garzón Martínez en auto del 3 de diciembre de 2020, proferido en el proceso 2019-00078 de Federico Aristizábal Correa y Otros contra la SFC y SS, pues al resolver la excepción de caducidad propuesta por esta Entidad, indicó:



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

“(…) la actuación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia culminó el 27 de marzo de 2014, fecha en la que envió la información a la Superintendencia de Sociedades, relacionada con la sociedad Estraval S.A, la cual no estaba bajo su vigilancia.

Por lo tanto, computando el término de caducidad únicamente frente a la Superintendencia Financiera, desde su última actuación esto es, 27 de marzo de 2014, la parte actora contaba en principio hasta el 28 de marzo de 2016, como fecha límite, para presentar acción contenciosa en ejercicio del medio de control de reparación directa.”

2. PRUEBAS.

Con el propósito de acreditar las afirmaciones que se han expuesto a lo largo del presente escrito de excepciones previas, acudimos a las siguientes pruebas, las cuales fueron aportadas junto con el escrito de contestación de demanda y por cuestiones prácticas no remitiremos nuevamente con el presente escrito:

1. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
2. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
3. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
4. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
5. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
6. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
7. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
8. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
9. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
10. Informe de Inspección No. 2013081463-009 de de la visita practicada a COOINVERCOR.
11. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
12. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2018-00616.
13. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2019-00078.

Se recuerda que las pruebas pueden ser consultadas en el siguiente link: https://superfinanciera-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amgarzon_superfinanciera_gov_co/EiVdsmHrJ6FJv5n9ZXIq59MBLlcNnUVV9cffWkOx0qnMaQ?e=dVOAB8



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Reiteramos al Despacho el traslado de la reserva sobre dichos documentos, por cuanto al tratarse de una actuación administrativa, contiene información clasificada y/o reservada.

3. PETICIÓN.

En atención a lo manifestado, respetuosamente solicito al Despacho:

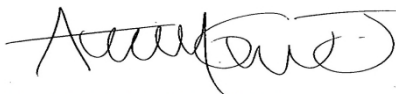
- 3.1. Que se DECLAREN PROBADAS las excepciones previas de CADUCIDAD Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.
- 3.2. Como consecuencia de lo anterior, se NIEGUEN todas y cada una de las pretensiones de la demanda y se declare la terminación del proceso.
- 3.3. Se CONDENE en costas y agencias en derecho a la parte demandante

4. NOTIFICACIONES

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez.

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

Revisó y aprobó:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2019175408-028-000

Fecha: 2021-06-09 16:08 Sec.día2069

Anexos: No

Trámite::132-DEMANDAS

Tipo doc::317-317 MEMORANDO GENÉRICO

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario::ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez-

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-028-000
Trámite : 132 DEMANDAS
Actividad : 317 317 MEMORANDO GENÉRICO
Anexos :

Referencia: ESCRITO DE EXCEPCIONES PREVIAS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Radicado: 11001-33-43-060-2020-00063-00
Demandante: LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR
Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTROS

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, abogada, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderada judicial de la Entidad demandada **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (en adelante SFC)**, estando dentro del término legal procedo a presentar **EXCEPCIONES PREVIAS**, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 175 del C.P.C.A. modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, en los siguientes términos:

1. EXCEPCIONES PREVIAS.

1.1. Caducidad.

El artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, define el medio de control de reparación directa así:

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los Agentes del Estado (...).”



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De otro lado el artículo 169 *ejusdem* dispone lo siguiente:

“ARTICULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. *Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:*

1. Cuando hubiere operado la caducidad (...). (Negrilla fuera del original)

Adicionalmente el artículo 164 (ibídem) prevé los términos para intentar los diferentes medios de control. Así, el literal i), del numeral 2 del citado artículo, en lo que a la Reparación Directa se refiere, dispone que la demanda deberá ser presentada “(...) dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

En virtud de lo anterior y una vez analizados los hechos, se puede extraer que la SFC dentro del marco de su competencia realizó dos visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.). De aceptarse en gracia de discusión que la SFC omitió el cumplimiento de sus funciones, el momento en que cesó la presunta omisión corresponde a la fecha en que culminó la actuación administrativa adelantada por esta Entidad respecto de la mencionada sociedad y se remitió a la Superintendencia de la Economía Solidaria y Superintendencia de Sociedades las circunstancias evidenciadas en las visitas., traslados que se surtieron el 27 de febrero de 2014, mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010, respectivamente.

Al respecto, tenemos que es desde esa fecha que debe iniciarse el conteo de los dos años establecidos por el legislador para que opere el fenómeno de la caducidad del medio de control, los cuales fenecieron el pasado 28 de febrero de 2016, momento para el cual, de acuerdo con la documentación remitida a la SFC, la solicitud de conciliación prejudicial, que tiene la facultad de interrumpir dicho término, no había sido presentada, pues la misma tan solo se presentó el 19 de diciembre de 2019, ante la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos de la ciudad de Bogotá, configurándose así la causal objetiva de CADUCIDAD del medio de control que se quiere ejercer respecto de la SFC.

Consideramos oportuno indicar que **para el caso particular se debe establecer la ocurrencia del fenómeno de la caducidad respecto de cada una de las entidades demandadas, de forma separada, pues las actuaciones adelantadas por la SFC y la SS son independientes y se desarrollaron con fundamento en facultades legales distintas.** Sobre el particular, y como se explicó con suficiencia en la contestación de la demanda, las visitas realizadas por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se adelantaron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora.

1.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la SFC

En el presente asunto el demandante aduce que la SFC fue omisiva en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto del funcionamiento de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., así como de las operaciones que realizaba dicha sociedad.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En ese sentido, como quiera que la redacción de los fundamentos de hecho y derecho del libelo demandatorio no son claros respecto de si la presunta omisión que se imputa a esta Entidad corresponde al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Decreto 2555 de 2010, Decreto 4334 de 2008 o en la Ley 1527 de 2012, abordaremos este punto desde cada uno de los supuestos normativos precitados.

1.2.1. En relación con el Decreto 2555 de 2010.

Debe llamarse preliminarmente la atención en el hecho que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no está, ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia, ya que las entidades y actividades respecto de las que se ejercen dichas funciones corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, en el numeral 1° del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Adicionalmente, debe indicarse que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia, para lo cual tienen que constituirse como lo establece el artículo 53 y siguientes del EOSF, en la forma y términos instruidos en la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica, en los cuales, entre otras cosas, se establece que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia.

1.2.2. En relación con los artículos 108, 325 y 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008.

Cabe señalar que, con el objetivo de evitar que personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y en cumplimiento de las atribuciones establecidas en los artículos 108, el literal a), numeral 4, del artículo 325 y el artículo 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008 así como en los numerales 1, 2, 6 y 22 del entonces artículo 11.2.1.4.35 hoy modificado por el artículo 21 del Decreto 2399 de 2019 y en el artículo 11.2.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010, la SFC entre el 9 y 17 de julio y el 2 y 6 de diciembre de 2013, adelantó visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., las cuales se originaron con ocasión de dos correos electrónicos recibido el 6 de mayo de 2013, a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “pagarés-libranza” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide.

Por lo anterior y una vez analizada la información recabada en la visita se llegó a la conclusión que en las actividades desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., relativas a la compra y venta al descuento de “pagarés-libranzas” no se configuraban los hechos objetivos o notorios, ni los supuestos de captación masiva de recursos del público.

1.2.3. En relación con la Ley 1527 de 2012.

Es oportuno precisar que si bien la Ley 1527 de 2012 le otorgó a la SFC las funciones de inspección, vigilancia y control sobre algunas de las entidades operadoras de libranzas, vale la pena precisar que las únicas cooperativas vigiladas por esta Entidad son las cooperativas financieras, las cuales son autorizadas para captar recursos del público.

Ahora bien, debe señalarse que las cooperativas originadoras de los “pagarés-libranzas” en este caso fueron: COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES,



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, las cuales están bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

De igual manera la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en su modelo de negocio manifestó que para la compraventa de los “pagarés-libranza” tenía contratos suscritos con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.

De lo expuesto podemos concluir que la SFC no está legitimada en la causa por pasiva para ser demandada por omisión en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puesto que:

- No tenía la obligación de ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conforme a lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes.
- Habiendo ejercido las funciones que le competían para evitar que personas no autorizadas ejercieran actividades exclusivas de las entidades vigiladas (literal d) del numeral 1 del artículo 325 del EOSF), no encontró que se configuraran los hechos objetivos o notorios ni los supuestos de captación masiva de recursos del público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.
- Las cooperativas con las que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., adquiría las libranzas no se encontraban ni se encuentran sometidas al control y vigilancia de la SFC, debido a que no tienen la naturaleza de cooperativas financieras.

Así las cosas, queda clara la ausencia de conductas omisivas de la SFC en relación con los posibles perjuicios ocasionados a los aquí demandante, pues esta Entidad ejerció en su momento las actuaciones que le correspondían, sin encontrar en ellas los supuestos de captación en que luego incurrió la sociedad involucrada en el asunto.

En cuanto a las excepciones aquí propuestas, estimamos oportuno informar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A – Magistrado Ponente: Juan Carlos Garzón Martínez, en auto del 03 de diciembre de 2020 emitido en el proceso con radicado No. 2018-0616, de Convento Santo Domingo contra la SFC y SS, relacionado con la comercializadora de libranzas Estraval, declaró expresamente probadas las excepciones previas de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la SFC.

En cuanto a la caducidad indicó que el término debe ser contado desde el momento en que la Superfinanciera efectuó el traslado por competencia a la Superintendencia de Sociedades de los informes de visita. Frente a la falta de legitimación, consideró que este ente de control no participó en los hechos que dieron lugar a la demanda y que no le correspondía la obligación de vigilancia de Estraval, como en el presente caso tampoco le correspondía la vigilancia de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., por lo que las omisiones que se imputaban en la demanda, no eran atribuibles a la SFC.

Similar determinación adoptó el magistrado Garzón Martínez en auto del 3 de diciembre de 2020, proferido en el proceso 2019-00078 de Federico Aristizábal Correa y Otros contra la SFC y SS, pues al resolver la excepción de caducidad propuesta por esta Entidad, indicó:



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

“(...) la actuación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia culminó el 27 de marzo de 2014, fecha en la que envió la información a la Superintendencia de Sociedades, relacionada con la sociedad Estraval S.A, la cual no estaba bajo su vigilancia.

Por lo tanto, computando el término de caducidad únicamente frente a la Superintendencia Financiera, desde su última actuación esto es, 27 de marzo de 2014, la parte actora contaba en principio hasta el 28 de marzo de 2016, como fecha límite, para presentar acción contenciosa en ejercicio del medio de control de reparación directa.”

2. PRUEBAS.

Con el propósito de acreditar las afirmaciones que se han expuesto a lo largo del presente escrito de excepciones previas, acudimos a las siguientes pruebas, las cuales fueron aportadas junto con el escrito de contestación de demanda y por cuestiones prácticas no remitiremos nuevamente con el presente escrito:

1. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
2. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
3. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
4. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
5. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
6. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
7. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
8. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
9. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
10. Informe de Inspección No. 2013081463-009 de de la visita practicada a COOINVERCOR.
11. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
12. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2018-00616.
13. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2019-00078.

Se recuerda que las pruebas pueden ser consultadas en el siguiente link: https://superfinanciera-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amgarzon_superfinanciera_gov_co/EiVdsmHrJ6FJv5n9ZXIq59MBLlcNnUVV9cffWkOx0qnMaQ?e=dVOAB8



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Reiteramos al Despacho el traslado de la reserva sobre dichos documentos, por cuanto al tratarse de una actuación administrativa, contiene información clasificada y/o reservada.

3. PETICIÓN.

En atención a lo manifestado, respetuosamente solicito al Despacho:

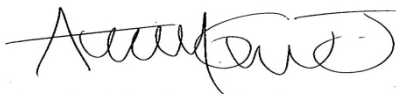
- 3.1. Que se DECLAREN PROBADAS las excepciones previas de CADUCIDAD Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.
- 3.2. Como consecuencia de lo anterior, se NIEGUEN todas y cada una de las pretensiones de la demanda y se declare la terminación del proceso.
- 3.3. Se CONDENE en costas y agencias en derecho a la parte demandante

4. NOTIFICACIONES

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez.

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

Revisó y aprobó:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2019175408-027-000

Fecha: 2021-06-09 15:56 Sec. día 2025

Anexos: Sí

Trámite: 132-DEMANDAS

Tipo doc: 325-325 CONTESTACION ADICIÓN, SUSTITUCIÓN, O REFORMA DE DEMANDA

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario: ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-027-000
Trámite : 132 DEMANDAS
Actividad : 325 325 CONTESTACION ADICIÓN, SUSTITUCIÓN, O REFORMA DE DEMANDA
Anexos : E1

Referencia: **CONTESTACIÓN REFORMA DEMANDA**
Medio de Control: **REPARACIÓN DIRECTA**
Radicado: **11001-33-43-060-2020-00063-00**
Demandante: **LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR**
Demandado: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTRA**

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. identificada como aparece al pie de m firma, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No. 274.629 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial de la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (en adelante SFC)**, según poder que obra en el expediente, estando dentro del término legal procedo a **CONTESTAR LA REFORMA DE LA DEMANDA** en los siguientes términos:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

En los términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Administrativo, comparece, como parte demandada la Superintendencia Financiera de Colombia, Entidad que forma parte del sector central de la administración pública del orden nacional, con domicilio en Bogotá, representada legalmente por el señor Superintendente Financiero Jorge Castaño Gutiérrez.

En su nombre y representación interviene la suscrita apoderada, en virtud del poder que me fuere conferido por el Coordinador del Grupo Contencioso Dos de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, a quien le fue delegada la función de otorgar poderes a los funcionarios para que ejerzan la representación judicial o extrajudicial de la SFC, al tenor del numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 0229 del 14 de febrero de 2017.

2. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El numeral primero del artículo 173 de la Ley 1437 de 2011, dispone entre otras cosas lo siguiente: *“De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial.”*

Ahora bien, mediante auto del 20 de mayo de 2021 notificado por estado del día 21 del mismo mes y año, se admitió la reforma a la demanda y se corrió traslado de la misma por la mitad del término, es decir por 15 días hábiles, los cuales empezaron a correr a partir del día 24 del mismo mes y fenecen el próximo 15 de junio de 2021. Por lo tanto, es evidente que esta Superintendencia se encuentra dentro del término para pronunciarse frente a la reforma a la demanda.

Con el fin de evitar confusiones y con el ánimo de hacer más clara y organizada la intervención de mi prohijada, se hará un pronunciamiento general de los escritos de demanda y de reforma de la demanda, razón por la que en el presente documento se integra la contestación de ambas.

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Con fundamento en las razones que se acreditarán a lo largo de este escrito y en general en el devenir de este proceso judicial, **ME OPONGO A TODAS LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA** por las siguientes razones a saber:

- Carecer de fundamento respecto de mi prohijada, toda vez que lo expuesto por la parte demandante corresponde única y exclusivamente a la narración de un **incumplimiento contractual**, relación jurídica de la cual la SFC no fue parte;
- Por tratarse de una demanda cuyos fundamentos fácticos imposibilitan, por completo, hacerle una imputación de responsabilidad a la SFC;
- Por no existir nexo de causalidad entre los fundamentos fácticos expuestos, los perjuicios cuya reparación deprecia la parte demandante y las funciones de esta Entidad;
- Por tratarse de un perjuicio que, de encontrar algún asidero, en todo caso evidenciaría que la responsabilidad no podría predicarse respecto de la **SFC. Como se demostrará, en el presente caso se configura el hecho de un tercero y la culpa de quien se reputa víctima;**
- Por tratarse de un asunto en el que se encuentran debidamente configuradas diversas causales que eximen de responsabilidad respecto de la **Superintendencia Financiera de Colombia.**

En consecuencia, no habrá lugar a que la autoridad judicial acoja las pretensiones declarativas y de condena formuladas por el demandante.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

- A esta Superintendencia **NO LE CONTAN** los **HECHOS 1) al 3)** en los que se indica que el demandante fue contactado por la fuerza comercial de la empresa **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.)**, que le explicaron en qué consistía el sistema de inversión de libranzas y le ofrecieron por participar en el negocio una rentabilidad equivalente al interés bancario corriente.

Al respecto vale la pena señalar que las anteriores afirmaciones se refieren a las condiciones ofrecidas por la referida sociedad para la ejecución del negocio jurídico celebrado con el demandante, relación en la que esta Superintendencia no tuvo ningún tipo de participación o injerencia.

- Frente al **HECHO 4) NO NOS CONSTA y NOS ATENEMOS** a lo que para la época haya certificado la Entidad que represento. La tasa de interés certificada puede ser consultada en nuestra página web www.superfinanciera.gov.co, sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del C.G.P. los indicadores económicos se consideran un hecho notorio.
- En el **HECHO 5)** se afirma que el actor indagó ante esta Superintendencia y la Superintendencia de Sociedades (en adelante SS) sobre la legalidad de las operaciones desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., lo que le permitió establecer que las demandadas conocían de las operaciones, que habían realizado visitas, que dicha sociedad no era objeto de ninguna medida y que se trataba de una actividad no proscrita por la ley.

En lo que respecta a la SFC, debemos señalar que al revisar en el Sistema de Gestión Documental – SOLIP, que contiene la totalidad de trámites adelantados por esta Entidad, **no se encontró que el aquí demandante haya presentado ante esta Superintendencia petición alguna mediante la que indagara sobre el negocio ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., razón por la que NO ES CIERTO lo afirmado por el actor en el dicho. Valga la pena manifestar que en las pruebas allegadas con la reforma no reposa documento alguno que acredite tal antecedente.**

Finalmente, lo relacionadas con la SS **NO NOS CONSTAN** pues se refiere al actuar de una entidad distinta a la SFC.

- Frente a los **HECHOS 6) y 7) NO NOS CONTAN** los términos de la información suministrado al aquí demandante por los asesores de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. pues son personas ajenas a esta Superintendencia. En cuanto a las verificaciones realizadas por medios informáticos, es deber del actor acreditar que las mismas fueron realizadas.
- En cuanto al **HECHO 8)** en el que se manifiesta, sin hacer especificación respecto de una determinada persona, que varios inversionistas solicitaron a esta Superintendencia información sobre la legalidad de las operaciones adelantadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., debemos señalar que al revisar el Sistema de Gestión Documental – SOLIP, que contiene la totalidad de trámites atendidos por esta Entidad, se encontraron las siguientes peticiones relacionada con la referida sociedad:

No.	RADICADO	PETICIONARIO
1	2013041076-000 del 6 de mayo de 2013.	Alvaro Iván Rojas
2	2013041086-000 del 6 de mayo de 2013.	Mauricio Santiago Jiménez



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3	2016112058-000 del 5 de octubre de 2016.	Dr. Diego Felipe Vega Jiménez en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Diana Patricia Maldonado Rincon y Carlos Humberto Garzón.
4	2018019222-000 del 14 de febrero de 2018.	Luisa Fernanda Daza Manrique.

Frente a dichas comunicaciones estimamos oportuno hacer un breve resumen del objeto de las mismas, así como del actuar y respuesta dadas por esta Superintendencia. Veamos:

○ **2013041076-000 y 2013041086-000.**

Los señores Alvaro Iván Rojas y Mauricio Santiago Jiménez reenviaron a esta Superintendencia vía correo electrónico copia de un folleto que les fue enviado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en el que se promocionaba el negocio de venta de pagarés-libranza, comunicaciones en la que cuestionaban si dicho ofrecimiento era “(...) otro DMG” y se solicitó “(...) para su revisión no hay (sic) sea otra pirámide.”

Con fundamentos en lo anterior se procedió a consultar la página web de dicha sociedad y se identificó que ofrecía sus servicios mediante tres sociedades, siendo una de ellas **OPTIMAL FACTORING** la cual se dedicaba a desarrollar actividades de factoring y dado que tales compañías no se encontraban, ni se encuentran sometida a la vigilancia de la SFC, con fundamento en establecido en el Capítulo II y artículo 11 de la Ley 35 de 1993 se realizó mediante los Oficios No. 2013041076-001 y 2013041086-001 del 27 de febrero de 2014 el respectivo traslado a la entidad competente, que para el caso es la Superintendencia de Sociedades.

De otro lado, mediante los Oficios de respuesta No. 2013041076-002 y 2013041086-002 del 30 de mayo de 2014, se informó a los accionantes entre otras cosas que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “(...) **NO se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia, razón por la que no está autorizada para adelantar actividades exclusivas de las entidades vigiladas por este Organismo y dentro de ellas, captar masivamente recursos del público.**”, así como el traslado realizado a la SS.

○ **2016112058-000.**

Mediante petición del 5 de octubre el 2016 el Dr. Diego Felipe Vega Jiménez en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Diana Patricia Maldonado Rincon y Carlos Humberto Garzón solicitó a este Organismo “(...) **INTERVENCIÓN Y TOMA DE POSESIÓN POR CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL SIN AUTORIZACIÓN ESTATAL** debido a que **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. (...) ha realizado Captación masiva y habitual de dineros del público (...)**”

Considerando que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no se encuentra bajo vigilancia de esta Superintendencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se remitió la mencionada comunicación a la SS para los efectos propios de su competencia, teniendo en cuenta que la mencionada firma se encuentra en la lista de las sociedades vigiladas por esa Entidad. Actuación que se surtió mediante Oficio No. 2016112058-001 del 12 de octubre de 2016.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Igualmente, al Dr. Vega Jiménez a través del Oficio No. 2016112058-002 del 18 de octubre de 2016 se le informó que conforme a lo dispuesto en el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero este Organismo ejerce las funciones de sanción, supervisión, certificación y publicidad, entre otras, respecto de entidades sometidas a su vigilancia. Se precisó que la referida sociedad **NO** se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia y que su comunicación había sido remitida por competencia a la SS. Pues se evidenció que OPTIMAL se encontraba dentro de la lista de entidades sometidas a la vigilancia de esta autoridad, además por ser la competente para vigilar las sociedades que desarrollan operaciones de factoring y la facultada conforme al Decreto 4334 de 2008 para verificar si la citada sociedad desarrollaba operaciones que configuraran una captación ilegal de recursos del público, así como para adoptar las medidas administrativa pertinente y proceder con su intervención.

○ 2018019222-000.

La señora Luisa Fernanda Daza Manrique mediante petición radicada el 14 de febrero de 2018 solicitó información y copia de los documentos relacionados con la visita de inspección realizada por esta Superintendencia a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. A través del Oficio No. 2018019222-001 del 28 de febrero de 2018 se atendió dicha solicitud, señalando que la citada sociedad no está sometida a la inspección, vigilancia o control de la SFC, se precisó que “(...) la información relacionada con las labores de supervisión que desarrolle esta Entidad en cumplimiento de sus funciones tiene la connotación de “Información Pública Reservada” protegida por lo establecido en el literal e), numeral 3 del artículo 326 del EOSF, además los informes de las visitas de inspección que se lleven a cabo en razón de una actuación administrativa, son reservados, en virtud de lo establecido en el numeral 3° del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.”.

En virtud de lo anterior se le solicitó a la señora Luisa Fernanda remitir “(...) la correspondiente autorización del Juez de Garantías, o en su defecto cumplir con lo señalado en el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.”, pero lo que se le otorgó un (1) mes de plazo. Teniendo en cuenta que dentro del referido término no se recibió respuesta alguna de la ciudadana, esta Entidad mediante Oficio No. 2018019222-003 del 5 de abril de 2018 le indicó: “(...) este Organismo encuentra procedente decretar el desistimiento tácito de la petición y en consecuencia se ordena el ARCHIVO de la presente actuación administrativa, frente a la cual únicamente procede el recurso de reposición. Lo anterior sin perjuicio, que pueda presentar una nueva petición con el lleno de los requisitos legales (...)”

- En cuanto al **HECHO 9)**, **NO NOS CONSTA** que el demandante haya adelantado algún tipo de indagación ante la Cámara de Comercio con el fin de averiguar el objeto social registrado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., por lo que nos atenemos a las pruebas que sobre este dicho reposen en el expediente.
- Los **HECHOS 10) y 11) SON PARCIALMENTE CIERTOS**, debe precisarse que el día 6 de mayo de 2013 **se recibieron en esta Entidad dos correos electrónicos a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “pagarés-libranza” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide.** Esta Superintendencia atendiendo las funciones de prevención y control del ejercicio ilegal de la actividad financiera consideró pertinente evaluar si en el desarrollo del objeto social de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se presentaban operaciones en las cuales se pudieran estar configurando hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por lo anterior la SFC, practicó una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, del 02 al 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación.

Así las cosas, nos atenemos al tenor literal de los antecedentes y en general al total del contenido de informe producto de la visita practicada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., documento que reposa en el plenario y que se allega nuevamente con el presente escrito.

- El **HECHO 12) ES PARCIALMENTE CIERTO**. En el punto “6 CONCLUSIONES” del informe de inspección No. 11300809201300263 se indicó que: *“(…) de acuerdo con la valoración de los hechos descritos en el presente informe y del análisis efectuado tanto a la información suministrada por la entidad visitada, como aquella que la Comisión de Visita recaudó en el transcurso de la inspección, se concluye que en la operación de venta de ‘pagarés-libranza’ llevada a cabo por la sociedad Optimal Libranzas S.A.S., con sus clientes compradores, a la fecha de la presente visita, no se encuentran configurados lo supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008.*

(...)

Finalmente, es pertinente precisar que el modelo de negocio de la sociedad Optimal Libranzas S.A.S. empezó en mayo de 2012, período corto para determinar y establecer el impacto que puede presentar la siniestralidad de pagarés libranzas en los estados financieros de la sociedad, toda vez que el período evaluado corresponde a sólo 17 meses de operación.”

- Los **HECHOS 13) y 14) SON PARCIALMENTE CIERTOS**, se debe precisar que mediante Oficio No. 2013058932-010 esta Superintendencia remitió a la SS copia del informe de la visita practicada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., esto debido a que cuando se estaba adelantando la misma se presentaron en la dicha sociedad tres funcionarios de esa entidad que habían sido comisionados para llevar a cabo una toma de información, diligencia que se abstuvieron de practicar hasta tanto la SFC culminara la visita y remitiera el informe.

Ahora bien, con Oficio No. 2013058932-009 se remitió el informe de visita a la Superintendencia de la Economía Solidaria (en adelante SES), ya que en el curso de la misma se evidenciaron algunos hechos que podían ser del resorte de dicha entidad debido a la operación de compra y venta de pagarés-libranza originados de créditos otorgados por cooperativas.

- Se indica en el **HECHO 15)** que la SFC es competente para imponer medidas cautelares con el fin de evitar que cualquier persona natural y/o jurídicas ejerzan sin autorización, actividades exclusivas de las entidades vigiladas.

Al respecto es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Decreto Ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero la SFC puede imponer a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las vigiladas sin contar con autorización, una o varias de las medidas descritas en tal disposición.

Igualmente, en los artículos 325 y 326 *ibidem* se otorgan a esta Entidad facultades de supervisión, prevención y sanción respecto de personas que desarrollas actividades propias de las instituciones vigiladas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De lo anterior, se puede inferir que para que la SFC adopte alguna medida contra una no vigilada se debe evidenciar que esté desarrollando sin autorización una actividad propia de una entidad vigilada y para el caso en particular la sociedad Optimal Libranzas S.A.S. realizaba compra y venta al descuento de cartera de créditos instrumentada en títulos valores de contenido crediticio denominados “pagarés-libranza” y como se ha señalado en párrafos anteriores y como se explicará con detalle más adelante, en la visita practicada a la referida sociedad se concluyó que la fecha en que se practicó *no se encontraron configurados lo supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008.*

- En los **HECHOS 16) al 19) y 21)** se indica que el demandante con ocasión de las presuntas indagaciones elevadas ante la SFC y SS suscribió con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. un contrato de compraventa para la adquisición de libranzas, que con ocasión del negocio realizó unos pagos a la referida sociedad y que recibió una suma de dinero por concepto de amortización y que ante la cesación de pagos le quedaron adeudando dinero. Al respecto, debemos señalar que dichas circunstancias **NO NOS CONSTAN** pues la SFC no fue parte de la relación comercial celebrada entre la citada sociedad y el demandante.

Es de señalar que con la demanda se aportaron como prueba la copia del contrato y de una consignación a favor de la mencionada sociedad. Al respecto debemos indicar que, en relación con su validez, nos atenemos a lo que se pruebe a lo largo del proceso, así como a lo que resulte del juicio que deba realizarse en torno a su legalidad y veracidad y, en general, lo que pueda concluirse a partir de ellos. Vale la pena llamar la atención del Despacho, pues ni en los antecedentes fácticos y tampoco en las documentales se menciona a la SFC. Esto permite concluir que los negocios presuntamente celebrados corresponden claramente a acuerdos de voluntades de carácter netamente privado, suscritos única y exclusivamente por el aquí demandante y OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, sin la participación, el concurso o la anuencia de mi representada.

- Respecto a los **HECHOS 22) al 26) y 29) al 31)** en los que se indica que el demandante recibió en el plan de pagos por parte del interventor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. unas determinadas sumas de dinero y le quedaron adeudando otro monto, que se hizo parte del proceso de liquidación de dicha sociedad, se entiende que se refieren al proceso de intervención, y se hace mención a las funciones de los interventores o agentes liquidadores nombrados por la Supersociedades, debemos manifestar que **NO NOS CONTAN** tales afirmaciones ya que se refieren a actuaciones surtidas al interior del proceso jurisdiccional que adelanta una entidad distinta a la SFC, en este caso la SS.

No obstante, lo relatado en estos numerales es susceptible de ser tenido en cuenta como confesión de parte, a efectos de establecer que el demandante ya se encuentra reclamando las sumas pretendidas a través del presente medio de control, en la instancia por antes referida.

Finalmente, los dichos relativos a las funciones del agente interventor o liquidador no constituyen un hecho sino una manifestación subjetiva del actor la cual debe acreditarse.

- Frente a los **HECHOS 20) y 27)**, en los que se señala que a mediados del año 2016 OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. cesó el pago de las amortizaciones, justificando dicha circunstancia en razones de orden operativo de cartera, además de asuntos relacionados con las pagadurías y menesteres internos de las cooperativas originadoras de los pagarés-libranza las cuales adujeron siniestros de cartera, debemos indicar que el contenido de los dichos corresponde a apreciaciones o señalamientos del demandante que deberán ser probados en el proceso.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En este orden de ideas **NO NOS CONSTA** lo manifestado en los mismos, ya que como se indicó anteriormente mi prohijada no hizo parte del negocio jurídico al que se ha hecho referencia. De otro lado, es pertinente que se **tenga por sentado y a manera de confesión del accionante, que desde esa fecha se produjo el presunto incumplimiento contractual que le originó una afectación, esto para el conteo del término de caducidad.**

- Respecto al **HECHO 28) ES CIERTO** que la SS mediante Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 adoptó una medida de intervención administrativa respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y ordenó a dicha sociedad la suspensión inmediata de las operaciones de captación masiva. Ahora bien, teniendo en cuenta que el referido acto administrativo no fue expedido por la Entidad que representó y que es un documento público, nos atenemos al tenor literal del mismo.
- Respecto a lo señalado en el **HECHO 32)** en el que se indican que la SFC y la SS conocieron a plenitud el modelo de negocio desarrollado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y no obstante ello, no desplegaron acciones para evitar que continuaran en operación, debemos indicar que son meras apreciaciones subjetivas que deben ser probadas dentro del proceso, pues dan a entender una realidad totalmente distorsionada y amañada del asunto que **NO ES CIERTA.**

De otro lado, como se dijo anteriormente la SFC realizó una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. Culminada la visita se concluyó que no se configuraban los supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008. Es de precisar que la citada actuación será explicada más adelante.

Frente a las manifestaciones relacionadas con la SS, debemos señalar que se refieren a una autoridad distinta a la Superfinanciera, razón por la que **NO NOS CONSTAN** y deberán ser probadas por el demandante.

- Señala el **HECHO 33)** que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. haya defraudado a aproximadamente trescientas trece (313) personas bajo su modalidad de negocio, por lo tanto, dicha afirmación deberá ser probada dentro de la presente acción, en consecuencia, nos atenemos a lo que se pruebe.
- Respecto al **HECHO 34)**, en el que se hace una transcripción de las actividades inscritas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, es de señalar que las mismas corresponden a la autonomía de la voluntad de los socios, quienes determinaron que actividades iban a registrar. **Se observa que ninguna corresponde a una actividad exclusiva de las entidades vigiladas por esta Superintendencia, razón por la cual es dable afirmar, sin lugar a duda que dicha sociedad no se encontraba sometida a la vigilancia e inspección de esta Entidad.**
- En relación con los **HECHOS 35) y 36)**, en los que se indica que el demandante se involucró en el proceso comercial ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. debido a la información brindada por la SFC y la SS, **NO ES CIERTO RESPECTO DE LA SFC Y NO NOS CONSTA FRENTE A LA SS.** Como se puso de presente al contestar el hecho 5), **NO ES CIERTO** que el accionante haya realizado algún tipo de indagación ante esta Superintendencia.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- En lo atinente al **HECHO 37)** en el que se hace mención a las actividades de captación, manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público y así de los supuestos de captación contenidos en el decreto 3227 de 1982, es necesario señalar previamente que dicha norma fue modificada por el decreto 1981 de 1988 y hoy están contenidas en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015. Precisado lo anterior, debe indicarse que no se trata de un hecho, sino de la cita textual de una norma, por ende, nos atenemos al tenor literal de la misma.
- En cuanto a los **HECHOS 38), 45), 46) y 53) al 55)**, en los que se citan artículos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y Decreto 4334 de 2008, debe indicarse que no se trata de hechos sino de la cita de normas, en consecuencia, nos atenemos al tenor literal de las mismas.

No obstante, resulta necesario distinguir que el artículo 2 del Decreto 4334 de 2008 corresponde a las atribuciones de intervención otorgadas a la SS respecto de las personas naturales o jurídicas que desarrollan las actividades descritas en los literales a) y b) de dicha disposición. Así, dicha norma difiere de las competencias y facultades conferidas a la SFC en los artículos 108 y 326 numeral 4) literal a) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), las que con un contenido normativo autónomo se fundamentan a su vez en lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política. Y es que en virtud de éstas últimas disposiciones la SFC puede adoptar medidas cautelares frente a cualquier persona natural o jurídica de derecho privado que, sin contar con la autorización respectiva, desarrolle actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la SFC, así como de cualquier otra que pueda estar incurriendo en captación, manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público.

La facultad mencionada en cabeza de la SFC, no es otra que la materialización de lo que se puede denominar como función administrativa de supervisión y control en desarrollo de la cual a esta Superintendencia le corresponde inspeccionar, vigilar y controlar a las entidades que cuentan con autorización para constituirse, funcionar y que a la vez son habilitadas por la ley para manejar recursos captados del público. Lo anterior de conformidad con las normas legales pertinentes, como son, entre otros, los artículos 325 y ss. del EOSF que definen la naturaleza, los objetivos, las funciones y las facultades de este Organismo, así como también la obligación de prevenir y controlar que las personas no vigiladas realicen actividades como la captación ilegal de dinero, para lo cual aplica lo establecido en el artículo 108, literal d) numeral 1, del artículo 325, literal a) numeral 4 y literal b) numeral 5 del artículo 326 del EOSF, Decreto 1068 de 2015 y Decreto 4334 de 2008.

No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008 es competencia privativa de la SS adelantar la intervención y toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las entidades que no están sometidas a la vigilancia de la SFC y por ende no cuentan con la autorización para ejercer la captación de recursos del público.

Finalmente, es importante resaltar que la SFC no adoptó medidas respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, toda vez que de la visita efectuada, de las operaciones y de los documentos analizados no se evidenció la configuración de supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizados de recursos del público dentro de la actividad desarrollada por la misma para ese momento, tal y como se explicará más adelante.

- Señala el **HECHO 39)** que para el momento en que se practicó la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., dicha empresa había celebrado contratos para la venta de libranzas con más de 313 personas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sobre el particular, dicho hecho **NO NOS CONSTA**, pero es necesario reiterar que la SFC realizó **una visita de inspección a dicha sociedad** que se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, y una vez culminada no se evidenciaron hechos que permitieran inferir la captación masiva y habitual de recursos del público. En ese orden de ideas nos atenemos al tenor literal del citado informe.

- En relación con los **HECHOS 40) al 42)** que se refieren al promedio de operaciones realizadas por cada persona con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., indican que las ofertas para la celebración de contratos de venta de libranzas se hacían de manera abierta y finalmente que para la fecha de celebración del contrato suscrito por el demandante con dicha sociedad, la misma había celebrado más de 20 contratos durante 3 meses, es menester señalar lo siguiente:

Ya que lo pretendido por el demandante es referirse a los supuestos de captación, debemos mencionar que tal y cómo se ha señalado a lo largo de este escrito, para las fechas en que la SFC realizó una visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., de acuerdo a la documentación estudiada y la normatividad para la fecha vigente, no se encontró evidencia de operaciones de captación ilegal de dinero, **no obstante, la SFC mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014 remitió el informe de visita a la Superintendencia de la Economía Solidaria (en adelante SES) y Superintendencia de Sociedades**. No obstante, tales la afirmación son apreciaciones subjetivas del actor, la cuales deberán ser probadas.

Por otro lado, respecto a las demás consideraciones realizadas por el accionante, relacionadas con la operación de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., me atengo a lo establecido en el informe de la visita adelantada a dicha sociedad, pues en aquel se consagran las evidencias recaudadas por esta autoridad y para el efecto tal documento se aporta como prueba.

- En relación con los **HECHOS 43) y 44)** en los que se transcriben apartes del numeral 10.1 del acápite de antecedentes de la Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 proferida por la SS y se indica que conforme a lo dispuesto en dicho acto administrativo se fijó en la página web de la entidad un aviso de prensa del agente interventor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., debemos señalar que esta Superintendencia se atiene al contenido literal de la Resolución y a lo que se pruebe en relación con el cumplimiento a lo ordenado en la misma, pues son actuaciones que no fueron ejecutadas por mi representada.
- En cuanto a lo argüido en los **HECHOS 47) y 48)** en los que se afirma que la SS y la SFC a pesar de advertir el tipo de negocios que ejecutaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no ejercieron ninguna medida que buscara detener la comercialización de libranzas, a pesar de las visitas celebradas durante los años 2014, 2015 y 2016, y que solamente hasta el 15 de noviembre de 2017 fueron adoptadas.

Debemos anotar que tal aseveración es una apreciación subjetiva del demandante y debe ser probada al interior del proceso, pues da a entender una realidad distorsionada y amañada del asunto, que por lo menos en lo que atañe a la SFC, **NO ES CIERTA**.

Con el fin de desvirtuar las afirmaciones relacionadas con esta Superintendencia, se procede a hacer un breve resumen de las actuaciones desplegadas por mi representada:

Mediante Oficio No. 2013058932-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-005 del 29 de noviembre de 2013.

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente. Por lo anterior, la SFC consideró pertinente realizar visita de inspección tanto a la sociedad, como a algunas de las Cooperativas.

Teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

De otro lado, al evidenciar que las Cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, se estimó que dicho tema era del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la cual se le trasladó una copia del informe de inspección para lo de su competencia.

- En lo atinente al **HECHO 49)** que se refiere a las supuestas investigaciones realizadas por el demandante mediante peticiones administrativas dirigidas a la SFC y a la SS, es de mencionar que **NO ES CIERTO en lo que atañe a la SFC**, pues tal y como ya se indicó, una vez verificado el Sistema de Gestión Documental - SOLIP que contiene los trámites adelantados por esta autoridad, **no se encontró petición alguna formulada por el señor Diago Escobar.** Además, se reitera que con la demanda no se allegó prueba alguna que acredite lo que afirma el accionante.

Respecto de la SS, **NO NOS CONSTAN** las afirmaciones ya que se refieren al actuar de una entidad distinta a mi prohijada.

- Frente a los **HECHOS 50) al 52)** atinentes a que la SFC y SS con ocasión de las respuestas de las supuestas peticiones administrativas interpuestas por el demandante, avalaron y tuvieron pleno conocimiento de las actividades delictivas que desarrollaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., al igual que del conocimiento de la suscripción de más de 20 contratos para la venta de libranzas en un periodo de tres meses, debemos mencionar que respecto de la SFC **NO ES CIERTO** lo acotado, pues como se ha expuesto, no se recibieron solicitudes del aquí demandante relacionadas el negocio celebrado con la referida sociedad. De igual manera, se hace hincapié en que de la visita realizada por la SFC se concluyó para la fecha, que las actividades realizadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., NO configuraban actividades de captación o recaudo no autorizado según el Decreto 4334 de 2008 y el Decreto 1981 de 1988, tal y como consta en el informe de inspección que se aporta.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con fundamento en lo anterior, se desprende con total claridad que lo afirmado por el demandante en estos hechos, como se dijo atrás, no son más que simples juicios de valor por completo ajenos a la realidad de las actuaciones adelantadas por la SFC, lo que puede ser constatado con las pruebas documentales que se aportan con el presente escrito.

De otro lado, **NO NOS CONSTAN** las afirmaciones relacionadas con la SS, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

- En el **HECHO 56)** se indica que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. dado el número de operaciones, desarrollaba actuaciones privativas o reservas de manera exclusiva al sistema financiero aprobado por la SFC como bancos, entidades de ahorro y vivienda, debe señalarse que se trata de apreciaciones de la parte demandante que **NO SON CIERTAS** y deberán ser probadas por el aquí demandante.

Así las cosas, me opongo de plano a cualquier imputación de responsabilidad que se predique respecto de la SFC en los términos que a continuación se presentaran.

5. FUNDAMENTOS JURÍDICO DE LA DEFENSA

5.1. Estructura de la responsabilidad extracontractual de la administración pública.

En la Constitución Política, específicamente en el artículo 90, se estableció que:

“Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir con éste”.

En virtud de dicha norma, la estructura de la responsabilidad sufrió un proceso de “constitucionalización”, erigiéndose en garantía de los derechos e intereses de los administrados, así como de su patrimonio, en el entendido de que el Estado será obligado a reparar los **daños antijurídicos** que le sean **imputables**, ya sea por la acción o la omisión de sus agentes.

En tal sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha entendido que a la luz de lo prescrito por el referido artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual de la Administración¹, tiene como fundamento² la determinación de una serie de elementos que deben concurrir para la declaración de la responsabilidad estatal, siendo estos: la determinación de un **daño antijurídico** causado a un administrado, así como la **imputación** del mismo a la administración pública, tanto por la acción, como por la omisión de un deber y, por último, el **fundamento del deber de reparar**, que debe dar cuenta de las razones de derecho por la que los perjuicios deben ser indemnizados.

En cuanto a la imputación debe destacarse que se trata de juicio que demanda un doble esquema de análisis en el cual debe efectuarse un juicio de **imputación fáctica**, por un lado, y uno de

¹ La responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son el resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado 52001-23-31-000-2001-00960-01 (33976). Actor: Cleofas Tumbajoy Alarcón; Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y otros. Medio de Control: Reparación Directa. Sentencia del 16 de febrero de 2017.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

imputación jurídica, por el otro, siendo la imputación desde un punto de vista fáctico, un ejercicio de atribución material o eminentemente causal del origen del daño o los elementos naturales que han intervenido en su producción. Entretanto, la imputación jurídica hace referencia a un escenario en el que el juez debe determinar si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica o de tipo normativo de reparar el daño.

Ahora, desde una perspectiva clásica la responsabilidad también ha sido entendida bajo los siguientes derroteros, los cuales entraremos a desarrollar:

5.1.1. El daño antijurídico

La Corte Constitucional, con ocasión a una demanda presentada contra una parte del artículo 50 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-333 de 1996, tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la cláusula general de responsabilidad estatal, y en lo que al daño antijurídico se refiere precisó que no existe una definición expresa del mismo, debiéndose entonces recurrir a los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en los que se constata que la noción fue adoptada del texto constitucional español.

Señaló la Corte en dicha oportunidad, que la doctrina española ha entendido el daño antijurídico como *“el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”*, concepto precisado igualmente por el Consejo de Estado en sentencia de 13 de julio de 1993³, como *“la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en obligación de soportar”*.

Así las cosas, es claro que el concepto de daño antijurídico obedece a un mecanismo de protección por parte del Estado que se origina como respuesta a los perjuicios que pueden ser ocasionados por las diversas actividades ejercidas por el poder público, lo cual se encuentra armonizado con los principios constitucionales de solidaridad e igualdad, pues el fin último de este instituto jurídico es lograr reparar e indemnizar a una persona que ha sufrido una merma que no está en la obligación de soportar conforme al ordenamiento jurídico.

5.1.2. Imputación (por acción u omisión de las autoridades públicas)

Para poder endilgar responsabilidad en cabeza del Estado es necesario determinar cuál fue la fuente que originó el daño, es decir, es necesario establecer la ocurrencia de hechos, operaciones administrativas, actos, omisiones, lo que a su vez permite establecer quién es el responsable y bajo qué régimen y título se harán las eventuales declaraciones y/o condenas.

Ahora bien, dadas las especificidades de este caso, teniendo en cuenta el título con fundamento en el cual la parte actora pretende imputar responsabilidad a mí representada (“omisión”), es menester precisar que la *omisión administrativa*, de acuerdo con el tratadista Libardo Rodríguez está definida como: *“las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos respecto de ella. Es decir, consisten en que la administración se abstiene de actuar cuando debería hacerlo.”*⁴, lo que nos permite inferir que en el presente asunto estamos ante un régimen de responsabilidad subjetiva bajo el título de falla en el servicio, lo cual como se demostrará a lo largo de este escrito, no se configura

³ Corte Constitucional. Sentencia C- 333 del 1° de agosto de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

⁴ RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo. Editorial Temis. Bogotá 2000. Págs. 195 a 198.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

en este caso, dado que la SFC actuó y lo hizo de manera diligente y oportuna, de acuerdo con sus funciones y atribuciones legales.

Por esa razón, **hechos como los que aquí se debaten, se insiste, deberán ser analizados a la luz de los requisitos establecidos para el régimen de responsabilidad subjetiva que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración, es decir, que el título de imputación corresponde al de la falla en el servicio y conforme la jurisprudencia lo ha previsto el examen de dicha responsabilidad ha de realizarse con base en la disposición legal o reglamentaria que consagra el deber que se alega como omitido, o incumplido,** con el objeto de establecer si en efecto, la Administración incurrió en omisión o dilación en el cumplimiento del deber, y si éste fue determinante en la producción del daño.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la actividad de la Superintendencia Financiera tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero y del mercado de valores por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, como quiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado⁵. Frente a este tópico ha señalado:

“De toda esa actividad se deduce, sin mayores elucubraciones, que la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-, no omitió, descuidó o retardó sus deberes de inspección, control y vigilancia, respecto de La Fortaleza S.A., menos aún durante su intervención hasta la toma de posesión de bienes, haberes y negocios con fines de liquidación, pues son claras las gestiones encaminadas a que la entidad vigilada pudiera continuar con el desarrollo de su objeto social, pese a los inconvenientes y problemas de solvencia y cumplimiento de todo tipo de normas de orden financiero.

Ahora, en torno a que con su gestión pudo haberse evitado la toma de posesión y consecuente liquidación, cabe precisar que la función de supervisión de la Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los accionistas y/o depositantes o ahorradores contra cualquier pérdida, por el contrario, tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, comoquiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado.

Así lo ha resaltado esta Subsección al señalar:

*“Sobre este punto, vale la pena resaltar que **la obligación a cargo de la Superintendencia no es de resultado**, pues según la carga obligacional contenida en el EOSF, la cual se expuso en precedencia, **sólo está obligada a revisar la actividad de los establecimientos financieros y a vigilar y controlar dicha actividad, pero no a coestionar o evitar los riesgos propios del sistema financiero.**”⁶*
(Negritas fuera de texto).

5.1.3. Nexo de causalidad

La relación de causalidad, en términos generales, se puede entender como el vínculo entre un antecedente y una consecuencia, y se contrae al estudio de los diferentes títulos de imputación que permiten establecer si la responsabilidad es o no atribuible a la Administración.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. 13 de abril de 2016. Radicado 1999-00015 (35354). Velásquez Rico, Marta Nubia.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 25000 23 26 000 2000 02312 01 (29944); M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este nexo de causalidad se puede romper cuando opera una causa extraña, esto sucede cuando el daño no es imputable a la autoridad administrativa. Como causas extrañas se conocen el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero.

En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa ha precisado:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta proviene del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla en el servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandando porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien fue por su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)” (Se resalta)

A tenor de lo anteriormente señalado, es claro que la culpa exclusiva de la víctima es eximente de responsabilidad estatal cuando además de demostrada la causalidad material, se demuestra que la víctima participo y fue la causa eficiente en la producción del daño, actuar que puede catalogarse de culposo al desatender las reglas u obligaciones de prudencia, diligencia y estudio de los negocios que decide ejecutar.

Por otro lado, en lo que al hecho del tercero respecta, se tiene que el mismo exonera de responsabilidad al Estado cuando se demuestra que ese tercero es “*completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal*”.

6. ANALISIS PROBATORIO DEL CASO CONCRETO

Conforme lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Este principio procesal es conocido como ‘*onus probandi, incumbit actori*’. A partir del estudio de dicho principio, es dable afirmar que tanto demandante como demandada tienen el deber de probar los hechos en que sustentan las pretensiones y excepciones propuestas, y en caso tal que dicha situación no se verifique por parte del Juez, la consecuencia jurídica es la negación de las pretensiones elevadas, como quiera que ante la falta de la prueba no puede tenerse por cierto el hecho. Sin embargo, no está de más advertir que una vez son arrimadas las pruebas a una controversia judicial, las mismas hacen parte del expediente y no de las partes, y en ese sentido habrán de ser analizadas en su totalidad siempre y cuando las mismas reúnan los requisitos formales que la ley exige para poder tenerlas como tal.

⁷ Consejo de Estado. 25 de Julio de 2002. Radicado 13744. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. 28 de enero de 2015. Radicado 32912. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bajo ese escenario, cabe indicar en relación con el asunto que se discute, que la SFC realizó las visitas de inspección a la que se ha hecho referencia a lo largo de esta contestación, atendiendo las facultades contenidas en el literal d) numeral 1 del artículo 325 y literal a) del numeral 4 del artículo 326 del EOSF, los numerales 1, 2 y 22 del artículo 11.2.1.4.35 del Decreto 2555 de 2010 y el artículo 108 del Decreto 663 de 1993 o EOSF, modificado por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003, en función de los cuales este ente de control revisó el modelo de negocios de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para establecer si recibía dinero del público, cuál era la forma en que lo hacía y determinar si en desarrollo de tal actividad se evidenciaba la existencia de hechos objetivos o notorios de captación en los términos previstos en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con los supuestos de captación de recursos del público consagrados en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.

A tenor de lo anterior, se determinó que la sociedad visitada realizaba compra y posterior venta al descuento de pagarés libranzas en virtud de la suscripción de contratos de compraventa de estos títulos valores, pero del análisis y estudio de la información recabada en la visita desarrollada, se concluyó que no se configuraban los hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva de recursos del público, por lo que las afirmaciones contenidas en la presente demanda, que aducen una supuesta conducta omisiva por parte de mi representada, no se corresponden con los antecedentes y conclusiones consignadas en el Informe de Inspección, por lo que los dichos del demandante terminan siendo solo conjeturas. En efecto, el material probatorio que anexa la SFC a esta intervención, acredita que contrario a lo señalado por el accionante, esta Entidad actuó de manera diligente y dentro del marco de sus competencias frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, estos elementos junto con el escaso material probatorio aportado por la parte actora, nos permitirá probar que no existió omisión alguna por parte de la SFC en el ejercicio de sus funciones y por tanto el presunto daño sufrido no tiene la connotación de antijurídico. No obstante, si el Despacho llegara a considerar que el daño existió, el mismo material probatorio nos permitirá acreditar que aquél, no puede ser imputable jurídicamente a la actuación de la Administración y por ende ser resarcible, ya que el mismo solo es imputable a la parte demandante y/o a terceros por completo ajenos a la administración pública.

Atendiendo las previsiones señaladas, consideramos del caso hacer las siguientes reflexiones:

6.1. Ausencia de daño antijurídico.

Como quiera que la presente acción tiene por objeto la reparación del daño ocasionado como resultado de las supuestas “omisiones” en ejercicio de las funciones de la SFC, es carga de la parte reclamante acreditar la existencia del daño antijurídico cuyo resarcimiento pretende y la antijuridicidad del mismo, según las previsiones del artículo 90 de la Carta Política.

En ese sentido, el demandante pretende que el presunto perjuicio que alega y que identifica como la pérdida de los dineros que aduce haber entregado a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. sea resarcido por el Estado, sin embargo, no sustenta sus afirmaciones con material probatorio idóneo que permita identificar en qué consistió la presunta omisión en que habría incurrido esta Superintendencia.

Es claro entonces que como quiera que en la demanda se reclama una indemnización derivada de la pérdida de los dineros que según se afirma fueron invertidos en OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ante la deficiencia de los medios de prueba aportados, no es posible predicar la existencia cierta y actual de la pérdida a que se hace referencia. Debe recordarse que, conforme a lo afirmado por el accionante, el reclamo que se pretende ya fue objeto de estudio en el proceso de intervención que adelanta la SS respecto de la referida sociedad. Por lo tanto, no es procedente tener por probadas las pretensiones



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

de la demanda ante el carácter hipotético del presunto daño, ya que el demandante pretende la reparación de los perjuicios presuntamente irrogados en el escenario de la intervención. Así las cosas, consideramos se impone la necesidad de proferir un fallo que desestime la existencia misma del daño, así como el carácter antijurídico del mismo y que en consecuencia niegue las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, en el evento en el que el Despacho considerara que efectivamente existe un daño, ese menoscabo no tendría las características de un daño antijurídico, pues se habría originado en la decisión libre, deliberada y autónoma de las partes involucradas de realizar un negocio jurídico, en cuya materialización no tuvo injerencia alguna la SFC, pues esta Entidad no tuvo relación de ninguna naturaleza con el acto de inversión y entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Para ilustrar esta noción resulta oportuno traer a colación los criterios que ha señalado el Consejo de Estado en cuanto a la antijuridicidad del daño como fuente del deber de reparar:

*"A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables". lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como **"la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho" o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que "el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación.***

Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:

La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (artículos 228 y 20 de la Constitución) sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado Social de Derecho (artículos 10 y 13 de la Carta).

Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que "superan la normal tolerancia" o que impiden el goce normal y adecuado del derecho. Específicamente en cuanto a la razonabilidad de la limitación del derecho a la propiedad y al límite de la obligación del titular a soportar dicha restricción en el ejercicio de su derecho, para efectos de establecer el deber de los particulares de reparar los daños, la doctrina Argentina ha dicho lo siguiente: (...)

*La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resulta antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las **personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos.** No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica. en tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución). **En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el***



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares.⁹ (Negrilla fuera del texto)

En ese sentido, como bien lo anota la jurisprudencia citada, no todo daño entendido como menoscabo a un interés o un derecho, es **antijurídico**, es decir, no todo perjuicio irrogado a un particular conlleva de suyo los ingredientes normativos que estructuran el deber de reparar. Así, para que exista un daño y este sea antijurídico, es necesario que la víctima demuestre que no estaba en el deber conforme al ordenamiento jurídico, de soportarlo. De allí que acertadamente se tenga que, si se llegaran a probar los supuestos daños que se reclaman por el demandante, los mismos no son antijurídicos, pues se debe considerar que aquel experimento una merma patrimonial **como la que puede tener lugar en cualquier otro negocio de riesgo monetario, la cual se magnificó, desde luego, ante la existencia de los altos rendimientos que el accionante señala le fueron prometidos.**

Así, si se llegará a demostrar que el actor efectivamente hizo entrega de una suma de dinero a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. la misma fue una decisión libre y voluntaria de él, debiendo considerarse que quizá lo hizo obnubilado por la rentabilidad ofrecida en la operación de compra de pagarés libranzas. Se debe recalcar que para el actor los deudores de las libranzas eran personas desconocidas, aspecto que conlleva a que la operación que realizó fuera riesgosa. De otro lado, en el expediente no reposan pruebas que acrediten que el demandante por precaución hubiera revisado físicamente los pagarés que aduce haber adquirido o bien en las oficinas de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la empresa que indica tenía la custodia de dichos título; es decir, no se cercioró si quiera de la existencia real de los mismos, como tampoco se evidencia su diligencia en al menos verificar el comportamiento de la deuda, del pago de dicha cartera, circunstancias que también demuestran la culpa exclusiva a cargo del accionante que entregó su dinero sin verificar las condiciones reales del negocio.

En el presente caso no se puede desconocer que el demandante esperaba obtener unas utilidades del negocio aleatorio que celebró, de las cuales él sería el único beneficiario. Por lo tanto, no tendría sentido que las pérdidas del negocio o los riesgos de la operación emprendida tenga que asumirlas el Estado, asumiendo como si la Administración hubiese participado en el acto autónomo y libre que hoy viene a ser la causa de los perjuicios. En ese escenario, consideramos que una correcta aproximación al asunto que nos concita, debe tener en cuenta que como no todo daño es antijurídico, el daño que no tiene esta característica debe ser soportado por el particular cuando este ha concurrido a su causación, pues los riesgos de su decisión no pueden socializarse para que el Estado y la sociedad en su conjunto respondan por decisiones de que haber prosperado solo habrían supuesto un beneficio individual para el hoy demandante.

Así las cosas, ante el escaso material probatorio que acredite la existencia de los daños que se pretenden sean indemnizados, así como su antijuridicidad, la falta de acreditación de alguna conducta omisiva a cargo del Estado, o que de dicha conducta haya generado el perjuicio, elementos sobre los que se estructura la responsabilidad extracontractual del Estado, lo jurídicamente procedente es negar la totalidad de las pretensiones, pues aunado a tal circunstancia, tal y como se verá más adelante, tampoco se configuran los dos elementos restantes que permitirían imputar una eventual responsabilidad a mi prohijada por los hechos alegados en la demanda.

6.2. Inexistencia de una omisión imputable a la SFC.

Superado el aspecto relacionado con la existencia del daño cuya reparación se pretende por la

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Exp: 29.590. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

presente vía judicial y como quiera que en los hechos de la demanda se evidencia que la responsabilidad de mi representada se afinca o atribuye a una supuesta falla del servicio por “omisión”, procede poner de presente la **inexistencia de omisión imputable** a esta Entidad, por lo que a continuación se señalarán los principales aspectos de la actuación administrativa que con diligencia, previsividad y asertividad este ente de control efectuó respecto OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

6.2.1. La sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no está ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia.

Debe llamarse preliminarmente la atención frente a una realidad incuestionable y es que la referida sociedad con la que los hoy demandantes establecieron en su momento el vínculo contractual causante del daño, no estuvo ni ha estado sometida a la vigilancia de la SFC. Es oportuno precisar que las entidades y actividades respecto de las que esta autoridad ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Bajo este entendimiento, es claro que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia. En virtud de ello, es necesario que se constituyan en la forma y términos que establecen el artículo 53 y siguientes del EOSF y la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica de la SFC. Tales disposiciones señalan que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia, **circunstancia que en el presente asunto jamás ocurrió.**

6.2.2. Actuación diligente de la SFC respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S a pesar de no ser una entidad vigilada, con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público. Inexistencia de omisión imputable por parte de este Organismo de Inspección y Vigilancia.

Aunque la citada sociedad, insistimos, nunca estuvo sometida a la inspección y vigilancia de la SFC, esta autoridad realizó dos visitas de inspección a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., que se adelantaron entre el 9 y 17 de julio de 2013, sin embargo, entre el 2 y 6 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. La finalidad de la misma era establecer si dicha persona jurídica se encontraba realizando operaciones de captación o recaudo no autorizado de recursos del público, a tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 326 numeral 4) literal e) del EOSF, en armonía con el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, concordante con las disposiciones previstas en el Decreto 4334 de 2008.

6.2.2.1. Resumen y conclusiones de la visita realizada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo.

Ahora bien, de lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “pagarés-libranza” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

6.3. Ninguna autoridad del estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

Como se ha señalado a lo largo del presente escrito, el demandante acude al presente medio de control de Reparación Directa, para reclamar solidariamente de las entidades demandadas, un resarcimiento de índole económico, fundado en una presunta responsabilidad extracontractual de la administración pública por supuestamente “avalara” el desarrollo de las actuaciones de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Indica que dicha sociedad desplegó conductas de captación masiva e ilegal de recursos del público, que en virtud de ello las demandadas habrían incumplido sus deberes de inspección, vigilancia y control en relación con el funcionamiento de la sociedad encartada en el asunto, a la que afirma haber entregado sumas de dinero con el fin de comprar títulos valores. Por ello, en su sentir ese hecho lo habilita para reclamar perjuicios materiales por la presunta omisión en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008.

Pues bien, frente al cumplimiento de los contenidos obligacionales a los que está sometida esta Entidad, conviene precisar que desde los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, se establece que las autoridades públicas, como es el caso de mi prohijada, no pueden ejercer funciones distintas de las que expresamente les atribuye la Constitución y la ley. Por ende, la responsabilidad que se quiere endilgar en el presente caso, basada en el supuesto incumplimiento de las funciones a cargo de las demandadas, debe analizarse, considerando los límites impuestos por el mandato constitucional en ciernes, en tanto las autoridades no pueden responder por hechos o cadenas causales diferentes a aquellas que expresamente están bajo su tutela.

Bajo esa óptica, debe decirse que la SFC no tuvo participación, directa o indirecta, en los actos y hechos con base en los cuales ahora se pretende derivar su responsabilidad. Y es que no basta con efectuar acusaciones temerarias e irreflexivas para que se configuren las condiciones en las que ha de incurrirse para que el Estado deba responder por su acción u omisión. En relación con las exigencias de orden jurídico que deben acreditarse para que el Estado pueda ser responsable, ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado:

“Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente la Sala, que la responsabilidad de la Administración no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades, para cuya protección están establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a un Estado ideal, sino con referencia concreta a la Administración a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede estar obligado a lo imposible”.*¹⁰ (Negrilla fuera del texto)

De modo que, ante la inexistencia de prueba que sustente no solo el presunto perjuicio o daño patrimonial alegado por el accionante, sino la omisión en que habría incurrido el Estado y cómo ésta sería la causa eficiente del daño, se impone negar las pretensiones de la demanda, con mayor razón cuando el eventual daño no es ni puede ser consecuencia directa de un acción u omisión que pueda atribuirse a la SFC, aspecto al que con facilidad podrá arribar el Despacho al realizar un simple cotejo del marco jurídico que regula las funciones y competencias de esta Superintendencia.

Siguiendo la argumentación ofrecida hasta este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos necesarios para que prospere la responsabilidad del Estado por la omisión de sus funciones:

*“En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico y; d) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a éste último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(...)”*¹¹

Como puede observarse, en el caso de las Superintendencia no basta con argumentar dentro del proceso que éstas tienen una competencia legal de supervisión sobre la actividad de los particulares, **adicionalmente se debe demostrar que una vez se tuvo conocimiento de la irregularidad cometida no se adelantaron, se adelantaron tardíamente o se usaron los medios inadecuados para interrumpir el proceso causal que genera el daño en el patrimonio económico de los usuarios del servicio o actividad objeto de control, inspección y vigilancia.**

Al referirse sobre la inspección y vigilancia del ejercicio de la actividad financiera, el Consejo de Estado ha sostenido:

*“La actividad financiera que desarrollan los particulares está sometida a la inspección y vigilancia del Estado, en razón del interés general que esa actividad reviste, por su incidencia en la economía. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado por los daños que se derivaran de actuaciones irregulares de quienes ejercen dicha actividad **se produce siempre que la entidad estatal incurra en omisión en el cumplimiento de las funciones que le corresponden como autoridad de policía administrativa, pero cuando se demuestre que de haber dado cumplimiento a tales obligaciones se hubiera podido impedir que se causaran los daños derivados de esa irregular gestión de los particulares**”*¹²

¹⁰ Consejo de Estado. Sentencia de 6 de octubre de 1995, expediente 9535. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.

¹¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-27-000-2001-00009-01 (AG).

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De lo anterior, surge con claridad que la responsabilidad por omisión en la función de policía no se genera sólo porque se haya demostrado que se incumplieron las competencias que se han asignado jurídicamente, sino que adicionalmente debe probarse que de haberse cumplido las obligaciones se habría podido impedir la generación del daño. Así las cosas, no hay deber de reparar cuando aún en cumplimiento de labores de inspección, control y vigilancia, el análisis probatorio conduce a la conclusión inexorable de que tal consecuencia negativa se habría dado con independencia de la intervención estatal.

En este punto resulta pertinente manifestar que la SFC como entidad estatal de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo consagrado en el artículo 121 de la Constitución Política, **sólo tiene competencia en relación con las materias a su cargo** y con sujeción a las funciones atribuidas por la Constitución y la ley, las cuales para el caso de esta Autoridad, se encuentran descritas, en el Decreto 2739 de 1991, Decreto – Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF), la Ley 964 de 2005, Decreto 2555 de 2010 (modificado, entre otros, por el Decreto 1848 de 2016 y el Decreto 2399 de 2019), y las demás normas que las modifiquen o adicionen.

De tal manera, esta Superintendencia es el Organismo técnico encargado de ejercer funciones de control, inspección y vigilancia **sobre las entidades que conforman los sectores financiero, asegurador, bursátil y previsional del país**, teniendo como objetivo supervisar el sistema financiero y el mercado de valores colombiano, de acuerdo con la facultad consagrada y delegada en los artículos 189 numeral 24 y 211 de la Constitución Política.

De ahí que a la SFC, desde la óptica de sus funciones administrativas, **no le compete intervenir en las relaciones contractuales entabladas entre las entidades vigiladas (y no vigiladas) y los particulares**. Es así como, esta Entidad no puede impartir órdenes referidas a la ejecución y terminación de contratos celebrados entre los particulares y sus entidades vigiladas ni mucho menos las no vigiladas, dado que su función de supervisión no trasciende a la intrusión en la esfera de la autonomía de las partes que se caracteriza por la libertad negocial, pues estaría desbordando el ámbito de su competencia administrativa. **Una interpretación contraria llevaría a pensar que esta autoridad tiene facultades para coadministrar o para dirimir diferencias que puedan surgir en las relaciones contractuales, e incluso para asumir responsabilidades por completo ajenas a su naturaleza, objetivos y funciones.**

Dicho de otro modo, la SFC, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las que ha sido expresamente facultada por la ley. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa no podría haber decretado medidas administrativas dirigidas a ordenar la toma de posesión de los bienes y haberes de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. , primero, porque en la visita realizada a la sociedad en cuestión **no se encontraron a la fecha de su realización hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva e ilegal de recursos del público, que conllevaran a la adopción de una medida cautelar para la fecha en que la misma se llevó a cabo y, segundo, porque ésta medida de intervención en el marco del Decreto 4334 de 2008 solo podía ser adoptada por la SS.**

Con todo, no se avizora en el presente caso el despliegue de conducta alguna que haya quebrantado los deberes a cargo de la SFC y de la que pueda derivarse que los presuntos daños sufridos por el accionante deban ser reparados por el Estado, al haber tenido ocurrencia por causa de una conducta que no puede endilgarse a la administración pública.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6.4. Ninguna autoridad pública en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control está obligada a lo imposible.

Para finalizar, no puede soslayarse el hecho de que la omisión que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado en el caso de la omisión de las Superintendencias se concreta, en primer término, por la ausencia de adopción de medidas administrativas cuando se tiene conocimiento de irregularidades en la actividad de las industrias vigiladas, y al cual puede llegarse por quejas de la ciudadanía, o como resultado del propio cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, o de hechos que sean materia de denuncia por los particulares.

Ello, en la medida en que sin este conocimiento previo no es posible pretender responsabilidad, pues aun cuando el Estado tiene una obligación de garantía de bienes jurídicos no está obligado a lo imposible y, por lo tanto su deber de policía administrativa no puede, bajo ninguna circunstancia, implicar el que tenga un funcionario público al interior de cada establecimiento sujeto a su control, por lo que quien demanda debe demostrar supuestos fácticos y jurídicos que permitan deducir la presencia de elementos suficientes, como para considerar que la Autoridad incurrió en un obrar irregular.

En esa línea argumentativa, sobre la naturaleza de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de las Superintendencias, el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente:

*“El propósito de las funciones de inspección, vigilancia y control que el ordenamiento asigna a la Superintendencia de Sociedades no es otro que el de velar porque las compañías vigiladas ajusten su actividad a las normas jurídicas que la gobiernan – constitucionales, legales y reglamentarias –, así como a los estatutos del propio ente social; por consiguiente, en modo alguno podría admitirse que la finalidad de las intervenciones del organismo de control frente a eventos como el sub judice pudiese consistir en hacerle asumir sus obligaciones de resultado de cara a la evitación de que se produzcan daño a los socios o a terceras personas como consecuencia del desarrollo de sus actividades por parte de la empresa sujeta a vigilancia. **La responsabilidad patrimonial del Estado, por tanto, en este tipo de casos, solamente puede quedar comprometida si se demuestra en el proceso i) que el servicio a cargo de la Superintendencia no fue prestado o lo fue de manera tardía, negligente o equivocada y ii) que esa falta en la prestación del servicio fue la que condujo a la materialización del(los) daño(s) cuya reparación se depreca**”¹³.*

Como puede apreciarse, las entidades públicas deben ser absueltas si demuestran que frente a una situación irregular adoptaron las medidas y decisiones que de ella se esperaban, **por lo que no tiene por qué asegurar que su intervención ofrezca una recuperación de una actividad económica o la recuperación de pérdidas dinerarias debidas al comportamiento de los particulares.**

Se trata, entonces, de un régimen **subjetivo** de responsabilidad atado directamente al contenido obligatorio impuesto al Órgano de inspección, vigilancia y control, y limitado a su vez por éste, en función del cual:

*“La responsabilidad patrimonial del Estado bajo un esquema de responsabilidad subjetiva, es decir sustentada en la falla en el servicio, **pues la función de supervisión no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida, sino en asegurar el cumplimiento de las normas del sector**, no puede perderse de vista que el contenido obligatorio a cargo de la Administración en este tipo de supuestos consiste en procurar la salvaguarda -so pena de la adopción de las medidas o de la imposición de las sanciones a las cuales legalmente hubiere lugar (...) cuando las víctimas que acuden a la Jurisdicción en busca de la reparación de los daños que les fueron irrogados son usuarios o terceros damnificados por el actuar de la sociedad*

¹³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2012. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

vigilada, lo primero que se observa es el hecho de que quien produce directamente el daño no es el Estado – el cual sólo desarrolla en tales eventos labores de supervisión-, sino un tercero, que es justamente la compañía intervenida; es ella la que ocasiona, de manera directa, los daños a sus clientes, de suerte que, por regla general. Frente al Estado debe examinarse si se estructura un hecho de tercero como eximente de responsabilidad. De este modo, el título de imputación del daño al Estado únicamente podría ser -se itera- la falla del servicio constituida por la omisión de la entidad oficial supervisora en el cumplimiento de sus deberes legales”¹⁴.

En el caso concreto habría que agregar un hecho al que ya hemos hecho referencia a lo largo de este escrito, pero el que, insistimos, no puede ser inobservado, y es que la sociedad que concita el presente debate judicial, a diferencia de lo sostenido por la jurisprudencia en relación con los eventos en que puede ser declarada la responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, **nunca estuvo bajo la inspección y vigilancia de la SFC.**

Por lo tanto, las actuaciones desplegadas por este Organismo frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en ningún caso se llevaron a cabo por ser ésta una industria supervisada por la SFC. Por el contrario, las mismas se hicieron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora, que sí tiene bajo su égida la Superintendencia Financiera de Colombia.

7. EXCEPCIONES.

Sea lo primero informar al Despacho que las excepciones previas, conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, concordante con los artículos 100 al 102 del Código General del Proceso, se presentarán en escrito separado. En ese orden, nos referiremos a continuación a las que consideramos son presupuestos necesarios para proferir una sentencia que niegue las pretensiones de la demanda, y en ese sentido sea favorable a los intereses de mi representada. Así:

7.1. EXCEPCIONES DE FONDO

7.1.1. Actuación diligente y conforme al marco de sus competencias por parte de la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público.

7.1.1.1. Visita realizada a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

El día 6 de mayo de 2013 se recibieron en esta Entidad dos correos electrónicos a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “*pagarés-libranza*” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide. Esta Superintendencia atendiendo las funciones de prevención y control del ejercicio ilegal de la actividad financiera consideró pertinente evaluar si en el desarrollo del objeto social de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se presentaban operaciones en las cuales se pudieran estar configurando hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público.

En virtud de lo anterior, mediante Oficio No. 2013058932-001-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos

¹⁴ Ibid.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-006-000 del 29 de noviembre de 2013.

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo, como se describen a continuación:

Nombre Cooperativa a sociedad	Radicado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización.
Estrategia Patrimonial S.A.S	2013064058	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Libranzas Group S.A.S	2013081468	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
Cooperativa Multiactiva COOPDOMUS LTDA.	2013064063	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Cooperativa Multiactiva de Palmira - COOMUPAL	2013064064	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
COOPERATIVA DE CRÉDITOS MEDINA - COOCREDIMED	2013081431	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
COOINVERCOR	2013081463	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013

En cuanto a la sociedad ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. se determinó:

- Que suscribió un contrato con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. denominado “*Contrato marco de compraventa de cartera*”, vigente hasta el 13 de noviembre de 2013. En dicho documento se aclaró que los “pagarés – libranza” vendidos a OPTIMAL provenían de las Cooperativas COOPDOMUS Y COOMUPAL.
- Celebró un contrato de cesión con OPTIMAL y COOPUMAL, por lo tanto, a partir del 23 de septiembre de 2013 OPTIMAL LIBRANZAS empezó a comprar los “pagarés-libranza” libranza directamente a la cooperativa y a recibir de manera directa el pago de los flujos.

Respecto de la sociedad LIBRANZAS GROUP S.A.S., se encontró:

- Que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. suscribió con aquella un contrato denominado “*Contrato de compra de cartera con responsabilidad*”, a través del que le compró los derechos de crédito incorporados en los “pagarés-libranza” que eran adquiridos de las cooperativas COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Se probó que el 26 de septiembre de 2013, LIBRANZAS GROUP S.A.S., OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y COOCREDIMED celebraron un contrato de cesión, con el objeto de comprar los “pagarés-libranza” directamente a la Cooperativa sin la intervención de LIBRANZAS GROUP S.A.S.

De otro lado, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. celebró contratos de compraventa de cartera que equivalen al 3.66% de la cartera adquirida con las Cooperativas COOINVERCOR, COOMUNDOCRÉDITO, COOCREDIANGULO y COOPROCO KAPITAL SOCIAL; sin embargo, la comisión de visita centró su revisión y verificación en las ventas de pagarés-libranza realizadas por ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., pues eran ellas quienes habían vendido el 96.34% del total de la cartera reportada por la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

En cuanto a las operaciones de compraventa de “pagarés-libranza” entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y los inversionistas, se evidenció que suscribían un “Contrato de compraventa de cartera modalidad pagaré-libranzas-persona natural”, en el que se establecían las condiciones de la negociación. Vale la pena mencionar que el modelo de negocio consistía en la venta de los derechos de crédito incorporados en títulos denominados “pagarés-libranza”, que se originaban en los préstamos que otorgaban las cooperativas ya mencionadas a sus asociados y que eran cancelados mediante descuento de nómina, aplicada por las pagadurías de las entidades para las que laboraban los deudores. A su vez se observó que, las cooperativas consignaban o giraban el valor recaudado a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., para que fueran consignados a favor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. quien adquiriría los títulos a descuento y se encargaba de pagar el flujo mensual a los inversionistas que los compraban, hasta su cancelación.

Con fundamento en lo expuesto, la comisión de visita concluyó en su informe:

- Los contratos suscritos entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., no gobernaban en su totalidad la relación comercial y las prácticas operativas que tenían vigentes, pues no se incluyeron aspectos relativos al procedimiento para hacer efectiva la cláusula de responsabilidad cambiaria en el evento de presentarse “pagarés-libranzas” siniestrados, incumplimiento en pagos, prepagos o títulos viciados.
- En el numeral 4.3 de la cláusula 4 y 7 de los denominados “Contratos de Compraventa de Cartera Persona Natural y Persona Jurídica”, utilizados para oficializar la venta de “pagarés-libranza”, se hacía referencia a una Fiduciaria y a la firma ERNEST & YOUNG, sin embargo, para el momento de la visita no habían sido formalizados, lo que inducía a que los inversionistas de manera errónea creyeran que esas entidades hacían parte del proceso y de los controles establecidos en la venta.
- Efectuada la revisión del contrato marco firmado con la sociedad Estrategia Patrimonial S.A., se encontró que en la consideración primera y cláusula sexta se hace referencia a operaciones de “factoring” contrario a lo señalado en el texto y forma del documento, pues en este se hace referencia a la compra de “pagarés-libranza”.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no conocía ni tenía el control de los “pagarés-libranza” que presentaban mora o impagos en los flujos mensuales. En el contrato suscrito con Estrategia Patrimonial S.A. no se contempló que dicha situación debía ser informada.
- Las sociedades Estrategia Patrimonial S.A.S. y Libranzas Group S.A.S. no reportaron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. los pagarés siniestrados, toda vez que esa información no se solicitaba a las Cooperativas, lo que llevó a que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. asignara “pagarés-libranza” con recaudo en cero o con recaudos que presentaban cuotas menores al valor esperado.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Las Cooperativas COOMUPAL y COOCREDIMED giraban a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. el valor de los flujos que se vencían durante el mes, sin embargo, no se encontró evidencia de la verificación por parte de las Cooperativas del reporte de descuentos generado por las pagadurías para constatar si existían pagarés que no hubieran sido objeto de descuento.
- ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. giraron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. el valor total de los flujos que se vencían en el mes para cancelar la mensualidad a los inversionistas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- Se revisó el caso particular del señor Farid Stefenn Uribe quien realizó una compra por \$500.000.000. OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. le asignó 116 “pagarés –libranza” por valor de \$668.498.202 a un plazo de 36 meses, con pagos mensuales de \$19.100.000. Se identificó que 11 de los títulos no recaudaron su flujo mensual, no obstante, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. recibió los dineros girados por las cooperativas a Estrategia Patrimonial para pagar los flujos convenidos con el inversionista.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. solicitó a las cooperativas COOPNALCRES, LEGALCOOP, MUNDOCREDITO, HABITAT, COOCREDIMED, COOMUPAL y COOPDOMUS certificaciones de la cartera siniestrada. Sin embargo, las dos ultima no remitieron la información solicitadas. Esta Superintendencia realizó visita de inspección¹⁵ a dichas cooperativas, en la cual se evidenció que vendieron “pagarés-libranza” con flujos cero o sin recaudar el 100% de la cuota o flujo mensual. COOCREDIMED remitió fotocopia simple de una certificación donde señaló que los pagos de los flujos de la cartera negociada se pagaban con oportunidad y suficiencia, pero no se hizo referencia a la existencia o no de cartera siniestrada, situación contraria a lo que evidenció la SFC en la visita realizada a esa cooperativa, pues se encontraron “pagarés-libranza” con flujos cero y con recaudo menor al esperado.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. a partir de noviembre de 2013 modificó su modelo de negocio, toda vez que en la venta de “pagarés-libranza” procedió a endosar los títulos en propiedad, pero sin responsabilidad a favor del comprador.
- Se hizo una revisión del “Archivo Visita Super 5 Dic 13” entregado el 10 de diciembre por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con el fin de verificar que el periodo de maduración de los “pagarés-libranza” vendidos coincidieran con los meses pactados y vendidos a los compradores de esos títulos, no se encontró irregularidad alguna.
- De acuerdo con la valoración de los hechos descritos en el informe y el análisis de la información suministrada por la entidad visitada, como aquella que se recaudó por la comisión de visita en la inspección, se concluyó que para la fecha de la visita, en el desarrollo de la operación de venta de “pagarés-libranza” llevada a cabo por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con sus clientes compradores, no se configuraban los supuestos o los hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y en el Decreto 4334 de 2008.
- De lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “pagarés-libranza” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos

¹⁵ Se realizaron visitas de carácter administrativo a las Cooperativas: COOPDOMUS LTDA, COOMUPAL, COOCREDIMED, COOINVERCOR y a las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A. entre los meses de julio y septiembre de 2013.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

Sea oportuno mencionar que las cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, tema que resultaba ser del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la que esta Superintendencia le trasladó copia del informe de inspección a dicho Organismo.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

Ahora bien, el hecho de que con posterioridad la Superintendencia de Sociedades (en diciembre del año 2016) hubiese verificado la existencia de hechos objetivos que dieron cuenta de la realización de operaciones de captación de dineros del público por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., **en modo alguno significa que la SFC haya sido omisiva en el cumplimiento de sus funciones**, porque, la información que esta Entidad evaluó corresponde a la recabada y entregada respecto de un periodo de 17 meses de operación de la misma, esto teniendo en cuenta que el modelo de negocio empezó en mayo de 2012.

7.1.2. Causales de exoneración de responsabilidad – Inexistencia de nexo causal entre la actuación de la SFC y el daño irrogado.

En el evento en que el Despacho llegare a considerar acreditada la existencia de un daño en el presente caso, las pretensiones deberían ser igualmente negadas ya que el mismo no es imputable ni atribuible a la SFC, pues concurren en el caso causales que deben exonerar de responsabilidad al Estado pues rompen el juicio de imputación fáctica y jurídica.

7.1.2.1. Hecho de un tercero

En el evento en que el demandante lograra probar a lo largo del presente proceso la existencia de un eventual perjuicio en virtud de la entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o llegare a demostrar que las pérdidas que aduce haber sufrido devienen de la existencia y funcionamiento de esa sociedad, ese hecho **NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SFC**, pues claramente la causa del daño estaría afincada en la acción propiamente dicha de esa sociedad, con la que el aquí demandante entabló un negocio jurídico, siendo así responsabilidad de los representantes legales y/o administradores de esa persona jurídica las actuaciones que confluyeron en la pérdida de los recursos depositados, acciones que son completamente ajenas a mi representada.

En ese sentido, cuando en los hechos de la demanda se afirma que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. dejó de pagar las amortizaciones que mes a mes venía realizando al demandante, justificando dicha circunstancia en razones de orden operativo de la cartera, además de asuntos y menesteres internos de las cooperativas originadoras de las obligaciones adquiridas por el actor, debe indicarse que, respecto de estos hechos, ningún vínculo o relación causal tiene la SFC. Las mismas afirmaciones del



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

accionante denotan que fue el hecho del tercero con quien se había establecido el vínculo contractual, el que provocó la cesación de pagos que afectó el patrimonio del reclamante.

Bajo ese entendimiento, de comprobarse que pudo haberse producido un daño, el mismo tendrá que ser objeto de litigio directamente entre las partes contratantes en desarrollo del negocio particular e individual que fue celebrado, ello, mediante el ejercicio de las acciones judiciales estatuidas por el legislador para tales fines, entre ellas, las de competencia de la jurisdicción ordinaria, e incluso a través del proceso penal respectivo, en el que cabe la reparación de los perjuicios irrogados con ocasión del injusto que llegará a acreditarse más allá de toda duda razonable.

No puede perderse de vista que aun cuando se quiera imputar responsabilidad a la Administración y se pretenda de ella el pago de los recursos que de forma libre y autónoma se invirtieron en la sociedad hoy intervenida, el punto central de la discusión que aquí se plantea, es que el presente asunto versa sobre la celebración de un contrato entre particulares, del cual la SFC no fue parte, ni dio su consentimiento o aval, razón por la que mal podría pretenderse que el cumplimiento de las prestaciones a las que se comprometió cada uno de los obligados recaiga en esta autoridad de supervisión, y no en el tercero que se obligó jurídicamente con el demandante, esto es, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, resulta evidente que en el caso puesto a consideración del Despacho la atribución material del hecho dañoso, constituida como un fenómeno estrictamente naturalístico, se relaciona directamente con la acción del particular y no con la del Estado, siendo así que la responsabilidad solo puede endilgarse a la referida sociedad.

Por lo tanto, con fundamento en los hechos y pruebas vertidas dentro del proceso, para esta Superintendencia es claro que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. estructuró un modelo de negocio partiendo de una operación legal, como lo es la compra venta de “pagarés-libranzas”, atrayendo a particulares inversores al mismo con falsas promesas de rendimientos elevados, aun cuando podían establecer que los flujos recibidos resultaban insuficientes para garantizar el pago de lo prometido y que los títulos valores ofrecidos presentaban inconsistencias.

7.1.2.2. Culpa exclusiva de la víctima.

Sea lo primero señalar que el demandante tiene los conocimientos que dan las máximas de la experiencia y que con base en ellos tomó de forma libre, autónoma y consciente una decisión de inversión que por sus características tenía un riesgo inherente, del cual no puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por su resultado, **pues la función de supervisión a cargo de esta Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida**, ello, tratándose una de entidades no vigiladas.

Cabe señalar, con base en las conclusiones contenidas en el Informe de Inspección analizado a lo largo de este escrito, que al parecer lo que ocurrió con el aquí accionante no fue otra cosa que la celebración de un contrato aleatorio, en los términos descritos en el artículo 1498 del Código Civil, esto es, aquel en el cual existe una contingencia incierta de ganancia o pérdida, y el cual se materializó en la compra de una cartera, que se generó en el alea de una posible rentabilidad atada al recaudo de unos recursos que se lograría en un periodo de tiempo determinado. Por ende, no se puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por el resultado de un negocio determinado por la autonomía de la voluntad de las partes, menos aun cuando el resultado del mismo dependía o estaba íntimamente ligado a los riesgos propios de los negocios realizados, y que el demandante consintió asumir libre y voluntariamente.

En ese sentido, debe auscultarse con especial énfasis el hecho que el accionante, según se infiere del



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

libelo, obró en todo momento de manera libre, consciente y voluntaria al momento de entregar sus dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ello bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, en función del cual se les reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios. Razón por la cual no es dable asumir que el Estado deba tener responsabilidad por los perjuicios que los particulares sufran como resultado de su propia iniciativa.

Y es que proceder en un sentido contrario a éste, supone un riesgo evidente, que no es otro que el de llevar a concluir que cada que un inversionista, en un negocio de riesgo, pierda, el Estado habrá de responder por su dinero. Lo cual conllevaría a unas consecuencias contraproducentes, pues se daría cabida a la idea que las personas realicen toda clase de inversiones riesgosas, pues en el evento de fracasar el Estado responderá por ellas. Un argumento en esa dirección es que al Estado no pueden socializársele solo las pérdidas, cuando las ganancias son privatizadas en los sujetos contratantes. Por lo que mal podrían instrumentalizarse las funciones de inspección, vigilancia y control, para sostener un modelo en el que las utilidades son individualizadas en unos pocos, mientras las pérdidas son compartidas entre todo el conglomerado social.

De otro lado, es importante considerar que la presunta relación contractual entre el demandante y OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., se trata de un negocio privado sin intervención alguna de la SFC, en el cual el interesado asevera haber realizado una “inversión” de dinero, tipo de negocio que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias, para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. Así, toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la [multiplicación](#) del dinero colocado.

Respecto de lo anterior, se debe señalar que:

*“En la inversión privada suelen considerarse tres variables distintas; la primera corresponde al rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que se considera que tendrá en términos positivos o negativos, la segunda obedece al **riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento, la posibilidad de que la inversión no se recupere,** y por último el horizonte temporal, o bien el período a corto, mediano o largo plazo durante el que la inversión se sostendrá.”¹⁶*

En otras palabras, está el demandante obligado a actuar con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como a proceder con la diligencia debida y el cuidado que se espera frente a esta clase de operaciones comerciales. Esa diligencia lo hubiese llevado, al menos, a interrogarse e indagar sobre algunas cuestiones esenciales de la cartera que estaba adquiriendo, tales como el origen de los pagarés libranza, lo que le habría llevado a verificar si dichos títulos existían en las cooperativas originadoras que celebraban negocios con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la sociedad contratada para la custodia de los mismos.

Nótese que aun cuando el actor reprocha al Estado por un presunto actuar negligente, el dicho no ofrece prueba de ninguna clase, pasa por alto señalar que nunca acreditó haber verificado o realizado

¹⁶ Definición ABC: <http://www.definicionabc.com/economia/inversiones>.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

alguna investigación sobre el efectivo pago de los deudores de las obligaciones contenidas en los títulos valores que estaba adquiriendo. Tampoco hizo nada por establecer de qué tipo de cartera se trataba, si la misma estaba siniestrada, o los títulos valores presentaban inconsistencias, duplicidades, si la información que le brindaba vía correo electrónico sobre montos y plazos de los pagarés era verídica o fidedigna.

Por el contrario, simplemente existen una serie de manifestaciones que dejan ver que el demandante se limitó a recibir información, sin comprobarla, y acto seguido a suscribir documentos sin un soporte válido, amparándose únicamente en la “*confianza*” que le brindaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Debe plantearse, entonces, la existencia manifiesta de una desidia del demandante en los términos a los que hemos hecho referencia, como causa determinante del posible perjuicio irrogado, por lo que la apreciación del daño, en caso de existir éste, deberá estar sujeta a la valoración de la conducta de quien se expuso a él imprudentemente.

En definitiva, en el presente caso consideramos están dados los elementos de tipo normativo que hacen improcedente la imputación desde un punto de vista fáctico y jurídico, pues nos encontramos ante una actuación del accionante que evidencia imprudencia y la aceptación de riesgos o aleas propias del negocio jurídico que celebraron, lo cual tendría que excluir la responsabilidad de la Administración por el hecho o la culpa exclusiva de la víctima.

7.2. Intervención como escenario idóneo para las reclamaciones de índole económica como la que se pretende.

El trámite de la demanda judicial por medio de la interposición del medio de control de reparación directa, no es el mecanismo adecuado para pretender la restitución de los dineros que se dice fueron entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., pues con ello se desconocen las instancias legales dispuestas especialmente para tales fines, esto es, el trámite administrativo que con fundamento en el artículo 5° del Decreto 4334 de 2008, el cual fue ordenado por la SS mediante Auto 400-005087 del 13 de abril de 2018, a través del que se decretó la toma de posesión como medida de intervención de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., escenario en el que existe la posibilidad de devolver de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que al pretender el demandante que a través del medio de control de reparación directa le sean restituidos como pretensión el valor de los dineros entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conllevaría al cobro de lo no debido e incluso de un enriquecimiento sin causa, por cuanto al restituirse al actor dentro del proceso de intervención de manera parcial o total el valor de la inversión, se entendería que su daño se habría resarcido y nadie está habilitado por la ley para obtener el pago de una obligación dos veces.

8. PETICIÓN

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que han sido expuestas en el presente escrito de contestación, respetuosamente solicito a su señoría:

En forma principal:

1. Que de **DECLAREN PROBADAS** las excepciones previas de **CADUCIDAD y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**
2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En forma subsidiaria:

1. Se **DECLAREN PROBADAS** las excepciones de mérito o de fondo denominadas: **ACTUACIÓN DILIGENTE Y CONFORME AL MARCO DE SUS COMPETENCIAS POR PARTE DE LA SFC RESPECTO DE OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.; CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD – INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTUACIÓN DE LA SFC Y EL DAÑO IRROGADO (HECHO DE UN TERCERO – CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA); INTERVENCIÓN COMO ESCENARIO IDÓNEO PARA LAS RECLAMACIONES DE ÍNDOLE ECONOMICO COMO LA QUE SE PRETENDE.**
2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.

En cualquier caso:

- i) Se **CONDENE EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO** a la parte demandante.

9. FRENTE AL ACÁPITE DE COMPETENCIA Y CUANTÍA DE LA DEMANDA.

Entendemos que la estimación razonada de la cuantía realizada por la parte actora en el mencionado acápite del escrito de demanda, tiene por objeto cumplir con el requisito de la demanda previsto en el numeral 6 del artículo 162 del CPACA.

No obstante lo anterior, si eventualmente el Despacho considera dicha estimación como un Juramento Estimatorio, en los términos del artículo 206 del Código General del Proceso del Proceso, se objeta la estimación de perjuicios que ha presentado bajo juramento la parte demandante, para cuyo efecto se solicita tener incorporadas como fundamento del presente acápite de objeción, todas las razones y manifestaciones en torno a la **INEXISTENCIA DEL DAÑO Y SU ANTIJURIDICIDAD.**

Esta objeción encuentra sustento en la ilegitimidad y la improcedencia de la demanda, lo cual encuentra suficiente y sólido respaldo en las argumentaciones y excepciones que se dejan expuestas en defensa de los derechos e intereses de la SFC, de manera que no podrán prosperar o estimarse las pretensiones de la demanda, máxime si se tiene presente que en este caso, como ya se ha señalado, no nos consta y tampoco está probado que la parte demandante haya sufrido daños y perjuicios causados por esta Entidad.

En consecuencia, esta objeción afecta la totalidad del monto estimado bajo juramento por la parte demandante. En cuanto se desestimen las pretensiones – tal como lo solicito – deberán decretarse y liquidarse, a favor de mi mandante y a cargo de los demandantes, las sumas correspondientes a costas, incluidas las Agencias en Derecho.

10. RESPECTO A LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES.

Verificado el escrito de demanda, esta Superintendencia considera necesario oponerse a la solicitud de determinadas pruebas realizada en el escrito de demanda por la parte actora, tales como:

10.1. Remisión de expedientes:

En los acápites del escrito de reforma a la demanda titulados “*EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA*” y “*REMISIÓN DE EXPEDIENTE*”, los demandantes solicitan



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

las misas documentales, que corresponde entre otras a: i) copia del informe de la visita practicada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ii) copia de los oficios mediante los que se remitió a la SS y SES el informe de inspección y iii) Otros documentos relacionados con la actuación administrativa.

En relación con dicha solicitud, es de mencionar que con la presente contestación se adjunta el Informe de Inspección de la visita realizada por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A. que contiene los antecedentes y conclusiones de la misma, copia de las quejas y/o solicitudes de investigación recibidas en esta Superintendencia respecto de la referida sociedad, con su respectiva respuesta, que corresponde a la decisión final adoptada frente a cada queja, copia de los oficios mediante los que se remitió a la SS y SES el informe de visita.

Así las cosas, las referidas solicitudes probatorias por sustracción de materia son innecesarias, además, es oportuno indicar que la parte actora ya cuenta con varios de los documentos solicitados, pues lo aporta como prueba en común.

10.2. Informe juramentado.

Los aquí demandantes solicitan “(...) ordenar al representante legal de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, o quien haga sus veces, que rinda un informe juramentado en relación con las actuaciones administrativas que se surgieron con antelación a julio de 2016”.

Al respecto, es importante reiterar que conforme lo establece el artículo 168 del Código General de Proceso “El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.

En el caso que nos ocupa, el informe sobre las actuaciones adelantadas por la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., fueron relatadas a lo largo del presente escrito, además con la contestación se aporta copia del informe de la visita de inspección. Por ende, el informe juramentado solicitado no solo resulta inútil para el proceso, en la medida en la que se limitaría a reiterar el contenido del mencionado informe, además de generar una carga y un desgaste adicional para la administración pública.

Por ello, ME OPONGO al decreto de dicho informe y pido al (a) señor (a) juez (a) rechazarlo, pues al ya existir unos documentos que contienen la misma información que se obtendría con su decreto y contar con un resumen detallado de la actuación y conclusiones, la prueba carecería de utilidad y se torna innecesaria para el proceso, pues en caso de decretarse, sería del todo superflua, reiterativa y redundante.

11. PRUEBAS

Con el propósito de acreditar y respaldar los hechos y afirmaciones que se han expuesto a lo largo de la presente contestación, solicito que se decreten y valoren como pruebas, además de aquellas que oficiosamente disponga decretar y practicar el Despacho, las siguientes:

11.1. Documentales que se aportan

Conforme al numeral 4 del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con la contestación de la demanda debe acompañarse todas las pruebas que la demandada pretenda hacer valer en el proceso, por lo que para el caso que nos incumbe se allegan:

1. Trámite No. 2013041076 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Alvaro Iván Rojas y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.

2. Trámite No. 2013041086 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Mauricio Santiago Jiménez y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
3. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
4. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
5. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
6. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
7. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
8. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
9. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
10. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
11. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
12. Informe de Inspección No. 2013081463-009de de la visita practicada a COOINVERCOR.
13. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
14. Trámite No. 2016112058 mediante el que se atendió la petición presentada por el Dr. Diego Vega en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Carlos Humberto Garzón y Diana Patricia Maldonado Rincon, en la que solicitó se promoviera la intervención y toma de posesión por captación de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
15. Copia del requerimiento y orden de inspección de la Fiscalía General de la Nación junto con las respectivas respuestas.
16. Trámite No. 2018019222 mediante el que se atendió la petición presentada por la señora Luisa Fernanda Daza Manrique.
17. Copia de la respuesta remitida por el agente interventor en la que certifica la suma reconocida, montos cancelados y saldo pendiente por pagar al demandante dentro del proceso de intervención que adelanta la Superintendencia de Sociedades contra OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., junto con los respectivos soportes, decisiones y autos.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para que obren como pruebas en el proceso adjuntamos copia de la documentación en comento, siendo oportuno señalar que se autorizó a las cuentas: jadmin60bta@notificacionesrj.gov.co y jadmin60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, para que la consulten en el siguiente link: https://superfinanciera-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amgarzon_superfinanciera_gov_co/EiVdsmHrJ6FJv5n9ZXIlg59MBLiCnNUVV9cffWkOx0qnMaQ?e=dVOAB8

Al respecto, es de indicar que los documentos remitidos como pruebas tienen el cariz de reservados razón por lo cual solicitamos adoptar las medidas tendientes a garantizar la conservación de la misma en los términos del artículo 27 del CPACA.

11.2. Pruebas que se solicitan

11.2.1. Interrogatorio de parte

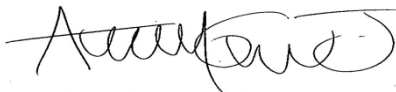
En los términos del artículo 184 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas concordantes, comedidamente solicito se fije hoy y fecha, para **INTERROGAR** bajo la gravedad de juramento a los demandantes en este proceso, FRANCISCO AUGUSTO LUBINOS BADILLO y FRANCISCO SAID ZARUR LATORRE, lo cual haré de forma oral o escrita, en relación con los hechos materia del medio de control de Reparación Directa, persona que será citada a través de su apoderado judicial en los términos autorizados por el artículo 78 del CGP.

12. NOTIFICACIONES.

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez.

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANA MARIA GARZON JIMENEZ
Revisó y aprobó:
ANA MARIA GARZON JIMENEZ

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2019175408-027-000

Fecha: 2021-06-09 15:56 Sec. día 2025

Anexos: Sí

Trámite: 132-DEMANDAS

Tipo doc: 325-325 CONTESTACION ADICIÓN, SUSTITUCIÓN, O REFORMA DE DEMANDA

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario: ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-027-000
Trámite : 132 DEMANDAS
Actividad : 325 325 CONTESTACION ADICIÓN, SUSTITUCIÓN, O REFORMA DE DEMANDA
Anexos : E1

Referencia: **CONTESTACIÓN REFORMA DEMANDA**
Medio de Control: **REPARACIÓN DIRECTA**
Radicado: **11001-33-43-060-2020-00063-00**
Demandante: **LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR**
Demandado: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTRA**

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. identificada como aparece al pie de m firma, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No. 274.629 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial de la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (en adelante SFC)**, según poder que obra en el expediente, estando dentro del término legal procedo a **CONTESTAR LA REFORMA DE LA DEMANDA** en los siguientes términos:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

En los términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Administrativo, comparece, como parte demandada la Superintendencia Financiera de Colombia, Entidad que forma parte del sector central de la administración pública del orden nacional, con domicilio en Bogotá, representada legalmente por el señor Superintendente Financiero Jorge Castaño Gutiérrez.

En su nombre y representación interviene la suscrita apoderada, en virtud del poder que me fuere conferido por el Coordinador del Grupo Contencioso Dos de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, a quien le fue delegada la función de otorgar poderes a los funcionarios para que ejerzan la representación judicial o extrajudicial de la SFC, al tenor del numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 0229 del 14 de febrero de 2017.

2. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El numeral primero del artículo 173 de la Ley 1437 de 2011, dispone entre otras cosas lo siguiente: *“De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial.”*

Ahora bien, mediante auto del 20 de mayo de 2021 notificado por estado del día 21 del mismo mes y año, se admitió la reforma a la demanda y se corrió traslado de la misma por la mitad del término, es decir por 15 días hábiles, los cuales empezaron a correr a partir del día 24 del mismo mes y fenecen el próximo 15 de junio de 2021. Por lo tanto, es evidente que esta Superintendencia se encuentra dentro del término para pronunciarse frente a la reforma a la demanda.

Con el fin de evitar confusiones y con el ánimo de hacer más clara y organizada la intervención de mi prohijada, se hará un pronunciamiento general de los escritos de demanda y de reforma de la demanda, razón por la que en el presente documento se integra la contestación de ambas.

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Con fundamento en las razones que se acreditarán a lo largo de este escrito y en general en el devenir de este proceso judicial, **ME OPONGO A TODAS LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA** por las siguientes razones a saber:

- Carecer de fundamento respecto de mi prohijada, toda vez que lo expuesto por la parte demandante corresponde única y exclusivamente a la narración de un **incumplimiento contractual**, relación jurídica de la cual la SFC no fue parte;
- Por tratarse de una demanda cuyos fundamentos fácticos imposibilitan, por completo, hacerle una imputación de responsabilidad a la SFC;
- Por no existir nexo de causalidad entre los fundamentos fácticos expuestos, los perjuicios cuya reparación deprecia la parte demandante y las funciones de esta Entidad;
- Por tratarse de un perjuicio que, de encontrar algún asidero, en todo caso evidenciaría que la responsabilidad no podría predicarse respecto de la **SFC. Como se demostrará, en el presente caso se configura el hecho de un tercero y la culpa de quien se reputa víctima;**
- Por tratarse de un asunto en el que se encuentran debidamente configuradas diversas causales que eximen de responsabilidad respecto de la **Superintendencia Financiera de Colombia.**

En consecuencia, no habrá lugar a que la autoridad judicial acoja las pretensiones declarativas y de condena formuladas por el demandante.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

- A esta Superintendencia **NO LE CONTAN** los **HECHOS 1) al 3)** en los que se indica que el demandante fue contactado por la fuerza comercial de la empresa **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.)**, que le explicaron en qué consistía el sistema de inversión de libranzas y le ofrecieron por participar en el negocio una rentabilidad equivalente al interés bancario corriente.

Al respecto vale la pena señalar que las anteriores afirmaciones se refieren a las condiciones ofrecidas por la referida sociedad para la ejecución del negocio jurídico celebrado con el demandante, relación en la que esta Superintendencia no tuvo ningún tipo de participación o injerencia.

- Frente al **HECHO 4) NO NOS CONSTA y NOS ATENEMOS** a lo que para la época haya certificado la Entidad que represento. La tasa de interés certificada puede ser consultada en nuestra página web www.superfinanciera.gov.co, sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del C.G.P. los indicadores económicos se consideran un hecho notorio.
- En el **HECHO 5)** se afirma que el actor indagó ante esta Superintendencia y la Superintendencia de Sociedades (en adelante SS) sobre la legalidad de las operaciones desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., lo que le permitió establecer que las demandadas conocían de las operaciones, que habían realizado visitas, que dicha sociedad no era objeto de ninguna medida y que se trataba de una actividad no proscrita por la ley.

En lo que respecta a la SFC, debemos señalar que al revisar en el Sistema de Gestión Documental – SOLIP, que contiene la totalidad de trámites adelantados por esta Entidad, **no se encontró que el aquí demandante haya presentado ante esta Superintendencia petición alguna mediante la que indagara sobre el negocio ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., razón por la que NO ES CIERTO lo afirmado por el actor en el dicho. Valga la pena manifestar que en las pruebas allegadas con la reforma no reposa documento alguno que acredite tal antecedente.**

Finalmente, lo relacionadas con la SS **NO NOS CONSTAN** pues se refiere al actuar de una entidad distinta a la SFC.

- Frente a los **HECHOS 6) y 7) NO NOS CONTAN** los términos de la información suministrado al aquí demandante por los asesores de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. pues son personas ajenas a esta Superintendencia. En cuanto a las verificaciones realizadas por medios informáticos, es deber del actor acreditar que las mismas fueron realizadas.
- En cuanto al **HECHO 8)** en el que se manifiesta, sin hacer especificación respecto de una determinada persona, que varios inversionistas solicitaron a esta Superintendencia información sobre la legalidad de las operaciones adelantadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., debemos señalar que al revisar el Sistema de Gestión Documental – SOLIP, que contiene la totalidad de trámites atendidos por esta Entidad, se encontraron las siguientes peticiones relacionada con la referida sociedad:

No.	RADICADO	PETICIONARIO
1	2013041076-000 del 6 de mayo de 2013.	Alvaro Iván Rojas
2	2013041086-000 del 6 de mayo de 2013.	Mauricio Santiago Jiménez



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3	2016112058-000 del 5 de octubre de 2016.	Dr. Diego Felipe Vega Jiménez en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Diana Patricia Maldonado Rincon y Carlos Humberto Garzón.
4	2018019222-000 del 14 de febrero de 2018.	Luisa Fernanda Daza Manrique.

Frente a dichas comunicaciones estimamos oportuno hacer un breve resumen del objeto de las mismas, así como del actuar y respuesta dadas por esta Superintendencia. Veamos:

○ **2013041076-000 y 2013041086-000.**

Los señores Alvaro Iván Rojas y Mauricio Santiago Jiménez reenviaron a esta Superintendencia vía correo electrónico copia de un folleto que les fue enviado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en el que se promocionaba el negocio de venta de pagarés-libranza, comunicaciones en la que cuestionaban si dicho ofrecimiento era “(...) otro DMG” y se solicitó “(...) para su revisión no hay (sic) sea otra pirámide.”

Con fundamentos en lo anterior se procedió a consultar la página web de dicha sociedad y se identificó que ofrecía sus servicios mediante tres sociedades, siendo una de ellas **OPTIMAL FACTORING** la cual se dedicaba a desarrollar actividades de factoring y dado que tales compañías no se encontraban, ni se encuentran sometida a la vigilancia de la SFC, con fundamento en establecido en el Capítulo II y artículo 11 de la Ley 35 de 1993 se realizó mediante los Oficios No. 2013041076-001 y 2013041086-001 del 27 de febrero de 2014 el respectivo traslado a la entidad competente, que para el caso es la Superintendencia de Sociedades.

De otro lado, mediante los Oficios de respuesta No. 2013041076-002 y 2013041086-002 del 30 de mayo de 2014, se informó a los accionantes entre otras cosas que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “(...) **NO se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia, razón por la que no está autorizada para adelantar actividades exclusivas de las entidades vigiladas por este Organismo y dentro de ellas, captar masivamente recursos del público.**”, así como el traslado realizado a la SS.

○ **2016112058-000.**

Mediante petición del 5 de octubre el 2016 el Dr. Diego Felipe Vega Jiménez en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Diana Patricia Maldonado Rincon y Carlos Humberto Garzón solicitó a este Organismo “(...) **INTERVENCIÓN Y TOMA DE POSESIÓN POR CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL SIN AUTORIZACIÓN ESTATAL** debido a que **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. (...) ha realizado Captación masiva y habitual de dineros del público (...)**”

Considerando que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no se encuentra bajo vigilancia de esta Superintendencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se remitió la mencionada comunicación a la SS para los efectos propios de su competencia, teniendo en cuenta que la mencionada firma se encuentra en la lista de las sociedades vigiladas por esa Entidad. Actuación que se surtió mediante Oficio No. 2016112058-001 del 12 de octubre de 2016.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Igualmente, al Dr. Vega Jiménez a través del Oficio No. 2016112058-002 del 18 de octubre de 2016 se le informó que conforme a lo dispuesto en el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero este Organismo ejerce las funciones de sanción, supervisión, certificación y publicidad, entre otras, respecto de entidades sometidas a su vigilancia. Se precisó que la referida sociedad **NO** se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia y que su comunicación había sido remitida por competencia a la SS. Pues se evidenció que OPTIMAL se encontraba dentro de la lista de entidades sometidas a la vigilancia de esta autoridad, además por ser la competente para vigilar las sociedades que desarrollan operaciones de factoring y la facultada conforme al Decreto 4334 de 2008 para verificar si la citada sociedad desarrollaba operaciones que configuraran una captación ilegal de recursos del público, así como para adoptar las medidas administrativa pertinente y proceder con su intervención.

○ 2018019222-000.

La señora Luisa Fernanda Daza Manrique mediante petición radicada el 14 de febrero de 2018 solicitó información y copia de los documentos relacionados con la visita de inspección realizada por esta Superintendencia a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. A través del Oficio No. 2018019222-001 del 28 de febrero de 2018 se atendió dicha solicitud, señalando que la citada sociedad no está sometida a la inspección, vigilancia o control de la SFC, se precisó que *“(...) la información relacionada con las labores de supervisión que desarrolle esta Entidad en cumplimiento de sus funciones tiene la connotación de “Información Pública Reservada” protegida por lo establecido en el literal e), numeral 3 del artículo 326 del EOSF, además los informes de las visitas de inspección que se lleven a cabo en razón de una actuación administrativa, son reservados, en virtud de lo establecido en el numeral 3° del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.”*

En virtud de lo anterior se le solicitó a la señora Luisa Fernanda remitir *“(...) la correspondiente autorización del Juez de Garantías, o en su defecto cumplir con lo señalado en el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.”*, pero lo que se le otorgó un (1) mes de plazo. Teniendo en cuenta que dentro del referido término no se recibió respuesta alguna de la ciudadana, esta Entidad mediante Oficio No. 2018019222-003 del 5 de abril de 2018 le indicó: *“(...) este Organismo encuentra procedente decretar el desistimiento tácito de la petición y en consecuencia se ordena el ARCHIVO de la presente actuación administrativa, frente a la cual únicamente procede el recurso de reposición. Lo anterior sin perjuicio, que pueda presentar una nueva petición con el lleno de los requisitos legales (...)”*

- En cuanto al **HECHO 9)**, **NO NOS CONSTA** que el demandante haya adelantado algún tipo de indagación ante la Cámara de Comercio con el fin de averiguar el objeto social registrado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., por lo que nos atenemos a las pruebas que sobre este dicho reposen en el expediente.
- Los **HECHOS 10) y 11) SON PARCIALMENTE CIERTOS**, debe precisarse que el día 6 de mayo de 2013 **se recibieron en esta Entidad dos correos electrónicos a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “pagarés-libranza” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide.** Esta Superintendencia atendiendo las funciones de prevención y control del ejercicio ilegal de la actividad financiera consideró pertinente evaluar si en el desarrollo del objeto social de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se presentaban operaciones en las cuales se pudieran estar configurando hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por lo anterior la SFC, practicó una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, del 02 al 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación.

Así las cosas, nos atenemos al tenor literal de los antecedentes y en general al total del contenido de informe producto de la visita practicada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., documento que reposa en el plenario y que se allega nuevamente con el presente escrito.

- El **HECHO 12) ES PARCIALMENTE CIERTO**. En el punto “6 CONCLUSIONES” del informe de inspección No. 11300809201300263 se indicó que: *“(…) de acuerdo con la valoración de los hechos descritos en el presente informe y del análisis efectuado tanto a la información suministrada por la entidad visitada, como aquella que la Comisión de Visita recaudó en el transcurso de la inspección, se concluye que en la operación de venta de ‘pagarés-libranza’ llevada a cabo por la sociedad Optimal Libranzas S.A.S., con sus clientes compradores, a la fecha de la presente visita, no se encuentran configurados lo supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008.*

(...)

Finalmente, es pertinente precisar que el modelo de negocio de la sociedad Optimal Libranzas S.A.S. empezó en mayo de 2012, período corto para determinar y establecer el impacto que puede presentar la siniestralidad de pagarés libranzas en los estados financieros de la sociedad, toda vez que el período evaluado corresponde a sólo 17 meses de operación.”

- Los **HECHOS 13) y 14) SON PARCIALMENTE CIERTOS**, se debe precisar que mediante Oficio No. 2013058932-010 esta Superintendencia remitió a la SS copia del informe de la visita practicada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., esto debido a que cuando se estaba adelantando la misma se presentaron en la dicha sociedad tres funcionarios de esa entidad que habían sido comisionados para llevar a cabo una toma de información, diligencia que se abstuvieron de practicar hasta tanto la SFC culminara la visita y remitiera el informe.

Ahora bien, con Oficio No. 2013058932-009 se remitió el informe de visita a la Superintendencia de la Economía Solidaria (en adelante SES), ya que en el curso de la misma se evidenciaron algunos hechos que podían ser del resorte de dicha entidad debido a la operación de compra y venta de pagarés-libranza originados de créditos otorgados por cooperativas.

- Se indica en el **HECHO 15)** que la SFC es competente para imponer medidas cautelares con el fin de evitar que cualquier persona natural y/o jurídicas ejerzan sin autorización, actividades exclusivas de las entidades vigiladas.

Al respecto es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Decreto Ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero la SFC puede imponer a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las vigiladas sin contar con autorización, una o varias de las medidas descritas en tal disposición.

Igualmente, en los artículos 325 y 326 *ibidem* se otorgan a esta Entidad facultades de supervisión, prevención y sanción respecto de personas que desarrollas actividades propias de las instituciones vigiladas.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De lo anterior, se puede inferir que para que la SFC adopte alguna medida contra una no vigilada se debe evidenciar que esté desarrollando sin autorización una actividad propia de una entidad vigilada y para el caso en particular la sociedad Optimal Libranzas S.A.S. realizaba compra y venta al descuento de cartera de créditos instrumentada en títulos valores de contenido crediticio denominados “pagarés-libranza” y como se ha señalado en párrafos anteriores y como se explicará con detalle más adelante, en la visita practicada a la referida sociedad se concluyó que la fecha en que se practicó *no se encontraron configurados lo supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008.*

- En los **HECHOS 16) al 19) y 21)** se indica que el demandante con ocasión de las presuntas indagaciones elevadas ante la SFC y SS suscribió con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. un contrato de compraventa para la adquisición de libranzas, que con ocasión del negocio realizó unos pagos a la referida sociedad y que recibió una suma de dinero por concepto de amortización y que ante la cesación de pagos le quedaron adeudando dinero. Al respecto, debemos señalar que dichas circunstancias **NO NOS CONSTAN** pues la SFC no fue parte de la relación comercial celebrada entre la citada sociedad y el demandante.

Es de señalar que con la demanda se aportaron como prueba la copia del contrato y de una consignación a favor de la mencionada sociedad. Al respecto debemos indicar que, en relación con su validez, nos atenemos a lo que se pruebe a lo largo del proceso, así como a lo que resulte del juicio que deba realizarse en torno a su legalidad y veracidad y, en general, lo que pueda concluirse a partir de ellos. Vale la pena llamar la atención del Despacho, pues ni en los antecedentes fácticos y tampoco en las documentales se menciona a la SFC. Esto permite concluir que los negocios presuntamente celebrados corresponden claramente a acuerdos de voluntades de carácter netamente privado, suscritos única y exclusivamente por el aquí demandante y OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, sin la participación, el concurso o la anuencia de mi representada.

- Respecto a los **HECHOS 22) al 26) y 29) al 31)** en los que se indica que el demandante recibió en el plan de pagos por parte del interventor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. unas determinadas sumas de dinero y le quedaron adeudando otro monto, que se hizo parte del proceso de liquidación de dicha sociedad, se entiende que se refieren al proceso de intervención, y se hace mención a las funciones de los interventores o agentes liquidadores nombrados por la Supersociedades, debemos manifestar que **NO NOS CONTAN** tales afirmaciones ya que se refieren a actuaciones surtidas al interior del proceso jurisdiccional que adelanta una entidad distinta a la SFC, en este caso la SS.

No obstante, lo relatado en estos numerales es susceptible de ser tenido en cuenta como confesión de parte, a efectos de establecer que el demandante ya se encuentra reclamando las sumas pretendidas a través del presente medio de control, en la instancia por antes referida.

Finalmente, los dichos relativos a las funciones del agente interventor o liquidador no constituyen un hecho sino una manifestación subjetiva del actor la cual debe acreditarse.

- Frente a los **HECHOS 20) y 27)**, en los que se señala que a mediados del año 2016 OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. cesó el pago de las amortizaciones, justificando dicha circunstancia en razones de orden operativo de cartera, además de asuntos relacionados con las pagadurías y menesteres internos de las cooperativas originadoras de los pagarés-libranza las cuales adujeron siniestros de cartera, debemos indicar que el contenido de los dichos corresponde a apreciaciones o señalamientos del demandante que deberán ser probados en el proceso.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En este orden de ideas **NO NOS CONSTA** lo manifestado en los mismos, ya que como se indicó anteriormente mi prohijada no hizo parte del negocio jurídico al que se ha hecho referencia. De otro lado, es pertinente que se **tenga por sentado y a manera de confesión del accionante, que desde esa fecha se produjo el presunto incumplimiento contractual que le originó una afectación, esto para el conteo del término de caducidad.**

- Respecto al **HECHO 28) ES CIERTO** que la SS mediante Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 adoptó una medida de intervención administrativa respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y ordenó a dicha sociedad la suspensión inmediata de las operaciones de captación masiva. Ahora bien, teniendo en cuenta que el referido acto administrativo no fue expedido por la Entidad que representó y que es un documento público, nos atenemos al tenor literal del mismo.
- Respecto a lo señalado en el **HECHO 32)** en el que se indican que la SFC y la SS conocieron a plenitud el modelo de negocio desarrollado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y no obstante ello, no desplegaron acciones para evitar que continuaran en operación, debemos indicar que son meras apreciaciones subjetivas que deben ser probadas dentro del proceso, pues dan a entender una realidad totalmente distorsionada y amañada del asunto que **NO ES CIERTA.**

De otro lado, como se dijo anteriormente la SFC realizó una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. Culminada la visita se concluyó que no se configuraban los supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y Decreto 4334 de 2008. Es de precisar que la citada actuación será explicada más adelante.

Frente a las manifestaciones relacionadas con la SS, debemos señalar que se refieren a una autoridad distinta a la Superfinanciera, razón por la que **NO NOS CONSTAN** y deberán ser probadas por el demandante.

- Señala el **HECHO 33)** que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. haya defraudado a aproximadamente trescientas trece (313) personas bajo su modalidad de negocio, por lo tanto, dicha afirmación deberá ser probada dentro de la presente acción, en consecuencia, nos atenemos a lo que se pruebe.
- Respecto al **HECHO 34)**, en el que se hace una transcripción de las actividades inscritas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, es de señalar que las mismas corresponden a la autonomía de la voluntad de los socios, quienes determinaron que actividades iban a registrar. **Se observa que ninguna corresponde a una actividad exclusiva de las entidades vigiladas por esta Superintendencia, razón por la cual es dable afirmar, sin lugar a duda que dicha sociedad no se encontraba sometida a la vigilancia e inspección de esta Entidad.**
- En relación con los **HECHOS 35) y 36)**, en los que se indica que el demandante se involucró en el proceso comercial ofrecido por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. debido a la información brindada por la SFC y la SS, **NO ES CIERTO RESPECTO DE LA SFC Y NO NOS CONSTA FRENTE A LA SS.** Como se puso de presente al contestar el hecho 5), **NO ES CIERTO** que el accionante haya realizado algún tipo de indagación ante esta Superintendencia.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- En lo atinente al **HECHO 37)** en el que se hace mención a las actividades de captación, manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público y así de los supuestos de captación contenidos en el decreto 3227 de 1982, es necesario señalar previamente que dicha norma fue modificada por el decreto 1981 de 1988 y hoy están contenidas en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015. Preciado lo anterior, debe indicarse que no se trata de un hecho, sino de la cita textual de una norma, por ende, nos atenemos al tenor literal de la misma.
- En cuanto a los **HECHOS 38), 45), 46) y 53) al 55)**, en los que se citan artículos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y Decreto 4334 de 2008, debe indicarse que no se trata de hechos sino de la cita de normas, en consecuencia, nos atenemos al tenor literal de las mismas.

No obstante, resulta necesario distinguir que el artículo 2 del Decreto 4334 de 2008 corresponde a las atribuciones de intervención otorgadas a la SS respecto de las personas naturales o jurídicas que desarrollan las actividades descritas en los literales a) y b) de dicha disposición. Así, dicha norma difiere de las competencias y facultades conferidas a la SFC en los artículos 108 y 326 numeral 4) literal a) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), las que con un contenido normativo autónomo se fundamentan a su vez en lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política. Y es que en virtud de éstas últimas disposiciones la SFC puede adoptar medidas cautelares frente a cualquier persona natural o jurídica de derecho privado que, sin contar con la autorización respectiva, desarrolle actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la SFC, así como de cualquier otra que pueda estar incurriendo en captación, manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público.

La facultad mencionada en cabeza de la SFC, no es otra que la materialización de lo que se puede denominar como función administrativa de supervisión y control en desarrollo de la cual a esta Superintendencia le corresponde inspeccionar, vigilar y controlar a las entidades que cuentan con autorización para constituirse, funcionar y que a la vez son habilitadas por la ley para manejar recursos captados del público. Lo anterior de conformidad con las normas legales pertinentes, como son, entre otros, los artículos 325 y ss. del EOSF que definen la naturaleza, los objetivos, las funciones y las facultades de este Organismo, así como también la obligación de prevenir y controlar que las personas no vigiladas realicen actividades como la captación ilegal de dinero, para lo cual aplica lo establecido en el artículo 108, literal d) numeral 1, del artículo 325, literal a) numeral 4 y literal b) numeral 5 del artículo 326 del EOSF, Decreto 1068 de 2015 y Decreto 4334 de 2008.

No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008 es competencia privativa de la SS adelantar la intervención y toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las entidades que no están sometidas a la vigilancia de la SFC y por ende no cuentan con la autorización para ejercer la captación de recursos del público.

Finalmente, es importante resaltar que la SFC no adoptó medidas respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, toda vez que de la visita efectuada, de las operaciones y de los documentos analizados no se evidenció la configuración de supuestos o hechos objetivos o notorios de captación no autorizados de recursos del público dentro de la actividad desarrollada por la misma para ese momento, tal y como se explicará más adelante.

- Señala el **HECHO 39)** que para el momento en que se practicó la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., dicha empresa había celebrado contratos para la venta de libranzas con más de 313 personas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sobre el particular, dicho hecho **NO NOS CONSTA**, pero es necesario reiterar que la SFC realizó **una visita de inspección a dicha sociedad** que se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, y una vez culminada no se evidenciaron hechos que permitieran inferir la captación masiva y habitual de recursos del público. En ese orden de ideas nos atenemos al tenor literal del citado informe.

- En relación con los **HECHOS 40) al 42)** que se refieren al promedio de operaciones realizadas por cada persona con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., indican que las ofertas para la celebración de contratos de venta de libranzas se hacían de manera abierta y finalmente que para la fecha de celebración del contrato suscrito por el demandante con dicha sociedad, la misma había celebrado más de 20 contratos durante 3 meses, es menester señalar lo siguiente:

Ya que lo pretendido por el demandante es referirse a los supuestos de captación, debemos mencionar que tal y cómo se ha señalado a lo largo de este escrito, para las fechas en que la SFC realizó una visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., de acuerdo a la documentación estudiada y la normatividad para la fecha vigente, no se encontró evidencia de operaciones de captación ilegal de dinero, **no obstante, la SFC mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014 remitió el informe de visita a la Superintendencia de la Economía Solidaria (en adelante SES) y Superintendencia de Sociedades**. No obstante, tales la afirmación son apreciaciones subjetivas del actor, la cuales deberán ser probadas.

Por otro lado, respecto a las demás consideraciones realizadas por el accionante, relacionadas con la operación de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., me atengo a lo establecido en el informe de la visita adelantada a dicha sociedad, pues en aquel se consagran las evidencias recaudadas por esta autoridad y para el efecto tal documento se aporta como prueba.

- En relación con los **HECHOS 43) y 44)** en los que se transcriben apartes del numeral 10.1 del acápite de antecedentes de la Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017 proferida por la SS y se indica que conforme a lo dispuesto en dicho acto administrativo se fijó en la página web de la entidad un aviso de prensa del agente interventor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., debemos señalar que esta Superintendencia se atiene al contenido literal de la Resolución y a lo que se pruebe en relación con el cumplimiento a lo ordenado en la misma, pues son actuaciones que no fueron ejecutadas por mi representada.
- En cuanto a lo argüido en los **HECHOS 47) y 48)** en los que se afirma que la SS y la SFC a pesar de advertir el tipo de negocios que ejecutaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no ejercieron ninguna medida que buscara detener la comercialización de libranzas, a pesar de las visitas celebradas durante los años 2014, 2015 y 2016, y que solamente hasta el 15 de noviembre de 2017 fueron adoptadas.

Debemos anotar que tal aseveración es una apreciación subjetiva del demandante y debe ser probada al interior del proceso, pues da a entender una realidad distorsionada y amañada del asunto, que por lo menos en lo que atañe a la SFC, **NO ES CIERTA**.

Con el fin de desvirtuar las afirmaciones relacionadas con esta Superintendencia, se procede a hacer un breve resumen de las actuaciones desplegadas por mi representada:

Mediante Oficio No. 2013058932-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-005 del 29 de noviembre de 2013.

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente. Por lo anterior, la SFC consideró pertinente realizar visita de inspección tanto a la sociedad, como a algunas de las Cooperativas.

Teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

De otro lado, al evidenciar que las Cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, se estimó que dicho tema era del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la cual se le trasladó una copia del informe de inspección para lo de su competencia.

- En lo atinente al **HECHO 49)** que se refiere a las supuestas investigaciones realizadas por el demandante mediante peticiones administrativas dirigidas a la SFC y a la SS, es de mencionar que **NO ES CIERTO en lo que atañe a la SFC**, pues tal y como ya se indicó, una vez verificado el Sistema de Gestión Documental - SOLIP que contiene los trámites adelantados por esta autoridad, **no se encontró petición alguna formulada por el señor Diago Escobar.** Además, se reitera que con la demanda no se allegó prueba alguna que acredite lo que afirma el accionante.

Respecto de la SS, **NO NOS CONSTAN** las afirmaciones ya que se refieren al actuar de una entidad distinta a mi prohijada.

- Frente a los **HECHOS 50) al 52)** atinentes a que la SFC y SS con ocasión de las respuestas de las supuestas peticiones administrativas interpuestas por el demandante, avalaron y tuvieron pleno conocimiento de las actividades delictivas que desarrollaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., al igual que del conocimiento de la suscripción de más de 20 contratos para la venta de libranzas en un periodo de tres meses, debemos mencionar que respecto de la SFC **NO ES CIERTO** lo acotado, pues como se ha expuesto, no se recibieron solicitudes del aquí demandante relacionadas el negocio celebrado con la referida sociedad. De igual manera, se hace hincapié en que de la visita realizada por la SFC se concluyó para la fecha, que las actividades realizadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., NO configuraban actividades de captación o recaudo no autorizado según el Decreto 4334 de 2008 y el Decreto 1981 de 1988, tal y como consta en el informe de inspección que se aporta.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con fundamento en lo anterior, se desprende con total claridad que lo afirmado por el demandante en estos hechos, como se dijo atrás, no son más que simples juicios de valor por completo ajenos a la realidad de las actuaciones adelantadas por la SFC, lo que puede ser constatado con las pruebas documentales que se aportan con el presente escrito.

De otro lado, **NO NOS CONSTAN** las afirmaciones relacionadas con la SS, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

- En el **HECHO 56)** se indica que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. dado el número de operaciones, desarrollaba actuaciones privativas o reservas de manera exclusiva al sistema financiero aprobado por la SFC como bancos, entidades de ahorro y vivienda, debe señalarse que se trata de apreciaciones de la parte demandante que **NO SON CIERTAS** y deberán ser probadas por el aquí demandante.

Así las cosas, me opongo de plano a cualquier imputación de responsabilidad que se predique respecto de la SFC en los términos que a continuación se presentaran.

5. FUNDAMENTOS JURÍDICO DE LA DEFENSA

5.1. Estructura de la responsabilidad extracontractual de la administración pública.

En la Constitución Política, específicamente en el artículo 90, se estableció que:

“Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir con éste”.

En virtud de dicha norma, la estructura de la responsabilidad sufrió un proceso de “constitucionalización”, erigiéndose en garantía de los derechos e intereses de los administrados, así como de su patrimonio, en el entendido de que el Estado será obligado a reparar los **daños antijurídicos** que le sean **imputables**, ya sea por la acción o la omisión de sus agentes.

En tal sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha entendido que a la luz de lo prescrito por el referido artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual de la Administración¹, tiene como fundamento² la determinación de una serie de elementos que deben concurrir para la declaración de la responsabilidad estatal, siendo estos: la determinación de un **daño antijurídico** causado a un administrado, así como la **imputación** del mismo a la administración pública, tanto por la acción, como por la omisión de un deber y, por último, el **fundamento del deber de reparar**, que debe dar cuenta de las razones de derecho por la que los perjuicios deben ser indemnizados.

En cuanto a la imputación debe destacarse que se trata de juicio que demanda un doble esquema de análisis en el cual debe efectuarse un juicio de **imputación fáctica**, por un lado, y uno de

¹ La responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son el resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado 52001-23-31-000-2001-00960-01 (33976). Actor: Cleofas Tumbajoy Alarcón; Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y otros. Medio de Control: Reparación Directa. Sentencia del 16 de febrero de 2017.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

imputación jurídica, por el otro, siendo la imputación desde un punto de vista fáctico, un ejercicio de atribución material o eminentemente causal del origen del daño o los elementos naturales que han intervenido en su producción. Entretanto, la imputación jurídica hace referencia a un escenario en el que el juez debe determinar si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica o de tipo normativo de reparar el daño.

Ahora, desde una perspectiva clásica la responsabilidad también ha sido entendida bajo los siguientes derroteros, los cuales entraremos a desarrollar:

5.1.1. El daño antijurídico

La Corte Constitucional, con ocasión a una demanda presentada contra una parte del artículo 50 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-333 de 1996, tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la cláusula general de responsabilidad estatal, y en lo que al daño antijurídico se refiere precisó que no existe una definición expresa del mismo, debiéndose entonces recurrir a los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en los que se constata que la noción fue adoptada del texto constitucional español.

Señaló la Corte en dicha oportunidad, que la doctrina española ha entendido el daño antijurídico como *“el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”*, concepto precisado igualmente por el Consejo de Estado en sentencia de 13 de julio de 1993³, como *“la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en obligación de soportar”*.

Así las cosas, es claro que el concepto de daño antijurídico obedece a un mecanismo de protección por parte del Estado que se origina como respuesta a los perjuicios que pueden ser ocasionados por las diversas actividades ejercidas por el poder público, lo cual se encuentra armonizado con los principios constitucionales de solidaridad e igualdad, pues el fin último de este instituto jurídico es lograr reparar e indemnizar a una persona que ha sufrido una merma que no está en la obligación de soportar conforme al ordenamiento jurídico.

5.1.2. Imputación (por acción u omisión de las autoridades públicas)

Para poder endilgar responsabilidad en cabeza del Estado es necesario determinar cuál fue la fuente que originó el daño, es decir, es necesario establecer la ocurrencia de hechos, operaciones administrativas, actos, omisiones, lo que a su vez permite establecer quién es el responsable y bajo qué régimen y título se harán las eventuales declaraciones y/o condenas.

Ahora bien, dadas las especificidades de este caso, teniendo en cuenta el título con fundamento en el cual la parte actora pretende imputar responsabilidad a mí representada (“omisión”), es menester precisar que la *omisión administrativa*, de acuerdo con el tratadista Libardo Rodríguez está definida como: *“las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos respecto de ella. Es decir, consisten en que la administración se abstiene de actuar cuando debería hacerlo.”*⁴, lo que nos permite inferir que en el presente asunto estamos ante un régimen de responsabilidad subjetiva bajo el título de falla en el servicio, lo cual como se demostrará a lo largo de este escrito, no se configura

³ Corte Constitucional. Sentencia C- 333 del 1° de agosto de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

⁴ RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo. Editorial Temis. Bogotá 2000. Págs. 195 a 198.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

en este caso, dado que la SFC actuó y lo hizo de manera diligente y oportuna, de acuerdo con sus funciones y atribuciones legales.

Por esa razón, **hechos como los que aquí se debaten, se insiste, deberán ser analizados a la luz de los requisitos establecidos para el régimen de responsabilidad subjetiva que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración, es decir, que el título de imputación corresponde al de la falla en el servicio y conforme la jurisprudencia lo ha previsto el examen de dicha responsabilidad ha de realizarse con base en la disposición legal o reglamentaria que consagra el deber que se alega como omitido, o incumplido,** con el objeto de establecer si en efecto, la Administración incurrió en omisión o dilación en el cumplimiento del deber, y si éste fue determinante en la producción del daño.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la actividad de la Superintendencia Financiera tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero y del mercado de valores por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, como quiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado⁵. Frente a este tópico ha señalado:

“De toda esa actividad se deduce, sin mayores elucubraciones, que la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-, no omitió, descuidó o retardó sus deberes de inspección, control y vigilancia, respecto de La Fortaleza S.A., menos aún durante su intervención hasta la toma de posesión de bienes, haberes y negocios con fines de liquidación, pues son claras las gestiones encaminadas a que la entidad vigilada pudiera continuar con el desarrollo de su objeto social, pese a los inconvenientes y problemas de solvencia y cumplimiento de todo tipo de normas de orden financiero.

Ahora, en torno a que con su gestión pudo haberse evitado la toma de posesión y consecuente liquidación, cabe precisar que la función de supervisión de la Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los accionistas y/o depositantes o ahorradores contra cualquier pérdida, por el contrario, tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, comoquiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado.

Así lo ha resaltado esta Subsección al señalar:

*“Sobre este punto, vale la pena resaltar que **la obligación a cargo de la Superintendencia no es de resultado**, pues según la carga obligacional contenida en el EOSF, la cual se expuso en precedencia, **sólo está obligada a revisar la actividad de los establecimientos financieros y a vigilar y controlar dicha actividad, pero no a coestionar o evitar los riesgos propios del sistema financiero.**”⁶*
(Negritas fuera de texto).

5.1.3. Nexo de causalidad

La relación de causalidad, en términos generales, se puede entender como el vínculo entre un antecedente y una consecuencia, y se contrae al estudio de los diferentes títulos de imputación que permiten establecer si la responsabilidad es o no atribuible a la Administración.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. 13 de abril de 2016. Radicado 1999-00015 (35354). Velásquez Rico, Marta Nubia.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 25000 23 26 000 2000 02312 01 (29944); M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este nexo de causalidad se puede romper cuando opera una causa extraña, esto sucede cuando el daño no es imputable a la autoridad administrativa. Como causas extrañas se conocen el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero.

En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa ha precisado:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta proviene del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla en el servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandando porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien fue por su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)” (Se resalta)

A tenor de lo anteriormente señalado, es claro que la culpa exclusiva de la víctima es eximente de responsabilidad estatal cuando además de demostrada la causalidad material, se demuestra que la víctima participo y fue la causa eficiente en la producción del daño, actuar que puede catalogarse de culposo al desatender las reglas u obligaciones de prudencia, diligencia y estudio de los negocios que decide ejecutar.

Por otro lado, en lo que al hecho del tercero respecta, se tiene que el mismo exonera de responsabilidad al Estado cuando se demuestra que ese tercero es “*completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal*”.

6. ANALISIS PROBATORIO DEL CASO CONCRETO

Conforme lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Este principio procesal es conocido como ‘*onus probandi, incumbit actori*’. A partir del estudio de dicho principio, es dable afirmar que tanto demandante como demandada tienen el deber de probar los hechos en que sustentan las pretensiones y excepciones propuestas, y en caso tal que dicha situación no se verifique por parte del Juez, la consecuencia jurídica es la negación de las pretensiones elevadas, como quiera que ante la falta de la prueba no puede tenerse por cierto el hecho. Sin embargo, no está de más advertir que una vez son arrimadas las pruebas a una controversia judicial, las mismas hacen parte del expediente y no de las partes, y en ese sentido habrán de ser analizadas en su totalidad siempre y cuando las mismas reúnan los requisitos formales que la ley exige para poder tenerlas como tal.

⁷ Consejo de Estado. 25 de Julio de 2002. Radicado 13744. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. 28 de enero de 2015. Radicado 32912. Consejo Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bajo ese escenario, cabe indicar en relación con el asunto que se discute, que la SFC realizó las visitas de inspección a la que se ha hecho referencia a lo largo de esta contestación, atendiendo las facultades contenidas en el literal d) numeral 1 del artículo 325 y literal a) del numeral 4 del artículo 326 del EOSF, los numerales 1, 2 y 22 del artículo 11.2.1.4.35 del Decreto 2555 de 2010 y el artículo 108 del Decreto 663 de 1993 o EOSF, modificado por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003, en función de los cuales este ente de control revisó el modelo de negocios de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para establecer si recibía dinero del público, cuál era la forma en que lo hacía y determinar si en desarrollo de tal actividad se evidenciaba la existencia de hechos objetivos o notorios de captación en los términos previstos en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con los supuestos de captación de recursos del público consagrados en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.

A tenor de lo anterior, se determinó que la sociedad visitada realizaba compra y posterior venta al descuento de pagarés libranzas en virtud de la suscripción de contratos de compraventa de estos títulos valores, pero del análisis y estudio de la información recabada en la visita desarrollada, se concluyó que no se configuraban los hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva de recursos del público, por lo que las afirmaciones contenidas en la presente demanda, que aducen una supuesta conducta omisiva por parte de mi representada, no se corresponden con los antecedentes y conclusiones consignadas en el Informe de Inspección, por lo que los dichos del demandante terminan siendo solo conjeturas. En efecto, el material probatorio que anexa la SFC a esta intervención, acredita que contrario a lo señalado por el accionante, esta Entidad actuó de manera diligente y dentro del marco de sus competencias frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, estos elementos junto con el escaso material probatorio aportado por la parte actora, nos permitirá probar que no existió omisión alguna por parte de la SFC en el ejercicio de sus funciones y por tanto el presunto daño sufrido no tiene la connotación de antijurídico. No obstante, si el Despacho llegara a considerar que el daño existió, el mismo material probatorio nos permitirá acreditar que aquél, no puede ser imputable jurídicamente a la actuación de la Administración y por ende ser resarcible, ya que el mismo solo es imputable a la parte demandante y/o a terceros por completo ajenos a la administración pública.

Atendiendo las previsiones señaladas, consideramos del caso hacer las siguientes reflexiones:

6.1. Ausencia de daño antijurídico.

Como quiera que la presente acción tiene por objeto la reparación del daño ocasionado como resultado de las supuestas “omisiones” en ejercicio de las funciones de la SFC, es carga de la parte reclamante acreditar la existencia del daño antijurídico cuyo resarcimiento pretende y la antijuridicidad del mismo, según las previsiones del artículo 90 de la Carta Política.

En ese sentido, el demandante pretende que el presunto perjuicio que alega y que identifica como la pérdida de los dineros que aduce haber entregado a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. sea resarcido por el Estado, sin embargo, no sustenta sus afirmaciones con material probatorio idóneo que permita identificar en qué consistió la presunta omisión en que habría incurrido esta Superintendencia.

Es claro entonces que como quiera que en la demanda se reclama una indemnización derivada de la pérdida de los dineros que según se afirma fueron invertidos en OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ante la deficiencia de los medios de prueba aportados, no es posible predicar la existencia cierta y actual de la pérdida a que se hace referencia. Debe recordarse que, conforme a lo afirmado por el accionante, el reclamo que se pretende ya fue objeto de estudio en el proceso de intervención que adelanta la SS respecto de la referida sociedad. Por lo tanto, no es procedente tener por probadas las pretensiones



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

de la demanda ante el carácter hipotético del presunto daño, ya que el demandante pretende la reparación de los perjuicios presuntamente irrogados en el escenario de la intervención. Así las cosas, consideramos se impone la necesidad de proferir un fallo que desestime la existencia misma del daño, así como el carácter antijurídico del mismo y que en consecuencia niegue las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, en el evento en el que el Despacho considerara que efectivamente existe un daño, ese menoscabo no tendría las características de un daño antijurídico, pues se habría originado en la decisión libre, deliberada y autónoma de las partes involucradas de realizar un negocio jurídico, en cuya materialización no tuvo injerencia alguna la SFC, pues esta Entidad no tuvo relación de ninguna naturaleza con el acto de inversión y entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Para ilustrar esta noción resulta oportuno traer a colación los criterios que ha señalado el Consejo de Estado en cuanto a la antijuridicidad del daño como fuente del deber de reparar:

*"A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables". lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como **"la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho" o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que "el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación.***

Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:

La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (artículos 228 y 20 de la Constitución) sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado Social de Derecho (artículos 10 y 13 de la Carta).

Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que "superan la normal tolerancia" o que impiden el goce normal y adecuado del derecho. Específicamente en cuanto a la razonabilidad de la limitación del derecho a la propiedad y al límite de la obligación del titular a soportar dicha restricción en el ejercicio de su derecho, para efectos de establecer el deber de los particulares de reparar los daños, la doctrina Argentina ha dicho lo siguiente: (...)

*La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resulta antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las **personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos.** No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica. en tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución). **En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el***



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares.⁹ (Negrilla fuera del texto)

En ese sentido, como bien lo anota la jurisprudencia citada, no todo daño entendido como menoscabo a un interés o un derecho, es **antijurídico**, es decir, no todo perjuicio irrogado a un particular conlleva de suyo los ingredientes normativos que estructuran el deber de reparar. Así, para que exista un daño y este sea antijurídico, es necesario que la víctima demuestre que no estaba en el deber conforme al ordenamiento jurídico, de soportarlo. De allí que acertadamente se tenga que, si se llegaran a probar los supuestos daños que se reclaman por el demandante, los mismos no son antijurídicos, pues se debe considerar que aquel experimento una merma patrimonial **como la que puede tener lugar en cualquier otro negocio de riesgo monetario, la cual se magnificó, desde luego, ante la existencia de los altos rendimientos que el accionante señala le fueron prometidos.**

Así, si se llegará a demostrar que el actor efectivamente hizo entrega de una suma de dinero a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. la misma fue una decisión libre y voluntaria de él, debiendo considerarse que quizá lo hizo obnubilado por la rentabilidad ofrecida en la operación de compra de pagarés libranzas. Se debe recalcar que para el actor los deudores de las libranzas eran personas desconocidas, aspecto que conlleva a que la operación que realizó fuera riesgosa. De otro lado, en el expediente no reposan pruebas que acrediten que el demandante por precaución hubiera revisado físicamente los pagarés que aduce haber adquirido o bien en las oficinas de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la empresa que indica tenía la custodia de dichos título; es decir, no se cercioró si quiera de la existencia real de los mismos, como tampoco se evidencia su diligencia en al menos verificar el comportamiento de la deuda, del pago de dicha cartera, circunstancias que también demuestran la culpa exclusiva a cargo del accionante que entregó su dinero sin verificar las condiciones reales del negocio.

En el presente caso no se puede desconocer que el demandante esperaba obtener unas utilidades del negocio aleatorio que celebró, de las cuales él sería el único beneficiario. Por lo tanto, no tendría sentido que las pérdidas del negocio o los riesgos de la operación emprendida tenga que asumirlas el Estado, asumiendo como si la Administración hubiese participado en el acto autónomo y libre que hoy viene a ser la causa de los perjuicios. En ese escenario, consideramos que una correcta aproximación al asunto que nos concita, debe tener en cuenta que como no todo daño es antijurídico, el daño que no tiene esta característica debe ser soportado por el particular cuando este ha concurrido a su causación, pues los riesgos de su decisión no pueden socializarse para que el Estado y la sociedad en su conjunto respondan por decisiones de que haber prosperado solo habrían supuesto un beneficio individual para el hoy demandante.

Así las cosas, ante el escaso material probatorio que acredite la existencia de los daños que se pretenden sean indemnizados, así como su antijuridicidad, la falta de acreditación de alguna conducta omisiva a cargo del Estado, o que de dicha conducta haya generado el perjuicio, elementos sobre los que se estructura la responsabilidad extracontractual del Estado, lo jurídicamente procedente es negar la totalidad de las pretensiones, pues aunado a tal circunstancia, tal y como se verá más adelante, tampoco se configuran los dos elementos restantes que permitirían imputar una eventual responsabilidad a mi prohijada por los hechos alegados en la demanda.

6.2. Inexistencia de una omisión imputable a la SFC.

Superado el aspecto relacionado con la existencia del daño cuya reparación se pretende por la

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Exp: 29.590. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

presente vía judicial y como quiera que en los hechos de la demanda se evidencia que la responsabilidad de mi representada se afinca o atribuye a una supuesta falla del servicio por “omisión”, procede poner de presente la **inexistencia de omisión imputable** a esta Entidad, por lo que a continuación se señalarán los principales aspectos de la actuación administrativa que con diligencia, previsividad y asertividad este ente de control efectuó respecto OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

6.2.1. La sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no está ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia.

Debe llamarse preliminarmente la atención frente a una realidad incuestionable y es que la referida sociedad con la que los hoy demandantes establecieron en su momento el vínculo contractual causante del daño, no estuvo ni ha estado sometida a la vigilancia de la SFC. Es oportuno precisar que las entidades y actividades respecto de las que esta autoridad ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Bajo este entendimiento, es claro que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia. En virtud de ello, es necesario que se constituyan en la forma y términos que establecen el artículo 53 y siguientes del EOSF y la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica de la SFC. Tales disposiciones señalan que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia, **circunstancia que en el presente asunto jamás ocurrió.**

6.2.2. Actuación diligente de la SFC respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S a pesar de no ser una entidad vigilada, con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público. Inexistencia de omisión imputable por parte de este Organismo de Inspección y Vigilancia.

Aunque la citada sociedad, insistimos, nunca estuvo sometida a la inspección y vigilancia de la SFC, esta autoridad realizó dos visitas de inspección a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., que se adelantaron entre el 9 y 17 de julio de 2013, sin embargo, entre el 2 y 6 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación. La finalidad de la misma era establecer si dicha persona jurídica se encontraba realizando operaciones de captación o recaudo no autorizado de recursos del público, a tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 326 numeral 4) literal e) del EOSF, en armonía con el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, concordante con las disposiciones previstas en el Decreto 4334 de 2008.

6.2.2.1. Resumen y conclusiones de la visita realizada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo.

Ahora bien, de lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “pagarés-libranza” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

6.3. Ninguna autoridad del estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

Como se ha señalado a lo largo del presente escrito, el demandante acude al presente medio de control de Reparación Directa, para reclamar solidariamente de las entidades demandadas, un resarcimiento de índole económico, fundado en una presunta responsabilidad extracontractual de la administración pública por supuestamente “avalara” el desarrollo de las actuaciones de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Indica que dicha sociedad desplegó conductas de captación masiva e ilegal de recursos del público, que en virtud de ello las demandadas habrían incumplido sus deberes de inspección, vigilancia y control en relación con el funcionamiento de la sociedad encartada en el asunto, a la que afirma haber entregado sumas de dinero con el fin de comprar títulos valores. Por ello, en su sentir ese hecho lo habilita para reclamar perjuicios materiales por la presunta omisión en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008.

Pues bien, frente al cumplimiento de los contenidos obligacionales a los que está sometida esta Entidad, conviene precisar que desde los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, se establece que las autoridades públicas, como es el caso de mi prohijada, no pueden ejercer funciones distintas de las que expresamente les atribuye la Constitución y la ley. Por ende, la responsabilidad que se quiere endilgar en el presente caso, basada en el supuesto incumplimiento de las funciones a cargo de las demandadas, debe analizarse, considerando los límites impuestos por el mandato constitucional en ciernes, en tanto las autoridades no pueden responder por hechos o cadenas causales diferentes a aquellas que expresamente están bajo su tutela.

Bajo esa óptica, debe decirse que la SFC no tuvo participación, directa o indirecta, en los actos y hechos con base en los cuales ahora se pretende derivar su responsabilidad. Y es que no basta con efectuar acusaciones temerarias e irreflexivas para que se configuren las condiciones en las que ha de incurrirse para que el Estado deba responder por su acción u omisión. En relación con las exigencias de orden jurídico que deben acreditarse para que el Estado pueda ser responsable, ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado:

“Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente la Sala, que la responsabilidad de la Administración no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades, para cuya protección están establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a un Estado ideal, sino con referencia concreta a la Administración a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede estar obligado a lo imposible”.*¹⁰ (Negrilla fuera del texto)

De modo que, ante la inexistencia de prueba que sustente no solo el presunto perjuicio o daño patrimonial alegado por el accionante, sino la omisión en que habría incurrido el Estado y cómo ésta sería la causa eficiente del daño, se impone negar las pretensiones de la demanda, con mayor razón cuando el eventual daño no es ni puede ser consecuencia directa de un acción u omisión que pueda atribuirse a la SFC, aspecto al que con facilidad podrá arribar el Despacho al realizar un simple cotejo del marco jurídico que regula las funciones y competencias de esta Superintendencia.

Siguiendo la argumentación ofrecida hasta este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos necesarios para que prospere la responsabilidad del Estado por la omisión de sus funciones:

*“En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico y; d) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a éste último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(...)”*¹¹

Como puede observarse, en el caso de las Superintendencia no basta con argumentar dentro del proceso que éstas tienen una competencia legal de supervisión sobre la actividad de los particulares, **adicionalmente se debe demostrar que una vez se tuvo conocimiento de la irregularidad cometida no se adelantaron, se adelantaron tardíamente o se usaron los medios inadecuados para interrumpir el proceso causal que genera el daño en el patrimonio económico de los usuarios del servicio o actividad objeto de control, inspección y vigilancia.**

Al referirse sobre la inspección y vigilancia del ejercicio de la actividad financiera, el Consejo de Estado ha sostenido:

*“La actividad financiera que desarrollan los particulares está sometida a la inspección y vigilancia del Estado, en razón del interés general que esa actividad reviste, por su incidencia en la economía. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado por los daños que se derivaran de actuaciones irregulares de quienes ejercen dicha actividad **se produce siempre que la entidad estatal incurra en omisión en el cumplimiento de las funciones que le corresponden como autoridad de policía administrativa, pero cuando se demuestre que de haber dado cumplimiento a tales obligaciones se hubiera podido impedir que se causaran los daños derivados de esa irregular gestión de los particulares**”*¹²

¹⁰ Consejo de Estado. Sentencia de 6 de octubre de 1995, expediente 9535. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.

¹¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-27-000-2001-00009-01 (AG).

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De lo anterior, surge con claridad que la responsabilidad por omisión en la función de policía no se genera sólo porque se haya demostrado que se incumplieron las competencias que se han asignado jurídicamente, sino que adicionalmente debe probarse que de haberse cumplido las obligaciones se habría podido impedir la generación del daño. Así las cosas, no hay deber de reparar cuando aún en cumplimiento de labores de inspección, control y vigilancia, el análisis probatorio conduce a la conclusión inexorable de que tal consecuencia negativa se habría dado con independencia de la intervención estatal.

En este punto resulta pertinente manifestar que la SFC como entidad estatal de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo consagrado en el artículo 121 de la Constitución Política, **sólo tiene competencia en relación con las materias a su cargo** y con sujeción a las funciones atribuidas por la Constitución y la ley, las cuales para el caso de esta Autoridad, se encuentran descritas, en el Decreto 2739 de 1991, Decreto – Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF), la Ley 964 de 2005, Decreto 2555 de 2010 (modificado, entre otros, por el Decreto 1848 de 2016 y el Decreto 2399 de 2019), y las demás normas que las modifiquen o adicionen.

De tal manera, esta Superintendencia es el Organismo técnico encargado de ejercer funciones de control, inspección y vigilancia **sobre las entidades que conforman los sectores financiero, asegurador, bursátil y previsional del país**, teniendo como objetivo supervisar el sistema financiero y el mercado de valores colombiano, de acuerdo con la facultad consagrada y delegada en los artículos 189 numeral 24 y 211 de la Constitución Política.

De ahí que a la SFC, desde la óptica de sus funciones administrativas, **no le compete intervenir en las relaciones contractuales entabladas entre las entidades vigiladas (y no vigiladas) y los particulares**. Es así como, esta Entidad no puede impartir órdenes referidas a la ejecución y terminación de contratos celebrados entre los particulares y sus entidades vigiladas ni mucho menos las no vigiladas, dado que su función de supervisión no trasciende a la intrusión en la esfera de la autonomía de las partes que se caracteriza por la libertad negocial, pues estaría desbordando el ámbito de su competencia administrativa. **Una interpretación contraria llevaría a pensar que esta autoridad tiene facultades para coadministrar o para dirimir diferencias que puedan surgir en las relaciones contractuales, e incluso para asumir responsabilidades por completo ajenas a su naturaleza, objetivos y funciones.**

Dicho de otro modo, la SFC, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las que ha sido expresamente facultada por la ley. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa no podría haber decretado medidas administrativas dirigidas a ordenar la toma de posesión de los bienes y haberes de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. , primero, porque en la visita realizada a la sociedad en cuestión **no se encontraron a la fecha de su realización hechos objetivos y notorios de los supuestos de captación masiva e ilegal de recursos del público, que conllevaran a la adopción de una medida cautelar para la fecha en que la misma se llevó a cabo y, segundo, porque ésta medida de intervención en el marco del Decreto 4334 de 2008 solo podía ser adoptada por la SS.**

Con todo, no se avizora en el presente caso el despliegue de conducta alguna que haya quebrantado los deberes a cargo de la SFC y de la que pueda derivarse que los presuntos daños sufridos por el accionante deban ser reparados por el Estado, al haber tenido ocurrencia por causa de una conducta que no puede endilgarse a la administración pública.



6.4. Ninguna autoridad pública en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control está obligada a lo imposible.

Para finalizar, no puede soslayarse el hecho de que la omisión que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado en el caso de la omisión de las Superintendencias se concreta, en primer término, por la ausencia de adopción de medidas administrativas cuando se tiene conocimiento de irregularidades en la actividad de las industrias vigiladas, y al cual puede llegarse por quejas de la ciudadanía, o como resultado del propio cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, o de hechos que sean materia de denuncia por los particulares.

Ello, en la medida en que sin este conocimiento previo no es posible pretender responsabilidad, pues aun cuando el Estado tiene una obligación de garantía de bienes jurídicos no está obligado a lo imposible y, por lo tanto su deber de policía administrativa no puede, bajo ninguna circunstancia, implicar el que tenga un funcionario público al interior de cada establecimiento sujeto a su control, por lo que quien demanda debe demostrar supuestos fácticos y jurídicos que permitan deducir la presencia de elementos suficientes, como para considerar que la Autoridad incurrió en un obrar irregular.

En esa línea argumentativa, sobre la naturaleza de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de las Superintendencias, el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente:

*“El propósito de las funciones de inspección, vigilancia y control que el ordenamiento asigna a la Superintendencia de Sociedades no es otro que el de velar porque las compañías vigiladas ajusten su actividad a las normas jurídicas que la gobiernan – constitucionales, legales y reglamentarias –, así como a los estatutos del propio ente social; por consiguiente, en modo alguno podría admitirse que la finalidad de las intervenciones del organismo de control frente a eventos como el sub judice pudiere consistir en hacerle asumir sus obligaciones de resultado de cara a la evitación de que se produzcan daño a los socios o a terceras personas como consecuencia del desarrollo de sus actividades por parte de la empresa sujeta a vigilancia. **La responsabilidad patrimonial del Estado, por tanto, en este tipo de casos, solamente puede quedar comprometida si se demuestra en el proceso i) que el servicio a cargo de la Superintendencia no fue prestado o lo fue de manera tardía, negligente o equivocada y ii) que esa falta en la prestación del servicio fue la que condujo a la materialización del(los) daño(s) cuya reparación se depreca**”¹³.*

Como puede apreciarse, las entidades públicas deben ser absueltas si demuestran que frente a una situación irregular adoptaron las medidas y decisiones que de ella se esperaban, **por lo que no tiene por qué asegurar que su intervención ofrezca una recuperación de una actividad económica o la recuperación de pérdidas dinerarias debidas al comportamiento de los particulares.**

Se trata, entonces, de un régimen **subjetivo** de responsabilidad atado directamente al contenido obligatorio impuesto al Órgano de inspección, vigilancia y control, y limitado a su vez por éste, en función del cual:

*“La responsabilidad patrimonial del Estado bajo un esquema de responsabilidad subjetiva, es decir sustentada en la falla en el servicio, **pues la función de supervisión no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida, sino en asegurar el cumplimiento de las normas del sector**, no puede perderse de vista que el contenido obligatorio a cargo de la Administración en este tipo de supuestos consiste en procurar la salvaguarda -so pena de la adopción de las medidas o de la imposición de las sanciones a las cuales legalmente hubiere lugar (...) cuando las víctimas que acuden a la Jurisdicción en busca de la reparación de los daños que les fueron irrogados son usuarios o terceros damnificados por el actuar de la sociedad*

¹³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2012. Exp. 25000-23-26-000-1995-00936-01 (22984).

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

vigilada, lo primero que se observa es el hecho de que quien produce directamente el daño no es el Estado – el cual sólo desarrolla en tales eventos labores de supervisión-, sino un tercero, que es justamente la compañía intervenida; es ella la que ocasiona, de manera directa, los daños a sus clientes, de suerte que, por regla general. Frente al Estado debe examinarse si se estructura un hecho de tercero como eximente de responsabilidad. De este modo, el título de imputación del daño al Estado únicamente podría ser -se itera- la falla del servicio constituida por la omisión de la entidad oficial supervisora en el cumplimiento de sus deberes legales”¹⁴.

En el caso concreto habría que agregar un hecho al que ya hemos hecho referencia a lo largo de este escrito, pero el que, insistimos, no puede ser inobservado, y es que la sociedad que concita el presente debate judicial, a diferencia de lo sostenido por la jurisprudencia en relación con los eventos en que puede ser declarada la responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, **nunca estuvo bajo la inspección y vigilancia de la SFC.**

Por lo tanto, las actuaciones desplegadas por este Organismo frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en ningún caso se llevaron a cabo por ser ésta una industria supervisada por la SFC. Por el contrario, las mismas se hicieron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora, que sí tiene bajo su égida la Superintendencia Financiera de Colombia.

7. EXCEPCIONES.

Sea lo primero informar al Despacho que las excepciones previas, conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, concordante con los artículos 100 al 102 del Código General del Proceso, se presentarán en escrito separado. En ese orden, nos referiremos a continuación a las que consideramos son presupuestos necesarios para proferir una sentencia que niegue las pretensiones de la demanda, y en ese sentido sea favorable a los intereses de mi representada. Así:

7.1. EXCEPCIONES DE FONDO

7.1.1. Actuación diligente y conforme al marco de sus competencias por parte de la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., con el fin de establecer un posible escenario de captación masiva e ilegal de recursos del público.

7.1.1.1. Visita realizada a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.:

El día 6 de mayo de 2013 se recibieron en esta Entidad dos correos electrónicos a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “*pagarés-libranza*” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide. Esta Superintendencia atendiendo las funciones de prevención y control del ejercicio ilegal de la actividad financiera consideró pertinente evaluar si en el desarrollo del objeto social de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se presentaban operaciones en las cuales se pudieran estar configurando hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público.

En virtud de lo anterior, mediante Oficio No. 2013058932-001-000 del 8 de julio de 2013 se ordenó realizar una visita de inspección a la referida sociedad la cual se desarrolló entre el 9 de julio de 2013 y culminó preliminarmente el día 17 del mismo mes y año. Sin embargo, el 02 y el 06 de diciembre de 2013, se adelantó una nueva visita a con el fin de actualizar la base de datos de la cartera y recaudos

¹⁴ Ibid.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

recibidos, modelo de negocio y fuentes de financiación, la cual fue ordenada en el Oficio No. 2013058932-006-000 del 29 de noviembre de 2013.

De acuerdo con el informe de visita y los documentos que se recabaron en la misma, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para la compra y venta de los “pagarés – libranza” tenía contratos vigentes y en ejecución con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. LIBRANZAS GROUP S.A. y la Cooperativa de Inversiones de Córdoba – COOINVERCOR. Igualmente se determinó que los títulos eran comprados por las referidas sociedades a las cooperativas COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, respectivamente.

Ahora bien, dada la necesidad de conocer de manera detallada las operaciones de venta de libranzas que realizaban las cooperativas a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A se consideró pertinente realizar visitas de carácter administrativo, como se describen a continuación:

Nombre Cooperativa a sociedad	Radicado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización.
Estrategia Patrimonial S.A.S	2013064058	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Libranzas Group S.A.S	2013081468	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
Cooperativa Multiactiva COOPDOMUS LTDA.	2013064063	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
Cooperativa Multiactiva de Palmira - COOMUPAL	2013064064	22 de julio de 2013	26 de julio de 2013
COOPERATIVA DE CRÉDITOS MEDINA - COOCREDIMED	2013081431	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013
COOINVERCOR	2013081463	23 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013

En cuanto a la sociedad ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. se determinó:

- Que suscribió un contrato con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. denominado “*Contrato marco de compraventa de cartera*”, vigente hasta el 13 de noviembre de 2013. En dicho documento se aclaró que los “pagarés – libranza” vendidos a OPTIMAL provenían de las Cooperativas COOPDOMUS Y COOMUPAL.
- Celebró un contrato de cesión con OPTIMAL y COOPUMAL, por lo tanto, a partir del 23 de septiembre de 2013 OPTIMAL LIBRANZAS empezó a comprar los “pagarés-libranza” libranza directamente a la cooperativa y a recibir de manera directa el pago de los flujos.

Respecto de la sociedad LIBRANZAS GROUP S.A.S., se encontró:

- Que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. suscribió con aquella un contrato denominado “*Contrato de compra de cartera con responsabilidad*”, a través del que le compró los derechos de crédito incorporados en los “pagarés-libranza” que eran adquiridos de las cooperativas COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES, COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Se probó que el 26 de septiembre de 2013, LIBRANZAS GROUP S.A.S., OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y COOCREDIMED celebraron un contrato de cesión, con el objeto de comprar los “pagarés-libranza” directamente a la Cooperativa sin la intervención de LIBRANZAS GROUP S.A.S.

De otro lado, se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. celebró contratos de compraventa de cartera que equivalen al 3.66% de la cartera adquirida con las Cooperativas COOINVERCOR, COOMUNDOCRÉDITO, COOCREDIANGULO y COOPROCO KAPITAL SOCIAL; sin embargo, la comisión de visita centró su revisión y verificación en las ventas de pagarés-libranza realizadas por ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., pues eran ellas quienes habían vendido el 96.34% del total de la cartera reportada por la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

En cuanto a las operaciones de compraventa de “pagarés-libranza” entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y los inversionistas, se evidenció que suscribían un “Contrato de compraventa de cartera modalidad pagaré-libranzas-persona natural”, en el que se establecían las condiciones de la negociación. Vale la pena mencionar que el modelo de negocio consistía en la venta de los derechos de crédito incorporados en títulos denominados “pagarés-libranza”, que se originaban en los préstamos que otorgaban las cooperativas ya mencionadas a sus asociados y que eran cancelados mediante descuento de nómina, aplicada por las pagadurías de las entidades para las que laboraban los deudores. A su vez se observó que, las cooperativas consignaban o giraban el valor recaudado a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., para que fueran consignados a favor de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. quien adquiriría los títulos a descuento y se encargaba de pagar el flujo mensual a los inversionistas que los compraban, hasta su cancelación.

Con fundamento en lo expuesto, la comisión de visita concluyó en su informe:

- Los contratos suscritos entre OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., no gobernaban en su totalidad la relación comercial y las prácticas operativas que tenían vigentes, pues no se incluyeron aspectos relativos al procedimiento para hacer efectiva la cláusula de responsabilidad cambiaria en el evento de presentarse “pagarés-libranzas” siniestrados, incumplimiento en pagos, prepagos o títulos viciados.
- En el numeral 4.3 de la cláusula 4 y 7 de los denominados “Contratos de Compraventa de Cartera Persona Natural y Persona Jurídica”, utilizados para oficializar la venta de “pagarés-libranza”, se hacía referencia a una Fiduciaria y a la firma ERNEST & YOUNG, sin embargo, para el momento de la visita no habían sido formalizados, lo que inducía a que los inversionistas de manera errónea creyeran que esas entidades hacían parte del proceso y de los controles establecidos en la venta.
- Efectuada la revisión del contrato marco firmado con la sociedad Estrategia Patrimonial S.A., se encontró que en la consideración primera y cláusula sexta se hace referencia a operaciones de “factoring” contrario a lo señalado en el texto y forma del documento, pues en este se hace referencia a la compra de “pagarés-libranza”.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no conocía ni tenía el control de los “pagarés-libranza” que presentaban mora o impagos en los flujos mensuales. En el contrato suscrito con Estrategia Patrimonial S.A. no se contempló que dicha situación debía ser informada.
- Las sociedades Estrategia Patrimonial S.A.S. y Libranzas Group S.A.S. no reportaron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. los pagarés siniestrados, toda vez que esa información no se solicitaba a las Cooperativas, lo que llevó a que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. asignara “pagarés-libranza” con recaudo en cero o con recaudos que presentaban cuotas menores al valor esperado.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Las Cooperativas COOMUPAL y COOCREDIMED giraban a ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. el valor de los flujos que se vencían durante el mes, sin embargo, no se encontró evidencia de la verificación por parte de las Cooperativas del reporte de descuentos generado por las pagadurías para constatar si existían pagarés que no hubieran sido objeto de descuento.
- ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S. giraron a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. el valor total de los flujos que se vencían en el mes para cancelar la mensualidad a los inversionistas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- Se revisó el caso particular del señor Farid Stefenn Uribe quien realizó una compra por \$500.000.000. OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. le asignó 116 “pagarés –libranza” por valor de \$668.498.202 a un plazo de 36 meses, con pagos mensuales de \$19.100.000. Se identificó que 11 de los títulos no recaudaron su flujo mensual, no obstante, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. recibió los dineros girados por las cooperativas a Estrategia Patrimonial para pagar los flujos convenidos con el inversionista.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. solicitó a las cooperativas COOPNALCRES, LEGALCOOP, MUNDOCREDITO, HABITAT, COOCREDIMED, COOMUPAL y COOPDOMUS certificaciones de la cartera siniestrada. Sin embargo, las dos ultima no remitieron la información solicitadas. Esta Superintendencia realizó visita de inspección¹⁵ a dichas cooperativas, en la cual se evidenció que vendieron “pagarés-libranza” con flujos cero o sin recaudar el 100% de la cuota o flujo mensual. COOCREDIMED remitió fotocopia simple de una certificación donde señaló que los pagos de los flujos de la cartera negociada se pagaban con oportunidad y suficiencia, pero no se hizo referencia a la existencia o no de cartera siniestrada, situación contraria a lo que evidenció la SFC en la visita realizada a esa cooperativa, pues se encontraron “pagarés-libranza” con flujos cero y con recaudo menor al esperado.
- OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. a partir de noviembre de 2013 modificó su modelo de negocio, toda vez que en la venta de “pagarés-libranza” procedió a endosar los títulos en propiedad, pero sin responsabilidad a favor del comprador.
- Se hizo una revisión del “Archivo Visita Super 5 Dic 13” entregado el 10 de diciembre por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con el fin de verificar que el periodo de maduración de los “pagarés-libranza” vendidos coincidieran con los meses pactados y vendidos a los compradores de esos títulos, no se encontró irregularidad alguna.
- De acuerdo con la valoración de los hechos descritos en el informe y el análisis de la información suministrada por la entidad visitada, como aquella que se recaudó por la comisión de visita en la inspección, se concluyó que para la fecha de la visita, en el desarrollo de la operación de venta de “pagarés-libranza” llevada a cabo por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con sus clientes compradores, no se configuraban los supuestos o los hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988 y en el Decreto 4334 de 2008.
- De lo expuesto en el informe quedó demostrado que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. llevó a cabo una operación de compraventa de “pagarés-libranza” con los clientes compradores, en la cual esa sociedad dio a cambio un bien o activo representado en aquellos títulos y entregó los respectivos

¹⁵ Se realizaron visitas de carácter administrativo a las Cooperativas: COOPDOMUS LTDA, COOMUPAL, COOCREDIMED, COOINVERCOR y a las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A. entre los meses de julio y septiembre de 2013.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

pagos de los flujos, que recibió a su vez de ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S., LIBRANZAS GROUP S.A.S. y finalmente de las Cooperativas. Lo anterior bajo el entendido que la cartera no presentó siniestros ni prepagos que conllevaran a no pagar a los compradores y hacer exigible la cláusula de responsabilidad cambiaria pactada en cada contrato de venta.

Sea oportuno mencionar que las cooperativas asumían la obligación de pagar los flujos mensuales para con los tenedores de los “pagarés-libranza” independientemente de que recaudaran los dineros o si se presentaban prepagos, y sin perjuicio de la responsabilidad que se podía predicar de las mismas, tema que resultaba ser del resorte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, razón por la que esta Superintendencia le trasladó copia del informe de inspección a dicho Organismo.

De igual forma y teniendo en cuenta que el modelo de negocio de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. empezó a operar en mayo de 2012, dicho periodo al momento de la visita se consideró un periodo corto para establecer el impacto de la siniestralidad de los “pagarés-libranza” en los estados financieros de la entidad, toda vez que el periodo evaluado correspondió a solo 17 meses de operación, razón por la cual se consideró necesario realizar el respectivo traslado a la Superintendencia de Sociedades.

Ahora bien, el hecho de que con posterioridad la Superintendencia de Sociedades (en diciembre del año 2016) hubiese verificado la existencia de hechos objetivos que dieron cuenta de la realización de operaciones de captación de dineros del público por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., **en modo alguno significa que la SFC haya sido omisiva en el cumplimiento de sus funciones**, porque, la información que esta Entidad evaluó corresponde a la recabada y entregada respecto de un periodo de 17 meses de operación de la misma, esto teniendo en cuenta que el modelo de negocio empezó en mayo de 2012.

7.1.2. Causales de exoneración de responsabilidad – Inexistencia de nexo causal entre la actuación de la SFC y el daño irrogado.

En el evento en que el Despacho llegare a considerar acreditada la existencia de un daño en el presente caso, las pretensiones deberían ser igualmente negadas ya que el mismo no es imputable ni atribuible a la SFC, pues concurren en el caso causales que deben exonerar de responsabilidad al Estado pues rompen el juicio de imputación fáctica y jurídica.

7.1.2.1. Hecho de un tercero

En el evento en que el demandante lograra probar a lo largo del presente proceso la existencia de un eventual perjuicio en virtud de la entrega de dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o llegare a demostrar que las pérdidas que aduce haber sufrido devienen de la existencia y funcionamiento de esa sociedad, ese hecho **NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SFC**, pues claramente la causa del daño estaría afincada en la acción propiamente dicha de esa sociedad, con la que el aquí demandante entabló un negocio jurídico, siendo así responsabilidad de los representantes legales y/o administradores de esa persona jurídica las actuaciones que confluyeron en la pérdida de los recursos depositados, acciones que son completamente ajenas a mi representada.

En ese sentido, cuando en los hechos de la demanda se afirma que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. dejó de pagar las amortizaciones que mes a mes venía realizando al demandante, justificando dicha circunstancia en razones de orden operativo de la cartera, además de asuntos y menesteres internos de las cooperativas originadoras de las obligaciones adquiridas por el actor, debe indicarse que, respecto de estos hechos, ningún vínculo o relación causal tiene la SFC. Las mismas afirmaciones del



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

accionante denotan que fue el hecho del tercero con quien se había establecido el vínculo contractual, el que provocó la cesación de pagos que afectó el patrimonio del reclamante.

Bajo ese entendimiento, de comprobarse que pudo haberse producido un daño, el mismo tendrá que ser objeto de litigio directamente entre las partes contratantes en desarrollo del negocio particular e individual que fue celebrado, ello, mediante el ejercicio de las acciones judiciales estatuidas por el legislador para tales fines, entre ellas, las de competencia de la jurisdicción ordinaria, e incluso a través del proceso penal respectivo, en el que cabe la reparación de los perjuicios irrogados con ocasión del injusto que llegará a acreditarse más allá de toda duda razonable.

No puede perderse de vista que aun cuando se quiera imputar responsabilidad a la Administración y se pretenda de ella el pago de los recursos que de forma libre y autónoma se invirtieron en la sociedad hoy intervenida, el punto central de la discusión que aquí se plantea, es que el presente asunto versa sobre la celebración de un contrato entre particulares, del cual la SFC no fue parte, ni dio su consentimiento o aval, razón por la que mal podría pretenderse que el cumplimiento de las prestaciones a las que se comprometió cada uno de los obligados recaiga en esta autoridad de supervisión, y no en el tercero que se obligó jurídicamente con el demandante, esto es, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Así las cosas, resulta evidente que en el caso puesto a consideración del Despacho la atribución material del hecho dañoso, constituida como un fenómeno estrictamente naturalístico, se relaciona directamente con la acción del particular y no con la del Estado, siendo así que la responsabilidad solo puede endilgarse a la referida sociedad.

Por lo tanto, con fundamento en los hechos y pruebas vertidas dentro del proceso, para esta Superintendencia es claro que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. estructuró un modelo de negocio partiendo de una operación legal, como lo es la compra venta de “pagarés-libranzas”, atrayendo a particulares inversores al mismo con falsas promesas de rendimientos elevados, aun cuando podían establecer que los flujos recibidos resultaban insuficientes para garantizar el pago de lo prometido y que los títulos valores ofrecidos presentaban inconsistencias.

7.1.2.2. Culpa exclusiva de la víctima.

Sea lo primero señalar que el demandante tiene los conocimientos que dan las máximas de la experiencia y que con base en ellos tomó de forma libre, autónoma y consciente una decisión de inversión que por sus características tenía un riesgo inherente, del cual no puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por su resultado, **pues la función de supervisión a cargo de esta Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier pérdida**, ello, tratándose una de entidades no vigiladas.

Cabe señalar, con base en las conclusiones contenidas en el Informe de Inspección analizado a lo largo de este escrito, que al parecer lo que ocurrió con el aquí accionante no fue otra cosa que la celebración de un contrato aleatorio, en los términos descritos en el artículo 1498 del Código Civil, esto es, aquel en el cual existe una contingencia incierta de ganancia o pérdida, y el cual se materializó en la compra de una cartera, que se generó en el alea de una posible rentabilidad atada al recaudo de unos recursos que se lograría en un periodo de tiempo determinado. Por ende, no se puede pretender fundar responsabilidad en el Estado por el resultado de un negocio determinado por la autonomía de la voluntad de las partes, menos aun cuando el resultado del mismo dependía o estaba íntimamente ligado a los riesgos propios de los negocios realizados, y que el demandante consintió asumir libre y voluntariamente.

En ese sentido, debe auscultarse con especial énfasis el hecho que el accionante, según se infiere del



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

libelo, obró en todo momento de manera libre, consciente y voluntaria al momento de entregar sus dineros a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ello bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, en función del cual se les reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios. Razón por la cual no es dable asumir que el Estado deba tener responsabilidad por los perjuicios que los particulares sufran como resultado de su propia iniciativa.

Y es que proceder en un sentido contrario a éste, supone un riesgo evidente, que no es otro que el de llevar a concluir que cada que un inversionista, en un negocio de riesgo, pierda, el Estado habrá de responder por su dinero. Lo cual conllevaría a unas consecuencias contraproducentes, pues se daría cabida a la idea que las personas realicen toda clase de inversiones riesgosas, pues en el evento de fracasar el Estado responderá por ellas. Un argumento en esa dirección es que al Estado no pueden socializársele solo las pérdidas, cuando las ganancias son privatizadas en los sujetos contratantes. Por lo que mal podrían instrumentalizarse las funciones de inspección, vigilancia y control, para sostener un modelo en el que las utilidades son individualizadas en unos pocos, mientras las pérdidas son compartidas entre todo el conglomerado social.

De otro lado, es importante considerar que la presunta relación contractual entre el demandante y OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., se trata de un negocio privado sin intervención alguna de la SFC, en el cual el interesado asevera haber realizado una “inversión” de dinero, tipo de negocio que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias, para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. Así, toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la [multiplicación](#) del dinero colocado.

Respecto de lo anterior, se debe señalar que:

*“En la inversión privada suelen considerarse tres variables distintas; la primera corresponde al rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que se considera que tendrá en términos positivos o negativos, la segunda obedece al **riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento, la posibilidad de que la inversión no se recupere,** y por último el horizonte temporal, o bien el período a corto, mediano o largo plazo durante el que la inversión se sostendrá.”¹⁶*

En otras palabras, está el demandante obligado a actuar con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como a proceder con la diligencia debida y el cuidado que se espera frente a esta clase de operaciones comerciales. Esa diligencia lo hubiese llevado, al menos, a interrogarse e indagar sobre algunas cuestiones esenciales de la cartera que estaba adquiriendo, tales como el origen de los pagarés libranza, lo que le habría llevado a verificar si dichos títulos existían en las cooperativas originadoras que celebraban negocios con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. o en la sociedad contratada para la custodia de los mismos.

Nótese que aun cuando el actor reprocha al Estado por un presunto actuar negligente, el dicho no ofrece prueba de ninguna clase, pasa por alto señalar que nunca acreditó haber verificado o realizado

¹⁶ Definición ABC: <http://www.definicionabc.com/economia/inversiones>.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

alguna investigación sobre el efectivo pago de los deudores de las obligaciones contenidas en los títulos valores que estaba adquiriendo. Tampoco hizo nada por establecer de qué tipo de cartera se trataba, si la misma estaba siniestrada, o los títulos valores presentaban inconsistencias, duplicidades, si la información que le brindaba vía correo electrónico sobre montos y plazos de los pagarés era verídica o fidedigna.

Por el contrario, simplemente existen una serie de manifestaciones que dejan ver que el demandante se limitó a recibir información, sin comprobarla, y acto seguido a suscribir documentos sin un soporte válido, amparándose únicamente en la “*confianza*” que le brindaba OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Debe plantearse, entonces, la existencia manifiesta de una desidia del demandante en los términos a los que hemos hecho referencia, como causa determinante del posible perjuicio irrogado, por lo que la apreciación del daño, en caso de existir éste, deberá estar sujeta a la valoración de la conducta de quien se expuso a él imprudentemente.

En definitiva, en el presente caso consideramos están dados los elementos de tipo normativo que hacen improcedente la imputación desde un punto de vista fáctico y jurídico, pues nos encontramos ante una actuación del accionante que evidencia imprudencia y la aceptación de riesgos o aleas propias del negocio jurídico que celebraron, lo cual tendría que excluir la responsabilidad de la Administración por el hecho o la culpa exclusiva de la víctima.

7.2. Intervención como escenario idóneo para las reclamaciones de índole económica como la que se pretende.

El trámite de la demanda judicial por medio de la interposición del medio de control de reparación directa, no es el mecanismo adecuado para pretender la restitución de los dineros que se dice fueron entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., pues con ello se desconocen las instancias legales dispuestas especialmente para tales fines, esto es, el trámite administrativo que con fundamento en el artículo 5° del Decreto 4334 de 2008, el cual fue ordenado por la SS mediante Auto 400-005087 del 13 de abril de 2018, a través del que se decretó la toma de posesión como medida de intervención de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., escenario en el que existe la posibilidad de devolver de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que al pretender el demandante que a través del medio de control de reparación directa le sean restituidos como pretensión el valor de los dineros entregados a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conllevaría al cobro de lo no debido e incluso de un enriquecimiento sin causa, por cuanto al restituirse al actor dentro del proceso de intervención de manera parcial o total el valor de la inversión, se entendería que su daño se habría resarcido y nadie está habilitado por la ley para obtener el pago de una obligación dos veces.

8. PETICIÓN

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que han sido expuestas en el presente escrito de contestación, respetuosamente solicito a su señoría:

En forma principal:

1. Que de **DECLAREN PROBADAS** las excepciones previas de **CADUCIDAD y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**
2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En forma subsidiaria:

1. Se **DECLAREN PROBADAS** las excepciones de mérito o de fondo denominadas: **ACTUACIÓN DILIGENTE Y CONFORME AL MARCO DE SUS COMPETENCIAS POR PARTE DE LA SFC RESPECTO DE OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.; CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD – INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTUACIÓN DE LA SFC Y EL DAÑO IRROGADO (HECHO DE UN TERCERO – CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA); INTERVENCIÓN COMO ESCENARIO IDÓNEO PARA LAS RECLAMACIONES DE ÍNDOLE ECONOMICO COMO LA QUE SE PRETENDE.**
2. Se **NIEGUEN** todas y cada una de las pretensiones de la demanda por las razones expuestas a lo largo del presente escrito de contestación a la misma.

En cualquier caso:

- i) Se **CONDENE EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO** a la parte demandante.

9. FRENTE AL ACÁPITE DE COMPETENCIA Y CUANTÍA DE LA DEMANDA.

Entendemos que la estimación razonada de la cuantía realizada por la parte actora en el mencionado acápite del escrito de demanda, tiene por objeto cumplir con el requisito de la demanda previsto en el numeral 6 del artículo 162 del CPACA.

No obstante lo anterior, si eventualmente el Despacho considera dicha estimación como un Juramento Estimatorio, en los términos del artículo 206 del Código General del Proceso del Proceso, se objeta la estimación de perjuicios que ha presentado bajo juramento la parte demandante, para cuyo efecto se solicita tener incorporadas como fundamento del presente acápite de objeción, todas las razones y manifestaciones en torno a la **INEXISTENCIA DEL DAÑO Y SU ANTIJURIDICIDAD.**

Esta objeción encuentra sustento en la ilegitimidad y la improcedencia de la demanda, lo cual encuentra suficiente y sólido respaldo en las argumentaciones y excepciones que se dejan expuestas en defensa de los derechos e intereses de la SFC, de manera que no podrán prosperar o estimarse las pretensiones de la demanda, máxime si se tiene presente que en este caso, como ya se ha señalado, no nos consta y tampoco está probado que la parte demandante haya sufrido daños y perjuicios causados por esta Entidad.

En consecuencia, esta objeción afecta la totalidad del monto estimado bajo juramento por la parte demandante. En cuanto se desestimen las pretensiones – tal como lo solicito – deberán decretarse y liquidarse, a favor de mi mandante y a cargo de los demandantes, las sumas correspondientes a costas, incluidas las Agencias en Derecho.

10. RESPECTO A LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES.

Verificado el escrito de demanda, esta Superintendencia considera necesario oponerse a la solicitud de determinadas pruebas realizada en el escrito de demanda por la parte actora, tales como:

10.1. Remisión de expedientes:

En los acápites del escrito de reforma a la demanda titulados “*EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA*” y “*REMISIÓN DE EXPEDIENTE*”, los demandantes solicitan



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

las misas documentales, que corresponde entre otras a: i) copia del informe de la visita practicada a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., ii) copia de los oficios mediante los que se remitió a la SS y SES el informe de inspección y iii) Otros documentos relacionados con la actuación administrativa.

En relación con dicha solicitud, es de mencionar que con la presente contestación se adjunta el Informe de Inspección de la visita realizada por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A. que contiene los antecedentes y conclusiones de la misma, copia de las quejas y/o solicitudes de investigación recibidas en esta Superintendencia respecto de la referida sociedad, con su respectiva respuesta, que corresponde a la decisión final adoptada frente a cada queja, copia de los oficios mediante los que se remitió a la SS y SES el informe de visita.

Así las cosas, las referidas solicitudes probatorias por sustracción de materia son innecesarias, además, es oportuno indicar que la parte actora ya cuenta con varios de los documentos solicitados, pues lo aporta como prueba en común.

10.2. Informe juramentado.

Los aquí demandantes solicitan “(...) ordenar al representante legal de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, o quien haga sus veces, que rinda un informe juramentado en relación con las actuaciones administrativas que se surgieron con antelación a julio de 2016”.

Al respecto, es importante reiterar que conforme lo establece el artículo 168 del Código General de Proceso “El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.

En el caso que nos ocupa, el informe sobre las actuaciones adelantadas por la SFC respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., fueron relatadas a lo largo del presente escrito, además con la contestación se aporta copia del informe de la visita de inspección. Por ende, el informe juramentado solicitado no solo resulta inútil para el proceso, en la medida en la que se limitaría a reiterar el contenido del mencionado informe, además de generar una carga y un desgaste adicional para la administración pública.

Por ello, ME OPONGO al decreto de dicho informe y pido al (a) señor (a) juez (a) rechazarlo, pues al ya existir unos documentos que contienen la misma información que se obtendría con su decreto y contar con un resumen detallado de la actuación y conclusiones, la prueba carecería de utilidad y se torna innecesaria para el proceso, pues en caso de decretarse, sería del todo superflua, reiterativa y redundante.

11. PRUEBAS

Con el propósito de acreditar y respaldar los hechos y afirmaciones que se han expuesto a lo largo de la presente contestación, solicito que se decreten y valoren como pruebas, además de aquellas que oficiosamente disponga decretar y practicar el Despacho, las siguientes:

11.1. Documentales que se aportan

Conforme al numeral 4 del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con la contestación de la demanda debe acompañarse todas las pruebas que la demandada pretenda hacer valer en el proceso, por lo que para el caso que nos incumbe se allegan:

1. Trámite No. 2013041076 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Alvaro Iván Rojas y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.

2. Trámite No. 2013041086 del 6 de mayo de 2013, que motivó la primera visita a Optimal Libranzas S.A.S. por medio del cual la SFC contestó una petición al señor Mauricio Santiago Jiménez y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
3. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
4. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
5. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
6. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
7. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
8. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
9. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
10. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
11. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
12. Informe de Inspección No. 2013081463-009de de la visita practicada a COOINVERCOR.
13. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
14. Trámite No. 2016112058 mediante el que se atendió la petición presentada por el Dr. Diego Vega en representación de Rubén Darío Maldonado Benitez, Carlos Humberto Garzón y Diana Patricia Maldonado Rincon, en la que solicitó se promoviera la intervención y toma de posesión por captación de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y se dio traslado a la SS para lo de su competencia.
15. Copia del requerimiento y orden de inspección de la Fiscalía General de la Nación junto con las respectivas respuestas.
16. Trámite No. 2018019222 mediante el que se atendió la petición presentada por la señora Luisa Fernanda Daza Manrique.
17. Copia de la respuesta remitida por el agente interventor en la que certifica la suma reconocida, montos cancelados y saldo pendiente por pagar al demandante dentro del proceso de intervención que adelanta la Superintendencia de Sociedades contra OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., junto con los respectivos soportes, decisiones y autos.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para que obren como pruebas en el proceso adjuntamos copia de la documentación en comento, siendo oportuno señalar que se autorizó a las cuentas: jadmin60bta@notificacionesrj.gov.co y jadmin60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, para que la consulten en el siguiente link: https://superfinanciera-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amgarzon_superfinanciera_gov_co/EiVdsmHrJ6FJv5n9ZXIlg59MBLiCnNUVV9cffWkOx0qnMaQ?e=dVOAB8

Al respecto, es de indicar que los documentos remitidos como pruebas tienen el cariz de reservados razón por lo cual solicitamos adoptar las medidas tendientes a garantizar la conservación de la misma en los términos del artículo 27 del CPACA.

11.2. Pruebas que se solicitan

11.2.1. Interrogatorio de parte

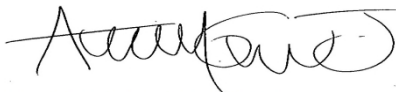
En los términos del artículo 184 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas concordantes, comedidamente solicito se fije hoy y fecha, para **INTERROGAR** bajo la gravedad de juramento a los demandantes en este proceso, FRANCISCO AUGUSTO LUBINOS BADILLO y FRANCISCO SAID ZARUR LATORRE, lo cual haré de forma oral o escrita, en relación con los hechos materia del medio de control de Reparación Directa, persona que será citada a través de su apoderado judicial en los términos autorizados por el artículo 78 del CGP.

12. NOTIFICACIONES.

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez.

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANA MARIA GARZON JIMENEZ
Revisó y aprobó:
ANA MARIA GARZON JIMENEZ



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2019175408-028-000

Fecha: 2021-06-09 16:08 Sec.día2069

Anexos: No

Trámite:: 132-DEMANDAS

Tipo doc:: 317-317 MEMORANDO GENÉRICO

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario: ATM175127-JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

Juez-

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Carrera 57 No. 43 - 91

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019175408-028-000
Trámite : 132 DEMANDAS
Actividad : 317 317 MEMORANDO GENÉRICO
Anexos :

Referencia: ESCRITO DE EXCEPCIONES PREVIAS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Radicado: 11001-33-43-060-2020-00063-00
Demandante: LUIS ALFONSO DIAGO ESCOBAR
Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTROS

ANA MARÍA GARZÓN JIMÉNEZ, abogada, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderada judicial de la Entidad demandada **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (en adelante SFC)**, estando dentro del término legal procedo a presentar **EXCEPCIONES PREVIAS**, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 175 del C.P.C.A. modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, en los siguientes términos:

1. EXCEPCIONES PREVIAS.

1.1. Caducidad.

El artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, define el medio de control de reparación directa así:

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los Agentes del Estado (...).”



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De otro lado el artículo 169 *ejusdem* dispone lo siguiente:

“ARTICULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad (...). (Negrilla fuera del original)

Adicionalmente el artículo 164 (ibídem) prevé los términos para intentar los diferentes medios de control. Así, el literal i), del numeral 2 del citado artículo, en lo que a la Reparación Directa se refiere, dispone que la demanda deberá ser presentada “(...) dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

En virtud de lo anterior y una vez analizados los hechos, se puede extraer que la SFC dentro del marco de su competencia realizó dos visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hoy en toma de posesión como medida de intervención (en adelante OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.). De aceptarse en gracia de discusión que la SFC omitió el cumplimiento de sus funciones, el momento en que cesó la presunta omisión corresponde a la fecha en que culminó la actuación administrativa adelantada por esta Entidad respecto de la mencionada sociedad y se remitió a la Superintendencia de la Economía Solidaria y Superintendencia de Sociedades las circunstancias evidenciadas en las visitas., traslados que se surtieron el 27 de febrero de 2014, mediante los Oficios No. 2013058932-009 y 2013058932-010, respectivamente.

Al respecto, tenemos que es desde esa fecha que debe iniciarse el conteo de los dos años establecidos por el legislador para que opere el fenómeno de la caducidad del medio de control, los cuales fenecieron el pasado 28 de febrero de 2016, momento para el cual, de acuerdo con la documentación remitida a la SFC, la solicitud de conciliación prejudicial, que tiene la facultad de interrumpir dicho término, no había sido presentada, pues la misma tan solo se presentó el 19 de diciembre de 2019, ante la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos de la ciudad de Bogotá, configurándose así la causal objetiva de CADUCIDAD del medio de control que se quiere ejercer respecto de la SFC.

Consideramos oportuno indicar que **para el caso particular se debe establecer la ocurrencia del fenómeno de la caducidad respecto de cada una de las entidades demandadas, de forma separada, pues las actuaciones adelantadas por la SFC y la SS son independientes y se desarrollaron con fundamento en facultades legales distintas.** Sobre el particular, y como se explicó con suficiencia en la contestación de la demanda, las visitas realizadas por la SFC a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se adelantaron con fundamento en la habilitación que esta Entidad ostenta a la luz de los artículos 108 y 325 numeral 4) literal d) del EOSF, entre otros, para inspeccionar y adoptar medidas frente a las entidades que se presume, puedan estar desarrollando actividades exclusivas de las vigiladas, o lo que es lo mismo, se encuentren realizando de forma ilegal el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora.

1.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la SFC

En el presente asunto el demandante aduce que la SFC fue omisiva en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto del funcionamiento de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., así como de las operaciones que realizaba dicha sociedad.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En ese sentido, como quiera que la redacción de los fundamentos de hecho y derecho del libelo demandatorio no son claros respecto de si la presunta omisión que se imputa a esta Entidad corresponde al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Decreto 2555 de 2010, Decreto 4334 de 2008 o en la Ley 1527 de 2012, abordaremos este punto desde cada uno de los supuestos normativos precitados.

1.2.1. En relación con el Decreto 2555 de 2010.

Debe llamarse preliminarmente la atención en el hecho que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., no está, ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia, ya que las entidades y actividades respecto de las que se ejercen dichas funciones corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, en el numeral 1° del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010.

Adicionalmente, debe indicarse que los interesados en desarrollar actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público deben estar bajo vigilancia de esta Superintendencia, para lo cual tienen que constituirse como lo establece el artículo 53 y siguientes del EOSF, en la forma y términos instruidos en la Parte Primera, Título Primero, Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica, en los cuales, entre otras cosas, se establece que dichas entidades deberán obtener previamente el certificado de autorización respectivo el cual será otorgado por esta Superintendencia.

1.2.2. En relación con los artículos 108, 325 y 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008.

Cabe señalar que, con el objetivo de evitar que personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y en cumplimiento de las atribuciones establecidas en los artículos 108, el literal a), numeral 4, del artículo 325 y el artículo 326 del EOSF, concordantes con el Decreto 4334 de 2008 así como en los numerales 1, 2, 6 y 22 del entonces artículo 11.2.1.4.35 hoy modificado por el artículo 21 del Decreto 2399 de 2019 y en el artículo 11.2.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010, la SFC entre el 9 y 17 de julio y el 2 y 6 de diciembre de 2013, adelantó visitas de inspección a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., las cuales se originaron con ocasión de dos correos electrónicos recibido el 6 de mayo de 2013, a los que se adjuntó copia un folleto donde se invitaba a invertir en “pagarés-libranza” y se ofrecían excelentes utilidades, lo que generó en los remitentes dudas frente a si ese modelo de negocio era una pirámide.

Por lo anterior y una vez analizada la información recabada en la visita se llegó a la conclusión que en las actividades desarrolladas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., relativas a la compra y venta al descuento de “pagarés-libranzas” no se configuraban los hechos objetivos o notorios, ni los supuestos de captación masiva de recursos del público.

1.2.3. En relación con la Ley 1527 de 2012.

Es oportuno precisar que si bien la Ley 1527 de 2012 le otorgó a la SFC las funciones de inspección, vigilancia y control sobre algunas de las entidades operadoras de libranzas, vale la pena precisar que las únicas cooperativas vigiladas por esta Entidad son las cooperativas financieras, las cuales son autorizadas para captar recursos del público.

Ahora bien, debe señalarse que las cooperativas originadoras de los “pagarés-libranzas” en este caso fueron: COOPDOMUS y COOMUPAL y COOCREDIMED, SERVICOOOP, COOPNALCRES,



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COOPHABITAT, LEGALCOOP, COINVERCOR y COOPCRESOL, las cuales están bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

De igual manera la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en su modelo de negocio manifestó que para la compraventa de los “pagarés-libranza” tenía contratos suscritos con las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.

De lo expuesto podemos concluir que la SFC no está legitimada en la causa por pasiva para ser demandada por omisión en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puesto que:

- No tenía la obligación de ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., conforme a lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes.
- Habiendo ejercido las funciones que le competían para evitar que personas no autorizadas ejercieran actividades exclusivas de las entidades vigiladas (literal d) del numeral 1 del artículo 325 del EOSF), no encontró que se configuraran los hechos objetivos o notorios ni los supuestos de captación masiva de recursos del público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.18.2.1. del Título 2 de la parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.
- Las cooperativas con las que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., adquiría las libranzas no se encontraban ni se encuentran sometidas al control y vigilancia de la SFC, debido a que no tienen la naturaleza de cooperativas financieras.

Así las cosas, queda clara la ausencia de conductas omisivas de la SFC en relación con los posibles perjuicios ocasionados a los aquí demandante, pues esta Entidad ejerció en su momento las actuaciones que le correspondían, sin encontrar en ellas los supuestos de captación en que luego incurrió la sociedad involucrada en el asunto.

En cuanto a las excepciones aquí propuestas, estimamos oportuno informar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A – Magistrado Ponente: Juan Carlos Garzón Martínez, en auto del 03 de diciembre de 2020 emitido en el proceso con radicado No. 2018-0616, de Convento Santo Domingo contra la SFC y SS, relacionado con la comercializadora de libranzas Estraval, declaró expresamente probadas las excepciones previas de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la SFC.

En cuanto a la caducidad indicó que el término debe ser contado desde el momento en que la Superfinanciera efectuó el traslado por competencia a la Superintendencia de Sociedades de los informes de visita. Frente a la falta de legitimación, consideró que este ente de control no participó en los hechos que dieron lugar a la demanda y que no le correspondía la obligación de vigilancia de Estraval, como en el presente caso tampoco le correspondía la vigilancia de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., por lo que las omisiones que se imputaban en la demanda, no eran atribuibles a la SFC.

Similar determinación adoptó el magistrado Garzón Martínez en auto del 3 de diciembre de 2020, proferido en el proceso 2019-00078 de Federico Aristizábal Correa y Otros contra la SFC y SS, pues al resolver la excepción de caducidad propuesta por esta Entidad, indicó:



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

“(...) la actuación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia culminó el 27 de marzo de 2014, fecha en la que envió la información a la Superintendencia de Sociedades, relacionada con la sociedad Estraval S.A, la cual no estaba bajo su vigilancia.

Por lo tanto, computando el término de caducidad únicamente frente a la Superintendencia Financiera, desde su última actuación esto es, 27 de marzo de 2014, la parte actora contaba en principio hasta el 28 de marzo de 2016, como fecha límite, para presentar acción contenciosa en ejercicio del medio de control de reparación directa.”

2. PRUEBAS.

Con el propósito de acreditar las afirmaciones que se han expuesto a lo largo del presente escrito de excepciones previas, acudimos a las siguientes pruebas, las cuales fueron aportadas junto con el escrito de contestación de demanda y por cuestiones prácticas no remitiremos nuevamente con el presente escrito:

1. Copia del Oficio No. 2013058932-000 mediante el que se ordenó adelantar la visita a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 9 y 17 de julio de 2013.
2. Copia del Oficio No. 2013058932-005 mediante el que se ordenó realizar visita de actualización a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. entre el 2 y 6 de diciembre de 2013.
3. Informe de Inspección de fecha 15 de julio de 2013 que contiene los resultados de las dos visitas practicadas a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.
4. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Economía Solidaria remitido través del oficio No. 2013058932-009 del 27 de febrero de 2014.
5. Traslado del Informe de Visita a la Superintendencia de Sociedades remitido través del oficio No. 2013058932-010 del 27 de febrero de 2014.
6. Informe de Inspección No. 2013064058-008 de la visita practicada a ESTRAREGIA PATRIMONIAL S.A.S.
7. Informe de Inspección No. 2013064063-003 de la visita practicada a COOPDOMUS LTDA.
8. Informe de Inspección No. 2013064064-003 de la visita practicada a COOMUTUAL.
9. Informe de Inspección No. 2013081431-014 de la visita practicada a COOCREDIMED.
10. Informe de Inspección No. 2013081463-009 de de la visita practicada a COOINVERCOR.
11. Informe de Inspección No. 2013081468-007 de la visita practicada a LIBRANZAS GROUP S.A.S.
12. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2018-00616.
13. Copia del auto del 3 de diciembre de 2020 proferido en el proceso 2019-00078.

Se recuerda que las pruebas pueden ser consultadas en el siguiente link: https://superfinanciera-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amgarzon_superfinanciera_gov_co/EiVdsmHrJ6FJv5n9ZXIq59MBLlcNnUVV9cffWkOx0qnMaQ?e=dVOAB8



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Reiteramos al Despacho el traslado de la reserva sobre dichos documentos, por cuanto al tratarse de una actuación administrativa, contiene información clasificada y/o reservada.

3. PETICIÓN.

En atención a lo manifestado, respetuosamente solicito al Despacho:

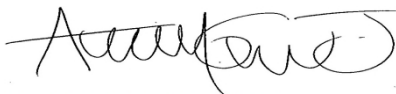
- 3.1. Que se DECLAREN PROBADAS las excepciones previas de CADUCIDAD Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.
- 3.2. Como consecuencia de lo anterior, se NIEGUEN todas y cada una de las pretensiones de la demanda y se declare la terminación del proceso.
- 3.3. Se CONDENE en costas y agencias en derecho a la parte demandante

4. NOTIFICACIONES

Se informa que la Superintendencia Financiera de Colombia recibe notificaciones en la Calle 7 No. 4 - 49 Segundo Piso, Zona C, Oficinas del Grupo Contencioso Administrativo Dos, en Bogotá D.C. y en la dirección de correo electrónico: notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co. La suscrita las recibe en la dirección de correo electrónico: amgarzon@superfinanciera.gov.co, también puedo ser contactada en la línea celular 3108159203.

Del Señor Juez.

Cordialmente,



T.P. 274 629 del C.S.J.
C.C.1 030 627 605 de Bogotá.

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

70427-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ

Revisó y aprobó:

ANA MARIA GARZON JIMENEZ





Al contestar cite el No. 2021-01-403848

Tipo: Salida Fecha: 15/06/2021 03:02:00 PM
Trámite: 9002 - CONTESTACION DEMANDA
Sociedad: 900496573 - OPTIMAL LIBRANZAS S Exp. 76809
Remitente: 221 - GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL
Destino: 2010 - JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCU
Folios: 66 Anexos: NO
Tipo Documental: OFICIO Consecutivo: 221-080297

Doctor

ALEJANDRO BONILLA ALDANA

JUEZ SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C.

SECCIÓN TERCERA

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

jadmin60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.

S.

D.

Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Radicado No: 11001 33 43 060 2020 00063 00
Demandante: LUIS ALBERTO DIAGO ESCOBAR
Demandados: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y OTRA
Juez: ALEJANDRO BONILLA ALDANA- JUEZ SESENTA (60)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. –
SECCIÓN TERCERA-
Asunto: CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA

CONSUELO VEGA MERCHÁN, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63305358, portadora de la tarjeta profesional No. 43.627 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada judicial de la Superintendencia de Sociedades, estando dentro del término legal procedo a dar **CONTESTACIÓN A LA REFORMA DE LA DEMANDA**, en los siguientes términos:

I. OPORTUNIDAD

Este escrito de contestación a la reforma de la demanda, se halla dentro del término de ley, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 173 numeral primero de la Ley 1437 de 2011: *“De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial.”*

Notificación por estado auto admite reforma de la demanda	21 de mayo de 2021
Traslado 15 días	24 de mayo de 2021
Vencimiento del término	15 de junio de 2021

II. A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones que atañen a la Superintendencia de Sociedades, por lo que solicito se denieguen en su totalidad, ya que conforme se demostrará, esta entidad realizó las actuaciones que le eran propias y que se hallan regladas frente a la sociedad **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S**, en toma de posesión como medida de intervención.



En el año 2013, debido a diferentes quejas trasladadas a esta Entidad mediante radicados Nos. 2013-01-207741 y 2013-01-209902 por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta Superintendencia procedió¹ a realizar las gestiones tendientes a verificar la veracidad de tales quejas y se dispuso realizar una primera diligencia de toma de información a la Sociedad.

No obstante, al dirigirse los funcionarios comisionados a las instalaciones de la Sociedad, encontraron que la Superintendencia Financiera de Colombia adelantaba también una toma de información derivada de las mismas denuncias, razón por la cual se decidió solicitar el informe de la visita adelantada por la Superintendencia Financiera.

Con base en lo anterior, mediante radicaciones Nos. 2014-01-096526 y 2014-01-113129 del 27 de febrero y 10 de marzo de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia remitió el informe de la visita de inspección realizada por esa Entidad a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., dentro del cual, entre otros aspectos se estableció que las entidades originadoras que figuraban como proveedoras de cartera de la Sociedad, dentro de las cuales se encontraban las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., realizaron una cesión de derechos a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, mediante un documento denominado “Cesión de Contratos de Compraventa” cuya finalidad era que la sociedad, adquiriera directamente de las cooperativas los “pagarés - libranza” y los flujos que estos generaran.

A mediados del año 2016 y en el transcurso del año 2017, clientes compradores de cartera de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. radican solicitudes de información y quejas sobre esta sociedad, la Superintendencia de Sociedades realiza una nueva diligencia de toma de información a la Sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Del análisis de la operación de la Sociedad², así como de las diferentes quejas presentadas por los compradores de cartera ante la entidad, y de las verificaciones realizadas con las pagadoras respecto a algunos de los créditos que hacían parte de la cartera comercializada, logró evidenciarse que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., actuando como intermediaria entre las entidades operadoras de libranza originadoras de esa cartera y sus clientes, recibió masivamente recursos de terceros por la venta de una cartera materializada en pagarés-libranza que resultó ser inexistente en algunos casos, y que no fue inscrita ante la entidad pagadora respectiva para su descuento, como fue reportado a la entidad, encontrándose así incurso en hechos objetivos de captación o recaudo de dinero del público no autorizado a la luz de lo establecido en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008.

Atendiendo a lo anterior, la entidad ordenó³, a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. la suspensión inmediata de las operaciones de captación masiva y posteriormente, adopta la medida de intervención mediante toma de posesión como medida de intervención, de los bienes, haberes y patrimonio de la sociedad⁴.

En cuanto a las pretensiones de la demandante

A LA PRIMERA. - Al ser una pretensión de una entidad diferente a la que represento, no realizare manifestación alguna.

¹ Credenciales 420-000232 del 2 de julio de 2013 y 306-00271 del 3 de agosto de 2016

² Radicados 2014-01-096526 y 2014-01-113129 del 27 febrero y 10 de marzo de 2014 (Informes Superintendencia Financiera).

³ Resolución No. 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Adopta medida de Intervención Administrativa

⁴ Auto No. 400-005087 del 13 de abril de 2018 Ordena Toma de Posesión



A LA SEGUNDA. - Me opongo, por cuanto la Superintendencia de Sociedades realizó las actuaciones respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención, dentro del marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control que le otorga la Ley, tal como se demostrará en la presente contestación a la reforma de la demanda, que integra la contestación de la demanda ya realizada.

A LA TERCERA. Al ser una pretensión de una entidad diferente a la que represento, no realizare manifestación alguna

A LAS 3.1., 3.2, en subsidio de la pretensión 3.1. y 3.2 a la 3.1.1 a la 3.2.1 - Me opongo, por cuanto la entidad que represento al actuar en estricto cumplimiento de la Ley y sus funciones, no generó daño antijurídico alguno que deba ser reparado.

A LA CUARTA. 4.1. y 4.2. y en subsidio de la pretensión 4.1. y 4.2. 4.1.1. y 4.1.1. Me opongo, por cuanto la Superintendencia de Sociedades realizó las actuaciones respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención, dentro del marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control que le otorga la Ley, tal como se demostrará en la presente contestación a la reforma de la demanda, que integra la contestación de la demanda ya realizada.

Además, porque no existe solidaridad alguna entre la entidad pública que represento y ninguna otra entidad pública o compañía privada, de la cual se derive ésta. La Superintendencia de Sociedades como se demostrará realizó las actuaciones que le correspondía frente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., de manera oportuna.

A LA QUINTA. EN SUBSIDIO DE LAS PRETENSIONES TERCERA Y CUARTA. Me pronunciaré sobre la entidad que represento, para oponerme a las mismas ya que al actuar en estricto cumplimiento de la Ley y sus funciones, no generó daño antijurídico alguno que deba ser reparado.

A LA SÉPTIMA. - Me opongo en consideración a la no prosperidad de las pretensiones principales y subsidiarias.

III. A LOS HECHOS

AL PRIMERO - No me consta, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL SEGUNDO. – No me consta. Se trata de actuaciones realizadas en el marco de un negocio privado que realizo el demandante con la sociedad, del que no fue parte la entidad que represento y que, por ende, no conoce los términos del mismo.

AL TERCERO. - No me consta, me atengo a lo que se pruebe en el proceso, ya que los documentos allegados por la parte demandante, no obra cuál fue la rentabilidad pactada.

AL CUARTO. - Al corresponder a la certificación del interés bancario certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para ese momento, me atengo a lo que dicha entidad certifica. No se trata de un hecho, sino de una información pública.

AL QUINTO. – 5.1., 5.2., 5-3, 5.4. No es cierto, revisado el sistema de radicación de la Superintendencia de Sociedades, con el número de cédula de la demandante, no se observa que el Señor LUIS ALBERTO DIAGO ESCOBAR hubiese allegado solicitud alguna, con el fin de obtener información de la sociedad OPTIMAL LIBRANZA S.A.S.

AL SEXTO. - Se trata de un hecho que no corresponde a mi representada, por lo tanto, no me referiré al mismo.



AL SÉPTIMO. - No me consta las averiguaciones que haya realizado el demandante, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL OCTAVO. - Es un hecho que no corresponde a mi defendida, por lo tanto, no me referiré al respecto.

AL NOVENO. - No me consta sobre las indagaciones que haya realizado ante la Cámara de Comercio el demandante, me atengo a las pruebas que en este sentido se encuentren dentro del proceso.

AL DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO. Se trata de hechos que no corresponden a mi defendida, por lo tanto, no me referiré al respecto.

AL DÉCIMO CUARTO. Es cierto, frente a la entidad que represento. Efectivamente, mediante escritos radicados en la Superintendencia de Sociedades, a los Nos. 2014-01-096526 y 2014-01-113129 del 27 de febrero y 10 de marzo de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia remitió el informe de la visita de inspección realizada por esa Entidad a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., dentro del cual, entre otros aspectos se estableció que las entidades originadoras que figuraban como proveedoras de cartera de la Sociedad, dentro de las cuales se encontraban las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL SAS y LIBRANZAS GROUP SAS, realizaron una cesión de derechos a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., mediante un documento denominado "Cesión de Contratos de Compraventa" cuya finalidad era que la sociedad, adquiriera directamente de las cooperativas los "pagarés - libranza" y los flujos que estos generaran.

Respecto, a la remisión del informe a la Superintendencia de Economía Solidaria, no me consta, al tratarse de entidades distintas a la que represento.

AL DÉCIMO QUINTO. - No me consta, ya que se trata de hechos que corresponden a otra entidad.

AL DÉCIMO SEXTO. - 16.1. No me constan. Sin embargo, es procedente manifestar que, de acuerdo a los anexos de la demanda, se evidencia que el demandante suscribió un contrato de manera libre y voluntaria.

De igual manera es de resaltar que tal como ya se contestó en el hecho quinto, el demandante no realizó ninguna indagación en la Superintendencia de Sociedades, respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

AL DÉCIMO SÉPTIMO. - 17.1. Y DÉCIMO OCTAVO. - No me constan. Sin embargo, es procedente manifestar que, de acuerdo a los anexos de la demanda, se allega un documento en el que aparece un recaudo de un cheque por \$150.000.000 a favor de OPTIMAL LIBRANZAS S. A. S., de fecha 23/09/2015, sin que se observe el nombre del girador. Me atengo a lo que se pruebe.

AL DÉCIMO NOVENO. - No me consta, me atengo a lo que resulte probado. Sin embargo, es necesario precisar que, dentro del proceso de intervención adelantado sobre la sociedad, el demandante fue reconocido como afectado por un valor de \$ **95.456.307**

AL VIGÉSIMO. - No me consta, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL VIGÉSIMO PRIMERO. - No me consta, me atengo a lo que resulte probado. Sin embargo, es necesario precisar que, dentro del proceso de intervención adelantado sobre la sociedad, el demandante fue reconocido como afectado por un valor de \$ **95.456.307**



AL VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO. Es cierto, conforme al plan de pagos realizado en el trámite de toma de posesión como medida de intervención de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S. A. S.

AL VIGÉSIMO SEXTO. Es cierto parcialmente, ya que efectivamente fue reconocido el demandante como afectado, pero no por la suma indicada en la demanda sino por un valor de **\$95.456.307,00** y, le han sido realizadas 4 devoluciones que ascienden a **\$10.740.000,00**.

AL VIGÉSIMO SÉPTIMO. - Es un hecho que no corresponde a mi defendida, por lo tanto, no me referiré al respecto.

AL VIGÉSIMO OCTAVO. - Al ser una Resolución expedida por la entidad, me atengo a lo indicado en la misma.

AL VIGÉSIMO NOVENO y AL TRIGÉSIMO. – Son ciertos.

AL TRIGÉSIMO PRIMERO. – No es un hecho como está expuesto. Se trata de apreciaciones subjetivas de la parte demandante.

Los agentes interventores y liquidadores ejercen como auxiliares de la justicia que corresponde designar al Juez de la Intervención o de Insolvencia, según sea el caso y que, se encuentran sujetos a las previsiones legales que regulan estas materias, esto es, el Código General del Proceso, la Ley 1116 de 2006, Decreto 4334 de 2008, etc. No son agentes de la entidad, su labor corresponde a las previstas por el Legislador.

AL TRIGÉSIMO SEGUNDO. - No es cierto, la Superintendencia de Sociedades, una vez tuvo conocimiento de las quejas y solicitudes de varios de los afectados, procede a adelantar tomas de información e iniciar investigaciones sobre la sociedad, conforme a las facultades otorgada por la Ley.

AL TRIGÉSIMO TERCERO. Tal como está redactado no es un hecho sino una apreciación subjetiva del apoderado de la parte actora, la que deberá ser demostrada en el proceso.

AL TRIGÉSIMO CUARTO. Me atengo a lo expresamente estipulado en el documento al que se hace alusión.

AL TRIGÉSIMO QUINTO. - Al ser un hecho que no corresponde a mi defendida, no realizaré ningún pronunciamiento al respecto.

AL TRIGÉSIMO SEXTO. - No es cierto, la Superintendencia de Sociedades nunca conceptuó sobre si el negocio que ofrecía la sociedad, se encontraba ajustado o no a normatividad colombiana. Tal como quedó expuesto en la respuesta al hecho quinto, el demandante no elevó ninguna solicitud ante la entidad.

No se puede confundir un concepto con un certificado de que la sociedad está vigilada, pues como será precisado dentro de los argumentos de defensa, este tipo de vigilancia se refiere a la sociedad como persona jurídica, se refiere al aspecto formal subjetivo.

Se trata de una obligación de medio y no de resultado en la que la Superintendencia de Sociedades procura que las sociedades en su creación, desarrollo y extinción cumplan la ley y los estatutos.

AL TRIGÉSIMO SÉPTIMO. – No se trata de un hecho, sino de la cita de una norma, por lo que me atengo a lo que en ella se establezca. Con la siguiente precisión, el decreto 3227 de 1982, fue modificado por el decreto 1981 de 1988, las que se encuentran hoy previstas en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015.



AL TRIGÉSIMO OCTAVO. – No se trata de un hecho, sino de la cita de una norma, por lo que me atengo a lo que en ella se establezca.

AL TRIGÉSIMO NOVENO. - No me consta, el apoderado no señala a cuáles visitas se refiere con el fin de analizar la veracidad de la afirmación.

AL CUADRAGÉSIMO. - No me consta. Sin embargo, es de precisar que la comercialización de las libranzas tiene una regulación propia contenida en la Ley 1527 de 2012 y sus modificaciones.

AL CUADRAGÉSIMO PRIMERO. - No me consta, se trata de hechos de terceros.

AL CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. - Tal como está redactado no es un hecho sino una apreciación subjetiva del apoderado de la parte actora, la cual no se encuentra probada en el proceso.

Se debe advertir que el problema jurídico del presente proceso no es la cantidad de libranzas vendidas por la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., pues si se vende esa cantidad de libranzas siguiendo los parámetros de la ley 1527 de 2012 y las mismas, adquiridas en posición propia, están respaldadas por una operación subyacente, no se trata del fenómeno captación masiva e ilegal de dinero proscrito por el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988, sino de la comercialización de un bien o servicio, a saber, los pagarés libranza.

Las razones por las cuales la sociedad en referencia fue intervenida por la entidad no se concretan en la cantidad de pagarés libranza negociados, pues los mismos no corresponden a la suscripción de “veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario”, lo cual ha sido proscrito por el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988 y es la normativa a la que aluden los fundamentos de derecho de la parte actora.

La comercialización de pagarés libranza tiene una reglamentación específica, que en el caso de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se incumplió en la medida que las negociaciones no tenían una obligación subyacente, engañando así a la sociedad colombiana y a la entidad que represento, pues se procedió por parte de los administradores al ocultamiento de la operación de captación.

AL CUADRAGÉSIMO TERCERO. - Al tratarse de una decisión adoptada por la entidad, me atengo a lo indicado en la misma.

AL CUADRAGÉSIMO CUARTO. - Es cierto parcialmente, y me explico. Es cierto que la Resolución No. 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 fue proferida por la entidad, Lo que no es cierto, es que se haya ordenado lo afirmado por la apoderada de la parte demandante.

La mencionada Resolución dispuso en la parte resolutive lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO. - **ORDENAR** a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. identificada con NIT 900.496.573, la **SUSPENSION INMEDIATA** de las operaciones de captación masiva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO: El alcance de la medida administrativa que se adopta contra la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con NIT 900.496.573, es únicamente respecto de los recursos del público captados o recaudados masivamente en forma no autorizada directamente o indirectamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - La presente orden supone para la destinataria de la misma, la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo



no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad contractual, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

PARÁGRAFO TERCERO. - ORDENAR la publicación de la presente providencia en un diario de amplia circulación nacional, indicando que se trata de una actividad no autorizada.

ARTÍCULO SEGUNDO. - OFICIAR a la Alcaldía de Bogotá para que, por conducto suyo se ordene a los comandantes de policía competentes, aplicar las medidas de policía necesarias para cerrar los establecimientos o lugares donde la mencionada sociedad realiza la actividad irregular; la colocación de sellos, los cambios de guarda, y demás seguridades precautelativas para proteger los derechos de terceros y para preservar la confianza del público en general.

ARTÍCULO TERCERO. - ORDENAR la remisión de esta actuación administrativa al Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades para que, dentro del ámbito de la competencia que le confiere el Decreto 4334 de 2008 adopte, además de las medidas ordenadas en esta resolución, cualquiera de las señaladas en el artículo 7 del citado Decreto.

ARTÍCULO CUARTO. - ORDENAR la inscripción de esta resolución en la Cámara de Comercio de Bogotá, para la ejecución de estas medidas.

ARTÍCULO QUINTO. - REMITIR a la Fiscalía General de la Nación una copia del expediente de la presente actuación administrativa, para efectos de las investigaciones propias de su competencia.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR la presente providencia a los Señores NESTOR VANEGAS MONCADA en su calidad de Representante Legal de la Sociedad, y FELIPE ANDRADE PERAFÁN en su calidad de apoderado especial de la Sociedad de acuerdo con el poder aportado, en los términos establecidos en los artículos 67 y siguientes Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la Carrera 5 # 123-21 Oficina 147.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

...”

De manera que el texto traído a colación por la parte demandante, no corresponde al de Resolución No. 300-005082 del 22 de diciembre de 2017.

AL CUADRAGÉSIMO QUINTO. – No se trata de un hecho, al ser una norma, me atengo a lo que en ella se establezca.

AL CUADRAGÉSIMO SEXTO. - No es cierto, el artículo 2 del Decreto 4334 de 2008 hace referencia al objeto de la intervención estatal; la competencia a la que se refiere la parte actora se encuentra determinada en el artículo 1 del decreto en mención.

AL CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. - No es cierto, por cuanto la Superintendencia de Sociedades, en desarrollo de las facultades que le otorga la ley, adelantó las investigaciones del caso, con las cuales finalmente se pudo establecer la captación ilegal de dineros del público que desarrollaba la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

A raíz de las primeras quejas radicadas en el año 2016 en la entidad, la Superintendencia de Sociedades, relacionadas con el incumplimiento en los pagos a los inversionistas, se dio traslado de las mismas al Representante Legal a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención y lo requirió para que informara de la respuesta a las mismas,

En el mismo año se inició con las primeras investigaciones administrativas, se solicitó información de la sociedad, se realizaron las respectivas visitas por parte de la entidad para la toma de información, se realizaron los cruces de los pagarés con distintas entidades, lo que dio lugar a la intervención administrativa, la orden de suspensión de las operaciones de captación masiva de carácter ilegal y, posteriormente la toma de posesión como medida de intervención.



Por lo anterior, lo manifestado por el apoderado de la parte actora carece de fundamentos de hecho.

AL CUADRAGÉSIMO OCTAVO. - No es cierto, la Superintendencia de Sociedades, realizó en el marco de sus competencias regladas todas las actuaciones que le eran propias. Tal como se indicó en la respuesta al hecho anterior, que reitero:

A raíz de las primeras quejas radicadas en el año 2016 en la entidad, la Superintendencia de Sociedades, relacionadas con el incumplimiento en los pagos a los inversionistas, se dio traslado de las mismas al Representante Legal a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención y lo requirió para que informara de la respuesta a las mismas,

En el mismo año se inició con las primeras investigaciones administrativas, se solicitó información de la sociedad, se realizaron las respectivas visitas por parte de la entidad para la toma de información, se realizaron los cruces de los pagarés con distintas entidades, lo que dio lugar a la intervención administrativa, la orden de suspensión de las operaciones de captación masiva de carácter ilegal y, posteriormente la toma de posesión como medida de intervención.

Por lo anterior, lo manifestado por la apoderada de la parte actora carece de fundamentos de hecho.

Debo reiterar nuevamente que la Resolución que ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas con captación masiva e ilegal de dineros del público de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S. A. S, corresponde a la Resolución No. 300-005082 del 22 de diciembre de 2017, y no conozco ninguna de la fecha indicada por la apoderada de la parte demandante.

AL CUADRAGÉSIMO NOVENO. 49.1. 49.2., 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, y 49.8. No me consta, si se trató de una supuesta investigación realizada por la parte actora, ya que el señor LUIS ALBERTO DIAGO ESCOBAR no elevó ninguna petición ante la Superintendencia de Sociedades, en este sentido, tal como se ha sostenido a lo largo de esta respuesta a la reforma y a la contestación de la demanda.

Se advierte, que se allegaron solicitudes como pruebas documentales por la parte demandante, las que solicitan distintas informaciones, tal como se dejará expuesto a continuación:

Presentadas el 1 de noviembre de 2017 en las que se solicita sí se han hecho visitas a la sociedad, e informe las fechas de las mismas (**Gabriel Alfonso Rodríguez**); otra petición solicitaba copia de todas las denuncias presentadas desde el año 2013, 2014, 2015 y 2016 a la sociedad, las decisiones finales de esas denuncias y si se tomó alguna medida administrativa sobre ese particular, (**Leidy Tatiana Bonza Saavedra**); otra petición solicitaba se indicará las fechas de las visitas y las actuaciones que se realizaron en esas visitas (**Yessica Julieth Collazos Bermeo**),

Hay otra petición radicada el 26 de septiembre de 2018 en la que se solicitó la relación de los contratos celebrados con el propósito de la venta de libranzas desde la creación de la sociedad hasta la fecha en la que cesaron los pagos. (**Luis Eduardo Escobar Sopó**).

Otra petición radicada el 14 de diciembre de 2018, en la que se solicita la mayoría de la información a que se refiere la apoderada en los numerales de este hecho. (**Luisa Fernanda Daza Manrique**).

AL QUINCUAGÉSIMO.- No es cierto, son apreciaciones subjetivas por parte de la apoderada de la parte demandante, carentes de prueba, ya que como se manifestó en hechos anteriores la Superintendencia de Sociedades una vez tuvo conocimiento de



las quejas de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención, actuó de manera oportuna, interviniendo administrativamente y ahora en toma de posesión como medida de intervención, evitando que continuara con la práctica ilegal de captación de dinero del público.

Pero adoptar la decisión sobre si en este caso, una sociedad realiza captación ilegal de dineros del público, debe tenerse pruebas suficientes que demuestren que efectivamente se está ante estas actuaciones. Solo cuando se logró estas pruebas se adoptaron las correspondientes decisiones, en cumplimiento de las funciones regladas asignadas a la entidad.

AL QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. - No es cierto, se trata de apreciaciones subjetivas de la apoderada del demandante, carentes de toda prueba.

Reitero, para el año 2016 cuando inician las quejas de falta de pago de los inversionistas de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención, ante la Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera de Colombia, es que se inician investigaciones administrativas muy meticulosas, enfocadas a establecer como es el negocio jurídico que ofrece la empresa y cómo efectivamente se está ejecutando, es por ello que al encontrar irregularidades se somete a intervención administrativa, y finalmente, al encontrar las pruebas de la captación, a ordenar la toma de posesión como medida de intervención.

Me permito igualmente, señalar que la entidad no tiene competencia para determinar actuaciones relacionadas con hechos punibles o actuaciones delictivas, que corresponde a otra autoridad. Además de ello, es pertinente precisar que una es la actividad que debe desplegar la Superintendencia de Sociedades respecto de la captación masiva y habitual de manera irregular, que da lugar a aplicar las medidas de intervención contempladas en el Decreto Ley 4334 de 2008 y otra, muy diferente la relacionada con la conducta penal descrita en el artículo 316 del Código Penal Colombiano.

AL QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. - No es cierto. Se reitera que la tesis de la demanda descontextualiza el problema jurídico. Lo relevante no es la cantidad de libranzas vendidas por la sociedad, pues si se vende esa cantidad de libranzas siguiendo los parámetros de la ley 1527 de 2012 y las mismas, adquiridas en posición propia, están respaldadas por una operación subyacente, no se trata del fenómeno captación masiva e ilegal de dinero proscrito por el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988, sino de la comercialización de un bien o servicio, a saber, los pagarés libranza.

AL QUINCUAGÉSIMO TERCERO, QUINCUAGÉSIMO CUARTO, QUINCUAGÉSIMO QUINTO Y QUINCUAGÉSIMO SEXTO. – Al corresponder a normas de una parte y, relacionarse con competencias propias de otra entidad, no me pronunciaré sobre lo que la parte demandante ha denominado como hechos.

IV. OBJETO DE LA LITIS

Pretende la parte actora sin mayores fundamentos, se declare responsable administrativamente a las demandadas por presunta falta de inspección, vigilancia y control sobre la sociedad **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S**, permitiendo que se causaran perjuicios en el patrimonio económico de la demandante; y como consecuencia, se le indemnice por el capital entregado.

V. ARGUMENTOS DE DEFENSA

5.1 CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

5.1.1. FUNCIONES DE SUPERVISIÓN



Las funciones administrativas de supervisión sobre las sociedades, empresas unipersonales de tipo comerciales y sucursales de sociedades extranjeras, que corresponden a la Superintendencia de Sociedades, se derivan de lo previsto en el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, que le asigna al Presidente de la República *“Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.”* la función de: *“(…) ejercer de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades mercantiles (…)”*.

Así, según el artículo 82 de la Ley 222 de 1995, el Presidente de la República ejerce, por conducto de esta entidad, la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales. El Capítulo IX, de la Ley citada, define la competencia, atribuciones y funciones generales de la Superintendencia de Sociedades, en materia de supervisión y dispone cuáles son y cuándo se ejercen.

De manera complementaria, el Decreto 1023 de 2012 en su artículo séptimo contempla las funciones generales de la Superintendencia de Sociedades con base en el marco normativo que las ha consagrado, precisando, entre otras, *“(…) 4. Velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos; 5. Someter a control a cualquier sociedad comercial, sucursal de sociedad extranjera o empresa unipersonal no vigilada por otra Superintendencia, y ordenar los correctivos necesarios para subsanar las situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico y administrativo de esa compañía; (…)”*.

En ese orden, son tres los tipos de atribuciones asignadas a la Superintendencia de Sociedades, correspondientes a sendos niveles de supervisión, a saber: la inspección, la vigilancia y el control, conforme se define a continuación:

- A) La INSPECCIÓN consiste en la atribución para *“(…) solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, o sobre operaciones específicas de la misma. En desarrollo de esta atribución, la Superintendencia de Sociedades puede practicar investigaciones administrativas a esas sociedades”*. (Ley 222 de 1995, artículo 83).
- B) La VIGILANCIA consiste en la atribución *“(…) para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, que se encuentren incursas en las taxativas causales de vigilancia establecidas en las normas vigentes, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social se ajusten a la ley y a los estatutos. (…)”* (artículo 82 de la Ley 222 de 1995). El sometimiento a vigilancia puede ser determinado por el Presidente de la República o bien por el Superintendente de Sociedades cuando del análisis de las informaciones recabadas en ejercicio de las funciones de inspección establezca que una sociedad incurre en alguna de las irregularidades previstas en la ley, entre otras consideraciones establecidas en la mencionada disposición.
- C) El CONTROL, consiste en la atribución *“(…) para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad no vigilada por otra superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular. (…)”* (artículo 85 de la Ley 222 de 1995). En ejercicio de esta atribución mi representada tiene, además de las facultades de que goza para el ejercicio de las atribuciones de inspección y de vigilancia, otras de mayor envergadura e importancia, acordes con el carácter crítico del estado de cosas, igualmente previstas en la referida Ley 222.



En consecuencia, las funciones de la Superintendencia de Sociedades son regladas, esto es, sólo pueden ser ejercidas de acuerdo con las atribuciones legales que, salvo contadas excepciones, se circunscriben al ámbito societario como criterio subjetivo, es decir, restringidas a la entidad como sujeto, sin que pueda inmiscuirse en la actividad social o en el objeto que desarrolla, dado que tal escenario se encuentra proscrito por estar por fuera de las competencias que el legislador le previó.

En efecto, el Decreto 1074 de 2015 le asigna a la entidad competencias en materia societaria, al establecer en su artículo 1.2.1.1 que la Superintendencia de Sociedades *“Tiene como objetivo la preservación del orden público económico por medio de las funciones de fiscalización gubernamental sobre las sociedades comerciales y ejercer las facultades jurisdiccionales previstas en la ley, tanto en el ámbito de la insolvencia como en el de los conflictos societarios”*. En el mismo sentido, el artículo 24 numeral 5 del Código General del Proceso establece que la Superintendencia de Sociedades cuenta con facultades jurisdiccionales para conocer acerca de diferentes circunstancias de naturaleza societaria.

De otra parte, el artículo 228 de la Ley 222 de 1995, consigna la competencia residual en cabeza de esta entidad de la siguiente manera: *“Las facultades asignadas en esta ley en materia de vigilancia y control a la Superintendencia de Sociedades, serán ejercidas por la Superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva sociedad, si dichas facultades le están expresamente asignadas. En caso contrario, le corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, salvo que se trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de Valores”*.

Esta competencia está circunscrita, únicamente, a las facultades de vigilancia enumeradas en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995.

5.1.2. SUPERVISIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA

La supervisión ejercida por la Superintendencia de Sociedades es de naturaleza subjetiva, según lo han señalado en repetidas oportunidades el Consejo de Estado y la Corte Constitucional⁵.

En verdad, la jurisprudencia ha explicado la diferencia entre la supervisión estatal subjetiva y objetiva. Así, el Consejo de Estado, en sentencia de 2008, resolvió un conflicto de competencias administrativas planteado por la Superintendencia Financiera frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, y afirmó: *“(…) El legislador, a través de las facultades otorgadas por el numeral 7º el artículo 150 de la Constitución Política ha creado superintendencias de diversa naturaleza, algunas asociadas a una clase de sujetos (Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, etc.) o bien delimitadas por su objeto (Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Salud, etc.). A partir de esa división, es claro que el control ejercido puede ser subjetivo, es decir, cuando se controla el ente en sí mismo, u objetivo, cuando el control recae sobre la materia o asunto al cual se dedica el sujeto vigilado. (…)”⁶.*

El Consejo de Estado también señaló, al resolver un conflicto de competencias entre la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Puertos y Transporte, que la supervisión subjetiva se relaciona *“(…) con aspectos societarios o exclusivamente relacionados con la persona encargada de prestar el servicio”⁷.*

En igual sentido, puede citarse la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuya precisión resulta particularmente relevante en punto de la supervisión subjetiva. Conforme a lo expresado por esa corporación, *“(…) en virtud del artículo 82 y siguientes de la Ley 222 de 1995 y del artículo 2º del Decreto Ley 1080 de 1996, la*

⁵ La Superintendencia de Sociedades, salvo en los casos de actividades multinivel y en las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial, tiene supervisión integral, es decir, objetiva y subjetiva.

⁶ Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. (5 de marzo de 2008). Expediente 11001-03-06-000-2008-00007-00. [C. P. Gustavo Aponte Santos]

⁷ Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, (25 de septiembre de 2001) Sentencia C-746. [M.P. Alberto Arango Mantilla]



Superintendencia de Sociedades ejerce el control subjetivo de las sociedades comerciales dirigido a la verificación de mínimos legales en materia de constitución, funcionamiento, estados financieros y situación económica de las empresas. En ejercicio de las facultades de supervisión la Superintendencia tiene atribuciones para verificar que las empresas no ejerzan actividades ajenas a su objeto social. En esa medida dicha entidad aunque no estaba facultada expresamente para investigar y sancionar la captación masiva y habitual por parte de sociedades comerciales no autorizadas –porque la Superintendencia de Sociedades carece de competencias para ejercer el control respecto de personas naturales- podía en todo caso ejercer controles para que la actividad de las sociedades comerciales se ajustara a sus estatutos y llevaran en debida forma la información contable y financiera (...)⁸. (El subrayado es fuera del texto).

Sin perjuicio de lo expuesto, la ley, **de manera excepcional por razón de la materia**, ha establecido una competencia **objetiva** para la Superintendencia de Sociedades que le permite inmiscuirse en la actividad propia del objeto social y en consecuencia en la relación que se establece entre la sociedad y los terceros. Lo cual solamente aplica sobre las sociedades que realizan actividades de comercialización en red o mercadeo multinivel (artículo 7° de la Ley 1700 de 2013) y sobre las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial – SAPAC (Decreto 1941 de 1986). Estas dos excepciones, constituyen los únicos escenarios legalmente previstos de competencia objetiva sobre la actividad, con lo cual se confirma la regla general de que el ámbito de supervisión de esta entidad es de carácter meramente subjetivo.

Ahora bien, en relación con las facultades otorgadas por el Decreto Ley 4334 de 2008 en **materia de intervención por captación**, a las cuales se hará una referencia más adelante, se anticipa, desde ya, que se trata de la ejecución de medidas *ex post* y no *ex ante* y, en tal sentido, estas atribuciones no alteran la naturaleza de la supervisión ejercida por la entidad.

En efecto, el procedimiento consignado en el mencionado Decreto Ley 4334 de 2008 está orientado a: “(...) *suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que a través de captaciones o recaudos no autorizados (...) generan abuso del derecho y fraude a la ley al ejercer la actividad financiera irregular y, como consecuencia, disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades.*” (Artículo segundo del citado Decreto Ley). **Luego, la intervención de la entidad tiene lugar cuando ya se han presentado objetiva y notoriamente los supuestos de captación; entonces, no se trata de una medida preventiva, ya que el ámbito de aplicación está delimitado a cuando se han realizado recaudos no autorizados, por lo que la participación de la Superintendencia de Sociedades indefectiblemente es posterior a que tales supuestos se den en la realidad.**

Al respecto, vale la pena tener en cuenta que el Decreto 4333 de 2008, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Social, tuvo como consideración para su expedición, entre otras, que: “(...) *tales actividades llevan implícito un grave riesgo y amenaza para los recursos entregados por el público, toda vez que **no están sujetas a ningún régimen prudencial** y carecen de las garantías y seguridades que ofrece el sector financiero autorizado por el Estado (...)*”. (Considerando Decreto 4333 de 2008)

Las actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público son de interés público y están sujetos a la intervención del Estado (artículo 335 de la Constitución Política); por tal motivo, se encuentran sometidos a un régimen prudencial, cuya inspección, vigilancia y control se ejerce por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de la Economía Solidaria, según la naturaleza de la entidad que lleve a cabo dicha actividad legalmente.

La regulación prudencial o regulación preventiva ha sido definida como aquella que “(...) *se ocupa de asegurar la solvencia y la liquidez de las instituciones bancarias, así como la diversificación de los riesgos financieros en la adquisición del negocio*

⁸ Sentencia C-135 de 2009, de Revisión de constitucionalidad del Decreto 4333 de 17 de noviembre de 2008 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Social”.



bancario, para evitar su colapso (...)”. Ha escrito Enrique Marshall que “ (...) ésta comprende un conjunto de disposiciones orientadas a asegurar la correcta asignación de los recursos financieros y a impedir la asunción de riesgos excesivos y su posterior transferencia, sin la voluntad explícita de las partes o sin una adecuada compensación económica, de las instituciones bancarias a los depositantes y de éstos a toda la sociedad (...)”⁹.

El mismo autor (Martínez Neira, 2004) ha señalado que la regulación prudencial tiene como expresiones fundamentales la regulación de la solvencia y la liquidez bancaria, la dispersión de los riesgos bancarios y el sistema de supervisión.

En lo atinente a la supervisión señala que: “(...) La vigilancia y control del aparato financiero es otra de las manifestaciones de la intervención estatal. A través suyo se busca verificar el cumplimiento del conjunto de reglas organizacionales, económicas y prudenciales que se disponen con relación a las instituciones bancarias, para asegurar la fluidez en el sistema de pagos, la estabilidad misma de las instituciones y que no se conculquen los derechos de los particulares.

*La supervisión implica por parte del Estado la puesta en marcha de un sistema de seguimiento a la evolución de cada una de las instituciones crediticias y del sistema en su conjunto para verificar la regularidad de sus operaciones y asegurar su estabilidad financiera, como ha quedado dicho. Como complemento necesario le compete adoptar los correctivos pertinentes y sancionar las conductas que se aparten del ordenamiento jurídico y financiero (...)”*¹⁰.

Se trata, en verdad, de una supervisión objetiva y exhaustiva respecto de la actividad de las entidades que llevan a cabo la actividad de captación masiva legalmente, pues, por el interés público involucrado se justifica la puesta en marcha de una estructura robusta que vele por los ahorradores e inversionistas que depositan sus recursos en las instituciones financieras y bursátiles.

Al margen de esta actividad se encuentran aquellas personas que se apartan del sistema financiero legal colombiano y deciden de manera autónoma y por su propia cuenta asumir mayores riesgos con su dinero, lo cual fue tenido en cuenta por la disposición que declaró el estado de emergencia social (Decreto 4333 de 2008) cuando consideró que: “(...) la inclinación de muchos ciudadanos por obtener beneficios desorbitantes, los ha llevado a depositar sus recursos en estas empresas cuyas operaciones se hacen sin autorización, desconociendo las reiteradas advertencias del Gobierno Nacional (...) se hace necesario adoptar procedimientos ágiles, mecanismos abreviados y demás medidas tendientes, entre otras, a restituir a la población afectada por las mencionadas actividades, especialmente a la de menores recursos, los activos que sean recuperados por las autoridades competentes(...)”.(Considerando Decreto 4333 de 2008)

Las consideraciones en cita son claras en señalar que se trata de una actividad financiera ilegal y, en tal sentido, son precisas en delimitar el alcance de las facultades que se le otorgarían a la Superintendencia de Sociedades en el subsiguiente Decreto Ley 4334 de 2008, restringidas a la suspensión de la actividad ilegal y al desarrollo de procedimientos para la restitución de los activos recuperados a los afectados.

Es claro entonces que la Superintendencia de Sociedades no ejerce una supervisión respecto de la actividad financiera ilegal, pues la amparada por el Estado está sometida a una estricta regulación prudencial y su fiscalización se ejerce por entidades especializadas para el efecto, de la que carece dicha actividad no autorizada. En consecuencia, es específico y limitado el alcance de las atribuciones de la entidad en relación con el procedimiento de intervención por captaciones no autorizadas, restringiéndose a medidas de carácter **reactivo y represivo**, más no controles de legalidad previos sobre su ejercicio, ni respecto de las inversiones que

⁹ MARSHALL RIVERA, Enrique. El Banco Central como regulador y supervisor del sistema bancario. Mimeo. Ponencia presentada en la XXVIII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del Continente Americano. Santiago de Chile, 1991, citado por: MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto. 2004. *Cátedra de Derecho Bancario Colombiano*. Bogotá, Colombia. Editorial Legis (Pág. 89).

¹⁰ Ídem.



las personas decidan hacer, así como tampoco sobre el nivel de riesgo que decidan asumir, por cuanto se trata de la órbita de la autonomía de la voluntad privada sobre la cual no podría tener injerencia. Además, para que pueda operar el procedimiento de intervención necesariamente se requiere que se materialicen objetivamente y de manera notoria los supuestos de captación no autorizada de dinero del público.

5.1.2.1 SUPERVISIÓN DE SOCIEDADES OPERADORAS DE LIBRANZA

5.1.2.1.1 Normativa aplicable

La Ley 1527 de 2012, por medio de la cual se consagró un marco general para la libranza o descuento directo y se dictaron otras disposiciones, estableció en su artículo 2° literal c), que la entidad operadora es: “(...) *la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza dichas operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley. En estos casos deberá estar organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo (Infis), sociedad comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa, y deberá indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el origen lícito de sus recursos y cumplir con las demás exigencias legales vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas entidades operadoras estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades*” (Subrayado fuera del texto original).

La misma ley consagra: “*Inspección, vigilancia y control. Para efectos de la presente ley, la entidad operadora, de acuerdo con su naturaleza, será objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera, de Economía Solidaria o de Sociedades, según sea el caso*”¹¹. (Subrayado fuera del texto).

Así las cosas, se concluye de las mencionadas normas, que la vigilancia de las entidades operadoras que ejercen actividades de libranza corresponde, ya sea, a la Superintendencia Financiera, de Economía Solidaria o Sociedades, **según la naturaleza de la entidad operadora, más no frente a la actividad que desarrolla en sí misma considerada (criterio objetivo)**. Esta división de funciones confirma que la supervisión conferida por dicha ley tiene un carácter puramente subjetivo y, por ende, la superintendencia correspondiente podrá ejercer atribuciones sobre el ente como sujeto y no sobre la materia o actividad a la que se dedica¹².

De otra parte, es importante señalar que la Ley 1527 de 2012, no asignó funciones de supervisión sobre las **sociedades comercializadoras de libranzas**, sino tan sólo de las **operadoras de libranza**¹³. Así, sólo estarán sometidas a vigilancia de la Superintendencia las sociedades comercializadoras de libranza que se encuentren en los casos previstos en la Ley o en decretos reglamentarios para estar vigiladas.

Adicionalmente a las facultades señaladas en relación con las sociedades operadoras de libranza, es pertinente explicar las que tiene la Entidad sobre las sociedades comerciales que realizan actividad de *factoring* (compraventa de cartera), respecto de las cuales se ejerce supervisión subjetiva por parte de la Superintendencia de Sociedades.

¹¹ Artículo 10 de la Ley 1527 de 2012.

¹² Cfr. Jurisprudencias del Consejo de Estado y Corte Constitucional en el acápite referente a la supervisión subjetiva y objetiva.

¹³ Artículo 2°, definiciones, literal c): “Entidad operadora. *es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza dichas operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley. En estos casos deberá estar organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo (Infis), sociedad comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa, y deberá indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el origen lícito de sus recursos y cumplir con las demás exigencias legales vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas entidades operadoras estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades*”.



Al respecto, el artículo 11 de la Ley 35 de 1993, dispuso que la inspección, vigilancia y control de las sociedades de compra de cartera, denominadas de *factoring*, se sujetara a las disposiciones generales sobre la vigilancia y control de las sociedades comerciales.

El Decreto 2669 del 2012, "Por el cual se reglamenta la actividad de *factoring* que realizan las sociedades comerciales, se reglamenta el artículo 8º de la Ley 1231 de 2008, se modifica el artículo 5º del Decreto 4350 del 2006 y se dictan otras disposiciones", dispuso que el mismo se aplicaría a aquellas sociedades que tuvieran como objeto exclusivo la actividad de *factoring* y, en consecuencia, indicó que:

"Artículo 7. Modificación del artículo 5 del Decreto 4350 de 2006. Adicionase al artículo 5 del Decreto 4350 de 2006 el siguiente literal: **"Artículo 5.** Estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades en los términos que lo indican las normas legales pertinentes, respecto de cada una de ellas: (...)

f) Los factores constituidos como sociedades comerciales que tengan por objeto social exclusivo la actividad de *factoring* y que, además demuestren haber realizado operaciones de *factoring* en el año inmediatamente anterior, por valor igualo superior a treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (30.000 s.m.l.m. v.) al corte del ejercicio.

Parágrafo. El objeto social exclusivo de actividad de *factoring* deberá acreditarse mediante el certificado de existencia y representación legal que expida la correspondiente cámara de comercio".

Con posterioridad, el Decreto 1219 de 2014, "Por el cual se reglamenta el artículo 89 de la Ley 1676 de 2013 y se modifican los Decretos 4350 de 2006 y 2669 de 2012", en su artículo 1, dispuso:

"Artículo 1. Adición al artículo 5 del Decreto 4350 de 2006. Adiciónense los literales f) y g) y un parágrafo al artículo 5 del Decreto 4350 de 2006, los cuales quedarán así:

f) Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea el *factoring* o descuento de cartera y que, además, demuestren haber realizado operaciones de *factoring* en el año calendario inmediatamente anterior, por valor igualo superior a treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (30.000 SMLMV) al corte del ejercicio.

g) Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea el *factoring* o descuento de cartera y que además hayan realizado dentro del año calendario inmediatamente anterior contratos de mandato específicos con terceras personas para la adquisición de facturas, o que tengan contratos de mandato específicos vigentes al corte del ejercicio del año calendario inmediatamente anterior. En este caso, la vigilancia se mantendrá mientras dichos contratos estén vigentes o se estén ejecutando.

Parágrafo. El objeto social exclusivo de actividad de *factoring* deberá acreditarse mediante el certificado de existencia y representación legal que expida la correspondiente cámara de comercio".

Conforme a lo anterior, es del caso precisar que están sometidas a la vigilancia de esta Superintendencia aquellas sociedades que tengan como objeto social exclusivo el *factoring* en los términos del artículo 1 del Decreto 1219 de 2014; no obstante, es de aclarar que esta vigilancia es meramente subjetiva, toda vez que, se limita a lo relacionado con los aspectos societarios o exclusivamente relacionados con el ente en sí mismo considerado pues, la ley no ha facultado a la Entidad para inmiscuirse en la actividad a la que se dedica el sujeto vigilado.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1023 de 2012 y en concordancia con el artículo 83 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades estará facultada para verificar el límite de solvencia dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1676 de 2013, de todas aquellas sociedades cuya actividad sea el *factoring* o el descuento de cartera, sin que para ello deban tener objeto social exclusivo. Esa



relación de solvencia sólo se aplica a operaciones sobre facturas, de manera que no es aplicable a operaciones con libranzas.

De lo anterior se desprende que la Superintendencia de Sociedades tiene facultades para ejercer vigilancia subjetiva exclusivamente, sobre las sociedades operadoras de libranza y aquellas que tengan como objeto social exclusivo el *factoring*, así como para verificar el cumplimiento del límite de solvencia en operaciones únicamente sobre facturas, según términos arriba expuestos.

En este contexto, la SUPERVISIÓN ejercida por la Superintendencia de Sociedades sobre la entonces sociedad operadora de libranza OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, se encontraba circunscrita a la “*verificación de mínimos legales en materia de constitución, funcionamiento, estados financieros y situación económica*”, en los términos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-135 de 2009, arriba trascrita. En efecto, las atribuciones están asignadas para que se verificaran aspectos societarios de la entidad y no respecto de la actividad que desarrollaba, consistente en la compraventa y otorgamiento de créditos y la comercialización de cartera a través de *factoring*. Por tanto, **la Superintendencia de Sociedades no es responsable de la supervisión del objeto social o de la actividad desarrollada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, ya que ello desbordaría sus competencias y no contaría con soporte legal para llevar a cabo tales atribuciones.**

En documento publicado por la Procuraduría General de la Nación, denominado el ABC de las Libranzas en Colombia, frente a la competencia de la Superintendencia de Sociedades, se señaló que:

“(...) Vigila a aquellas entidades que estén constituidas como sociedades comerciales, que no estén bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o de la Superintendencia de la Economía Solidaria, y que otorguen créditos con recursos propios o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley. La supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades sobre las entidades operadoras de libranza a su cargo es de naturaleza subjetiva, es decir que se limita a los aspectos societarios de la entidad operadora y no a la actividad que desarrolla (compraventa y otorgamiento de créditos), salvo en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de información (Subrayado fuera de texto)”¹⁴.

5.1.2.1.1 Principales actuaciones desplegadas por la Superintendencia de Sociedades respecto de las sociedades comerciales operadoras de libranza y de compraventa de cartera.

En cumplimiento de las funciones explicadas en precedencia, se considera importante mencionar las actuaciones más relevantes desplegadas por la Superintendencia de Sociedades respecto de las sociedades que realizan operaciones de libranza o descuento directo y operaciones de compraventa de cartera, como prueba del debido cumplimiento de las atribuciones legales que le correspondían; a saber:

- A) Así, para acatar las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto 1219 de 2014, por medio del cual se adicionó al artículo 5° del Decreto 4350 de 2006 (actualmente incorporado en el Decreto 1074 de 2015); el 2 de febrero de 2015, se efectuó un requerimiento de información a cuarenta y ocho (48) sociedades dedicadas a la compra y venta de títulos valores, con el objetivo de identificar las sociedades sujetas a vigilancia de esta Superintendencia respecto a la actividad de Factoring, dada la creación del Registro Nacional de Factores (RUNF). Como resultado del análisis se identificaron cinco (5) sociedades que cumplían los criterios establecidos en los literales f) y g) del artículo 5 del Decreto 4350 de 2006, hoy recogido en el Decreto 1074 de 2015, tales como objeto social exclusivo, monto de operaciones y contratos de mandatos específicos con terceras personas.
- B) De igual manera, de acuerdo a lo dispuesto en el literal c) del artículo 2 de la Ley 1527 de 2012, el 6 de febrero de 2015, se remitió un oficio masivo a

¹⁴ Disponible para consulta en <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/ABC-Libranzas-v2.pdf>



cincuenta (50) sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, que adelantan la actividad de comercialización o administración de créditos libranza, mediante el cual se les informó sobre su estado de vigilancia ante esta Entidad, junto con los deberes y obligaciones que ello conlleva respecto a la actividad de libranzas, al igual que los aspectos societarios que deben tenerse en cuenta.

- C) Posteriormente, el 22 de mayo de 2015, se remitió el mismo oficio a trescientas treinta y dos (332) sociedades adicionales operadoras de libranzas, en el cual también se les informó sobre su estado de vigilancia y sus obligaciones y deberes.

Igualmente, se envió información financiera de veintiocho (28) sociedades comerciales que actúan como Operadores o como Entidades Cesionarias del Crédito de Libranza o Factores en los términos del parágrafo 1° del artículo 3 de la Ley 1527 de 2012 a la Superintendencia Financiera de Colombia (oficio No. 300-092436 del 24 de mayo de 2016).

- D) Se impartieron órdenes de desmontar la operación hasta cumplir con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1676 de 2013 a dos (2) sociedades, en julio de 2016, debido a los hallazgos realizados por esta Superintendencia.
- E) Entre el 19 y el 21 de julio de 2016 se generaron cuatrocientos cinco (405) oficios a las sociedades operadoras de libranza y sociedades de *factoring*, en los cuales se solicitó información correspondiente al valor de la cartera de libranzas comprada y vendida con corte al 31 de mayo de 2016, en la cual debían especificar si la misma fue transferida con o sin responsabilidad.
- F) Se expidió la Circular Externa 100-000007 del 24 de agosto de 2016 dirigida a las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, que adelanten la actividad de comercialización o administración de créditos libranza, por medio de la cual se solicitó información sobre la actividad que desarrollan de conformidad con las nuevas funciones asignadas a esta Superintendencia en el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.54.3 y en el artículo 2.2.2.54.6 Decreto 1074 de 2016.
- G) Se remitió información a la Superintendencia de Economía Solidaria sobre entidades operadoras de libranza, cuya vigilancia le correspondía (oficios 306-151940 del 5 de agosto de 2016, 306-158361 del 22 de agosto de 2016, 300-159507 del 24 de agosto de 2016 y 300-187735 del 27 de septiembre de 2016, entre otros
- H) Se informó a la Gobernación del Atlántico sobre los hallazgos realizados en diferentes diligencias de tomas de información a sociedades operadoras de libranzas en relación con la Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado – CORPOSER, identificada con NIT 900.778.323, con el fin de que dicha entidad ejerciera las facultades de inspección, vigilancia y control de acuerdo con su competencia (oficio 300-158580 del 22 de agosto de 2016).
- I) Así, también, se remitió información a la Gobernación de Córdoba sobre los hallazgos obtenidos con relación a la Corporación de Inversiones de Córdoba COINVERCOR, identificada con NIT 900.297.634 (oficio 300-177115 del 15 de septiembre de 2016), para los mismos fines que los mencionados en el numeral anterior.
- J) Se llevaron a cabo diligencias de toma de información a sesenta y nueve (69) sociedades.

5.1.2.2. FUNCIONES DE INTERVENCIÓN POR CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO

5.1.2.3. DECRETO LEY 4334 DE 2008

La emergencia social de 2008, tuvo su origen en la ocurrencia de hechos sobrevinientes que consistieron en la proliferación desbordada de diversas



modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que dificultaron la intervención de las autoridades.

Los mecanismos ordinarios de que disponían las autoridades resultaron insuficientes, debido a que el ejercicio no autorizado de la actividad financiera se encontraba oculto bajo fachadas jurídicas aparentemente legales.

Se expidió entonces el Decreto Legislativo 4334 de 2008, que facultó al Gobierno Nacional para intervenir, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, los negocios, operaciones, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollen o participen en la actividad financiera sin la debida autorización estatal.

Como se señaló en precedencia, la intervención es el conjunto de medidas tendentes, a suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que a través de captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, generan abuso del derecho y fraude a la ley al ejercer la actividad financiera irregular y, como consecuencia, disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades (artículo 2º del Decreto Ley 4334 de 2008).

Se definieron como sujetos de intervención las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente a ellas (artículo 5º del Decreto Ley 4334 de 2008).

La Corte Constitucional, en Sentencia C-145 de 2009, declaró exequible condicionalmente la expresión "o indirectamente", en el entendido de que no abarca a terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales.

Tampoco son sujetos de intervención quienes tienen exclusivamente como relación con estos negocios, el de haber entregado sus recursos, es decir los inversionistas o ahorradores que, a la postre, termina siendo los afectados.

Se establecieron como supuestos de la intervención la existencia de hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes en donde se presente la ausencia de contraprestación en bienes o servicios presentes o futuros que justifiquen la captación o, aun existiendo tal contraprestación, no cuente con explicación financiera razonable.

Las medidas de intervención administrativa fueron descritas de la siguiente manera¹⁵:

"(..) a) La toma de posesión para devolver, de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas;

"b) La revocatoria y reconocimiento de ineficacia de actos y negocios jurídicos, celebrados con antelación a la toma de posesión;

"c) La devolución de bienes de terceros, no vinculados a la actividad no autorizada,

"d) En caso de que a juicio de la Superintendencia se presente una actividad con la cual se incurra en alguno de los supuestos descritos en el presente decreto, por parte de una persona natural o jurídica y ésta manifieste su intención de devolver voluntariamente los recursos recibidos de terceros, esta Entidad podrá autorizar el correspondiente plan de desmonte. En el evento que dicho plan se incumpla se

¹⁵ Artículo 7º del Decreto 4334 de 2008



dispondrá la adopción de cualquiera de las medidas previstas en este decreto, sin perjuicio de las actuaciones administrativas y penales a que hubiere lugar;

“e) La suspensión inmediata de las actividades en cuestión, bajo apremio de multas sucesivas, hasta de dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta medida se publicará en un diario de amplia circulación nacional indicando que se trata de una actividad no autorizada;

“f) La disolución y liquidación judicial de la persona jurídica o de cualquier contrato u otra forma de asociación que no genere personificación jurídica, ante la Superintendencia de Sociedades, independientemente a que esté incurso en una situación de cesación de pagos.

“g) La liquidación judicial de la actividad no autorizada de la persona natural sin consideración a su calidad de comerciante (...)” (artículo 7º del Decreto ley 4334 de 2008).

Expedidas las medidas de emergencia, de naturaleza reactiva y represiva, la Superintendencia procedió a su aplicación, gestión que se tradujo en la intervención de las personas naturales y jurídicas que para la época venían ejerciendo la actividad financiera irregular, escondida bajo fachadas jurídicas aparentemente legales como venta de tarjetas prepago, venta de bienes y servicios.

El impacto de las medidas fue contundente y gracias a su implementación se restableció el orden público económico en todo el territorio nacional.

No obstante, la demostración de la efectividad de este nuevo poder estatal, el fenómeno de la captación masiva de recursos del público sin autorización, lamentablemente se ha venido reproduciendo a lo largo de estos diez años posteriores a la emergencia, en diferentes escenarios del mercado nacional, con diversos y novedosos modelos de operación.

Es cierto que ya no es un fenómeno sobreviniente y que ahora el Estado cuenta con mecanismos jurídicos suficientes y capaces de hacer frente a los nuevos desafíos en materia de captación irregular, pero no debe olvidarse que el Régimen de Intervención por captación, no puede ser aplicado de manera caprichosa por parte de la Superintendencia, dado que no se trata de una atribución irracional o arbitraria sobre los sujetos y operaciones económicas.

La activación de las medidas que se deben adoptar cuando se está en presencia de una intervención por captación, está condicionada por severas restricciones que deben ser puntualmente atendidas, con el propósito de no incurrir en acciones indebidas que causen perjuicios injustificados a los administrados, pues se trata de mecanismos muy drásticos que pueden llegar a despojar a los sujetos intervenidos de los bienes que conforman su patrimonio, con el objeto de devolver a los inversionistas defraudados los dineros captados irregularmente.

Como se explicó en el apartado relativo a la naturaleza de la supervisión ejercida por la Superintendencia de Sociedades, ésta es de naturaleza subjetiva. Ahora bien, la actividad financiera es de interés público y su inspección, vigilancia y control recae en entidades (Superintendencia Financiera o Superintendencia de la Economía Solidaria) que tienen a su cargo el cumplimiento de la regulación prudencial, con el fin de asegurar la estabilidad financiera. En cambio, las normas expedidas al amparo de la emergencia económica y social decretada en 2008 tuvieron un carácter reactivo y represivo y no preventivo, como ya se ha indicado.

Para que la Superintendencia pueda ejercer sus potestades de intervención por captación es requisito *sine qua non* que se **materialicen objetivamente y de manera notoria** los presupuestos de la captación no autorizada de recursos del público.

Los presupuestos de la intervención fueron descritos expresamente en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008, en los siguientes términos:

“**SUPUESTOS.** La intervención se llevará a cabo cuando existan hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega



masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.”

Se desprende de la disposición transcrita que son supuestos de la intervención los siguientes:

A) La ocurrencia de hechos objetivos o notorios que indiquen captación masiva de recursos del público, sin autorización estatal, encubierta en operaciones aparentemente legales.

B) La ausencia de contraprestación en bienes o servicios presentes o futuros que justifiquen la inversión o, aun existiendo tal contraprestación, que no cuente con explicación financiera razonable.

Mientras no se materialicen objetivamente estos supuestos, la Superintendencia de Sociedades carece de competencia temporal para intervenir en el caso concreto.

Es en este escenario que debe tenerse muy presente que pueden darse situaciones de nutridas quejas y reclamaciones por presunta captación masiva no autorizada de recursos del público, como en efecto ha ocurrido en diferentes ocasiones, pero es sólo cuando se materializan objetivamente los supuestos de la actividad irregular, que la Superintendencia tiene vía libre para actuar con toda contundencia.

Existe la posibilidad de que haya sociedades mercantiles vigiladas por esta Superintendencia, que desarrollan actividades comerciales autorizadas por la ley, frente a las cuales se ejercen ordinariamente las funciones de supervisión previstas en la Ley 222 de 1995 y, consecuentemente, reportan información financiera, son objeto de visitas e investigaciones administrativas y, aunque son auditadas por un revisor fiscal, no presentan señales claras (objetivas y notorias) de alerta o de actividad irregular.

Sin embargo, puede ocurrir que existan sociedades vigiladas, que, bajo el amparo de una actividad aparentemente lícita, engañen a quienes tengan relaciones comerciales con ellas (así como al ente de supervisión), ya que, de manera subrepticia y oculta, desarrollan una sofisticada actividad irregular de captación de recursos del público sin autorización.

En estos casos, con el transcurso del tiempo, la operación se deteriora y solo cuando se hace evidente, por diferentes vías, la noticia objetiva y notoria de la captación, la Superintendencia puede hacer uso del procedimiento de la intervención por captación ilegal.

En conclusión, cuando se presentan hechos ocultos, encubiertos o escondidos en fachadas jurídicas legales, la operación de captación masiva de recursos del público sin autorización estatal, aún no se habrían configurado los supuestos de la intervención. Estos sólo se consolidan cuando sean revelados y descubiertos, se materialicen y evidencien de manera objetiva o notoria como lo exige el artículo 6º del Decreto Ley 4334 de 2008 antes citado.

5.1.2.3.1.1 JURISPRUDENCIA SOBRE CAPTACIÓN MASIVA E ILEGAL DE DINERO DEL PÚBLICO Y FUNCIONES DE LAS SUPERINTENDENCIAS

A continuación, se efectúa una relación de los pronunciamientos hechos en algunos de los procesos adelantados en razón de la captación masiva e ilegal de dinero del público en los cuales se pretendió infructuosamente endilgar responsabilidad a las entidades de supervisión, por el acaecimiento de estos fenómenos.

En toda esa jurisprudencia que a continuación se relaciona, se halla un hilo conductor consistente en señalar que la entrega de dinero a una determinada entidad con el fin de ganar una rentabilidad exagerada en un breve lapso, lo cual, de acuerdo con las



reglas de experiencia no corresponde a una actuación o actividad legal, está fundada en la culpa de la víctima y, en segundo término, en el hecho de un tercero, pero en forma alguna implica una omisión o una actuación tardía del Estado en función de sus atribuciones legales, por cuanto la causa que originó el daño no se debió a la falta de intervención estatal o a su eventual retraso, sino que el hecho generador ocurrió con anterioridad por causa o con ocasión de la confluencia entre la aquiescencia inconsulta del afectado y el fraude del sujeto que a la postre resultó ser el intervenido.

A) Expediente 2010 00266 00 demandante José Ramón Vera Paredes, demandada Nación Presidencia de la Republica y otros, Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Descongestión de Cali.

“(…) El despacho se releva de hacer pronunciamiento respecto a responsabilidad alguna en cabeza de las entidades demandadas, pues resultó evidente la culpa de la víctima en el resultado dañino por el cual demandaba.

Consideró el juez que el hecho que el demandante hubiera decidido de manera libre, espontánea y voluntaria depositar sus dineros en el establecimiento demandado, resultaba un hecho a todas luces irresistible para las entidades demandadas, pues al Estado se le hacía imposible restringir la libertad de las personas de disponer de sus bienes como mejor les parezca.

Por otra parte, resultaba en extremo difícil para las entidades demandadas enterarse que la sociedad demandada desplegaba actividades de captación irregular de recursos del público, atendiendo precisamente a la dificultad que representaba la normatividad vigente para el momento de los hechos, cuando se trataba de determinar qué persona o sociedad desplegaba la captación masiva y habitual de recursos del público.

Por último, sostiene que las entidades no tuvieron injerencia alguna en la decisión libre del demandante en depositar su dinero en una captadora, pues de acuerdo a circunstancias subjetivas del propio actor (comerciante de 39 años), el hecho de la pérdida de su dinero era previsible y evitable. (…). (El resaltado es fuera del texto).

B) Expediente 2011 00045 00 demandante Manfredy Daza Gaitán, demandada Nación Superintendencia Financiera de Colombia- Juzgado Adjunto al Tercero (3°) Administrativo de Armenia.

El Juzgado determinó que la Superintendencia Financiera de Colombia (única entidad demandada) atendió sus obligaciones legales, haciendo uso de las herramientas legales y demás medios con que contaba en el caso particular, sin que pueda imputársele el abandono o la omisión en el cumplimiento de las mismas.

Aunado a lo anterior, **logró concluirse que la causa del daño irrogado al demandante, no fue otro que su propio accionar, pues este en busca de ganancias exageradas participó de un negocio del cual conocía todos sus detalles y frente al cual había sido advertido en varias ocasiones por las autoridades competentes**, no obstante, prestó su aval para el perfeccionamiento del mismo.

C) Expediente 2012 00078 00, demandante Silvia Amparo Guevara Castañeda, demandada Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros, Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Descongestión.

El juez de segunda instancia consideró que logró demostrarse que la Superintendencia Financiera (única demandada) había actuado de acuerdo con las facultades otorgadas por la ley, realizando visitas de inspección, las cuales hicieron parte de una actuación administrativa como un elemento probatorio más, entre muchos otros, a los que acudió.

De igual forma advirtió que el perjuicio cuya indemnización se pretendía, no derivaba de las acciones u omisiones en las que pudo haber incurrido la



administración, sino de la conducta imprudente, negligente y azarosa de quienes esperando una inverosímil ganancia, hicieron cuantiosas inversiones en entidades en la frontera con la ley.

- D) Expediente 2009 00166 00, demandante Alexandra Restrepo Zuluaga, demandada Nación Presidencia de la Republica y otros, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Sostuvo la Corporación que en el caso concreto no se había demostrado el daño. Sin embargo, procedió a realizar un análisis en el caso hipotético de haberse demostrado aquél, afirmando que respecto de las demandadas Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación y Municipio de Cali se configuraba la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Con relación a la Superintendencia Financiera indicó que actuó conforme al ordenamiento jurídico vigente, que hasta ese momento le permitía (antes de la expedición del Decreto 4333 de 2008), adelantando la respectiva actuación administrativa, la cual tuvo como resultado la expedición de la resolución No. 1778 del 11 de noviembre de 2008, a través de la cual ordenó la suspensión inmediata de la actividad desarrollada por Proyecciones D.R.F.E.

Por lo tanto, señaló que, si la demandante perdió alguna suma de dinero, se debió a su propia culpa y al hecho de un tercero, pues aquella de manera libre y voluntaria decidió invertir su dinero en un establecimiento de comercio ilegal, agregó que, de igual forma, la conducta del propietario del establecimiento contribuyó en la producción del supuesto daño, porque a pesar de contar con la debida autorización, desarrolló las actividades de captación de dinero del público.

El Tribunal consideró que la conducta del propietario del establecimiento resultó imprevisible e irresistible frente a la Superintendencia Financiera en la medida en que era ilegal y en esas condiciones no estaba bajo su inspección y vigilancia.

- E) Expediente 2010 00298 00, demandante Leonardo Gutiérrez Bulla y otros, demandada Superintendencia de Sociedades y otras, Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Descongestión.

El juez de segunda instancia consideró que no se encontró probada la falla en el servicio que se le atribuía a la Superintendencia Financiera por omisión o tardía intervención de la sociedad DMG, por cuanto, de una parte, se demostró que la sociedad no hacía parte de las entidades sujetas a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la cual la misma pudiera llevar un control y, de otra, frente a sus facultades de supervisión por la captación ilegal de dinero sin previa autorización, se demostró que las mismas fueron ejercidas de conformidad con la legislación que para tal efecto expidió el Gobierno Nacional.

De igual forma, se constató una ausencia legislativa que permitiera actuar con más celeridad y ello fue fruto de las blindadas formas para el recaudo y del respaldo tecnológico con el que contaban las empresas captadoras ilegales de dinero. Respecto a la Superintendencia de Sociedades indicó que ésta hizo uso de las facultades normativas vigentes para el momento, en el sentido de haber dado inicio a una investigación administrativa en contra de la sociedad DMG, en cumplimiento de lo normado en la Ley 222 de 1995, lo cual dio lugar a las diligencias y decisiones finalmente adoptadas.

- F) Expediente 2014 013700 00, demandante Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, demandada Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades, Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En la contestación de la demanda, la Superintendencia Financiera manifestó que el demandante no indicó de manera específica, cuál fue la presunta omisión de la entidad demandada, más allá de indicar de manera general las funciones de inspección, vigilancia y control. **Adicionalmente, consideró la demandada que el**



artículo 90 de la Constitución Política establece que la responsabilidad del Estado se restringe a los daños antijurídicos causados por acción u omisión de entidad pública, por lo cual en el caso bajo estudio se estaba ante el hecho de un tercero.

En sentencia de primera instancia la Sala concluyó que dentro del proceso de la referencia no se acreditó la supuesta práctica ilegal, no autorizada o insegura que habría sustentado la intervención del Estado, si es que a ello hubiere lugar y que, de acuerdo a ello, la consecuencia de evidenciar dichas prácticas es la imposición de sanciones administrativas.

En cuanto a la posibilidad que tiene el Estado de intervenir la economía, la Sala advirtió de manera insistente que no existe certeza sobre los efectos positivos de dicha medida, más allá de los que, con la adopción de las medidas como la toma de posesión y posterior liquidación, se haya logrado. Lo anterior tiene lógica, en tanto que el Estado no puede cada vez que detecta algo **inusual** proceder a adoptar medidas de intervención, pues terminaría afectando el mercado y la libertad económica, a tal punto que la gente se abstendría de invertir.

Agregó que la Superintendencia Financiera, en atención a las funciones que por Ley tiene asignadas, de manera inmediata, una vez conoció la eventual ausencia de pagos, ordenó la toma de posesión. En este punto la Sala reiteró que la intervención económica en cabeza de la Superintendencia Financiera se limita a adoptar la medida de toma de posesión y a la eventual consideración de su liquidación o no.

Así, la Sala encontró desvirtuados los cargos contra la entidad demandada respecto de su supuesto proceder omisivo, encontrando, por el contrario, que de acuerdo con lo probado en el expediente y a lo que legalmente se le puede exigir, la entidad, actuó de conformidad con la ley:

*“(…)Ahora bien en cuanto a las funciones de inspección de la Superintendencia Financiera, el Consejo de Estado ha sostenido para casos análogos que “El ente de control no puede responder por el incumplimiento que de su mandato hizo la sociedad vigilada frente a su cliente al no realizar las intervenciones ordenadas, pues advierte la sala, **que la función de supervisión de la superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los accionistas y/o inversionistas contra cualquier pérdida y tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, comoquiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado(…)”.** (El resaltado es fuera del texto).*

Por lo anterior, la Sala no encontró acreditados los elementos de la responsabilidad estatal, por lo que se negaron las pretensiones de la demanda, sin perjuicio de señalar que, en el caso concreto, se edificó una causa extraña que impidió imputar el daño alegado a la entidad demandada.

Adicionalmente, se ponen de presente dos sentencias sobre la inexistencia de falla en el servicio en hechos que conllevaron la pérdida de dinero de los demandantes:

- G) Expediente 29.944 demandante Fondo de Empleados de Almacenes Magali París Fedemagali y otros, demandada Nación Superintendencia Bancaria Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de marzo de 2015. (C.P: Hernán Andrade Rincón,).

En esta oportunidad la Sección Tercera se pronunció en segunda instancia sobre el medio de control de reparación directa impetrado por varios demandantes contra la Superintendencia Bancaria por falla del servicio a raíz de la quiebra del Banco Cooperativo “Bancoop” que implicó para los demandantes la pérdida de los recursos depositados.

La Sección resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, desestimar las pretensiones de la demanda. **Entre otras cosas, consideró que las obligaciones asignadas a las Superintendencias, tanto aquellas expresamente**



delegadas por el Presidente de la República como las que son otorgadas por ley, deben considerarse de medio y no de resultado toda vez que las mismas se limitan a asegurar el cumplimiento de las normas y la inspección y vigilancia de los entes sujetos a su supervisión. De igual forma, en referencia al caso bajo estudio, aclaró la Sección que la Superintendencia Bancaria no está obligada a contener o evitar los riesgos propios del mercado bancario.

- H) Expediente 35.534, demandante Fondo Interprofesional Unión Javeriana fijar y otros, demandada Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2016 (C.P: Marta Nubia Velásquez Rico)

En el caso estudiado en esta providencia, los demandantes ejercieron el medio de control de reparación directa contra la Superintendencia Bancaria – hoy Superintendencia Financiera de Colombia – al considerar que hubo una falla del servicio de inspección y vigilancia dado que esta Entidad no tomó los correctivos necesarios que hubieran evitado la toma de posesión para liquidar de la compañía de financiamiento comercial La Fortaleza S.A,

En la *ratio decidendi*, consideró la Sección Tercera que no se presentó la falla del servicio aludida pues la superintendencia demandada cumplió a cabalidad, de manera completa y sin retardos, sus deberes de inspección, vigilancia y control al realizar todas las gestiones que consideró necesarias y ajustadas a sus facultades para procurar que la entidad vigilada continuara con el normal ejercicio de su objeto social. Precisa la sentencia que la función de supervisión no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes y ahorradores sino en asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades que desarrollan estas actividades. **Se trata entonces de una obligación de medio y no de resultado pues sólo está obligada a revisar la actividad de los entes supervisados y no a evitar los riesgos propios del sistema y de las actividades desarrolladas dentro de este.**

Concluye la sentencia que “(...) *la responsabilidad del Estado por la omisión de los órganos de control se configurará únicamente cuando los daños causados sean consecuencia de una actuación de las entidades vigiladas contraria al ordenamiento jurídico, cuyo cumplimiento ha debido garantizar el organismo supervisor*”¹⁶.

- I) Expediente 2017 00119 01, demandante Jesus Montes Ruedas, demandada Superintendencia Financiera de Colombia y otros, Tribunal Administrativo del Atlántico, sección A, sentencia del 29 de abril de 2019 (M.P. Judith Romero Ibarra).

Manifiesta este Tribunal que “(...) *Ello es así, por cuanto se cuestiona de las entidades demandadas, la conducta pasiva o negligente que guardaron por el hecho de no haber ejercido las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la empresa Global Brokers S.A., lo que a juicio de los demandantes conllevó a que se le causara el detrimento patrimonial irrogado.*

La responsabilidad del Estado por el desempeño de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de las Superintendencias.

*De la revisión de las funciones de las entidades demandadas a fin de determinar si existió omisión en su cumplimiento por parte de alguna de ellas, la Sala encuentra lo siguiente, teniendo de presente lo que comprenden las funciones de inspección, vigilancia y control, en tal sentido ha de decirse que, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, respecto a las potestades de **inspección**, a esta se encuentran sujetas por parte de la Superintendencia de Sociedades, todas las compañías comerciales que no estén sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-, lo cual implica que respecto de tales empresas la Superintendencia de Sociedades está facultada para adelantar investigaciones administrativas «encaminadas a obtener, confirmar y analizar información sobre su situación jurídica, contable, económica y administrativa o sobre*

¹⁶ Sentencia del 26 de febrero de 2015, Expediente: 27544.



operaciones específicas que se hubieren realizado. Luego entonces la inspección constituye, una grave leve de supervisión del Estado en las sociedades sujetas a este tópico y en ese sentido el Alto Tribunal ha expresado que “es una atribución simplemente potencial, que garantiza que el superintendente pueda ejercer la facultad constitucional que se encuentra en cabeza del presidente de la República, en los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución nacional”.

En lo que a la potestad de **vigilancia atañe**, esta constituye la facultad de carácter permanente que permite a la Superintendencia de Sociedades desplegar actividades de mayor alcance que las de mera inspección, como quiera que esta atribución consiste esencialmente en la potestad de velar porque las sociedades sometidas a dicho grado de fiscalización, se ajusten tanto en su formación y funcionamiento como en el desarrollo de su objeto social, la Constitución Política, la ley, al reglamento y a sus propios estatutos.

En cuanto a la atribución de **control**, se trata de una potestad llamada a operar en relación con compañías que se encuentren en una situación crítica, de carácter jurídico, económico o administrativa. Esta facultad, al igual que ocurre con la vigilancia, solo puede ser ejercida sobre sociedades que no se hallen permanentemente vigiladas por otra superintendencia y para que una sociedad resulte sometida a ella será siempre indispensable que el Superintendente de Sociedades así lo determine por medio de acto administrativa de carácter particular, lo que a su vez implica que la cesación del control precisa asimismo que el Superintendente lo determine a través de acto administrativo también.

En cuanto a dichas funciones en cabeza de las Superintendencias, su fundamento y a las responsabilidades que de ella se podrían derivar, el Consejo de Estado ha precisado¹⁷:

“(…) Las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de las superintendencias, en general y de la Superintendencia de Sociedades, en particular, encuentran fundamento constitucional, en el marco de la Carta Política vigente con anterioridad al año de 1991, en lo que preceptuaba el numeral 15 del artículo 120, por cuya virtud correspondía al Presidente de la República “ejercer la inspección necesaria sobre los demás establecimientos de crédito y las sociedades mercantiles, conforme a las leyes”, mientras que en el contexto de la Constitución Política actualmente vigente son los ordinales 8 y 19 del artículo 150 de la Constitución, en armonía con lo previsto en los numerales 24 y 25 del artículo 189 ibídem, las disposiciones que prevén que corresponde al Congreso de la República expedir las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia sobre las personas que realicen o desarrollen las actividades financiera, bursátil, aseguradora o cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, así como sobre las entidades cooperativas y sociedades mercantiles; tales atribuciones comportan, como lo ha explicado la Sección Tercera del Consejo de Estado, el ejercicio tanto del poder de policía cuanto de la función de policía.

(…) Las actividades de inspección, vigilancia y control por parte del Estado respecto de las sociedades comerciales comenzaron a ser realizadas en relación con las sociedades anónimas habida consideración de la característica que a ese tipo societario resulta consustancial: la limitación total de la responsabilidad de los asociados a sus respectivos aportes; dicha particularidad inherente a la sociedad anónima fue concebida como una concesión o privilegio reconocido por el Estado para facilitar y estimular la vinculación de inversionistas a empresas grandes y no siempre promisorias, como ocurrió con las Compañías Holandesas de las Indias Orientales de principios del siglo XVII. Empero, la anotada limitación de la responsabilidad —que permitió la representación del interés de los socios en títulos negociables, de modo que se facilitara tanto su circulación como la vinculación de toda clase de inversionistas— al propio tiempo condujo a granjearle a la sociedad anónima un ambiente de cautela y de prevención en las legislaciones comerciales, en

¹⁷ Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, tres (3) de octubre de dos mil doce (2012 i, Radicación numero: 25000-23-26-000-1995-00936-01(22984).



las cuales empezaron a ser consagrados mecanismos de la más diversa naturaleza encaminados a conjurar los peligros que esa responsabilidad limitada entrañaba, como se expresó abiertamente en la exposición de motivos del Código de Comercio de Napoleón, al señalar que (...)

Adicionalmente, las disposiciones que regulan las sociedades comerciales tienden también a proteger los intereses de los terceros que traben relaciones de negocio con la sociedad, entre los cuales debe destacarse a los acreedores sociales; ello justifica la existencia de normas dictadas para la salvaguarda de la integridad del capital social, entre otras. Y también deben ser considerados y tutelados los intereses de los posibles —futuros— socios o acreedores, los cuales han adquirido una importancia cada vez mayor con la difusión y el desarrollo de las sociedades por acciones. En fin, el campo de los intereses tutelados se ensancha continuamente hasta comprender, incluso, el interés general de la economía del país, dadas las repercusiones que sobre dicha economía puede tener —y, de hecho, tiene— el funcionamiento de las sociedades de comercio.

Ahora bien, las potestades de inspección, vigilancia y control ejercidas por la Administración Pública respecto de diversos ámbitos de la actividad que despliegan los particulares ha sido catalogada como una de las modalidades de la denominada función de policía administrativa o actividad administrativa de coacción, conceptualizada esta por la doctrina como “el conjuro de medidas utilizables por la Administración para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública”¹⁸ y las superintendencias tienen entonces a su cargo el ejercicio de una modalidad de la policía administrativa, cual es la función de inspección, vigilancia y control de diversos ámbitos de actividad de las personas, en los precisos términos dispuestos por la ley o por la correspondiente delegación o desconcentración de funciones atribuida en principio al Presidente de la República, legalmente autorizadas.”

(...)

Hechas las anteriores precisiones, se impone a esta Corporación, determinar si la conducta de las entidades demandadas puede considerarse “anormalmente deficiente” u omisiva, teniendo en cuenta las circunstancias en que debía prestarse el servicio, a fin de determinar si se probó el segundo elemento de la responsabilidad es decir la imputabilidad.

En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en quo ocurrieron los hechos que dieron origen a la interposición del presente medio de control, señala la parte demandante que el daño se ocasiono por la omisión de las demandadas en el incumplimiento de sus funciones de vigilancia, inspección y control a la empresa Global Brokers S.A.

En primer lugar, advierte este Tribunal como bien lo sostuvo A quo, que la actividad de la empresa Global Brokers no coincide, con una operación descrita en la ley como de crédito o financiera, por tanto, no era una actividad que debiera ser controlada por la Superintendencia financiera, a partir de la función de prevención u otra, por cuanto en la actividad mercantil estipulada al momento de su constitución, que es la que determine en si su comportamiento, de conformidad con las disposiciones del Código de comercio y normativa citada, no se encontraba cobijada.

Se tiene que, entre la citada empresa y los actores, existió un contrato en el cual las partes dejaron plasmadas su voluntad, acompañada de la autonomía que les es propia, actividad que es extraña a las competencias de la superintendencia porque dicha sociedad, no desarrollo al menos de manera licita, actuaciones encuadradas dentro de las operaciones activas o pasivas de crédito. Ello por cuanto según el supuesto de hecho que ahora se le endilga a las enjuiciadas, no se produjo como consecuencia de las actividades desarrolladas por la empresa Global Brokers. S.A.; sino que tuvo su origen en un contrato de mandato cuyo objeto era la cesión de un derecho litigioso y que los actores suscribieron con esa empresa, situación que escapa a la facultad de vigilancia de las entidades demandadas.

¹⁸ Fernando Garrido Falla.



Es del caso precisar que, la actividad financiera implica por se ciertos riesgos, así lo ha decantado el Consejo de Estado al señalar que¹⁹:

"El sistema financiero lleva inmerso los riesgos económicos propios de la actividad, en consideración a que esta es especulativa, en tanto la rentabilidad o no depende de las múltiples variables que se presentan diariamente que, a su vez, están sujetas a las condiciones del mercado, razón por la cual, se trata de un sistema que encuentra sustento en la confianza.

Algunos de los riesgos propios de la actividad financiera son los siguientes:

- **Riesgo de crédito:** Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de alguno de sus deudores.
- **Riesgo de liquidez:** Es la posible pérdida que puede tener una entidad por el incumplimiento de sus obligaciones cuando estas se tornan exigibles; la entidad no está capacitada para soportar una caída de los fondos, un incremento de activos ni sufragar sus propios gastos operativos.
- **Riesgo de mercado:** Posibles pérdidas asociadas con la disminución del valor de los portafolios de la entidad, la caída del valor de las carteras colectivas o fondos que administra, por el efecto de los cambios en el precio de los instrumentos financieros en los que se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
- **Riesgo operativo:** Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias o fallas en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.

Riesgo de lavado de activos: La posible pérdida de la entidad por ser utilizada, directamente o a través de sus operaciones, para el lavado de activos o la canalización de sus recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se presenta el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

- **Riesgo de suscripción:** Posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de políticas y prácticas inadecuadas en el diseño de productos o en la colocación de los mismos.
- **Riesgo de reservas técnicas:** Es la posibilidad de pérdida por subestimar el cálculo de las reservas técnicas y otras obligaciones contractuales, tales como la participación de utilidades, el pago de beneficios garantizados, entre otras.
- **Riesgo legal:** Posibilidad de pérdida por la imposición de sanciones o multas o por la existencia de una obligación de pagar por daños ocasionados por el incumplimiento de normas o regulaciones.
- **Riesgo estratégico:** La posible pérdida por la imposibilidad de la administración para adaptarse a los cambios de las condiciones de los negocios, el desarrollo de los productos y la implementación de planes de negocios exitosos.
- **Riesgo reputacional:** La posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa - cierta o falsa - respecto de la entidad y sus prácticas de negocios.

No obstante, la responsabilidad del Estado en tratándose de las funciones a su cargo en materia de inspección, vigilancia y control de las actividades desarrolladas por las sociedades comerciales, se circunscribe a realizar todas las gestiones y a adoptar todas las decisiones que el ordenamiento jurídico posibilita con el fin de encausar el quehacer de las compañías vigiladas al ordenamiento jurídico y a sus propios estatutos, sin que dicha responsabilidad se extienda, per se, a la garantía de las pérdidas sufridas o de las utilidades esperadas por los usuarios o clientes de las empresas en cuestión.

Por otro lado, en el expediente se extrae que, por esto hechos, está siendo adelantada investigación que cursa ante el Juzgado Cuarto Penal De Circuito De Barranquilla Con Funciones De Conocimiento, proceso que fue asumido en principio por la Fiscalía en etapa de inspección, quien asumió competencia para adelantarla, en razón a que las víctimas, dieron a conocer de las conductas a las autoridades penales por considerarla violatorias de la ley penal, y que la Superintendencia luego de la Inspección adelantada a Global Brokers también dio traslado, **siendo así entonces**

¹⁹ Ibidem.



que el daño ocasionado a los demandantes no tiene su causa en el actuar de las demandadas.

El Consejo de Estado ha dejado claro, en asuntos como el que ahora se debate que la responsabilidad patrimonial del Estado, **solamente puede quedar comprometida si se demuestra en el proceso (i) que el servicio a cargo de la Superintendencia no fue prestado o lo fue de manera tardía, negligente o equivocada y (ii) que esa falla en la prestación del servicio fue lo que condujo a la materialización del(los) daño(s) cuya reparación se deprecia, lo cual no acaeció en este caso.**

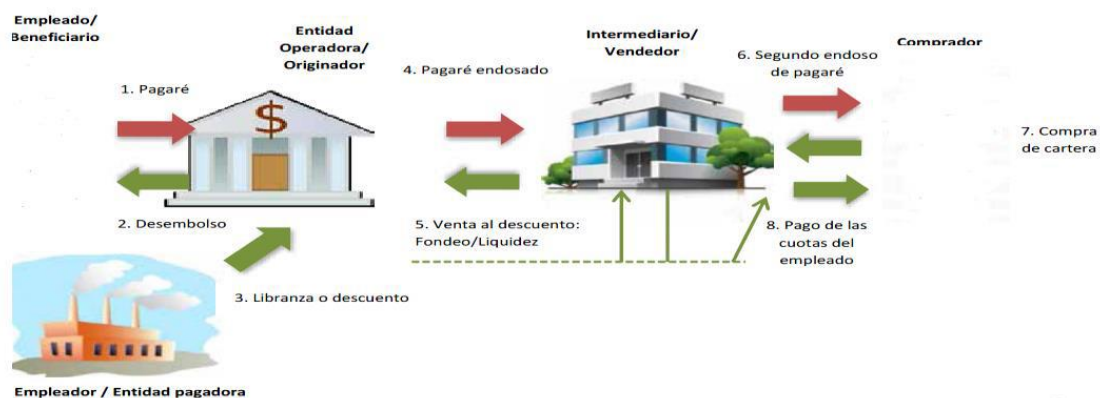
Deviene de lo expuesto la imposibilidad para esta Corporación de irrogarle el hecho dañino a alguna de las entidades demandas, habida consideración que **en este caso en particular no pudo establecerse que la parte demandada no obró adecuadamente, es decir, como una administración negligente, por lo que no existe omisión alguna que pueda considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende. Ello en razón a que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, no pudo probarse que la conducta de la administración fuera "anormalmente deficiente", como lo señala la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, luego entonces no existe certeza del nexo causal entre la omisión que se le pretende endilgar a la parte demandada y las lesiones sufridas por el demandante. (...)**

5.2 DEL CASO ESPECÍFICO DE LA SOCIEDAD OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S

5.2.1. OPERACIÓN O MODELO DE NEGOCIO DE OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S

Con el fin de entender el modelo de negocio que llevó a cabo **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S**, es necesario describir, de manera general, en qué consiste la venta de pagarés libranza:²⁰

Para obtener el pago anticipado de sus cuentas por cobrar y conseguir los recursos necesarios para su operación, las entidades operadoras de libranzas pueden vender la cartera registrada en sus estados financieros a través de figuras como el *factoring* o el descuento. Esta operación consiste en que una persona adquiere a título oneroso, derechos patrimoniales ciertos, de contenido crediticio. La transferencia de esos derechos se realiza normalmente por endoso si se trata de títulos valores, o mediante cesión en los demás casos, tal como se ilustra en la siguiente gráfica:



Esta operación se perfecciona mediante un contrato en el cual la entidad operadora de libranza recibe anticipadamente el dinero de su cartera, a cambio de asumir un porcentaje por concepto de descuento. En términos coloquiales, va a recibir en el presente una suma de dinero que, de otra manera, hubiera recibido dividida en cuotas a lo largo de un plazo determinado. Como contraprestación, la operadora transfiere los títulos al comprador, el cual puede ser una persona natural o jurídica.

²⁰ Parte de esta explicación fue tomada de la cartilla ABC de las libranzas en Colombia, disponible para consulta en <https://www.procuraduria.gov.co/porta/media/file/ABC-Libranzas-v2.pdf>



Una vez perfeccionada la operación de venta de cartera de libranzas, el comprador pasa a ser el beneficiario de los pagos mensuales que generen los pagarés libranza, los cuales pueden estar en su poder o ser administrados y custodiados por un tercero.

Esta compraventa de cartera puede realizarse con o sin responsabilidad. Cuando la compraventa se realiza “con responsabilidad”, la entidad operadora de libranza asume el riesgo de impago o insolvencia del deudor de cada una de las obligaciones contenidas en los pagarés libranza. Esta responsabilidad corresponde con la calidad de obligado cambiario en vía de regreso en virtud del endoso con responsabilidad que se efectúa sobre el título valor enajenado (artículos 625 y 657 del Código de Comercio), sin perjuicio de las obligaciones que se desprendan sobre el particular del contrato de compraventa.

Por el contrario, cuando se trata de una venta sin responsabilidad, la operadora de libranza no asume ninguna obligación por el posible incumplimiento de los deudores (que corresponde con un endoso sin responsabilidad, en los términos del artículo 657 del Código de Comercio). Por lo tanto, el comprador asume todos los riesgos de la operación.

Es pertinente señalar que cuando el crédito de libranza es pagado en su totalidad por el deudor, bien sea con el pago de las cuotas en el término estipulado o con el pago anticipado (prepago) de las cuotas pendientes durante la vigencia del crédito, el vendedor está en la obligación de cancelar el pagaré otorgado por el comprador como respaldo del pago de sus obligaciones y, en consecuencia, a expedir a su favor el paz y salvo respectivo. El deudor podrá solicitar la devolución del pagaré correspondiente.

A su vez, desde la expedición del Decreto 1348 de 2016, la entidad operadora de libranza o vendedor está obligado a trasladar en el término pactado o, a falta de ello, en un mes, las sumas correspondientes al pago total o parcial anticipado del crédito libranza que hayan sido pagadas por el deudor o por un tercero. La norma también le prohíbe reemplazar por otro el crédito libranza parcial o totalmente pagado anticipadamente, ni siquiera a cargo del mismo deudor, a menos que así se haya estipulado expresamente entre las partes. En caso de que el pagaré se encuentre en custodia de su comprador; el vendedor debe solicitarle su devolución para la cancelación respectiva.

OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, supuestamente, compraba cartera del sector solidario y recibía de éstas pagarés como soporte de los préstamos otorgados a sus asociados bajo la modalidad de libranza, a un precio que, en teoría, correspondería al valor nominal de los pagarés comprados, descontando una tasa o factor.

Una vez adquirida la supuesta cartera, **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S**, la ofrecía en venta sin responsabilidad de forma directa o a través de sus corredores o comerciales, a entidades financieras, personas jurídicas y personas naturales, a un precio que resultaría de aplicar un margen de rentabilidad al valor nominal de los pagarés libranzas vendidos.

La utilidad que **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S** supuestamente obtenía de sus operaciones, resultaría de la diferencia entre la tasa de descuento utilizada en la compra y la tasa de rentabilidad aplicada en la venta.

No obstante, si bien las operaciones realizadas por **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S**, estaban amparadas bajo el ropaje de una operación económica legal, las investigaciones administrativas demostraron que la sociedad recibió de múltiples personas recursos que no correspondieron a una venta real de créditos libranza, bien porque nunca les fueron asignados los créditos comprados o bien porque al venderse el mismo crédito libranza a más de un inversionista las ventas subsiguientes a la primera carecían de objeto.



En efecto, en los casos de las ventas de créditos libranza en que no hubo asignación de operaciones a los clientes, no hubo un bien o servicio transado que justificara los pagos que se pactaron ni los que se alcanzaron a hacer a los inversionistas. Es decir, no existió una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente, situación que en los términos del artículo 6° del Decreto 4334 de 2008 implica la configuración de hechos objetivos de captación de recursos del público.

En consecuencia, toda vez que **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.**, ofreció una rentabilidad que no correspondía a la realidad económica de la operación, no existió razonabilidad financiera que explicara el modelo de negocio, puesto que en las operaciones de compraventa de cartera originada en créditos otorgados bajo la modalidad de pagarés-libranza se evidenció: (i.) recaudo (valor acumulado de los flujos girados por las pagadurías) inferior al que realmente les fue pagado a los inversionistas, (ii.) pagos al inversionista sin haber recibido recaudo proveniente de la libranza y (iii.) venta del mismo pagaré a varios inversionistas. Se comprobó que en ejercicio de su actividad la sociedad captó de manera no autorizada dineros del público y, por consiguiente, se configuraron los presupuestos enunciados en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008.

Todo lo anterior significa que cuando el inversionista realizaba la operación de compraventa de créditos otorgados bajo la modalidad de libranza con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., era plenamente consciente de que compraba un activo de riesgo, toda vez que entendía que estaba realizando la compra de una deuda a cargo de una persona natural que no conocía, en especial su solvencia moral y patrimonial. Es decir, se trataba realmente de operaciones de crédito de alto riesgo, asumido libre y deliberadamente por el comprador de cartera, que ahora, con esta demanda, pretende desplazar hacia el Estado.

Así las cosas, mal haría la jurisdicción de lo contencioso administrativo en condenar a la Superintendencia de Sociedades en el caso que nos ocupa, ya que terminaría respondiendo el Estado por negocios realizados entre particulares que prometían jugosos rendimientos y un alto nivel de riesgo, máxime cuando, como ya se explicó anteriormente, la actividad propia de comercialización de libranzas no se encuentra dentro del marco de supervisión ejercido por la Superintendencia de Sociedades.

5.2.2 ACTUACIONES REALIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES RESPECTO DE LA SOCIEDAD OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

La Superintendencia de Sociedades ejerció oportunamente todas sus funciones sobre la sociedad **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.**, por lo cual es totalmente falso el fundamento de la demanda impetrada en contra de la entidad que represento, ya que la misma cumplió con sus funciones de inspección, vigilancia y control.

A continuación, me permito hacer una relación de todas y cada una de las actuaciones que ha realizado la Superintendencia de Sociedades respecto de la sociedad **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.**, en toma de posesión como medida de intervención.

En el año 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia dio traslado a esta Entidad de los radicados Nos. 2013-01-207741 y 2013-01-209902 mediante las cuales presentan dos quejas sobre la sociedad **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.**, frente a lo cual esta Superintendencia procedió a realizar las gestiones tendientes a verificar la veracidad de tales quejas, mediante credencial No. 420-000232 del dos (02) de Julio de 2013 en la que se dispuso realizar una primera diligencia de toma de información a la Sociedad. No obstante, al dirigirse los funcionarios comisionados a las instalaciones de dicha sociedad, encontraron que la Superintendencia Financiera de Colombia adelantaba también una toma de información derivada de las mismas denuncias, razón por la cual se decidió solicitar el informe de la visita adelantada por la Superintendencia Financiera.



Mediante radicados 2014-01-096526 y 2014-01-113129 del 27 de febrero y 10 de marzo de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia remitió el informe de la visita de inspección realizada por esa Entidad a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., dentro del cual, entre otros aspectos se estableció que las entidades originadoras que figuraban como proveedoras de cartera de la Sociedad, dentro de las cuales se encontraban las sociedades ESTRATEGIA PATRIMONIAL SAS y LIBRANZAS GROUP SAS, realizaron una cesión de derechos a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., mediante un documento denominado “Cesión de Contratos de Compraventa” cuya finalidad era que la sociedad, adquiriera directamente de las cooperativas los “pagarés - libranza” y los flujos que estos generarán.

Estudiado el informe presentado por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades profiere el Auto Inhibitorio No. 400-005237 de 9 de abril de 2014, por intermedio de la Delegada para Procedimientos de Insolvencia de esta la entidad, donde se concluyó que:

1. La sociedad realizó operaciones de compra y venta de cartera de créditos instrumentada en títulos valores de contenido crediticio comercialmente llamados “pagarés - libranzas”, para lo cual suscribió contratos de intermediación con ESTRATEGIA PATRIMONIAL S.A.S. y LIBRANZAS GROUP S.A.S., como puente entre las cooperativas multiactivas y la empresa.
2. Que, a la fecha del informe, los investigadores manifestaron que los flujos de efectivo eran recibidos por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. directamente de las cooperativas multiactivas, y que de acuerdo con lo manifestado por el representante legal de la compañía los pagos a los inversionistas se efectuaron de acuerdo a lo establecido en el “pagaré-Libranza”, según la relación y con los dineros que remitían las cooperativas.
3. Que en la operación las cooperativas son las que se obligan a remitir a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. los recursos para su pago a los inversionistas.

Por lo anterior, la entidad decidió INHIBIRSE de decretar la intervención de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con NIT 900.496.573, en los términos del Decreto 4334 de 2008. No obstante, lo anterior, advirtió que de aparecer nuevas pruebas o elementos que permitan a este Despacho inferir la realización de actividades que regula el decreto 4334 de 2008, se procedería a dar apertura al proceso de intervención y demás medidas pertinentes.

Mediante escritos similares al radicado número 2016-01-438769 del 31 de agosto de 2016, varios usuarios²¹ requirieron a la Superintendencia de Sociedades en los siguientes términos:

“ASUNTO: INFORMACIÓN Y DERECHO DE PETICIÓN PARA QUE SE PRODUZCAN ACCIONES PERTINENTES EN LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES DE LA SOCIEDAD – OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., identificada con el NIT:900.496.573

*Después de presentarse incumplimientos en los pagos que venía realizando la firma **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.**, identificada con el NIT:900.496.573, en los meses de julio y agosto de 2016 sobre los rendimientos y capital de los títulos de pagaré libranza adquiridos a través de esta, y una vez celebrada reunión con su representante legal Eduardo Pineda Camacho el día 29 de agosto del 2016 con el fin de aclarar la razón de estos incumplimientos; se nos manifestó que las Cooperativas CORPOSER, COOCREDIANGULO, INVERCOR, Inversores Alejandro S.A.S, entre otras ubicadas en la costa*

²¹ Cuarenta y seis (46) quejas radicadas entre agosto de 2016 y febrero de 2017



Atlántica Colombina, se encuentran liquidadas o en proceso de liquidación, y que por tal motivo, les es imposible seguir cumpliendo con el pago de los flujos de dinero futuros pactados contractualmente con NOSOTROS SUS CLIENTES y que ascienden a montos que superan las decenas de miles de millones de pesos y se tienen en cuenta la totalidad de afectados, como el mismo señor Pineda lo afirmó en la citada reunión.

*Por lo anterior, nos fueron presentados los siguientes escenarios posibles en aras de la recuperación de nuestro dinero que quedan a potestad decisoria de cada uno de los clientes de manera independiente, teniendo como principal inconveniente el desconocimiento del estado real de la cartera soportada en títulos de pagarés libranza y las anomalías que pudieron presentarse en el manejo de los mismos y que constituyen la única garantía real de los contratos que firmamos con **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.**:*

- *Presentar demandas en contra de las Cooperativas y sus representantes legales llegando en última instancia hasta el deudor de ser necesario.*
- *Cesión de los títulos endosados a nuestro favor a otra Cooperativa.*
- *Firmar un acuerdo directamente con las Cooperativas en el que estas se comprometen a pagar el 80% del saldo de capital del que somos acreedores, en flujos mensuales y por un plazo de 60 meses, sin ningún tipo de garantía real más que el de iniciar demandas de presentarse algún incumplimiento.*
- *Liquidar la firma.*

Dado que en ninguno de los escenarios anteriores, existe una posibilidad real para la recuperación de nuestro capital y, lo que nos parece más grave aún, en ningún momento comprometen a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., económicamente como responsable o garante de los montos que se nos adeudan, exceptuando el caso de una liquidación forzosa, bajo el pretexto de considerarse exclusivamente un intermediario comercial, desconociendo su papel y responsabilidad PRIMERO, en la celebración de negocios con Cooperativas y firmas con las cuales se estructuró un negocio basado principalmente en el principio de confianza reconociendo, como se nos dijo en la reunión, que las limitaciones legales le impidan llevar un control exhaustivo de la trazabilidad del buen funcionamiento del negocio pero, aun así, ofreciendo a sus clientes seguridad total sobre el control y seguimiento que se hacían a las Cooperativas y a los títulos generados por estas, SEGUNDO, en la comercialización de títulos sobre los cuales reconoce, existe la posibilidad que se encuentren siniestros en un gran porcentaje y por ende, su valor comercial es nulo, sin mencionar la posibilidad que muchos de estos tengan un origen basado en la ilegalidad, TERCERO; aduciendo exclusivamente su responsabilidad cambiaría como endosante sin importarle que quien realizó una labor comercial de venta en el mercado con títulos previamente adquiridos, o en posición propia, fue la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS y no ninguna de las Cooperativas mencionadas, y POR ULTIMO desconociendo además que como empresarios existe una responsabilidad social no solo frente a sus accionistas y empleados, sino principalmente frente a sus clientes que son la razón de ser de su negocio, que va más allá de cualquier argucia legal y que se fundamenta en principios y valores morales y éticos en los que la honorabilidad y la solidaridad deberían primar ante cualquier eventualidad negativa que se presente; solicitamos a ustedes que, en defensa de nuestros derechos, intereses y patrimonio la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES se pronuncie y actúe, a la mayor brevedad, dando paso a las acciones legales pertinentes y consecuentes para intervenir a la empresa OPTIMAL LIBRANZAS y que esta entre a responder debidamente con las obligaciones propias que nacen de la ejecución y cumplimiento de todos los contratos suscritos con sus clientes, conjuntamente con las cooperativas causantes de este descalabro.”



La Superintendencia de Sociedades, mediante Oficio 306-188741 del 29 de septiembre de 2016 da respuesta a la solicitud, informando al peticionario que se requirió al Representante Legal de la sociedad **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S**, para que se pronunciara respecto a lo planteado en su solicitud.

Así como en el caso anterior, se corrió traslado de las demás quejas y solicitudes de información presentadas a la precitada sociedad, para que ella como parte vinculada en la relación contractual, diera una solución de fondo a dichas solicitudes, para que una vez analizadas las respuestas aportadas por la sociedad se adoptará la medida administrativa que correspondiera dentro de las facultades legales.

Por lo anterior, y con fundamento en la competencia asignada en el numeral 1° del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades actuando de manera oficiosa, adelantó una toma de información a la sociedad *OPTIMAL LIBRANZAS*, la cual se llevó a cabo los días 4 y 10 de agosto de 2016, tal como consta en el informe de la diligencia de toma de información radicada con los números 2016-01-415250 y 2016-01-428724 del 12 y del 24 de agosto de 2016 del Acta de continuación y cierre de diligencia de toma de información.

De la toma de información ordenada en agosto de 2016²² adelantada sobre la operación de la Sociedad, se estableció por los funcionarios comisionados, que *OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.* adquiría cartera instrumentalizada en pagarés – libranza. Esta cartera era adquirida generalmente de entidades originadoras con quienes *OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.*, celebraba contratos de compraventa de cartera con descuento a título de adquirente; posteriormente se realizaba el endoso de los títulos valores a su favor y con responsabilidad cambiaria.

Entre los principales proveedores de cartera de la Sociedad se encontraban las siguientes personas jurídicas: Coocrediangulo., en Liquidación; Coocredimed; Cooinvercor; Coomundocredito; Kapital Social; Coopinovatech; Coopmulpens; Provida; Covenal; Invercor DyM S.A.S., En Liquidación; Inversiones Alejandro Jiménez S.A.S., En Liquidación; Valor Confianza y la Corporación Aliada Para el Desarrollo Integral de los Trabajadores del Estado (CORPOSER en Liquidación), de quien adquiría cartera originada por la cooperativas COOMUNCOL, SIGESCOOP, y SERVICOOOP DE LA COSTA.

5.2.2.1. Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017: Por la cual se adopta una medida de intervención administrativa respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Durante los años 2016 y 2017 esta Superintendencia, recibió una serie de quejas por parte de clientes compradores de cartera a la sociedad *OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.*, quienes denunciaron incumplimientos con relación al pago de los flujos mensuales pactados mediante “Contratos de Compraventa de Cartera” suscritos con la Sociedad incluso algunos suscritos durante los meses de mayo, junio y julio de 2016, conforme se observa en la Resolución²³ del 22 de diciembre de 2017.

Ante la imposibilidad por parte de *OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.* de cumplir con los pagos de los flujos acordados con sus clientes, a través de su representante legal Néstor Vanegas Moncada, la Sociedad ofreció a sus clientes la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago mediante la suscripción de un contrato denominado “Contrato de Transacción” el cual no fue suscrito por los quejosos.

Según lo informado por la Sociedad ese contrato tuvo por objeto que las partes dirimieran las “diferencias relacionadas con las obligaciones de LOS ORIGINADORES, mediante la asunción de ciertas obligaciones recíprocas en

²² Credencial 306-000271 del 3 de agosto de 2016

²³ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadro pág.4



beneficio de las partes”. De esta manera la Sociedad dentro de dicho contrato, pretendía actuar en su condición de recaudador e “intermediario y comercializador de la cartera” entre sus clientes a quienes se denomina acreedores y las sociedades originadoras, asumiendo como única obligación la de trasladar los pagos realizados por las sociedades originadoras a sus clientes inversionistas.

Por su parte, los originadores ofrecieron obligarse solidaria e incondicionalmente a pagar a los acreedores a través de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., la suma de VEINTISEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (\$26.341.793.630), en sesenta (60) cuotas mensuales, dándose una desnaturalización de los títulos.

Se destaca que como concesión recíproca en la transacción se pretendía que los clientes- acreedores debían renunciar de manera irrevocable a ejercer cualquier tipo de acción judicial en contra de las sociedades originadoras y a generar un paz y salvo por todo concepto una vez cumplido el pago estipulado de la transacción, lo cual correspondería al 80% del valor total invertido por los clientes, sin intereses y a un plazo de 60 meses, situación que supondría una pérdida del 20% más el rendimiento futuro prometido por la Sociedad.

La Superintendencia de Sociedades dio traslado a la sociedad de todas las quejas interpuestas por los clientes; y en respuesta de las mismas, se indicó:

- a) Que la sociedad vende y endosa cartera sin responsabilidad cambiaria.
- b) Que el modelo de negocio ejecutado por la Sociedad y ampliamente conocido por los clientes, implica que en caso de incumplimientos de los deudores o los originadores, dichas empresas o entidades deben salir a responder por los pagos y los flujos de la cartera, teniendo en cuenta la responsabilidad cambiaria que les asiste.
- c) Que la falta de pago de los flujos derivados de la cartera vendida por la Sociedad, “tiene como causa el incumplimiento de los originadores en el pago de los flujos de la cartera, frente a lo cual Optimal se encuentra obligado a colaborar y coadyuvar en las gestiones de cobro”.
- d) Que la obligación de Optimal, “no consiste en pagar incondicionalmente o garantizar el pago de los flujos de la cartera vendida, pues tal circunstancia equivaldría a asumir la posición de garante”.
- e) Frente a la existencia, validez e idoneidad de los títulos de pagarés-libranza, el representante de la Sociedad afirmó que además los títulos que comercializaron no cuentan con ninguna tacha, mancha o cualquier otra circunstancia que pueda atacar su validez.
- f) Que por la naturaleza de los títulos valores estos circulan válidamente con independencia de la relación comercial que les dio origen.
- g) Que independientemente de que al deudor le hayan desembolsado o no, le estén descontando mensualmente o no, haya pre-pagado su cartera o no, el cliente de la Sociedad tiene una acción de cobro en contra de los obligados cambiarios, es decir los originadores.
- h) Que los títulos comercializados por Optimal les permiten a sus clientes exigir las obligaciones en ellos incorporados a los obligados cambiarios, además de cumplir con todos los requisitos establecidos en el marco de la circulación de los títulos valores.

A partir de las quejas y solicitudes de intervención presentadas por los clientes, esta Superintendencia ordenó realizar una nueva diligencia de toma de información²⁴ a la Sociedad, con el objeto de evaluar si en el desarrollo de su objeto social, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se ajustaba a la ley, además de verificar su situación administrativa, jurídica, económica y contable.

²⁴ Credencial No. 306-000271 de 3 de agosto de 2016



Sobre la operación de la Sociedad, se estableció por los funcionarios comisionados, que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. adquiriría cartera instrumentalizada en pagarés – libranza. Esta cartera era adquirida generalmente de entidades originadoras con quienes OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., celebraba contratos de compraventa de cartera con descuento a título de adquirente; posteriormente se realizaba el endoso de los títulos valores a su favor y con responsabilidad cambiaria.

Entre los principales proveedores de cartera de la Sociedad se encontraban las siguientes personas jurídicas: Coocredianguo en Liquidación, Coocredimed, Cooinvercor, Coomundocredito, Kapital Social, Coopinovatech, Coopmulpens, Provida; Covenal, Invercor DyM S.A.S. - En Liquidación, Inversiones Alejandro Jiménez S.A.S.- En Liquidación, Valor Confianza y la Corporación Aliada Para el Desarrollo Integral de los Trabajadores del Estado (CORPOSER en Liquidación), de quien adquiriría cartera originada por las cooperativas COOMUNCOL, SIGESCOOP, y SERVICOOOP DE LA COSTA.

Una vez efectuada la operación de compraventa, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, por medio de sus agentes comerciales, la vendía con descuento a sus clientes (personas naturales y jurídicas) y sin responsabilidad cambiaria, pagando flujos mensuales derivados de los descuentos realizados por las pagadurías por lo créditos concedidos a los beneficiarios de su nómina, sumas que eran trasladadas a la entidad originadora, luego de esta a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y posteriormente de esa sociedad a los compradores.

5.2.2.2 Endoso sin responsabilidad de los pagarés-libranza.

Como se mencionó anteriormente, dentro de la operación ejecutada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., el endoso realizado a su clientes de los pagarés-libranza derivados de la cartera adquirida de entidades originadoras, se realizó sin responsabilidad cambiaria lo que impide que sus clientes a quienes les vendió cartera materializada en pagarés–libranza ejercieren en su contra la acción cambiaria de regreso para reclamarle el pago del valor estipulado en los contratos de compraventa de cartera suscritos con sus clientes.

5.2.2.3 Contratos marco de compra de cartera.

Se estableció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., suscribió contratos marco de compraventa de cartera con diferentes entidades operadoras de libranza a partir de los cuales se dio la transferencia por parte de los originadores a la Sociedad mediante endoso con responsabilidad y en propiedad de los pagarés-libranza que instrumentalizaron dicha cartera, además de su entrega material.

5.2.2.4 Contratos de compraventa de cartera celebrados entre la sociedad y sus clientes

Se encontró que en efecto OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. suscribió con sus clientes contratos de compraventa de cartera, utilizando un único clausulado el cual cambiaba de encabezado dependiendo si el cliente era una persona natural o una persona jurídica. Dentro de las consideraciones de dicho contrato, se establecía que las entidades originadoras tenían la obligación de recaudar los derechos económicos o flujos y de depositarlos a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., quien, a su vez, adquiriría la obligación de transferirlos a los compradores o inversionistas.

A su vez se afirmaba, que debido a los contratos celebrados entre los originadores y OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., la Sociedad era propietaria de los títulos y beneficiaria de las garantías otorgadas para su pago, las cuales a la fecha de suscripción del contrato con sus clientes no había cedido total o parcialmente.



En su cláusula 6ª, se definió el documento como un contrato de “compraventa de cartera al descuento regulado por la normatividad civil y comercial” [...]; que “en ningún caso constituye actividad de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en los términos del Decreto 1981 de 1988 y el Decreto 4334 de 2008”; cuyo objeto, consistió en la transferencia de dominio sobre la cartera (pagares – libranza), junto con los derechos y privilegios inherentes, conforme al estado en el que se encuentre tales créditos en la fecha de endoso [...] la transferencia se perfecciona mediante el endoso en propiedad sin responsabilidad y la entrega real o física de los pagarés libranza.

5.2.2.5 Situación de Grupo Empresarial

Conforme al último hallazgo descrito, mediante memorando No. 306-007122, radicado con el número 2016-01-437611 de 31 de agosto de 2016, la Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial de la Superintendencia de Sociedades, solicitó al Grupo de Conglomerados establecer si entre las sociedades OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., OPTIMAL FACTORING SAS y OPTIMAL CABS SAS, existía situación de control y/o grupo empresarial.

Posteriormente, mediante memorando No. 306-009220 del 12 de noviembre de 2016, la citada funcionaria requirió adicionalmente que se investigara a la sociedad MAFINCO SAS, por la posible existencia de vinculación con las anteriores sociedades.

Teniendo en cuenta lo anterior, a través de la Resolución No. 302-001377 del 4 de abril de 2017, se ordenó la apertura de una investigación administrativa a los señores Néstor Naranjo Paredes y Néstor Vanegas Moncada por cuanto estos no solicitaron oportunamente el registro de la situación de control y grupo empresarial que ejercen sobre las sociedades OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., OPTIMAL FACTORING SAS, y OPTIMAL CABS SAS.

Como resultado de la investigación llevada a cabo, la Superintendencia²⁵ decidió declarar la vinculación de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. con el grupo empresarial conformado por las empresas OPTIMAL FACTORING SAS, y OPTIMAL CABS SAS.

En atención a las quejas interpuestas por los clientes de la Sociedad, la Superintendencia de Sociedades requirió²⁶ a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para que hiciera entrega de la relación de la cartera total vendida por la Sociedad con corte a 31 de octubre de 2016. Respuesta que fue recibida el 20 de enero de 2017 mediante radicado 2017-01-015787 dando cumplimiento a lo solicitado.

Con el fin de verificar la existencia y características de la cartera comercializada, así como la transferencia de los flujos descontados a favor de sus compradores con ocasión de los pagarés libranza vendidos, la entidad mediante Oficios Nos. 301-129391 de 10 de julio de 2017, 301-133403 y 301-133395 de 11 de julio de 2017, efectuó requerimientos a las entidades pagadoras Fiduciaria la Previsora S.A., FOPEP y COLPENSIONES y les solicitó información detallada respecto de todas las libranzas que hubieran sido inscritas para su descuento a los deudores cuyos pagarés fueron comercializados por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S..

Las citadas pagadurías mediante radicados 2017-01-379875, 2017-01-427219 y 2017-01-535619 del 21 de julio, 11 de agosto y de octubre de 2017 dieron respuesta a la información solicitada, la cual fue confrontada con la reportada en la base de datos remitida por la sociedad, donde se encontró una serie de inconsistencias que ameritaban ser esclarecidas por parte de la Sociedad, pues las mismas indicaban que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se encontraría incurso en hechos objetivos de

²⁵ Resolución No. 302-004502 de 01 de diciembre de 2017

²⁶ Oficio No. 306-253001 del 28 de diciembre de 2016

captación o recaudo no autorizado a la luz de lo establecido en el Artículo 6° del Decreto 4334 de 2008.

Por lo anterior, mediante Oficio 300-240513 de 03 de noviembre de 2017, esta Superintendencia solicitó explicaciones a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. sobre las irregularidades allí descritas, respecto de las operaciones de comercialización de cartera de la sociedad, con el fin de que tuviera la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y desvirtuar las inconsistencias evidenciadas de la información proveniente de las pagadurías, presentando además las pruebas que pretendiera hacer valer.

La sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. rindió explicaciones dentro del término otorgado mediante escrito presentado por el apoderado de la sociedad²⁷, donde evadió claramente el cuestionamiento que se le hizo por parte de la entidad, colocándose en situación de víctima, y considerando entre otros que se le había vulnerado el derecho al debido proceso por las investigaciones y recaudo de información que la Superintendencia había realizado para esclarecer las inconsistencias presentadas en el cruce de información realizada²⁸, descargos que se detallan en los 68 puntos descritos en la Resolución del 22 de diciembre de 2017.

En diciembre de 2017²⁹, el apoderado especial de la Sociedad allega una solicitud presentada ante la Fiscalía General de la Nación dentro de los procesos iniciados a los originadores de la cartera, la cual adjuntó, e indicó distintos apartes de los actos administrativos que considera relevantes para demostrar la responsabilidad de las entidades operadores de libranzas que originaron la cartera comercializada por la Sociedad en las actividades de captación ilegal.

5.2.2.6 Verificación de la existencia de hechos objetivos de captación.

De la información obtenida por la Superintendencia de Sociedades en la diligencia de toma de información realizada a la Sociedad, se procedió a realizar un análisis de la base de datos aportada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.³⁰, contentiva de la totalidad de la cartera comercializada por la sociedad con corte a 31 de octubre de 2016.

Con el fin de determinar la existencia de dicha cartera y la trazabilidad de los flujos descontados con ocasión de su comercialización por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., desde su inscripción frente a la entidad pagadora, hasta su recaudo y posterior transferencia a los clientes compradores de dicha cartera, mediante Oficios Nos. 301-129391 de 10 de julio de 2017, 301-133403 y 301-133395 de 11 de julio de 2017, se realizó requerimientos a las entidades pagadoras en donde solicitó información sobre los créditos de libranza otorgados a los deudores reportados por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en su base de datos e inscritos ante tales pagadurías para su descuento, con el objetivo de cotejar dicha información con la remitida por la Sociedad.

Para el análisis de la información se utilizaron criterios tales como el nombre e identificación de los deudores, números de libranza, monto total del crédito, valor de las cuotas mensuales, fecha de inicio y de terminación de los descuentos, y cuotas trasladadas por la sociedad a sus clientes hasta el 30 de junio de 2016, verificación, en la cual se comparó la información remitida por las pagadurías con la reportada por la Sociedad encontrándose las siguientes irregularidades:

Hallazgos presentados frente a la pagaduría Fiduciaria la Previsora S.A.

²⁷ Radicado 2017-01-612191 de fecha 30 de noviembre de 2017

²⁸ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadros pág.13, 14 y 15

²⁹ Radicación del 18 de diciembre de 2017-01-639291

³⁰ Radicado del 20 de enero de 2017-01-015787



En el requerimiento realizado por esta Superintendencia mediante Oficio No. 301-133403, la pagaduría Fiduciaria la Previsora S.A, mediante comunicación con radicado No. 2017-01-379875 del 21 de julio de 2017, remitió respuesta a esta Superintendencia en la cual anexó una base de datos contentiva de la información solicitada, las irregularidades encontradas fueron las siguientes:

Pagarés de créditos de libranza inexistentes, sin recaudo y con pago de flujo a los compradores:

A pesar de que algunos de los beneficiarios de los créditos reportados por la sociedad si se encontraban inscritos dentro de la nómina de la pagaduría FIDUPREVISORA SA, al confrontar la información remitida por la pagaduría con la de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., se pudo establecer que contrario a lo indicado en la suministrada por la Sociedad, en cuarenta y un (41) casos la pagaduría no realizó descuento alguno por los créditos de libranza relacionados, y que sin embargo hacen parte de la cartera que fue vendida a terceros por la Sociedad³¹.

También se pudo establecer que los descuentos realizados por la pagaduría a las personas enlistadas, con ocasión de otros créditos de libranza que sí fueron tomados por los mismos e inscritos para su descuento, correspondían a montos, fechas y originadoras diferentes a los reportados por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. a esta Superintendencia.

Así mismo, se evidenció que por los (49) pagarés relacionados que incorporaban los créditos de libranza, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. comercializó y recibió recursos de sus clientes por una cartera cuyo valor ascendía a SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$729.465.684) sin haber verificado la existencia de tales créditos ni su debida inscripción ante la pagaduría correspondiente. Por tanto, los contratos de compraventa respectivos carecieron de activo subyacente que justificara financieramente la transferencia de dichos recursos a favor de la Sociedad.

De igual manera se evidenció que el número de cuotas pagadas por la Sociedad desde el momento de venta al cliente hasta el 30 de junio de 2016, fecha de corte establecida con base en lo reportado a esta Superintendencia en las quejas recibidas por incumplimiento en el pago de los flujos mensuales a los clientes. Al respecto, se pudo determinar que la Sociedad trasladó a sus clientes flujos mensuales por el valor aproximado de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$134.329.990), pagos que carecieron de razonabilidad financiera al no haber existido créditos subyacentes que fueran debidamente inscritos ante la entidad pagadora, de los cuales se derivara el descuento respectivo de la pagaduría. Ello, teniendo en cuenta que la misma no reportó a esta Entidad ningún descuento realizado con ocasión de la cartera reportada por la Sociedad.

Pagarés de créditos de libranza inexistentes, sin recaudo y con pago de flujos a los compradores, correspondientes a personas reportadas por la pagaduría como no pensionadas ni empleadas ni beneficiarias:

En este punto se pudo observar que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. comercializó cartera incorporada en seis (6) pagares-libranza³² cuyo valor ascendía a la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$82.683.528), recaudando recursos de los compradores de la misma a partir de la celebración de contratos de compraventa, los cuales por lo tanto carecieron de activo subyacente que justificara financieramente la transferencia de dichos recursos a favor de la Sociedad, y luego pagó flujos

³¹ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadros Pág.20 y21.

³² Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadro Pág.22



mensuales a los compradores por un valor aproximado de VEINTISÉIS MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$26.761.587). Encontrándose también que tales operaciones carecieron de razonabilidad financiera, teniendo en cuenta que la pagaduría informó a esta Superintendencia que tales deudores ni siquiera figuraban como pensionados o beneficiarios en su base de datos, por lo que no existió ningún crédito subyacente que justificara ni el recaudo del dinero de los compradores por la venta ni el pago de flujos por la Sociedad ya que nunca se descontaron dineros por las cuotas de los deudores respectivos.

Pagarés de créditos de libranza inexistentes, en los que coincide el originador reportado y con pago de flujos a los compradores.

Se encontraron seis (6) casos de pagarés – libranza cuyas fechas, valores de crédito y cuota mensual eran diferentes a los reportados por la pagaduría³³, aunque se logró establecer que los deudores si eran parte de la nómina de la FIDUPREVISORA y que se trataba de cartera aparentemente originada por la misma entidad operadora de libranza como lo reportaron ambas fuentes, no hubo coincidencias en las características de dicha cartera que permitiera concluir que se trataba de los mismos créditos cuyos descuentos fueran trasladados a los compradores de Optimal.

En el primer caso, la pagaduría reportó que en efecto dicho deudor tenía un crédito de libranza del cual se realizaban descuentos que se trasladaban al mismo originador reportado por la Sociedad. Sin embargo, el crédito reportado por la pagaduría fue incorporado en un pagaré distinto al reportado por la sociedad, fue inscrito con cinco meses de anticipación para su descuento y sus valores totales y de las cuotas son inferiores a los reportados por Optimal, motivo por el cual se concluyó que se trataba de operaciones diferentes y que la cartera reportada por Optimal como comercializada era inexistente al no haberse inscrito ante la pagaduría para su descuento.

De los casos anteriores se pudo establecer que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. comercializó una cartera cuyo valor ascendía a la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO SETENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$84.173.964) por la cual recaudó dinero producto de la venta a sus clientes inversionistas, y a su vez, desembolsó a los mismos hasta el 30 de junio de 2016, flujos mensuales por un valor de ONCE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$11.367.694), todas ellas operaciones sin explicación financiera razonable al no haber existido créditos subyacentes que las respaldaran.

También se encontraron catorce (14) casos de cartera reportadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en donde además del nombre e identificación del beneficiario, únicamente coincidió el dato de la originadora COOMUNCOL como cooperativa originadora. A pesar de tratarse de datos distintos de fechas y valores, esta Superintendencia los ordenó teniendo en cuenta la cercanía de las fechas en las que fueron otorgados tales créditos con el fin de encontrar coincidencias a favor de la sociedad comercializadora que permitieran deducir que se trataba de los mismos créditos comercializados. Sin embargo, lo que se encontró fue que la diferencia entre los valores de las operaciones era tal, que el valor de la supuesta cartera vendida por la sociedad en tales casos equivalía al 254% del valor de la cartera verdaderamente inscrita ante la pagaduría para su descuento a favor de ese originador, y al comparar el traslado de flujos derivados de los descuentos realizados por la pagaduría, estos fueron inferiores a los realizados por la sociedad a sus clientes en un 79%³⁴.

También se encontró que los únicos datos que coincidieron entre la información allegada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y la suministrada por la pagaduría fueron

³³ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadro Pág.23

³⁴ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadro Pág.24



los de deudor y originador, e incluso realizando una aproximación en las fechas de otorgamiento de la cartera reportada, se concluyó necesariamente que las operaciones reportadas por la Sociedad NO podían entenderse como equivalentes a los créditos reportados por la pagaduría dadas las amplias diferencias en los valores (total y mensual en cada caso) reportados por ambas fuentes.

De la comparación entre los valores indicados por la Sociedad y los reportados por la pagaduría se evidenció que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., vendió cartera inexistente a sus clientes cuyo valor ascendía a TRECIENTOS QUINCE MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$315.244.416) y respecto de la información remitida por la pagaduría la FIDUPREVISORA, el valor total real de los créditos otorgados los deudores relacionados por parte de la cooperativa COOMUNCOL, ascendía solamente a la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$123.988.960).

De lo anterior se concluyó que incluso en el evento en que se desconocieran las diferencias entre la cartera comercializada por la sociedad y la inscrita por la pagaduría, la Sociedad Optimal Libranzas habría recaudado recursos del público sin explicación financiera razonable por la venta de supuestos activos por un valor de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$191.255.456), por cuanto los contratos de compraventa respectivos carecieron de créditos subyacentes cuya transferencia de derechos crediticios justificara financieramente el recaudo de dineros de terceros a favor de la Sociedad.

Igualmente, pudo verificarse que en tales operaciones la sociedad pagó a sus clientes hasta el 30 de junio de 2016, flujos mensuales por valor de VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$26.670.855), mientras que el recaudo efectivamente realizado por la pagaduría de dichos deudores y a favor de COOMUNCOL se dio por un valor aproximado de CINCO MILLONES, SEISCIENTOS NUEVE MIL, DOSCIENTOS OCHO PESOS (\$5.609.208), dándose una diferencia en el valor de los descuentos mensuales de VEINTIÚN MILLONES, SESENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$21.061.647), es decir que no existe razonabilidad financiera de tales transferencias de recursos para tales valores, por cuanto ese dinero nunca fue descontado por la pagaduría de los ingresos de los deudores en las operaciones reportadas por la Sociedad de venta de cartera a sus compradores.

Hallazgos presentados frente a la pagaduría Fondo de Pensiones Públicas de Nivel nacional de Colombia (FOPEP)

Mediante radicación No. 2017-01-427219 del 11 de agosto de 2017, la pagaduría FOPEP suministró información a la entidad con relación a los créditos de libranza otorgados a los deudores reportados por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en su base de datos e inscritos ante tal pagaduría para su descuento. A partir de su comparación con la información suministrada por la Sociedad, se pudieron establecer las siguientes irregularidades:

1. Pagarés de créditos de libranza inexistentes, sin recaudo y con pago de flujo a los compradores:

A pesar de que los deudores de los créditos reportados por la sociedad sí se encontraban dentro de su nómina, en sesenta y nueve (69)³⁵ operaciones de cartera comercializada que fueron reportadas por la Sociedad FOPEP no realizó descuento alguno por los créditos de libranza, pues los mismos no fueron inscritos ante dicha pagaduría para su descuento.

³⁵ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadros Pág.26, 27 y 28.



De conformidad con lo evidenciado, con relación a los 69 pagarés que incorporaban tales créditos de libranza, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. comercializó y recibió recursos de sus clientes por una supuesta cartera cuyo valor ascendía a MIL OCHENTA Y UN MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$1.081.796.200), sin haber verificado la existencia de tales créditos ni su debida inscripción ante la pagaduría correspondiente. Por lo anterior, los contratos de compraventa respectivos carecieron de activo subyacente que justificara financieramente la transferencia de dichos recursos a favor de la Sociedad.

También se pudo observar que del número y del valor de las cuotas mensuales trasladadas por la Sociedad a los compradores de cartera en tales operaciones, desde el momento de venta al cliente hasta el 30 de junio de 2016 a pesar de no haberse realizado descuento alguno por la pagaduría, se pudo determinar que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en tales operaciones trasladó a sus clientes hasta el 30 de junio de 2016 flujos mensuales por un valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$182.718.997), pagos que carecieron de razonabilidad financiera al no haber existido créditos subyacentes que fueran debidamente inscritos ante la entidad pagadora y de los cuales se derivara el descuento respectivo de la pagaduría. Ello teniendo en cuenta que la misma pagaduría reportó a esta Entidad no haber realizado ningún descuento con ocasión de las operaciones reportadas por la Sociedad.

De acuerdo con el reporte entregado por la pagaduría FOPEP, estos créditos de libranza materializados en sus respectivos pagares, no fueron objeto de descuento a los deudores dada la ausencia de su inscripción ante dicha pagaduría. Lo que demuestra que la cartera comercializada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. en las operaciones descritas no tenía como respaldo la existencia de créditos subyacentes que justificaran su comercialización ni el traslado posterior de flujos a sus compradores.

2. Pagarés de créditos de libranza inexistentes, en los que coinciden los datos de deudor y originador reportados y con pago de flujos a los compradores.

En cincuenta y dos (52) casos de operaciones de comercialización de cartera por parte de la sociedad se reportaron libranzas cuyos números de libranza, fechas, valores de crédito y de cuota mensual son diferentes a los reportados por la pagaduría como créditos activos y con descuento para esos mismos deudores³⁶.

Aunque en los anteriores casos se logró establecer que los deudores si eran parte de la nómina de FOPEP y que se trataba de cartera aparentemente originada por la misma entidad operadora de libranza como lo reportaron ambas fuentes, no existen coincidencias en las características de dicha cartera (valores, números de cuotas, fechas) que permitan concluir que se trata de los mismos créditos cuyos descuentos fueran trasladados a los compradores de Optimal Libranzas.

En el presente caso se pudo establecer que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. comercializó y recaudo dinero de sus clientes, por una supuesta cartera de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$865.970.886). Sin embargo, pudo verificarse que el valor total de la cartera correspondiente a tales deudores efectivamente inscrita ante la pagaduría a favor de los originadores relacionados es sólo de TRECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES, CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$391.051.468).

Incluso en el evento de desconocer las evidentes diferencias, la Sociedad habría recaudado recursos del público sin explicación financiera razonable por un valor

³⁶ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadros Pág.29, 30 y 31



superior de cartera de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$474.919.418). Ello, por cuanto los contratos de compraventa respectivos carecieron de activo subyacente que justificara financieramente la transferencia de dichos recursos a favor de la Sociedad.

También pudo verificarse que en tales operaciones la sociedad pagó a sus clientes inversionistas hasta el 30 de junio de 2016, flujos mensuales por un valor total de CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$110.105.576), mientras que el descuento efectivamente realizado por la pagaduría a dichos deudores y a favor de las originadoras allí relacionadas (para otros créditos de libranza) se dio por un valor aproximado de TREINTA Y DOS MILLONES, CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$32.141.250).

Al comparar esta información con la suministrada por la pagaduría, se encontró una diferencia de setenta y siete millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos veintiséis pesos (\$77.964.326) en valores de flujos trasladados de la Sociedad a sus clientes para los que tampoco existió explicación financiera que los justifique, ya que las sumas descontadas por la pagaduría equivalían solamente al 29.19% de los flujos trasladados por la Sociedad a los compradores de cartera.

3. Deudores con varios créditos reportados por la Sociedad cuyas libranzas aparecen como no inscritas ante la pagaduría pero que fueron vendidos y por los cuales se realizaron traslados de flujos a compradores.

De la información allegada por la Sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. mediante radicado 2017-01-015787 del 20 de enero de 2017, el señor ARCON CERVANTES DONALDO, figuraba como deudor de dos créditos materializados en pagarés-libranza identificados bajo los números 23857 y 23859, con deducciones mensuales de \$300.833 y \$316.667 respectivamente, cuyos flujos eran descontados a favor de la originadora COOVENAL y trasladados por esta a la sociedad. Por su parte, la pagaduría FOPEP mediante radicado 2017-01-427219 del 11 de agosto de 2017, informó a la Superintendencia de Sociedades que el citado deudor solo registraba una libranza con descuento a favor de COOVENAL, correspondiente al pagaré No. 23860, con cuota mensual de \$38.500.

Se evidenciaron otros treinta y tres (33) casos similares al caso anterior, en donde OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. reportó la existencia de un mayor número de créditos de libranza por deudor vendidos a sus clientes de los créditos efectivamente inscritos ante la pagaduría FOPEP para su descuento mensual. Nótese además que incluso la información de los créditos que si fueron reportados por la pagaduría como inscritos y con descuento difiere ampliamente de la de la cartera reportada y comercializada por la Sociedad. A pesar de ello, en búsqueda de coincidencias esta Superintendencia comparó los valores de los créditos efectivamente inscritos con los que tuvieran fechas aproximadas reportados por Optimal, lo cual presenta varias irregularidades y diferencias en flujos mensuales³⁷.

Se pudo evidenciar en primer lugar que Optimal Libranzas comercializó un número mayor de pagarés-libranza por deudor de los efectivamente inscritos ante la pagaduría FOPEP, lo que demostró que la Sociedad en tales operaciones comercializó cartera sin créditos subyacentes que la soportaran lo que conllevó la total ausencia de razonabilidad financiera en tales operaciones. Es decir que la sociedad comercializó y recaudó dinero de sus clientes por una cartera con un valor de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS (\$969.434.712), suma superior en por lo menos QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TREcientos NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$545.399.784) a la

³⁷ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadros Pág.32, 33 y 34



cartera efectivamente inscrita ante la pagaduría para dichos deudores a favor de la cooperativa COOVENAL, cuyo valor es de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$424.034.928), evidenciándose la existencia de hechos objetivos de captación al no existir razonabilidad financiera en la comercialización de ese valor de cartera.

De igual manera, según la información aportada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., de las operaciones que realizó hasta el 30 de junio de 2016 se efectuaron traslados de flujos a sus clientes por un valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$98.318.969). Sin embargo, se evidenció que en el mejor de los casos y considerando a pesar de las diferencias que los créditos reportados por la pagaduría fueran los mismos reportados por la sociedad, la pagaduría solo realizó descuentos por DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$18.443.084) a favor de COOVENAL con relación a los mismos deudores. Ello demuestra que incluso en el evento que se considerará que tales flujos fueron trasladados a la sociedad a pesar de tratarse de cartera distinta, existe una diferencia de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$79.875.885) de flujos trasladados a los compradores sin ninguna explicación financiera razonable.

Hallazgos presentados frente a la pagaduría Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES.

De la base de datos de cartera comercializada remitida a esta Entidad por la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se registraron novecientos ochenta y nueve (989) libranzas de la pagaduría COLPENSIONES, correspondiente a setecientos setenta (770) deudores. Con base en lo anterior, se solicitó a la pagaduría una relación detallada de las libranzas correspondientes a los 770 deudores reportados por la Sociedad para verificar lo informado por la sociedad sobre la cartera comercializada de los mismos.

Del requerimiento realizado por la entidad mediante Oficio 301-129391 a la pagaduría COLPENSIONES, mediante radicado 2017-01-535619 del 18 de octubre de 2017, la pagaduría suministró información en relación a las libranzas de los 770 deudores reportados por la sociedad correspondientes a 212 originadoras.

Al realizar el cotejo de la información se encontró que de los novecientos ochenta y nueve pagarés -libranza (989) reportados por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., solo trescientos uno (301) coincidieron con la información aportada por la pagaduría COLPENSIONES teniendo en cuenta el número de identificación del deudor y el número de pagaré-libranza reportado. Lo cual indica que 688 libranzas de las reportadas por la Sociedad como vendidas a terceros no aparecen en la base de datos de la Pagaduría, e incluso en los 301 pagarés reportados por la pagaduría en los que coincide el deudor y el número de la libranza, también se encontraron las siguientes irregularidades:

1. Pagarés de créditos de libranza cuyos valores de crédito y de cuota son inferiores a los reportados por la sociedad y con pago de flujos a los compradores.

En esta modalidad, se encontraron veintiún (21) casos en los que a pesar de tratarse del mismo deudor y del mismo número de libranza no coincidieron las fechas, el valor total del crédito ni de las cuotas mensuales con la información reportada por la sociedad, como se indica a continuación³⁸:

³⁸ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadro Pág.35 y 36.



En los primeros 4 pagarés (Nos. 27942 – 27120 – 30690 – 30263), se pudo evidenciar que la pagaduría inició el recaudo a tales deudores, varios meses después de la comercialización de dicha cartera por OPTIMAL. Lo cual significa que la Sociedad pagó flujos por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$6.226.136) a sus clientes compradores, con anterioridad al inicio del descuento por parte de pagaduría, pagos que carecen de razonabilidad financiera que justificara los flujos desembolsados a los clientes pues precisamente no se habían descontado dichas cuotas a los deudores.

En cuanto al pagaré No. 8641, se encontró que dicha cartera fue vendida a su comprador el 18 de junio de 2014, mientras por su parte la pagaduría COLPENSIONES, informó que el último descuento respecto a dicha libranza se hizo en el mes de febrero de 2014, lo cual indica que el pagaré fue vendido aproximadamente 4 meses después de haberse extinguido el crédito que lo soportaba, evidenciando que la Sociedad vendió cartera inexistente y que los pagos de los flujos realizados hasta el 30 de junio de 2016 por la suma de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$6.145.584) en dicha operación carecieron por lo expuesto de justificación financiera.

De acuerdo a la información analizada, se pudo verificar también que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. recibió recursos de sus compradores por una cartera cuyo valor ascendía a DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$296.229.888), y que de acuerdo con la información remitida por la pagaduría COLPENSIONES, el valor de la cartera efectivamente inscrita ante la misma y por la cual se estaban realizando los respectivos descuentos solo ascendía a la suma de CIENTO SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$106.376.928).

Las anteriores operaciones indican que la Sociedad recibió de sus clientes las sumas correspondientes a la venta de una cartera por valor de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$189.852.960) en operaciones con activos inexistentes y que tales operaciones carecieron de toda justificación financiera pues no existían créditos subyacentes que justificaran tales ventas y por lo tanto la recepción del dinero entregado por los compradores.

También se pudo evidenciar que, por los 21 pagarés, al 30 de junio de 2016 la sociedad trasladó recursos a sus clientes por un valor de CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$112.906.679) correspondientes a los flujos mensuales mientras que los flujos efectivamente descontados a esos deudores por la pagaduría solamente ascendían a la suma de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$21.838.890) según lo reportado. Lo cual indica una diferencia en pago de flujos de NOVENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$91.067.789) que no tenía una explicación financiera razonable ya que los descuentos efectivamente realizados por la pagaduría solo soportaron un 19.34% de lo que trasladó la Sociedad.

2. Pagarés de créditos de libranza reportados como inexistentes, sin descuento a deudores y con pago de flujos a los compradores.

En esta modalidad, se encontraron veintiséis (26) casos de cartera materializada en pagarés-libranza vendida por la Sociedad a terceros cuyos deudores no pertenecían a la pagaduría COLPENSIONES, la cual los reportó como inexistentes,³⁹ lo cual quiere decir que la cartera relacionada fue comercializada por la Sociedad a sus clientes pero tales libranzas jamás fueron inscritas ante la pagaduría para que realizara los

³⁹ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadro Pág.37.



descuentos de los flujos mensuales y su posterior traslado al originador, habiéndose demostrado que el motivo de ello fue precisamente que tales deudores no existían en la pagaduría. Lo anterior, implica que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. recaudó dinero de sus compradores por la venta de una cartera inexistente cuyo valor ascendía a DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (\$270.979.860).

Lo anterior significa que sin la existencia de cartera en estas 26 operaciones, la recepción de recursos de terceros y los traslados de los flujos mensuales realizados por la Sociedad hasta el 30 de junio de 2016, por la suma de setenta y dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos (\$72.754.498), tampoco tuvieron una explicación financiera razonable debido a la ausencia de un crédito subyacente cuyo descuento de cuotas mensuales fuera efectivamente trasladado al comprador.

3. Créditos de libranza cuyos originadores no fueron reportados dentro de la base de datos de COLPENSIONES.

Bajo esta modalidad, se identificaron diez (10) casos en los que además de no existir coincidencias con la información reportada por la sociedad para esos deudores, los originadores no existían en la base de datos remitida por la pagaduría⁴⁰, donde la Sociedad recaudó dinero de sus clientes por la venta de una cartera inexistente con valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$84.319.992) y por la cual además pagó flujos mensuales a sus clientes hasta el 30 de junio de 2016, por la suma total de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$24.950.666).

De lo anterior se concluyó que, aunque estas personas en efecto eran parte de la nómina de Colpensiones, los créditos materializados en pagarés-libranza vendidos por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no fueron inscritos ante la pagaduría para que realizara los descuentos correspondientes. Por lo tanto, la recepción de recursos de terceros por su venta y la transferencia de flujos a los clientes compradores de dicha cartera carecieron de justificación financiera.

CARTERA COMERCIALIZADA POR LA SOCIEDAD CON POSTERIORIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2016.

En las quejas presentadas a la Superintendencia de Sociedades por los afectados compradores de cartera de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., se denunció el incumplimiento en el traslado de flujos mensuales derivados de la cartera adquirida incluso desde los meses de mayo y junio de 2016, sin embargo, para establecer el periodo de las irregularidades en el traslado de flujos, la entidad tomó el 30 de junio de 2016 como fecha de corte de tales pagos.

No obstante, lo anterior, se pudo verificar que la sociedad a pesar de encontrarse incumpliendo con el traslado de flujos mensuales a sus compradores de cartera desde esa época, lo que evidenciaba su conocimiento de las irregularidades que empezaron a imposibilitar tales pagos mensuales a sus compradores, durante el mes de julio de 2016 la Sociedad continuó comercializando cartera de créditos de libranza en trescientos cincuenta y cuatro (354) nuevos casos⁴¹.

De lo anterior, se pudo evidenciar que a pesar de las irregularidades que comenzaron a presentarse en el traslado de flujos desde el mes de junio de 2016, como lo demuestran las quejas recibidas en la Entidad y que se hizo evidente frente a los quejosos por la cesación generalizada del pago de flujos de la cartera para dicho mes,

⁴⁰ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadro Pág.38

⁴¹ Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 Cuadros Pág.39, 40, 41, 42, 43 y 44



OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. continuó comercializando cartera en el mes de julio por un valor de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS (\$ 3.464.171.205).

Conforme a lo anterior, se demostró que la Sociedad con pleno conocimiento de las irregularidades que se evidenciaron en la ausencia de traslado de flujos a sus clientes, continuó recibiendo recursos de terceros por la comercialización de cartera, incluso de los mismos originadores incumplidos, sin realizar una verificación sobre su existencia distinta a la revisión documental de los títulos que la incorporaban, y sin exigirles a tales originadores pruebas conducentes de la existencia e inscripción de dicha cartera ante la entidad pagadora correspondiente.

5.3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CONDUCTAS

5.3.1 Configuración de los supuestos establecidos en el Decreto 4334 de 2008

La Superintendencia de Sociedades pudo establecer que, en desarrollo de su objeto social, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., realizó operaciones de compraventa de cartera materializada en pagarés-libranza durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre del año 2013 y el mes de julio de del año 2016. Conforme a las irregularidades evidenciadas en los numerales anteriores se encuentran comprendidas entre dicho periodo.

Según la información obtenida de la Sociedad, aparentemente esta adquiría cartera de diversas sociedades y cooperativas originadoras de créditos de libranza y posteriormente, mediante la celebración de contratos de compraventa, la vendía a sus clientes, personas naturales y jurídicas. En virtud de tales acuerdos sus proveedores de cartera trasladaban los flujos de los descuentos de las cuotas de los créditos de libranza a sus compradores con una rentabilidad estimada.

Sin embargo, a partir del análisis de la operación de la Sociedad, de las diferentes quejas presentadas por los compradores de cartera a esta Superintendencia, y de las verificaciones realizadas por la entidad este Despacho con las pagadurías respecto a algunos de los créditos que hacían parte de la cartera comercializada, se evidenciaron las irregularidades descritas en acápite anteriores, las cuales indican con claridad que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se encontró incurso en hechos objetivos de captación o recaudo no autorizado a la luz de lo establecido en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008, el cual dispone lo siguiente:

“SUPUESTOS. La intervención se llevará a cabo cuando existan hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.”

Lo anterior, por cuanto en las operaciones descritas previamente, la Sociedad, actuando como intermediaria entre las entidades operadoras de libranza originadoras de esa cartera y sus clientes, recibió masivamente recursos de terceros por la venta de una cartera materializada en pagarés-libranza que resultó ser inexistente en los casos descritos, y que no fue inscrita ante la entidad pagadora respectiva para su descuento, como fue reportado a esta Entidad.

A lo largo de los considerandos de la Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017, se aprecian razones que comprueban la configuración de hechos objetivos que indican i) la entrega masiva de, aproximadamente, tres mil seiscientos cincuenta millones seiscientos setenta y dos mil ochocientos ochenta y dos pesos (\$



3.650.672.882) a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, a través de al menos doscientas ochenta (280) operaciones compraventa, cuyos activos adyacentes eran inexistentes; y, ii) el pago de setecientos once millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco (\$711.485.385) a algunos compradores o inversionistas de supuestos flujos de libranzas que, en realidad, consistieron en rendimientos sin explicación financiera razonable al no haberse descontado ese mismo valor por las pagadurías.

Es de advertir que la documental remitida por la Sociedad no resultó ser una prueba conducente para desvirtuar las irregularidades encontradas en los créditos de libranza que supuestamente subyacían las operaciones de compraventa de cartera realizadas por la misma, sin cuya existencia el recaudo de recursos de terceros (compradores) carece de toda justificación financiera. Como lo demuestran los análisis realizados a la información reportada por la misma Sociedad y por algunas de las pagadurías ante las que se debieron inscribir las libranzas, la inexistencia de los créditos (cartera) conllevó que tal operación se desdibujara para el presente caso.

OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, al dedicarse profesionalmente a la comercialización de cartera materializada en pagarés-libranza, debía conocer la existencia de los activos que estaba comercializando previa su venta a terceros. Al omitir tal verificación, por lo menos en los casos relacionados, al margen de su responsabilidad cambiaria, la Sociedad participó activamente la actividad de captación ilegal de dinero en la cual también participaron los originadores intervenidos, lo que no significa que la misma no haya incurrido en la misma conducta de manera autónoma al haber ofrecido al público y recibir masivamente recursos de sus clientes, en operaciones que se realizaron sin explicación financiera razonable, ya que dichos clientes desembolsaron dinero a la Sociedad para la compra de un activo que resultó ser inexistente.

El recaudo masivo de recursos realizado por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S atentó en contra del orden público y económico del país protegido por el artículo 335 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto con tales actuaciones afectó a cientos de compradores de cartera quienes en su momento creyeron haber adquirido derechos crediticios sobre préstamos efectivamente otorgados a personas naturales y cuyas libranzas o autorizaciones de descuento se encontraban debidamente inscritas ante la entidad pagadora respectiva.

Así las cosas, sin perjuicio de que el endoso sin responsabilidad tenga las consecuencias que le otorgue la ley comercial, la inexistencia de la cartera comercializada y de los descuentos directos a los deudores por parte de las pagadurías demostraron con claridad la participación de la sociedad en hechos objetivos de captación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4334 de 2008. Así, al verificarse la existencia del ejercicio de la actividad de captación de dineros del público sin la debida autorización estatal, la Superintendencia de Sociedades se encontraba facultada para adoptar las medidas de intervención a que hubiere lugar.

En cumplimiento del supuesto aludido en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008, concluyó la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S recibió masiva y habitualmente dineros de inversionistas que habrían invertido en títulos asignados a su nombre, no obstante, la Sociedad reconoció que no tenía manera de determinar que las compraventas de estos guardaran exacta correspondencia con los flujos prometidos en cada negociación.

Por lo anterior, consideró la Delegatura que dicho manejo de las libranzas desvirtuaba la existencia de una explicación financiera razonable por la compraventa de cartera pues desnaturalizó las operaciones al no identificar con precisión el flujo de dinero que generaba cada bien vendido.

5.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:



A pesar de los obstáculos que se presentaron para el desarrollo de sus funciones, la Superintendencia de Sociedades ejerció sus atribuciones en materia de intervención por captación ilegal, facultades que por lo demás, como se analizó en detalle en el acápite correspondiente, **son de naturaleza subjetiva** y se encuentran limitadas a la suspensión inmediata de actividades y a llevar a cabo los procedimientos para la devolución de los recursos a los afectados; por lo que distan mucho de la supervisión, como componente de la regulación prudencial, que se ejerce respecto de quienes prestan la actividad financiera legalmente.

De otra parte, es procedente manifestar que la entidad que represento, realizó grandes esfuerzos en las investigaciones que adelantó al interior de la sociedad **OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, a fin de poder desentramar el negocio y encontrar las pruebas que le permitieron establecer la existencia de una captación ilegal, pruebas estas sin las cuales la entidad no podía intervenir a la sociedad.**

De igual manera queda demostrado que las funciones de inspección, vigilancia y control que la Superintendencia de Sociedades ejercía respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, se cumplieron a cabalidad y apoyaron a otros entes gubernamentales con sus investigaciones a fin de poder revelar el negocio ilegal que tenía la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

5.6. TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN

5.6.1. AUTO 400-005087 del 13 de abril de 2018 de 2018

Mediante Memorando 301-000794 de 25 de enero de 2017, la Directora de Supervisión de Sociedades, de la Delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, comunicó que, mediante Resolución 300-005082 de 22 de diciembre de 2017, se ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de captación masiva e ilegal de dineros del público a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S identificada con Nit. 900.496.573 y la remisión de ese acto administrativo a la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia a efectos de examinar la viabilidad de adoptar otras medidas de las previstas en el artículo 7 del Decreto 4334 de 2008.

En la citada Resolución, se indica que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. fue sujeto de una diligencia de toma de información ordenada en agosto de 2016, donde se aprecian razones que comprueban la configuración de hechos objetivos que indican i) la entrega masiva de, aproximadamente, tres mil seiscientos cincuenta millones seiscientos setenta y dos mil ochocientos ochenta y dos pesos (\$ 3.650.672.882) a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, a través de al menos doscientas ochenta (280) operaciones compraventa, cuyos activos adyacentes eran inexistentes; y, ii) el pago de setecientos once millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco (\$711.485.385).a algunos compradores o inversionistas de supuestos flujos de libranzas que, en realidad, consistieron en rendimientos sin explicación financiera razonable al no haberse descontado ese mismo valor por las pagadurías.

Por lo anterior, a fin de reestablecer el orden público económico afectado con las operaciones de captación ilegal adelantadas por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, y como quiera que se dieron los supuestos contenidos en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008 la entidad resolvió ordenar la intervención mediante toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad.

Como se puede observar, en la actualidad aún se encuentra vigente y en curso la medida adoptada a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en toma de posesión como medida de intervención⁴², proceso donde se deberán tramitar todas las reclamaciones de los afectados, dentro de los términos y oportunidades fijadas en el citado proceso, y no en un proceso paralelo al cual acude hoy la demandante.

⁴² Auto 400-005087 del 13 de abril de 2018



VI. DE LA RESPONSABILIDAD QUE SE RECLAMA EN EL CASO CONCRETO RESPECTO A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

6.1. INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD

Sea lo primero advertir que el fundamento constitucional de la acción impetrada por la demandante, esto es, la reparación directa, se encuentra contemplado el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia en los siguientes términos:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.”

Acorde con lo anterior, el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado, indicando igualmente que, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

De lo anterior se desprende que para que surja la obligación de reparar un daño por la administración, por la vía de la responsabilidad extracontractual del Estado, se requiere que éste haya actuado mediante actos, hechos, operaciones, vías de hecho, o haya incurrido en omisiones, u ocupado temporal o permanente un inmueble por trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Así las cosas, la responsabilidad que se pretende declarar supone de una parte la demostración de la supuesta omisión normativa por parte de la entidad demandada en el ejercicio de sus funciones y de otra, que dicha omisión contemple los elementos que estructuran la responsabilidad consagrada en nuestra legislación.

Ahora bien, la responsabilidad sólo puede ser declarada si concurren los tres (3) elementos que la configuran, exigencia que ha sido reconocida por el Consejo de Estado en varias oportunidades, como en la sentencia del 15 de abril de 1993, en los siguientes términos:

*“(...) La responsabilidad patrimonial del Estado se declarará, siempre que concurren los siguientes elementos: **un hecho dañoso imputable a la administración, un daño sufrido por el actor, que para estos efectos es quien lo alega, y un nexos causal que vincula a éstos; dicha causa es esencial para concluir que el daño es consecuencia directa del hecho atribuido a la administración.** (...)”* (Negrillas fuera del texto.)

Del mismo modo, el Consejo de Estado en sentencia del 13 de septiembre de 1993, manifestó sobre los elementos constitutivos de la falla del servicio:

“(...) a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración;

b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;

c) Un daño, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc., y

d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización (...)”

Así mismo, en sentencia del 24 de octubre de 1990 la misma Corporación señaló:



(...) En casos de falla del servicio, al administrado le corresponde probar el mal funcionamiento de un servicio que la administración debería prestar, por ley o reglamento o por haberlo asumido de hecho, el daño que ello le infringió y la relación de causalidad entre lo segundo y lo primero, correspondiéndole a la administración aportar las probanzas contrarias, es decir, que no existió la falla o el daño, o que si alguno de tales elementos se presentó ello se debió a fuerza mayor o al hecho o culpa de la víctima o que no existe relación de causalidad entre la falla y el daño (...). (Negrillas nuestras).

Traídos al caso particular que nos ocupa, **los presupuestos de responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades son a todas luces inexistentes, como quiera que no se advierte la ocurrencia de una falla derivada de la omisión de la entidad en el cumplimiento de sus funciones, y mucho menos puede predicarse la verificación de un daño, y de existir alguno, éste no podría atribuirse a mí representada.**

Y es que claramente la Superintendencia de Sociedades en ningún momento se retrotrajo del cumplimiento de sus deberes legales, cosa que se encuentra demostrada en las actuaciones desplegadas por ésta, y, por el contrario, actuó conforme con el ordenamiento legal y las atribuciones que resultaban de su competencia, de manera que no se puede aducir conducta reprochable alguna para señalarle responsabilidad. Es decir, no existe omisión o acción que denote una voluntad desplegada por mi defendida con la intención de inferir daño o que demarque una falta en el cumplimiento de sus funciones.

De otra parte, es procedente en este punto, hacer un análisis de las actuaciones desplegadas por el demandante, respecto de las inversiones realizadas por esta en la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención, a fin de poder establecer si actuó con la debida diligencia respecto de los negocios realizados, o si por el contrario su actuar fue negligente y con ello aunado a las actuaciones perniciosas de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S fueron la causa que generó el daño que hoy se alega.

De acuerdo con las pruebas aportadas con la demanda, más específicamente con los *“contratos de compraventa de cartera persona natural”* se evidencia que el objeto del negocio era la compra del derecho de dominio y posesión sobre una cartera incorporada en unos pagares libranzas (Cláusula primera).

Como se indica en el párrafo tercero de esta primera Clausula, la obligación de endosar y entregar física y materialmente los Pagaré Libranza al cliente o a la empresa designada para su conservación y custodia, estaba supeditada a que los compradores acreditaran efectivamente el pago de la cartera.

En ese orden de ideas, la negociación realizada entre la demandante y la sociedad, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención, no se perfeccionó, ya que la demandante solo se limitó a firmar el endoso en el pagaré libranza sin exigir la entrega de mismo, tal como se acordó en el contrato de compraventa en su Cláusula Segunda.

Así las cosas, el demandante no sólo ignoró el acuerdo contractual firmado con la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención, sino que desconoció lo establecido en la normatividad legal vigente, en cuanto al giro de los títulos valores, siendo un requisito indispensable para lograr las prestaciones contenidas en el título valor, como la exhibición del mismo; para lo cual requieren tener la posesión de éste, situación que en el presente caso no se dio.

Por lo anterior, queda evidenciado que el demandante, no actuó con la debida diligencia, prudencia y sensatez que el negocio que estaba realizando requería, transgrediendo las cargas contractuales que le correspondían como la de sagacidad, conocimiento, legalidad y claridad, entre otros deberes secundarios de conducta y, por ello, junto con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S fueron los causantes del daño que pretenden ahora imputarle a las entidades del Estado.

Se desea enfatizar, entre los mencionados deberes de conducta que fueron incumplidos por el ahora demandante, el de INFORMACIÓN, el cual es de doble vía, porque no sólo exige que quien ofrece el servicio suministre todo lo relativo a la



actividad que propone de manera clara, completa y fidedigna, sino también implica que, quien está interesado en el negocio ofrecido, se entere de manera diligente del mismo, de sus riesgos, condiciones y efectos, por cuanto, como ha sido reconocido jurisprudencialmente, “(...) **en materia informativa, como secuela de la buena fe y, en particular, del postulado de la cooperación negocial, el límite o el confín de la carga de informar al otro radica, precisamente en el deber de informarse a sí mismo, en la medida de lo posible, y de las circunstancias que rodean cada asunto, observación que coincide con la opinión expresada por los juristas galos GERARD CAS y DIDIER FERRIER, según la cual existe claramente una relación dialéctica entre la obligación de información, de una parte y, de la otra, el deber de informarse. (...)**”. (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 2 de agosto de 2001. El resaltado es fuera del texto).

Igualmente, la doctrina nacional ha reconocido el doble contenido del deber de información al igual que el de informarse, recalcando que “(...) **Aquí conviene recordar las cargas de diligencia y cuidado que las partes deben observar en la etapa del perfeccionamiento del contrato y que el profano no se halla sustraído de su deber de informarse, lo que implica que su debilidad no le atribuye un derecho a la pasividad. (...)**”. (RENGIFO GARCÍA, ERNESTO; “El Deber Precontractual de Información”, en la obra colectiva “Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI; Pontificia Universidad Javeriana y Editorial Temis, 2010, página 129. El resaltado es fuera del texto).

En ese orden de ideas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, **el hecho que la víctima sea la causante del daño que sufre, exonera de responsabilidad al Estado.**

Al respecto el Consejo de Estado ha manifestado en sentencia dentro del proceso 2010 00294 00 del 23 de marzo de 2017, demandante Mauricio Alfonso Sierra, demandada Nación Fiscalía general de la Nación:

“(...) **Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.**

(...)

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(...)

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque, aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien, con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...). (El resaltado es fuera del texto).

VII. EXCEPCIONES

7.1. INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO.



En el ordenamiento jurídico colombiano, se ha establecido que la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, es cuando la administración actúa mal, tardíamente o no actúa; sin embargo, con el paso del tiempo la jurisprudencia ha ido afianzando los criterios de irregularidad o anormalidad en la actuación como fuente de responsabilidad administrativa por falla en el servicio.

Así las cosas, si el daño se produce por la desidia de la administración en el ejercicio de sus funciones, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

En el presente caso, se observa que la Superintendencia de Sociedades, dio cabal cumplimiento a los deberes legales que se encontraban dentro de su competencia, actuando de manera diligente y ajustada al ordenamiento jurídico colombiano, tal como ya se manifestó en acápites anteriores.

No existe prueba alguna que demuestre la existencia de una omisión o acción en las atribuciones de la Superintendencia que conllevaran a una falla del servicio; por el contrario, se observa que la entidad a través de sus investigaciones buscó evidencias de la existencia de anomalías financieras en la sociedad, para poder actuar conforme a ello.

Así las cosas, la Superintendencia de Sociedades no podía tomar acciones más contundentes contra OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., por cuanto esto sería una extralimitación de sus funciones y un abuso del derecho a la libre empresa.

De otra parte, es procedente manifestar que las facultades legalmente conferidas a la Superintendencia de Sociedades no constituyen en sí, una obligación de resultado, en cuanto a garantizar que sus supervisados se ajustan al marco normativo; dado que el campo de injerencia es sólo subjetivo frente a la entidad como sujeto y no respecto de la actividad que desarrolla en ejercicio de su objeto social.

Ahora bien, tal como está establecido en el Decreto 4334 de 2008, el procedimiento de intervención por captación ilegal, tiene una naturaleza esencialmente cautelar, en el entendido que lo que busca es suspender la actividad ilegal de captación, procurando la devolución inmediata a los afectados de los recursos indebidamente captados; es decir, que no se contempla como un proceso preventivo sino sancionatorio.

Es en ese entendido que la entidad que represento, solo puede actuar cuando ineludiblemente se evidencia la actividad ilícita, es decir que se puede probar la existencia de hechos objetivos y notorios que no permitan dudar de la existencia de una captación ilegal de dineros del público; por lo que mal podría endilgarse una falla del servicio a mi defendida por no haber actuado antes en ejercicio del Decreto Ley 4334 de 2008, cuando justamente se estructura de manera ex post a la conducta prohibida, requiriéndose de la configuración de esta última para que puedan tener cabida las medidas consagradas dentro del trámite de intervención.

A continuación, se efectúa una relación de los pronunciamientos hechos en algunos de los procesos adelantados, con ocasión de supuestas omisiones en las que incurrieron entidades estatales en el cumplimiento de funciones de inspección, vigilancia y control.

Dentro de las decisiones que se presentan, el Consejo de Estado consideró que para efectos de determinar si una entidad pública encargada de ejercer funciones de inspección, control y vigilancia incurrió o no en una falla del servicio, resulta necesario establecer si actuó o no con miras a garantizar que el ente vigilado cumpliera con el marco normativo que lo regulaba y, en el caso de contar con varias alternativas de intervención, si las adoptadas fueron oportunas y proporcionales en relación con la finalidad perseguida.

Por lo tanto, encuentra el Alto Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que **si al momento de tener noticia de las irregularidades en las que se considera incurre una sociedad sujeta a supervisión, el ente estatal adelanta las**



actuaciones dirigidas a verificar tales circunstancias, adoptando medidas tendientes a que la sociedad cumpla con la normativa a la cual se encuentra sujeta, dicho actuar se entiende como oportuno.

Precisa finalmente que la responsabilidad del Estado en tratándose de las funciones a su cargo en materia de inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales, se circunscribe a realizar todas las gestiones y a adoptar todas las decisiones que el ordenamiento jurídico posibilita, con el fin de encausar el quehacer de las compañías vigiladas al ordenamiento jurídico y a sus propios estatutos, sin que dicha responsabilidad se extienda, *per se*, a la garantía de las pérdidas sufridas o de las utilidades esperadas por los usuarios o clientes de las empresas en cuestión.

**1. Sentencia del 31 de mayo de 2016, 25000-23-26-000-2004-01391-01(36540)
Consejero ponente DANILO ROJAS BETANCOURTH**

“11.2.3. En esta perspectiva queda claro que las funciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por el Estado no están dirigidas a garantizar, a toda costa, el éxito de las actividades de los particulares, o a evitar que sufran pérdidas; sino a salvaguardar intereses que se consideran prioritarios como, en el caso de las actividades financieras, su “transparencia y la protección de los ahorradores para que, en los eventos de crisis, éstos puedan obtener sus recursos, actuaciones con las que se pretende generar confianza en el sistema financiero”. Así, a propósito del ejercicio de esas funciones por parte de la Superintendencia Bancaria, la Sección Tercera de la Corporación ha sostenido:

Esa labor de inspección que ejercía la Superintendencia Bancaria no garantizaba que el patrimonio de los depositantes o accionistas no resultara afectado como consecuencia de la materialización de los riesgos inherentes a la actividad de intermediación financiera, puesto que tal labor se concretaba a controlar que el ejercicio de dicha actividad se desarrollara conforme a la ley, y en la medida en que así no se hiciera, a adoptar de manera oportuna los correctivos e imponer las sanciones de rigor. (Subrayado fuera de texto)

En síntesis, la actividad financiera que desarrollan los particulares está sometida a la inspección y vigilancia del Estado, en razón del interés general que esa actividad reviste, por su incidencia en la economía. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado por los daños que se derivaran de actuaciones irregulares de quienes ejercen dicha actividad se produce siempre que la entidad estatal incurra en omisión en el cumplimiento de las funciones que le corresponden como autoridad de policía administrativa, pero cuando se demuestre que de haberse dado cumplimiento a tales obligaciones se hubiera podido impedir que se causaran los daños derivados de esa irregular gestión de los particulares.

2. Sentencia del 13 de abril de 2016, radicación 25000-23-26-000-1999-00015-02(35534), Consejera ponente MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Con fundamento en lo anterior, la Sala debe establecer si en el presente asunto se configuraron los elementos para declarar la responsabilidad de la Superintendencia Financiera por una falla consistente en la omisión, retardo o ineficiencia en la prestación de los servicios a su cargo, en este caso, relativos a las funciones de inspección, vigilancia y control de entidades financieras.

(...)

Frente a la falla o falta en los deberes de inspección, vigilancia y control a cargo de la demandada, se probó en el plenario que esta llevó a cabo todas las



evaluaciones, inspecciones, visitas, requerimientos, informes y medidas adoptadas con anterioridad a la toma de posesión con fines de liquidación de la sociedad vigilada.

(...)

De toda esa actividad se deduce, sin mayores elucubraciones, que la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-, no omitió, descuidó o retardó sus deberes de inspección, control y vigilancia, respecto de La Fortaleza S.A., menos aún durante su intervención hasta la toma de posesión de bienes, haberes y negocios con fines de liquidación, pues son claras las gestiones encaminadas a que la entidad vigilada pudiera continuar con el desarrollo de su objeto social, pese a los inconvenientes y problemas de solvencia y cumplimiento de todo tipo de normas de orden financiero.

Ahora, en torno a que con su gestión pudo haberse evitado la toma de posesión y consecuente liquidación, cabe precisar que la función de supervisión de la Superintendencia no consiste en garantizar el patrimonio de los accionistas y/o depositantes o ahorradores contra cualquier pérdida, por el contrario, tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, comoquiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado.

Así lo ha resaltado esta Subsección al señalar:

“Sobre este punto, vale la pena resaltar que la obligación a cargo de la Superintendencia no es de resultado, pues según la carga obligacional contenida en el EOSF, la cual se expuso en precedencia, sólo está obligada a revisar la actividad de las establecimientos financieros y a vigilar y controlar dicha actividad, pero no a cogestionar o evitar los riesgos propios del sistema financiero”⁴³

Como pudo verificarse durante la actuación administrativa de intervención, no fue una falla en el servicio a cargo del ente de vigilancia la que condujo a la liquidación de La Fortaleza S.A., sino los constantes incumplimientos por parte de la vigilada frente a los requerimientos de la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera-, la que llevó a sociedad comercial a incurrir en las causales de toma de posesión con fines de liquidación consagradas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

3. Sentencia del 16 de julio de 2015, radicación 25000-23-26-000-1999-02636-01(27494), Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN

“La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continúa siéndolo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual”⁴⁴.

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo

⁴³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 25000 23 26 000 2000 02312 01 (29944); M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

⁴⁴ Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente No. 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.



que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera⁴⁵, así, las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo⁴⁶.

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad. (Subrayado fuera de texto)

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía⁴⁷.

No ofrece discusión alguna que la persona interesada en reclamar del Estado la reparación de los daños antijurídicos cuya causación imputa o la acción o la omisión de una autoridad pública y que, con tal propósito, ejerce la acción de reparación directa, tiene la carga de acreditar, en el proceso, la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual amparó sus pretensiones, esto es, si se trata de un régimen objetivo de responsabilidad, deberá demostrar, además del daño, el hecho dañoso de que se trate, así como el nexo de causalidad entre aquél y éste; por su parte, si se trata de un régimen de falla del servicio -como se alegó en el asunto sub judice-, además de los pre mencionados elementos, tiene el actor en principio, la carga de demostrar que el servicio no funcionó, funcionó mal o que el funcionamiento fue tardío.

Ahora bien, en cuanto a las funciones de inspección, control y vigilancia desplegadas por el DANCOOP respecto de COCENTRAL, encuentra la Sala que aquéllas fueron cabalmente desarrolladas por tal entidad, toda vez que, como aparece acreditado en el presente caso, la entidad vigilante sólo tuvo conocimiento de las operaciones irregulares de COCENTRAL en marzo de 1992, mes en que se realizaron visitas a dicha cooperativa y, a partir de tal hallazgo, se tomaron las medidas necesarias para evitar la iliquidez absoluta de la vigilada, tomando posesión para administrarla. Sin embargo, al resultar que el déficit era tan alto -\$2.572'000.000-, pasados tres meses se tomó la decisión de liquidarla. (Subrayado fuera de texto)

Sobre este aspecto en particular, advierte la Sala que, en estos casos, en los que se demanda la omisión de los órganos de control en la inspección y

⁴⁵ Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente No. 11837.

⁴⁶ Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente No. 14.787

⁴⁷ Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente No. 14.880.



vigilancia de las entidades financieras, no todos los daños sufridos por los administrados son indemnizables, en consideración a que la función de supervisión, no consiste en garantizar el patrimonio de los depositantes o ahorradores contra cualquier pérdida, sino que lo que se pretende con dicha vigilancia es asegurar el cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades que desarrollan ese tipo de actividades, comoquiera que la obligación de la Superintendencia es de medio y no de resultado⁴⁸.
(Subrayado fuera de texto)

4. Sentencia del 13 de noviembre de 2014, radicación 15001-23-31-000-2000-00275-01(32770), Consejera Ponente STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

“Del cúmulo de normas que se trajeron a colación, se puede claramente concluir que la función de control, inspección y vigilancia que ejercía DANCOOP sobre las cooperativas se limitaba a la formulación de directrices, realización de visitas, adopción de medidas preventivas, tendientes a que la actividad de las entidades supervisadas fuera siempre transparente y no afectara los intereses de los usuarios, pero no implicaba garantizar que el patrimonio de éstos no resultara afectado al materializarse los riesgos inherentes a la actividad de las cooperativas, sino a que ésta fuera desarrollada conforme al marco legal y, en los eventos en que se incumplieran tales disposiciones, la entidad de control estaba facultada para adoptar oportunamente los correctivos a que hubiere lugar.

En virtud de lo previsto en el artículo 151 de la Ley 79 de 1988, “...las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las cooperativas”, lo que suponía que DANCOOP y la Superintendencia Bancaria solo podían intervenir cuando evidenciara que el objeto social se estaba llevando a cabo en contravía de las normas legales que regulaban su actividad.

En el plenario no obra prueba que dé cuenta de que antes de la solicitud de cesión de activos y pasivos, las accionadas hayan tenido conocimiento de algún tipo de irregularidades del banco cooperativo, que hubieran ameritado la adopción de medidas correctivas ni que lleven a concluir que la intervención de la entidad no fue oportuna. (Subrayado fuera de texto)

5. Sentencia de 20 de febrero de 2014, 15001-23-31-000-1999-02416-01(31000), Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero.

“En el caso concreto, el municipio demandante argumentó que DANCOOP no ejerció las funciones de inspección y vigilancia para evitar que CAJACOOP fuera intervenida y, de haberlo hecho, se habría evitado la retención temporal de los dineros que tenía en las cuentas de ahorro y en los certificados de depósito a término.

En virtud de lo previsto en el artículo 151 de la Ley 79 de 1988, “...las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las cooperativas”, lo que suponía que DANCOOP solo podía intervenir cuando evidenciara que el objeto social se estaba llevando a cabo en contravía de las normas legales que regulaban su actividad.

Sin embargo, en el plenario no obra prueba que dé cuenta de que antes de la

⁴⁸ Sentencia de 10 de julio de 2013, expediente 26.748, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera; 10 de septiembre de 2014, expediente 27.801, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera; y de 26 de febrero y 28 de agosto de 2014, Expedientes: 27544 y 30736, respectivamente.



toma de posesión ese Departamento hubiera tenido conocimiento de algún tipo de irregularidades de la cooperativa que hubieran ameritado la adopción de medidas correctivas ni que lleven a concluir que la intervención de la entidad no fue oportuna. Por el contrario, de conformidad con las consideraciones esgrimidas en la Resolución n.º 1889 de 19 de noviembre de 1997, la cual goza de presunción de legalidad, fue solo cuando CAJACOOOP presentó a DANCOOP los balances y estados financieros a septiembre de 1997, que se evidenció un problema de iliquidez y un patrimonio negativo, de lo que se derivaba un riesgo de afectación patrimonial y de vulneración al ahorro de los asociados, por lo que consideró necesario tomar posesión de los negocios, bienes y haberes de la misma. Posteriormente, la Superintendencia Solidaria, mediante Resolución n.º 0780 de 7 de mayo de 2000, ordenó la disolución y liquidación de la cooperativa, al encontrar que no poseía las condiciones indispensables para desarrollar adecuadamente su objeto social.

En síntesis, no hay lugar a concluir que DANCOOP incumplió las funciones de inspección y vigilancia sobre CAJACOOOP y, por el contrario, una vez se percató de la difícil situación financiera por la que atravesaba, procedió a tomar posesión de sus negocios, bienes y haberes. Por lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada”.

7.2. INIMPUTABILIDAD DEL DAÑO A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Jurisprudencialmente se ha establecido que el daño antijurídico es el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo por parte del Estado.

Este concepto del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal, armoniza con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, en el entendido que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración.

Ahora bien, en el presente caso observamos que la Superintendencia de Sociedades, tal como se manifestó en acápites anteriores, en los casos de captación indebida de dineros del público, tiene facultades solo hasta cuando los hechos ya están consumados, ya que el procedimiento es cautelar y no preventivo.

Así las cosas las actuaciones que dieron origen a la captación ilegal de dineros del público, en primer lugar son ajenas a la Superintendencia de Sociedades y el segundo lugar escapan a la esfera del control jurídico que esta tiene sobre las sociedades; por lo que el supuesto daño que se le causó al demandante, no es consecuencia directa de las acciones de mi defendida, sino de los actos de terceras personas a los que la demandante les entregó su confianza y libre y espontáneamente decidió asumir los riesgos e invertir en el negocio que se le estaba ofreciendo por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S; situación esta que desvirtúa cualquier responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades, en el entendido que esta no tuvo ni podía tener ninguna injerencia en el actuar del demandante y de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.

Los perjuicios reclamados, si son ciertos, no fueron ocasionados por esta Entidad, son atribuibles a los administradores de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, ya que mediante operaciones encubiertas ejecutaron operaciones de captación de dineros de manera irregular y no autorizada, siendo aquellos los responsables por los perjuicios reclamados.

No es lógico pretender que el Estado a través de sus entidades, sea condenado a indemnizar los perjuicios que se pretenden, cuando las operaciones que se han llevado a cabo, son de índole contractual entre particulares, constituyéndose entonces el Estado en un seguro para que quienes celebren contratos, que a la postre no resulten favorables, pretendan recobrar los dineros entregados y, además, las indemnizaciones correspondientes.



Es claro que el demandante inversionista realizaba la operación de compraventa de créditos otorgados bajo la modalidad de libranza con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, era plenamente consciente de que compraba un activo de riesgo, toda vez que entendía que estaba realizando la compra de una deuda a cargo de una persona natural que no conocía, en especial su solvencia moral y patrimonial.

Es decir, se trataba realmente de **operaciones de crédito de alto riesgo, asumido libre y deliberadamente por el comprador de cartera, que ahora, con esta temeraria demanda, pretende desplazar hacia el Estado.**

Y en desarrollo de esa relación contractual, recibió amortizaciones a esos dineros, por la suma de cincuenta millones seiscientos tres mil pesos (\$50.603.000) m/cte; tal cómo se afirma en la demanda. – Hecho Noveno

7.3. ROMPIMIENTO DEL VÍNCULO CAUSAL

En el presente caso existe una culpa de la parte actora por no haber atendido el deber de informarse, cuidado y mínima diligencia frente a las operaciones realizadas con fundamento en un contrato, es así que la entidad que represento no tiene injerencia en las relaciones privadas que nacen a la vida jurídica en desarrollo de la autonomía de la voluntad privada.

Poniéndonos en el contexto de la imputación del daño antijurídico del Estado en las operaciones contra la captación ilegal del dinero, debemos recordar que en reciente jurisprudencia, el honorable Consejo de Estado - Sección Tercera reiteró que, en los casos de falla en las funciones de inspección, vigilancia y control, se enmarca en la regla general de imputación subjetiva del daño antijurídico o falla probada del servicio, donde *“(...) corresponde a la parte demandante acreditar los conocidos elementos que configuran la responsabilidad patrimonial de la administración pública: actuación u omisión del Estado, daño antijurídico y nexo causal entre aquélla y éste (...)”*⁴⁹.

En este escenario, contrario a lo que sucede en los eventos de la presunción de culpa o de responsabilidad objetiva del Estado (manejo de armas de fuego, concriptos y responsabilidad médica, entre otros), es factible proponer la excepciones de *“culpa exclusiva de la víctima”* y *“culpa de un tercero”*, pues la consagración constitucional de la responsabilidad del Estado si bien tiene una orientación garantista, no ha llegado a tal punto en que todas la desgracias ocurridas en la sociedad finalmente se atribuyan a la organización política por acción u omisión⁵⁰.

Partiendo de la base que en el régimen tradicional de responsabilidad se responde *“(...) por extralimitación en las funciones, retardo en el cumplimiento de obligaciones, obligaciones cumplidas en forma tardía o defectuosa, o por el incumplimiento de obligaciones a cargo del Estado (...)”*⁵¹, la Superintendencia de Sociedades ha demostrado y así lo corroborará en el transcurso del proceso que la competencia que le fue asignada por la ley fue utilizada en forma precisa y oportuna ante las alarmas

⁴⁹ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A Sentencia 2000-02312/29944 de marzo 25 de 2015 Radicación: 25000 23 26 000 2000 02312 01 (29944) C. P.: Dr. Hernán Andrade Rincón. El caso se refiere a la irresponsabilidad del estado por el daño sufrido al Fondo de Empleados de Almacenes Magali París Fedemagali y otros por la liquidación de la entidad financiera BANCOOP.

En esta oportunidad el Alto tribunal revoca la condena proferida en primera instancia, en la medida que se demostró que la SUPOERINTENDENCIA BANCARIA desplegó oportunamente toda la competencia establecida en el estatuto orgánico del sistema financiero, sin que las medidas lograran evitar la liquidación de la entidad financiera a la que se ha hecho referencia. -

⁵⁰ El exconsejero de estado Dr. Enrique Gil Botero en su libro Responsabilidad extracontractual del estado destaca que *“el daño debe ser directo, personal y cierto”*; en lo que se refiere a la primera característica, tenemos que *“el daño como unidad fenoménica recoge todo lo que precede a hacerlo real; sin los elementos constitutivos que lo hacen posible existencialmente no se daría en el plano del conocimiento jurídico. Se cambiaría entonces el enfoque metodológico tradicional en el sentido de examinar las causales exagerativas de responsabilidad dentro de la imputación que es un concepto jurídico, por oposición a la causalidad que es un criterio propio de las leyes de la naturaleza”* (Ed Temis 2011; Quinta edición; Pag. 40).-

⁵¹ Responsabilidad del estado y sus regímenes. Dr. Wilson Ruiz Orejuela. Tercera Edición. Enero de 2016. Ecoe Ediciones Ltda. Bogotá. -



recibidas⁵². Además, se debe enrostrar el incumplimiento de los deberes por parte del afectado en el caso concreto, pues la jurisprudencia ha hecho un balance en uno y otro extremo, donde entre más incuria se demuestre en el afectado, más fácil se diluye la responsabilidad por parte del Estado⁵³.

Partiendo de la base de que nadie está obligado a lo imposible, ni siquiera el Estado, la jurisprudencia distingue "(...) entre omisiones laxas y omisiones en sentido estricto, refiriéndose a las primeras a la negligencia u olvido en los deberes de cuidado, que, de haberse cumplido, pudieron haber evitado un resultado dañoso prevenible. Las segundas, se refieren al incumplimiento de un deber legal previamente establecido en la ley y que el estado está en la obligación de ejecutar, resultado de su incumplimiento, el resultado dañoso (...)"⁵⁴.

El máximo tribunal del control administrativo en reciente sentencia⁵⁵, reiteró que la culpa exclusiva de la víctima opera cuando el afectado incumple la ley o el reglamento que le es aplicable en el caso concreto, evento en el que debe asumir las consecuencias de su proceder.

Ahora, se destaca que la culpa debe ser grave, es decir, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico debe considerarse dentro de la causal "culpa exclusiva de la víctima", "(...) sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios (...)". (Consejo de Estado, Expediente 2004 00669 01, demandante DEBB y otros, contra Nación Ministerio de Defensa y otros.

El alto tribunal recordó que se configura la casual eximente de responsabilidad del Estado cuando se demuestra que el afectado actuó con culpa grave o dolo, entendida la primera como un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario o en el caso del segundo, procedió con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

El hecho de la víctima es, por definición, irresistible, imprevisible y externo a la actividad del demandado⁵⁶. El Consejo de Estado indica que la irresistibilidad alude a la "(...) imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos

⁵² No obstante, debe hacerse la claridad que "el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular (falla en el servicio simple, probada, presunta, daño especial, riesgo excepcional), sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar" Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C Sentencia del 20 de octubre de 2014. Exp. 52001-23-31-000-1998-00352-91 (31250) C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. -

⁵³ En el 2011 en el escenario más estricto de la responsabilidad en el transporte, el H. Consejo de Estado exoneró de responsabilidad al estado por la muerte de un peatón ebrio, pues pese a que fue arrojado por un vehículo oficial y el empleado público que lo conducía también estaba ebrio, se determinó que "la conducta de la víctima de no usar el puente peatonal fue determinante en la producción del daño" (Consejo de estado – Sección Tercera – Subsección "B". Sentencia del 13 de abril de 2011. Exp 20.441).

⁵⁴ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Sentencia del 6 de marzo de 2008 Radicación: 66001-23-31-000-1996-03099-01 (14443) C. P.: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

⁵⁵ Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 68001233100020080063701 (47846), nov. 27/17. C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

⁵⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de abril de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 16235



*efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados (...)*⁵⁷.

La irresistibilidad no supone que la mera dificultad se erija en imposibilidad total, no obstante, “(...) *ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano*”. Así, en cada caso el Juez deberá interpretar “*La imposibilidad de ejecución (...) de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida (...)*”. (Consejo de Estado, Expediente 1997 13602 01 C.P. Jaime Orlando Santofimio, demandante Ana Delia Jimenez, demandada Empresas Públicas de Bucaramanga)

Por su parte, la imprevisibilidad de la causa extraña alude a la condición de imprevista de la misma, con lo cual será requisito indispensable que se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo y excepcional⁵⁸.

Así mismo, la culpa exclusiva de la víctima tiene que ver con que, al realizar operaciones de riesgo, debe acentuar sus precauciones respecto al negocio que realiza. En el caso concreto ello no se demostró, ya que las inversiones se realizaron sin que probara el demandante de manera particular, un especial cuidado respecto de la empresa y la actividad que estaban ejecutando en desarrollo de un contrato con aquella, para evitar un desmedro patrimonial, que no pueden ahora pretender les sea reparado por el Estado.

Para el análisis del asunto, donde la Superintendencia de Sociedades profirió auto inhibitorio por actividades de captación en primer semestre del año 2014⁵⁹, es evidente que se verifica la doble causal de “culpa exclusiva de la víctima” y “culpa de un tercero”, en la medida que esta actuación no es imputable a la incuria de la administración, sino en el hecho demostrable de que la toma de información se llevó a cabo a partir de la contabilidad maquillada y dolosamente disfrazada.

Véase cómo, si bien no es posible para el revisor fiscal impedir que se cometan irregularidades al interior de una organización, el acceso permanente a los libros de la compañía y sus resultados hace evidente que, cumpliendo a cabalidad con sus funciones, las irregularidades debieron salir a la luz para tomar los correctivos oportunamente, lo cual nunca ocurrió.

Las irregularidades de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S han sido graves y notorias, pues el sistema de gestión documental de la Superintendencia de Sociedades, a mediados del año 2016 también evidencia de las quejas presentadas que se trataba de una información comercial engañosa, de las cuales se dio traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio en esa misma fecha.

Las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades han sido diligentes y ponderadas, además, activadas las alarmas en el año 2016, se tiene por parte de la Entidad un conjunto de reacciones oportunas, las cuales condujeron a la Resolución 300-005082 del 22 de diciembre de 2017 ordenó a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, la suspensión inmediata de las operaciones de captación masiva y posteriormente, a través de Auto No. 400-005087 del 13 de abril de 2018 se resuelve ordenar la intervención mediante toma de posesión de los bienes, haberes y patrimonio de la sociedad.

En definitiva, no es viable jurídicamente alegar su propio error en su beneficio, ni mucho menos obviar su descuido y negligencia para pretender trasladar su responsabilidad; de ahí que jurisprudencialmente se haya concluido que: “(...) *a nadie se le permite aprovecharse de su propio dolo; y que, por tanto, nadie puede presentarse a la justicia para pedir protección si ella tiene como fundamento la mala fe o dolo en que ha incurrido. Con razón se ha dicho que constituye inmoralidad (torpeza) pretender beneficiarse de la mala fe o dolo que alguien ha cometido; los*

⁵⁷ Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa Sentencia del 22 de junio de 2011.

⁵⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de marzo de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 16.530.

⁵⁹ Auto 400-005237 del 9 de abril de 2014 Inhibe de decretar intervención.



culpables de dolo son indignos de ser escuchados por la justicia. (...). (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 23 de junio de 1958).

7.4. INEXISTENCIA DE DAÑO CON CARACTERÍSTICA DE ANTIJURÍDICO.

De conformidad con el artículo 90 de nuestra Constitución Política, el Estado debe indemnizar por los daños que tengan naturaleza **ANTI JURÍDICA**, cuya autoría le resulte endilgable.

Es así como reza el aludido artículo:

‘El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este’.

Existe variada doctrina y jurisprudencia que desarrollan el tema, de las que se colige claramente que únicamente en los casos en que el daño producido por el Estado sea **ANTI JURÍDICO** debe éste resarcir patrimonialmente al afectado, es decir, no todos los daños resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad (Arts. 1 y 13 C.N. principios constitucionales de solidaridad e igualdad de todos frente a la ley).

No sobra mencionar que, tal como lo contemplan las altas cortes, entre éstas, el Consejo de Estado, el daño antijurídico debe ser **CIERTO, DETERMINADO** y **ANORMAL**. Se trae a colación un extracto de jurisprudencia que resulta pertinente:

*“(...) El precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los "principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución" (...) debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un "Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos". **Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida. (...)**” (Fallo 20144 de 2011 Consejo de Estado. El resaltado es fuera del texto).*

En el presente caso, quedó establecido en las razones de defensa, que no existe daño o hecho dañino alguno que deba reparar la Superintendencia de Sociedades y, por lo tanto, el perjuicio que alega la actora no puede ser imputable a la Entidad que represento ni por acción ni por omisión, pues como ha sido expuesto, mi representada dio cabal cumplimiento a las funciones que le fueron asignadas respecto de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S en toma de posesión como medida de intervención.

7.5. INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Frente al particular, resulta claro que las facultades de inspección, vigilancia y control que ejerce la entidad sobre los entes comerciales, se circunscriben exclusivamente al ámbito del derecho societario, por lo que, salvo que la ley lo indique, no le es dable inmiscuirse en el ejercicio de la actividad como tal y los actos que aquellas celebren para el desarrollo de su objeto, por lo que es necesario reiterar que, partiendo de la base de que por regla general la supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades es de carácter subjetivo, y al ser su marco de competencia reglado, es decir que solo puede ejercer aquellas funciones que expresamente le han sido asignadas por ley, salvo disposición en contrario, la Superintendencia no cuenta con facultades para interferir en materia de disposición contractual ni en el ámbito de la autonomía de la voluntad privada de los entes que vigila, toda vez que el giro ordinario



de sus negocios y las relaciones que celebre con terceros únicamente les concierne a los interesados, y no a este ente de control.

7.6. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR EXISTIR UN CAMINO JUDICIAL PRIVATIVO, EXPEDITO Y EXCEPCIONAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DINEROS

Es pertinente señalar que, para los eventos cómo el que nos ocupa, se ha previsto un procedimiento privativo, expedito y excepcional que debe efectuarse por quién ha 'invertido' en una compañía que ha captado ilegalmente dineros del 'público. Ello es conocido por los afectados, de ahí que el demandante se haya hecho parte del proceso de intervención y en tal sentido ha sido aceptada en el mismo por valor de \$95.456.307; motivo por el cual le ha sido devuelto hasta el momento la suma de \$10.740.000.

Se trata de actuaciones contractuales realizadas por los afectados, de suerte que para lograr la devolución de lo "invertido" deben acudir a ese procedimiento en el cual se encuentra, en donde quien responde es la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención y no la entidad que represento.

7.7. PETICIÓN ANTES DE TIEMPO E INTENCIÓN DE DOBLE RECONOCIMIENTO.

Conforme lo aceptado por la demandante, ella se hizo parte del proceso de intervención de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS, en toma de posesión como medida de intervención, con acreencias reconocidas por la suma de \$95.456.307 y le ha sido devuelto hasta la fecha un total de **\$10.740.000**, procedimiento que aún se halla en trámite en este momento.

Entonces, no resulta viable que, existiendo una vía procesal en curso, que además es la que específicamente ha sido contemplada por el legislador para remediar la captación masiva no autorizada, de la cual ya es parte la demandante y ha recibido la devolución de las sumas antes mencionadas, paralelamente pretendan por otra vía lograr la misma finalidad que no es otra que la recuperación de los recursos que, de manera imprudente pero totalmente consciente y voluntaria, decidió arriesgar y aportar en un negocio cuyos rendimientos la "deslumbró" sin que le hubiera generado suspicacia sobre la razonabilidad financiera de lo supuestamente ofrecido; y, ahora, a pesar de contar con el mecanismo judicial idóneo para conjurar tal situación y desconociendo su propia negligencia, busca abrir otras vías judiciales que no sólo no resultan procedentes, sino que, a la postre, intentar solventar su propia incuria tratando de obtener, por doble partida, lo que desde un comienzo fue deliberadamente entregado en las ansias de conseguir mayor rentabilidad sin importar el riesgo que todo ello conllevaba.

VIII. PRUEBAS

8.1 PARTE DEMANDADA

- DOCUMENTALES

Respetuosamente solicito al señor juez decretar y tener como prueba los siguientes documentos:

- Radicado del 05 junio de 2013-01-207741 (S.F Traslada queja a S.S)
- Radicado del 6 junio de 2013-01-209902 (S.F Traslada Quejas a S.S)
- Memorando 420-004557 del 11 junio 2013 (Asigna Investigación)
- Credencial 420-000232 del 2 julio 2013 (Toma de información)
- Radicado del 27 febrero 2014-01-096526 (S.F Allega Informe de visita)
- Radicado 10 marzo de 2014-01-113129 (Informe Superfinanciera)
- Auto 400-005237 del 9 de abril de 2014 (Inhibe de decretar intervención)
- Credencial 306-000271 del 3 agosto 2016 Visita Toma de información



- Radicado 12 agosto 2016-01-415250 (Acta Cierre de diligencia Toma de Información)
- Radicado 24 agosto 2016-01-428724 (informe Toma de información 4 y 10 agosto 2016)
- Radicado 31 agosto 2016-01-438769 (Queja de afectado por Optimal)
- Oficio 306-188748 del 29 sept 2016 (Traslado de Queja al Rep.Legal de Optimal)
- Oficio 306-188741 del 29 sep 2016 (SS Informa al peticionario sobre el trámite de la Queja)
- Radicado 20 enero 2017 2017-01-015787 (Respuesta Optima)
- Auto 430-003906 del 2 febrero 2017 (Rechaza Admisión a Proc.de Reorganización)
- Resolución 302-001377 del 4 abril 2017 (Apertura Investigación Administrativa)
- Auto 400-007811 del 28 abril 2017 (Resuelve Rec. Rep. Auto 430-003906 Confirma)
- Oficio 301-0129391 del 10 julio 217 (SS Requiere información a Colpensiones)
- Oficio 301-133395 del 11 julio 2017 (SS Requiere información a FOPEP)
- Oficio 301-133403 del 11 julio 2017 (SS Solicita información a Fiduprevisora)
- Radicado 21 julio 2017-01-379875 (Respuesta a Solicitud de Información de SS)
- Radicado 11 agosto 2017-01-427219 (Allegan inf. solicitada por SS)
- Acta 301-001756 de 5 sept 2017-01-474446 (Informe análisis bases de Datos Optimal, Fiduprevisora y FOPEP)
- Credencial 301-201869 del 15 sept 2017-01-483615 (Credencial para Toma de Información a COINVERCOR)
- Acta 301-002188 del 2 de noviembre de 2017 (Análisis bases de datos de pagarés libranzas de la sociedad)
- Radicado 18 octubre 2017-01-535619 (Colpensiones allega información solicitada por SS)
- Radicado 30 noviembre 2017-01-608139 (Procuraduría Inf. rad. pendientes respuesta a S.F)
- Resolución 302-004502 del 01 diciembre 2017 (Impone Multa Rep. Legal)
- Radicado 18 diciembre 2017-01-639291 (Optimal allega información a SS)
- Resolución 300-005082 del 22 diciembre 2017 (Adopta Medida de Intervención Administrativa)
- Memorando 301-000794 del 25 de enero de 2018 (Remite con Resolución a Intervenidas)
- Resolución 300-001429 del 23 marzo 2018 (Resuelve Rec. Rep. Resol 302-004502)
- Auto 400-005087 del 13 abril 2018 (Ordena Toma de Posesión)
- Acta 415-000769 del 3 mayo 2018 (Posesión Agente Interventor)
- Auto 400-007717 del 31 mayo 2018 (Atiende solicitudes, aclara y corrige Aut.400-005087)
- Resolución 302-002580 14 junio 2018 (Archiva investigación Administrativa)



- Acta 415-001379 del 13 nov 2019 (Posesión Agente interventor - Personas Naturales)

- Auto 420-010309 del 1 octubre 2020 (Convoca Audiencia Resuelve Objeciones al inventario y solicitudes de exclusión)

- A) ACTUACIONES REALIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, respecto de la sociedad Optimal libranzas S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención.
- B) Expediente del proceso de intervención en toma de posesión, adelantado a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, en toma de posesión como medida de intervención.
- C) Expediente de la actuación administrativa adelantada por la entidad a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en toma de posesión como medida de intervención (Anexo link).

Todos estos documentos (link) ya fueron remitidos adjuntos a la contestación de la demanda, documento radicado 2021-01-117374 del 9 de abril de 2021.

- **TESTIMONIO**

Reitero la solicitud de testimonio del Doctor ANDRES ALFONSO PARIAS GARZON, Ex funcionario de la Superintendencia de Sociedades, quien fungió para la época de los hechos como DELEGADO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL de la Superintendencia de Sociedades, para que testifique sobre los hechos que le consten de la demanda, relacionado con las actuaciones adelantadas por la entidad en cumplimiento de sus facultades y a quien se puede notificar en la Av. 26 No 51 – 80 oficina 401 de la Superintendencia de Sociedades.

El correo electrónico del testigo y al cual se puede citar para la respectiva audiencia es aparias@esguerra.com

- **INTERROGATORIO DE PARTE**

Reitero la solicitud de interrogatorio de parte del demandante LUIS ALBERTO DIAGO ESCOBAR. De conformidad con el artículo 203 de Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 de CPACA, solicito que en la fecha que disponga el despacho se escuche en **INTERROGATORIO DE PARTE** al Señor LUIS ALBERTO DIAGO ESCOBAR, conforme al cuestionario que allegaré con antelación a la fecha fijada o, que realizaré el día de la diligencia.

8.2, OPOSICIÓN A LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE.

- **EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.**

De manera comedida manifiesto desde ya que me opongo al decreto de esta prueba, teniendo en cuenta que, de la revisión de lo solicitado por la parte demandante a exhibir, todos y cada uno de los documentos allí requeridos se encuentran dentro de los expedientes tanto administrativos como jurisdiccionales que fueron remitidos al Despacho y al correo que los apoderados han reportado para recibir documentos en este proceso tal como obra en la contestación de la demanda.

- **REMISIÓN DE EXPEDIENTE**



ME OPONGO a la prueba solicitada teniendo en cuenta que ya con el escrito en el que se contestó la demanda se allegaron copia del expediente de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN.

- INFORME JURAMENTADO

ME OPONGO a la prueba solicitada, como quiera que la misma no resulta pertinente, teniendo en cuenta que al proceso es aportada copia del expediente que de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN se encuentra en la entidad, dentro del cual aparecen cada una de las actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades respecto de la sociedad en mención, en desarrollo de funciones administrativas y jurisdiccionales.

De igual forma, al realizar el ejercicio de contestación de la demanda y de la reforma de la demanda, la entidad procede a pronunciarse sobre todos y cada uno de los hechos de la demanda.

Así las cosas, no existirían interrogantes por absolver respecto de las actuaciones desplegadas por la Superintendencia de Sociedades, pues se reitera, estas ya constan dentro del expediente.

IX. PETICIÓN ESPECIAL

El artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho fundamental de Petición contempla que sólo tendrán el carácter de reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, en lo pertinente: "(...) 4. *Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación.* 5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 6. *Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.* 9. *Los amparados por el secreto profesional.* (...) "(Énfasis añadido)

Si bien la reserva no aplica a las autoridades jurisdiccionales, en cumplimiento de la ley 1266 de 2008⁶⁰ se presenta en su integridad los expediente administrativo y judicial que a la fecha de la contestación de la demanda reposa en los archivos de la Superintendencia de Sociedades por que el contenido de los mismos resulta "necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial"⁶¹, lo cual involucra tanto los derechos de la parte actora como la entidad que represento.

En virtud de lo anterior, solicito a el titular del Despacho y la Secretaría de los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA, SECCION TERCERA tomar las medidas de seguridad que ordena la ley a los documentos y guardar la discreción sobre la información sensible, privada, semiprivada y reservada de las personas naturales, entidades financieras, cooperativas y otros comerciantes que son sujetos procesales o son objeto de las investigaciones administrativas y la medida de intervención con fines de liquidación que aún se encuentra en curso.

X. NOTIFICACIONES

Las recibiré en el correo electrónico:

⁶⁰ Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones

⁶¹ Artículo 6 de la ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".



notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co
y en el correo ConsueloV@supersociedades.gov.co

Del Señor Juez,

CONSUELO VEGA MERCHAN

Coordinadora del Grupo de Defensa Judicial
C.C. No. 63305358
T.P. No. 43.627 del C. S. de la J.